

54ª REUNION — 2ª SESION EXTRAORDINARIA (Continuación) — DICIEMBRE 18 DE 1953

Presidencia del doctor Antonio J. Benítez, de la señora Delia D. Degliuomini de Parodi
y del señor José V. Tesorieri

Secretarios: doctores Rafael V. González y Eduardo T. Oliver

Prosecretarios: doctores Roberto J. Murano y Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACOSTA, Policarpo
ACUNA, Judith Elida
AGÜERO, Teodomiro de la Luz
AGUILAR de MEDINA, Generosa D.
ALBARELLOS, Juan
ALBRIEU, Oscar E.
ALENDE, Oscar Eduardo
ALONSO, José
ALVAREDO de BLANCO SILVA, Obdulia
ALVAREZ, Magdalena
ARGUMEDO, Celfa
ARIAS, Jesús Pablo
ATALA, Luis
BALBI, Aimar A.
BELNICOFF, Manuel
BENÍTEZ, Antonio J.
BIDEGAIN, Oscar R.
BIONDI, Josefa
BLASI, Héctor A.
BRIGADA de GÓMEZ, Josefa Dominga
BRIZUELA, Juan Francisco
BUSTOS FIERRO, Raúl C.
CAMPANO, Guillermo M.
CAMUS, E. P.
CANTORE, Luis
CARBALLIDO, Dorindo
CARENA, Ezio Armando
CARRERAS, Ernesto
CARRIZO, Francisco Isidro
CASTAGNINO, Héctor
CASTRO, Orlando
CASUCCIO, María Elena
CAVIGLIA de BOEYKENS, María C.
CLEMENT, Fernando Abel
COBELLI, Francisco
CHALUP, Hugo del Valle
DACUNDA, Angélica E.
DA ROCHA, Alejandro J.
DEGLIUOMINI de PARODI, Delia D.
DEIMUNDO, Antonio J. C.
DEL RÍO, Arturo R.
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DI BERNARDO, Elmerindo D.
DISKIN, David
D'JORGE, Luis
DOMÍNGUEZ, Carlos Joaquín
DOMÍNGUEZ, Roberto
DUSSAUT, Santiago
ESPEJO de RAMOS, Juana Alicia
FASSI, Santiago Carlos
FERNÁNDEZ, Expédito
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FERRER ZANCHI, Alfredo G.
FLORES, Francisca A.
FONTANA, Alfredo

FORTEZA, Eduardo J.
GAETA de ITURBE, Dora Matilde
GAGO, Bernardo
GALLO, Luis M.
GARCÍA, Juan C.
GIANOLA, Jorge N.
GOBELLO, José
GOITIA, Carlos Inocencio
GÓMEZ, Manuel Vicente
GOMIS, Pedro A. J.
GONZÁLEZ, Antonio F.
GONZÁLEZ, Santos
GONZÁLEZ, Ventura
GRAMAJO, Rodolfo
GRO, Carlos
HERMIDA, Antonio
IDOMÁNICO, Humberto
LABANCA, Enrique V.
LANFOSSI, Adolfo
LANNES, Héctor L.
LATELLA FRIAS, Donato
LOGUERCIO, Dante N.
LÓPEZ, Noé
LÓPEZ, Pablo
LÓPEZ, Plácido Guillermo
LUNA, Pedro Antonio
MACABATE, Manuel E.
MACRI, Ana Carmen
MAESTRO, José Ángel
MARCÓ, Teodoro E.
MARTÍNEZ, Darwin
MATTIS, Eduardo
MERLO, Patrocínio
MESSINA, Bernardo R. A.
MIEL ASQUÍA, Ángel J.
MIGUEL de TUBÍO, Josefa
MONTES, Abel
MORENO, Silverio
MORESCHI, Humberto P.
MOYA, Isaac Donald
MUSACCHIO, Miguel
NUDELMAN, Santiago I.
ORDÓÑEZ PARDAL, Pedro A.
ORLANDI, Rómulo E.
ORTIZ de SOSA VIVAS, Dominga I.
OSELLA MUÑOZ, Enrique
OTERO, Pedro Ramón
PALLANZA, Adolfo
PAZ, Edvino Alfredo
PELLERANO, Jorge S.
PERALTA, Ángel Enrique
PERETTE, Carlos H.
PÉREZ OTERO, Tito V.
PERICAS, Luis
PIOVANO de DE CASTRO, Mafalda
POSADA, José B.
PRACANICO, Zulema N.
PRESTA, José

PRESTE, Pascual N. H.
RABANAL, Francisco
RAVIGNANI, Emilio Juan F.
RINALDI, Luis
ROCAMORA, Alberto L.
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ, Celina E.
RODRÍGUEZ, Manuel Félix
RODRÍGUEZ de COPA, Seferina del C.
ROUGGIER, Valerio S.
RUMBO, Eduardo I.
SAINZ, Héctor Agustín
SALABER, Carmen
SALVO, Hilario F.
SANTUCHO, Oscar D.
SCANDONE, Eduardo Ernesto
SIBOLDI, Agustín
SPACHESSE, Modesto A. E.
TEJADA, Beato Miguel
TEJADA, María Urbelina
TESORIERI, José V.
TOFANELLI, Oreste
TOMASSI, Victorio M.
TORTEROLA de ROSELLI, Isabel A.
ULLOA, José Manuel
VERGARA, Aman'o
VILLAFANE, José María
VILLA MACIEL, Otilia
VILLARREAL, Pedro
WEIDMANN, Rodolfo A.
ZERECA, Oreste A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

CAMPORA, Héctor J.
DEGREEF, Juan Ramón
PIAGGIO, Juan José

AUSENTES, CON AVISO:

ARGAÑA, José María
ASTORGANO, José
LÓPEZ, Gerardo
PARINO, Edmundo
PÉREZ, José C.
PICERNO, José E.

DELEGADOS PRESENTES:

BARRERA, Néctar A.
ESCARDÓ de COLOMBO BERRA, P.
FADUL, Esther M.
FERNÍCOLA, Elena A.
MARINO, Ramón
MONTAÑA, Agapito
PAROLÍN, Orlando L.
POLO, Antenor
RÍOS, Octavio A.
RODRÍGUEZ GALLARDO, A.
SAN MARTÍN, Pedro J.

SUMARIO

- 1.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Instrucción Pública en el proyecto de reformas a la ley universitaria. (Página 2672.) Se sanciona.
- 2.—Integración de comisiones. (Página 2792.)
- 3.—Apéndice:

I.—Sanciones de la Honorable Cámara.

II.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo en respuesta a la declaración de la Honorable Cámara por la que se solicita prioridad para las obras de pavimentación del camino de la Cumbre a La Rioja y Catamarca. (Página 2799.)
- II.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 2800.)
- III.—Comunicaciones oficiales. (Página 2800.)
- IV.—Petición particulares. (Página 2800.)

—En Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de diciembre de 1953, a la hora 15 y 5:

1

LEY UNIVERSITARIA

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa la sesión.

Corresponde considerar el despacho —contenido en la orden del día 201— producido por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Instrucción Pública en el proyecto de modificaciones a la ley 13.031.

Por Secretaría se dará lectura del despacho de las comisiones.

Sra. Macri. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Macri. — Como todos los señores diputados disponen del texto impreso del despacho de las comisiones con el proyecto de ley y todos los antecedentes, hago indicación de que se suprima la lectura.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Se prescindirá de la lectura del despacho de las comisiones.

(Orden del día número 201)

Despacho de la mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Instrucción Pública, en mayoría, han tomado

en consideración el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, sobre modificaciones a la ley universitaria 13.031; y, por las razones que darán los miembros informantes, aconsejan su aprobación.

Sala de las comisiones, 14 de diciembre de 1953.

Hernán S. Fernández. — Eduardo J. Forteza. — Celfa Argumedo. — Teodomiro de la luz Agüero. — Jesús Pablo Arias. — Orlando Castro. — Paulina Escardó de Colombo Berra. — Expéxito Fernández. — Elena A. Fernicola. — Carlos I. Goitia. — Antonio Hermida. — Plácido Guillermo López. — Agapito Montaña. — Humberto P. Moreschi. — Edvino Alfredo Paz. — Mafalda Piovano de De Castro. — Serafina del C. Rodríguez de Copa. — Eduardo Ernesto Scandone. — Modesto A. E. Spachessi. — María Urbelina Tejada.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1953.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el adjunto proyecto de ley sobre reformas a la ley universitaria 13.031, que paso en revisión a esa Honorable Cámara.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO TEISAIRE.
Alberto H. Reales.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

De las universidades

CAPÍTULO I

De la misión y organización de las universidades

Artículo 1º — Las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, a cuyo efecto tendrán los siguientes objetivos:

- 1) La enseñanza en el grado superior y el desarrollo de la cultura y la afirmación de la conciencia nacional, de acuerdo con la orientación fijada por la Constitución;
- 2) La integral formación humana de sus docentes y estudiantes, con preferencia

a toda especialización técnica e inculcándoles la noción de su responsabilidad social y la conciencia de que han de servir al pueblo;

- 3) La organización de la investigación científica, la creación y sostenimiento de institutos de perfeccionamiento o de especialización y el fomento de publicaciones y actividades científicas, literarias y artísticas;
- 4) La creación de un cuerpo de docentes altamente especializados y consagrados a la enseñanza;
- 5) El otorgamiento de los títulos o diplomas para el ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo;
- 6) La promoción de las relaciones culturales con las entidades similares de los demás países;
- 7) Asegurar la gratuidad de los estudios;
- 8) Interesarse por los problemas nacionales;
- 9) Prestar a los organismos del gobierno el asesoramiento que les fuere requerido;
- 10) Instituir cursos de extensión universitaria y favorecer toda forma de difusión de la cultura;
- 11) Organizar sus servicios asistenciales.

Art. 2º — Todos los planes de enseñanza comprenderán, además de sus materias específicas, cursos dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución.

Art. 3º — Ninguna institución pública o privada podrá otorgar, sin ley especial que lo autorice, títulos, grados u honores que puedan ser confundidos con los universitarios.

Art. 4º — El territorio nacional se dividirá en regiones universitarias, dentro de las cuales ejercerá jurisdicción la respectiva universidad. Corresponde a cada una de ellas organizar dentro de su zona de influencia los estudios regionales y promover las artes técnicas y aplicadas con vistas a la explotación de sus riquezas y al incremento de las actividades económicas locales.

Art. 5º — Integran las universidades:

- 1) Las facultades y escuelas, con los organismos que establezcan sus reglamentaciones;
- 2) Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria y los que se incorporen posteriormente bajo la misma dependencia;
- 3) Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad competente.

Art. 6º — Las universidades cuentan con autonomía docente y científica y gozan de la autarquía que en el orden administrativo les confiere la presente ley.

Art. 7º — Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación compete al rector, quien podrá delegarla y otorgar, en su caso, los poderes necesarios.

CAPÍTULO II

Del gobierno de la universidad

Art. 8º — El gobierno de cada universidad será ejercido por un rector y un Consejo Universitario.

Del rector

Art. 9º — El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en sus funciones.

Art. 10. — Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino nativo y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario y tener treinta años de edad.

Art. 11. — Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuye la presente ley y las que le fijan otras disposiciones legales, el rector tendrá las siguientes:

- 1) Representar legalmente a la universidad;
- 2) Designar las personas que llevarán la representación oficial de la universidad;
- 3) Designar y remover al secretario y prosecretario de la universidad, que deberán tener título universitario;
- 4) Convocar al Consejo Universitario a reuniones ordinarias y extraordinarias;
- 5) Firmar los títulos, diplomas y distinciones universitarios;
- 6) Designar los decanos de las facultades;
- 7) Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al Consejo Universitario o a las autoridades de las facultades;
- 8) Dirigir la administración general de la universidad, pudiendo recabar de las facultades y demás organismos universitarios los informes que estime convenientes;
- 9) Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional de cada cátedra;
- 10) Adoptar las medidas urgentes para el buen gobierno de la universidad, dando cuenta de ello al Consejo Universitario;
- 11) Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el asiento del rectorado y del consejo;
- 12) Conceder las licencias en los casos señalados por las reglamentaciones pertinentes;
- 13) Publicar, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria que consigne la tarea docente y la gestión administra-

tiva realizada, dando cuenta al Consejo Universitario.

Art. 12. — El rector tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Del vicerrector

Art. 13. — El vicerrector ejercerá las funciones del rector:

- a) En caso de ausencia o impedimento;
- b) Cuando por cualquier causa el cargo quedare vacante;
- c) Cuando le fueren delegadas.

Para el caso de ausencia o impedimento del rector y vicerrector, o de vacancia, se hará cargo del rectorado el consejero de mayor edad, quien deberá dar cuenta de ello al Poder Ejecutivo.

Del Consejo Universitario

Art. 14. — El Consejo Universitario estará constituido por el rector, que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.

Art. 15. — El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le acuerdan en esta ley:

- 1) Elegir un vicerrector entre sus miembros, que durará tres años en funciones;
- 2) Dictar su reglamento interno y las ordenanzas que requiera el funcionamiento de la universidad;
- 3) Ejercer la jurisdicción superior universitaria y resolver en última instancia universitaria las cuestiones contenciosas que hayan fallado el rector o las facultades;
- 4) Resolver la intervención de las facultades, cuando su funcionamiento no se ajuste a la presente ley;
- 5) Decidir en última instancia las cuestiones sobre validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias, que hubieran sido resueltas por los consejos de las facultades;
- 6) Revalidar, habilitar y reconocer los títulos o diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada caso, de la jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas. Será condición indispensable para el ejercicio de las actividades profesionales el cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente;
- 7) Resolver lo conducente al ejercicio de la personería jurídica de la universidad;
- 8) Aprobar o devolver observadas a las facultades las ternas formuladas por éstas

para la designación de profesores titulares, así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para el nombramiento de profesores adjuntos, extraordinarios, y honorarios. El Consejo Universitario sólo tiene facultad para considerar el aspecto formal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca el orden de los nombres ni la competencia científica y didáctica, que son privativos de cada facultad;

- 9) Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas facultades;
- 10) Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, la creación de nuevas escuelas o institutos;
- 11) Aprobar los planes de estudio y los reglamentos que dicte cada facultad sobre sus respectivas carreras;
- 12) Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, el título de doctor honoris causa, o de miembro honorario de la universidad, a las personas que sobresalieren por su obra, o por su labor científica, literaria o artística;
- 13) Fijar la fecha de iniciación y terminación del curso lectivo y duración de las vacaciones;
- 14) Aprobar el proyecto de presupuesto general de la universidad y tomar conocimiento de la inversión de los fondos asignados a la misma;
- 15) Vender, con autorización del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles, títulos y valores pertenecientes a la universidad;
- 16) Aceptar las herencias con beneficio de inventario, y los legados o donaciones que se dejen o hagan a las universidades o a las facultades o establecimientos que las integren;
- 17) Dictar los reglamentos para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios, con sujeción a las normas que dicte el Consejo Nacional Universitario.

TITULO II

De las facultades

Del gobierno de las facultades

Art. 16. — El gobierno de cada facultad será ejercido por un decano y un consejo directivo, los que durarán tres años en sus funciones.

Art. 17. — Cuando el cargo de decano quedare vacante el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare para completar el período.

Del consejo directivo y de la designación de decano

Art. 18. — El consejo directivo se integrará con el decano y once consejeros.

La elección de consejeros se efectuará en comicios de profesores, quienes votarán personalmente, en forma secreta, las listas de candidatos que depositarán en dos urnas distintas; una reservada para los profesores titulares, que votarán de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutes; y otra para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros titulares y otro número igual de substitutes.

Los consejeros que dejen de ser profesores, cesarán inmediatamente en el ejercicio del cargo.

Art. 19. — Para aquellas facultades que no estén en condiciones de ajustarse a las proporciones indicadas en el artículo precedente, el Consejo Universitario determinará las que hagan posible la constitución del consejo directivo y establecerá el quórum para sus reuniones.

Art. 20. — El escrutinio y proclamación de los candidatos elegidos serán hechos por el decano, asistido por el vicedecano y el consejero titular de más edad.

Art. 21. — El decano será designado por el rector. En caso de que el nombramiento del decano recaiga en uno de los consejeros, el consejo directivo será integrado por el consejero sustituto que corresponda a la categoría del profesor designado decano.

Art. 22. — Las vacantes de consejeros titulares que se produzcan antes de la fecha de renovación, serán llenadas por sorteo, que se realizará entre los consejeros substitutes de titulares o de adjuntos, según sea la vacante producida y manteniendo la representación de las escuelas.

Art. 23. — Si por sucesivas vacantes o ausencias quedara agotado el número de consejeros substitutes, el consejo directivo —aun en minoría— designará de entre los profesores, según sea la vacante, el que deba llenarla para completar el período.

Art. 24. — Las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de siete consejeros.

Art. 25. — El consejo directivo tendrá las siguientes atribuciones:

- 1) Designar vicedecano entre sus miembros;
- 2) Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas que requiera su funcionamiento;
- 3) Proponer al consejo universitario, la adopción de la estructura departamental en el orden docente de la facultad;
- 4) Proponer al consejo universitario la creación, modificación o supresión de escuelas, como también la proporción en que estarán representadas en el consejo directivo, y la creación de institutos o cursos de investigación y para graduados;

- 5) Confeccionar y modificar los planes de estudios de las carreras o cursos especiales, aprobándolos en primera instancia;
- 6) Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción, de acuerdo con lo que reglamente en general el Consejo Nacional Universitario;
- 7) Organizar las actividades de extensión universitaria atinentes a cada facultad;
- 8) Elevar al rectorado de la universidad las ternas de profesores titulares y designar los profesores adjuntos y honorarios, y proponer al Consejo Universitario los profesores extraordinarios;
- 9) Ejercer, con respecto a los profesores, la potestad disciplinaria con arreglo a la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;
- 10) Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los titulares o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones, con aprobación del Consejo Universitario;
- 11) Proyectar el presupuesto de la facultad;
- 12) Organizar la distribución o venta de publicaciones y productos.

Art. 26. — Los miembros titulares del consejo directivo no podrán desempeñar empleos rentados dependientes de la universidad, con excepción de los cargos directivos y docentes. Tampoco podrán ser nombrados para cátedras, dirección, empleo o comisión rentada creados durante su mandato, hasta después de dos años de fenecido éste. Los aspirantes a cátedras ya existentes podrán presentarse al concurso, previa renuncia como miembros del consejo directivo.

Del decano

Art. 27. — Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino nativo, y ser profesor titular o adjunto confirmado en la respectiva facultad.

Art. 28. — El decano tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 29. — El decano tendrá las siguientes funciones:

- 1) Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo;
- 2) Representar a la facultad;
- 3) Firmar, juntamente con el rector, los títulos o diplomas universitarios;
- 4) Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la asistencia de los profesores;

- 5) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los consejos universitario y directivo y del rector;
- 6) Autorizar el ingreso de alumnos y expedir certificados de promoción, con arreglo a las ordenanzas y reglamentos correspondientes;
- 7) Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnicoprofesional de cada cátedra;
- 8) Acordar a los profesores licencias, de conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;
- 9) Ejercer la vigilancia de la enseñanza, y la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la facultad;
- 10) Dirigir la administración de la facultad y rendir cuenta de la inversión de los fondos;
- 11) Designar y remover al secretario de la facultad, el que deberá ser egresado universitario;
- 12) Fijar las fechas de examen, número de turnos y orden de los mismos;
- 13) Despachar los asuntos de trámite, con el simple dictamen de la comisión respectiva del consejo directivo, salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto será tratado por el consejo.

Del vicedecano

Art. 30. — El vicedecano durará tres años en funciones. Ejercerá las del decano durante la ausencia o impedimento de éste, o las que el mismo le delegare. En caso de vacancia del vicedecanato, el consejero que se haga cargo del mismo, completará el período.

Art. 31. — En caso de ausencia, impedimento, renuncia o fallecimiento del vicedecano en ejercicio del decanato, asumirá las funciones de vicedecano interino el consejero profesor titular de mayor antigüedad en la cátedra.

TITULO III

De los profesores

Disposiciones generales

Art. 32. — Las universidades tendrán cuatro categorías de profesores: titulares, adjuntos, extraordinarios y honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorías.

Art. 33. — El profesor universitario, sea titular o adjunto, no podrá acumular más de uno de estos cargos en la misma facultad, ni en otras facultades y universidades. Son incompatibles, por lo tanto, los cargos de profesor titular con el de adjunto, o los de profesor adjunto en más de una asignatura, en la misma o en distintas facultades o universidades. No podrán los profesores prestar sus servicios profesionales en favor de intereses que estén en pugna, compe-

tencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, salvo los casos de defensa de intereses personales del profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes, siendo pasible, si lo hiciere, de suspensión, cesantía o exoneración.

Art. 34. — La responsabilidad científico-legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en clase, concierne exclusivamente a los profesores que la dicten y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual, artística o literaria de su enseñanza. Lo establecido precedentemente no se aplicará a los casos de investigaciones organizadas por la universidad, facultades e institutos.

Art. 35. — Los profesores podrán ser separados por las siguientes causas:

- 1) Condena criminal, que no sea por hecho culposo.
- 2) Abandono de sus funciones o negligencia grave en el ejercicio de las mismas.
- 3) Inconducta manifiesta.
- 4) Incapacidad sobreviniente.

De los profesores titulares

Art. 36. — Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teóricopráctica de su asignatura y el desempeño autonómico de la cátedra.

Art. 37. — Los profesores titulares serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo concurso de méritos, aptitudes técnicas y pedagógicas, títulos, antecedentes y trabajos.

Art. 38. — Producida una vacante de profesor titular, se llamará a concurso dentro de un plazo no mayor de tres meses, poniéndose interinamente la cátedra a cargo de un profesor adjunto correspondiente a la misma materia y, a falta de éste, podrá designarse otro profesor de materia afín.

Art. 39. — El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión asesora compuesta por tres miembros, sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares, de la misma materia si los hubiere, y de las materias afines a la cátedra, de la misma facultad y/o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquélla.

El orden de afinidad entre las materias se establecerá con carácter permanente por las facultades al aprobar los respectivos planes de estudios.

Art. 40. — La comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos, títulos, antecedentes y trabajos, la que quedará sujeta a las siguientes condiciones:

- 1) El consejo directivo de la facultad podrá observar el aspecto formal de las ternas, variar su orden o integrarlas en

forma distinta a la propuesta por la comisión asesora, requiriéndose para esto último dos tercios de votos de los miembros presentes;

- 2) La terna será elevada a la universidad, que juzgará sobre los aspectos formales del concurso. En caso de que el consejo directivo hubiere modificado el dictamen de la comisión asesora, elevará un informe fundado al consejo universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la terna;
- 3) La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo juntamente con todos los antecedentes del concurso.

Art. 41. — Para ser admitido al concurso se requiere ser ciudadano argentino, poseer antecedentes morales inobjectables, poseer título o diploma universitario nacional con cinco años por lo menos de antelación y haber acreditado aptitudes docentes o trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella.

Art. 42. — Las ternas para profesor titular deberán formarse previo dictamen escrito y fundado de la comisión asesora del consejo directivo.

Para configurar la terna se tendrá en cuenta en forma preferente, el cargo de profesor adjunto, en caso de igualdad de antecedentes. A los concursantes que no fueran profesores adjuntos, el consejo directivo podrá exigirles una prueba complementaria. La actividad científica y docente del candidato deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y cursos que se estimarán no sólo por el número, sino también y en primer término, por el mérito intrínseco.

Art. 43. — Cuando se haya declarado desierto un llamado a concurso por no haberse podido integrar la terna se procederá a un segundo llamado. En caso de repetirse la situación anterior el consejo directivo deberá dictaminar sin el requisito de la terna.

Art. 44. — Los profesores titulares pueden presentarse a concurso para optar a otra cátedra, pero si la obtuviesen estarán obligados a renunciar a la cátedra que hubieren estado dictando. Los profesores adjuntos se considerarán presentados automáticamente a los concursos de las cátedras titulares cuya adjuntía ejercen, salvo manifestación expresa en contrario.

Art. 45. — Son funciones de los profesores titulares:

- 1) Conducir la enseñanza de la cátedra, a cuyo efecto deberán: a) Presentar anualmente al consejo directivo, para su apro-

bación, el programa de la materia; b) Distribuir la enseñanza con los profesores adjuntos; c) Formar parte de las mesas examinadoras; d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza que se les encomienden; e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos. Todo ello con arreglo a las reglamentaciones que se dicten;

- 2) Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;
- 3) Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;
- 4) Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que le fuere requerido por conducto del consejo directivo.

De los profesores adjuntos

Art. 46. — Los profesores adjuntos serán nombrados por concurso por el consejo directivo, con aprobación del consejo universitario, de acuerdo con la reglamentación pertinente.

Para ser admitido al concurso se requieren las mismas condiciones exigidas en el caso de los profesores titulares, salvo la antigüedad como egresado que se reduce a dos años. Podrán admitirse a los concursos para profesores adjuntos, aun cuando no hayan seguido la carrera docente, aquellos candidatos de reconocida personalidad científica, probada con trabajos o actuación docente. En tal caso se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.

Art. 47. — Cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra, el que no podrá exceder en total del equivalente a un promedio de dos por cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos, requerirán aprobación del Consejo Universitario.

Art. 48. — Son funciones de los profesores adjuntos:

- 1) Colaborar en las tareas de la cátedra de acuerdo con la reglamentación que dicte la facultad, a cuyo efecto deberán:
 - a) Participar en la enseñanza de acuerdo con la distribución que haga el profesor titular;
 - b) Formar parte de las mesas examinadoras;
 - c) Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;

- d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza, que se les encomienden;
 - e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos.
- 2) Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;
 - 3) Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;
 - 4) Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que les fuere requerido por conducto del consejo directivo.

Art. 49. — Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta su comportamiento moral y docente y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte la facultad.

Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados cesarán automáticamente en sus funciones.

De los profesores extraordinarios

Art. 50. — El Consejo Universitario, a propuesta del consejo de la facultad, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la contratación de profesores extraordinarios por un plazo que no deberá exceder de cinco años. La remuneración y las funciones de los mismos serán determinados en cada caso por la facultad respectiva al formular la propuesta.

De los profesores honorarios

Art. 51. — Al profesor que se retire de la enseñanza se le podrá otorgar, por el consejo directivo, en los casos de haberse destacado por su actuación, el título de profesor honorario, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación del Consejo Universitario en igual forma.

El título de profesor honorario es vitalicio. Sus funciones serán determinadas por las reglamentaciones de cada facultad, con la aprobación del Consejo Universitario.

De la carrera docente

Art. 52. — Todo egresado de la universidad, con cinco o más años de ejercicio profesional que reúna trabajos, títulos y antecedentes cien-

tíficos suficientes, podrá solicitar al consejo directivo un permiso para enseñar, y cumplidos los requisitos exigidos para demostrar su capacidad docente, que establecerá cada facultad, se le conferirá permiso para enseñar en carácter de *venia docendi*. Sus antecedentes como tal serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

El régimen de la enseñanza del *venia docendi*, será reglamentado por cada facultad.

Art. 53. — Cada facultad reglamentará su carrera docente ajustándose a las siguientes bases:

- 1) El aspirante a profesor universitario cursará un período de adscripción a una determinada cátedra, durante el cual realizará trabajos de investigación o seminario, bajo la dirección del respectivo profesor, y ejercicios docentes en la materia de su adscripción; completará su preparación con cursos obligatorios sobre materias de cultura general. Podrán implantarse o no, según las características de cada facultad, exámenes finales para la aprobación de las materias de adscripción;
- 2) Cumplido esto, el aspirante a profesor pasará a ejercer la docencia complementaria bajo la dirección del profesor titular y durante el tiempo que fijará cada facultad para cada asignatura;
- 3) Terminada esta etapa, y previo un examen general de competencia técnica y docente sobre la materia de su dedicación, será reconocido como docente autorizado;
- 4) El docente autorizado tendrá las obligaciones que le fije cada facultad y sus antecedentes serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

De los claustros universitarios

Art. 54. — Constituyen el claustro general de profesores, todos los docentes titulares y adjuntos de cada facultad. Podrán también constituirse claustros parciales de las diversas escuelas, por separado, para considerar exclusivamente los resultados del plan de estudios y las reformas que se sugieran.

Los claustros serán citados y presididos por el decano de cada facultad.

Art. 55. — El decano citará el claustro general o parcial cuando lo considere conveniente, pudiendo consultarlos por escrito.

TITULO IV

De las remuneraciones

Art. 56. — El rector y el vicerrector de la universidad, los decanos, directores de escuelas o

institutos y profesores, percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas, que fije la ley general de presupuesto de la Nación.

Art. 57. — Los profesores titulares y adjuntos y el personal diplomado auxiliar de la docencia, gozarán de un aumento del diez por ciento en sus remuneraciones, cada cinco años de ejercicio de la docencia universitaria.

TITULO V

De los estudiantes

Art. 58. — Los requisitos de admisión, categorías, promociones, concesión de becas, épocas de examen y todo lo atinente al régimen del estudiante, será reglamentado por el Consejo Nacional Universitario.

Art. 59. — Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado, alumno regular de uno de los tres últimos años de estudio, y proveniente de entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles.

De la enseñanza para graduados

Art. 60. — Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando centro de graduados y cursos de perfeccionamiento o especialización.

TITULO VI

Del Consejo Nacional Universitario

Art. 61. — El Consejo Nacional Universitario estará constituido por los rectores de todas las universidades del país, será presidido por el ministro secretario de Estado de Educación de la Nación, y tendrá además de las funciones que expresamente le acuerda la presente ley, las siguientes:

- 1) Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
- 2) Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;
- 3) Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras;
- 4) Reglamentar y aconsejar lo concerniente a la extensión universitaria de cada universidad;

- 5) Coordinar, planificar y racionalizar las normas que regirán las publicaciones universitarias;
- 6) Promover la realización de congresos docentes universitarios;
- 7) Asesorar al Poder Ejecutivo en la creación, organización y funcionamiento de las academias nacionales, disponiendo lo conducente para que las universidades actúen en forma coordinada con ellas.

TITULO VII

Del patrimonio y recursos de la universidad y su administración

De los bienes de la universidad

Art. 62. — Forman el patrimonio de la universidad los bienes que en virtud de ley o por otro título gratuito u oneroso, correspondan al dominio de la universidad, así como las colecciones científicas y publicaciones que tengan las facultades, institutos o dependencias universitarias.

De los recursos, donaciones y cuentas

Art. 63. — Son recursos de las universidades:

- 1) Las contribuciones de rentas generales que anualmente fije el presupuesto general de la Nación para cada organismo o en particular para sus facultades, institutos y establecimientos;
- 2) Los frutos, intereses y rentas de sus bienes patrimoniales;
- 3) Las donaciones de terceros a su favor o en beneficio de sus facultades, institutos o establecimientos;
- 4) Todo otro recurso que le corresponda o se le asigne.

Para compensar las contribuciones mencionadas en el apartado 1) del presente artículo, incorporáanse a rentas generales los recursos a que se refiere la primera parte del artículo 8º de la ley 13.558.

Art. 64. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general de la Nación, con cargo a rentas generales durante el ejercicio de 1954, de conformidad con lo previsto por el apartado 1) del artículo 63 de la presente ley, los créditos que, en la medida de las necesidades de cada organismo universitario, sean indispensables para su desenvolvimiento en el citado ejercicio. Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación de las deudas que al 31 de diciembre de 1953 cada universidad no haya podido atender con las disponibilidades con que hubiere conta-

do, inclusive los anticipos efectuados oportunamente por el Tesoro Nacional para cubrir insuficiencias de los ingresos universitarios. Dichos gastos serán atendidos con los recursos a que se refiere el artículo 3º de la ley 13.654.

Art. 65. — El uso de las atribuciones que la presente ley confiere a los organismos universitarios no podrá traducirse en erogaciones para cuya atención no se cuente con la pertinente autorización de crédito en sus respectivos presupuestos. En este caso, como así también cuando el ejercicio de dichas atribuciones demande la modificación de la estructura presupuestaria o importe un nuevo compromiso de gastos para ejercicios futuros, deberá requerirse la previa conformidad del Poder Ejecutivo.

Art. 66. — Cuando se trate de herencias, legados o donaciones o cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el Consejo Universitario no podrá pronunciarse sin oír a éstas y no podrá aceptar aquellas que las facultades decidan rechazar. Estas contribuciones comprenden las condiciones o cargos que puedan imponer los testadores o benefactores. Aceptada una herencia, legado, donación u otra liberalidad, en contrato de donación, no podrá ser modificado sin oír nuevamente a la facultad beneficiada.

Art. 67. — Salvo disposición especial del Consejo Universitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos, los entregarán mensualmente a la tesorería de la universidad, cualquiera sea su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y explicativos del caso.

Art. 68. — Los fondos universitarios estarán depositados a la orden del rector, quien dispondrá de su inversión de acuerdo con el régimen financiero y contable vigente.

TITULO VIII

Art. 69. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para reajustar los presupuestos de gastos y cálculos de recursos de las universidades a fin de adecuarlos a las disposiciones de la presente ley.

Art. 70. — Los concursos para la provisión de cargos de profesores titulares y adjuntos, en trámite a la fecha de la sanción de la presente ley, se regirán por las disposiciones de la reglamentación bajo la cual se llamó a concurso.

Art. 71. — Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 47, los profesores adjuntos designados por el Consejo Universitario al 31 de octubre de 1953, tendrán derecho a la percepción de las remuneraciones a que se refieren los artículos 56 y 57.

Art. 72. — La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1954, quedando derogadas la ley 13.031 y todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Los requisitos y procedimientos para la designación de las autoridades de las universidades y facultades establecidos en la presente ley, no se aplicarán a las actuales autoridades, mientras ejerzan su mandato.

Art. 73. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Despacho de la minoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Instrucción Pública, en minoría, han estudiado detenidamente el proyecto de ley, venido en revisión, sobre modificaciones a la ley universitaria 13.031, y los proyectos que sobre la materia existen en las comisiones; y, por las razones que darán los miembros informantes, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

De las funciones de las universidades

Artículo 1º — Las universidades son instituciones de enseñanza superior que tienen a su cargo:

- 1º La formación integral de la personalidad del hombre y del ciudadano que ha de actuar en una democracia;
- 2º Los estudios, trabajos y enseñanzas vinculados a la conservación, defensa, elaboración y difusión de la cultura, a la investigación científica y formación de investigadores y a la preparación técnica para el ejercicio de las profesiones liberales;
- 3º La función informativa y orientadora del pensamiento colectivo.

Art. 2º — Las universidades han de encauzar en todo momento sus funciones específicas dentro de la cuádruple finalidad que debe informar su programa de acción como institutos de alta cultura humanista: «Por la ciencia, por la patria, por la libertad y por América.»

TITULO II

De la organización de las universidades

Art. 3º — El gobierno de cada universidad es ejercido por la asamblea universitaria, un consejo superior y un presidente o rector.

Art. 4º — La asamblea universitaria es el órgano supremo de la universidad. La constituyen los miembros del consejo superior y de los consejos directivos de las facultades e institutos superiores. Se reúne por convocatoria del presidente o rector, o del consejo superior, o a pedido —que tendrá fuerza ejecutiva— de un tercio por lo menos, del total de miembros del consejo superior y de los consejos directivos, o de un quinto del total de profesores que dictaren o tuvieren permiso para dictar curso en las facultades e institutos superiores, para: considerar, con carácter ordinario o extraordinario, los asuntos que le sean sometidos y que interesen al funcionamiento de la universidad o al cumplimiento de sus fines; decidir sobre graves cuestiones de disciplina o que afecten la integridad de la institución y sobre la remoción de las autoridades superiores de la universidad; resolver los pedidos de separación de profesores formulados por el consejo superior; reformar los estatutos; o ejercer, con sujeción a las normas que esta ley establece, todo acto de jurisdicción superior no previsto en ella.

Art. 5º — El consejo superior se compone del presidente o rector, de los decanos y directores, de un profesor titular delegado de cada facultad o instituto superior, de tres delegados de los estudiantes y de tres representantes de los graduados, elegidos en la forma que fijan los estatutos. Ejerce, en concurrencia con el presidente o rector, el gobierno de la universidad en el orden didáctico, administrativo y disciplinario, originariamente o en el grado de apelación; elige anualmente un vicepresidente o vicerrector; propone a la asamblea universitaria la reforma de los estatutos; sanciona el presupuesto; establece la correlación de estudios y aprueba o devuelve observados los planes de estudios, reglamentos y ordenanzas que dicten las facultades e institutos superiores y los nombramientos de profesores que ellos hagan; propende a la formación de un cuerpo docente dedicado por completo a la enseñanza y a la actividad científica; interviene, en caso de conflicto o incumplimiento de esta ley o de los estatutos, las facultades e institutos superiores, por el voto de las dos terceras partes del total de sus componentes y por el mismo número de votos requiere de la asamblea universitaria, en pliego fundado, el juzgamiento del presidente o rector; y dicta las ordenanzas generales para poner en ejecución las disposiciones de esta ley y de los estatutos universitarios.

Art. 6º — El presidente o rector es el representante de la institución en todos los actos civiles, administrativos y académicos, dirige la administración general de la universidad, preside las sesiones de las asambleas universitarias y del consejo superior, y ejecuta y hace cumplir sus resoluciones. Debe ser ciudadano argentino,

tener más de treinta años de edad y ser o haber sido profesor titular o extraordinario de la respectiva universidad. Es elegido por una asamblea constituida por igual número de representantes de los profesores, de los estudiantes y de los graduados, en la forma que fijan los estatutos y dura cuatro años en sus funciones. Puede ser reelecto para el período inmediato siguiente, por una sola vez, para lo cual deberá reunir, en primera votación, por lo menos el voto de los dos tercios del total de miembros presentes de la asamblea. Para poder ser nuevamente electo, deberá transcurrir un período completo de cuatro años.

Art. 7º — La autoridad de las facultades e institutos superiores reside en un consejo directivo y un decano o director.

El consejo directivo se compone de seis representantes de los profesores, dos de los estudiantes y dos de los graduados, elegidos, con sus suplentes, en la forma que determinen los estatutos. Tiene a su cargo, como el decano o director, el gobierno interior, didáctico, administrativo y disciplinario de su respectiva facultad o instituto y le corresponde: proyectar los planes de estudios y proponer sus modificaciones al consejo superior; formar las ternas de profesores titulares y adjuntos y nombrar las demás categorías de profesores, con ratificación del consejo superior; designar el personal auxiliar y técnico; organizar los seminarios y la labor experimental y práctica; aprobar o modificar los programas de estudios teóricos y prácticos de cada enseñanza; fijar las condiciones de admisión de alumnos; fijar las fechas de exámenes y comisiones examinadoras de acuerdo con las resoluciones generales del consejo superior; expedir los certificados de exámenes en virtud de los cuales el presidente o rector otorgará el diploma correspondiente; proyectar el presupuesto anual de gastos; administrar bajo la fiscalización del presidente o rector y del consejo superior los fondos que sean asignados a la facultad o institutos; vigilar la enseñanza y los exámenes y entender en primera instancia en los asuntos disciplinarios.

Para ser decano o director se requieren las mismas condiciones que para ser presidente o rector.

Art. 8º — Todos los profesores titulares, adjuntos, extraordinarios, honorarios y libres de la facultad o instituto superior, o sus representantes, igual número de delegados de los estudiantes y el mismo número de representantes de los graduados, elegidos en la forma que se establezca en los estatutos y reunidos en asamblea, eligen las autoridades de la respectiva facultad o instituto superior por un período de cuatro años: el decano o director, el vicedecano o vicedirector y los miembros del consejo directivo y delegado al consejo superior, titulares y suplentes. Dichas autoridades no podrán ser

reelectas con el mismo carácter sino con intervalo de un período.

En las diferentes asambleas electorales y en los consejos directivos la mitad, por lo menos, de los representantes de los profesores estará constituida por profesores titulares.

Art. 9º — Cuando se traten asuntos que conciernen directamente al personal auxiliar, técnico y administrativo, y al solo efecto de intervenir en su consideración, tendrán derecho a asistir a las sesiones del consejo superior, de los consejos directivos y de sus comisiones, con voz y voto, dos representantes de dicho personal, designados en votación directa o por la asociación de empleados de la universidad que es su órgano legítimo.

Art. 10. — El sufragio será obligatorio y secreto en todas las elecciones que se realicen en la universidad, institutos, facultades, escuelas y centros o federaciones de estudiantes.

Art. 11. — Las sesiones de todos los cuerpos directivos de la universidad, del consejo superior, de la asamblea universitaria y de las asambleas de las facultades son públicas, salvo casos de excepción expresamente resueltos por los dos tercios de los miembros presentes.

Art. 12. — Para coordinar la labor de las universidades, la diversificación de sus planes de estudios y trabajos y la extensión universitaria, organizar los congresos universitarios periódicos y considerar cuestiones relativas al progreso del país o de interés común a las universidades, créase el Consejo Interuniversitario, constituido por los presidentes o rectores de las mismas, el presidente de la Federación Universitaria Argentina de Estudiantes, el presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la universidad donde se reúna el consejo, el presidente de la Asociación Nacional de Graduados Universitarios y el presidente de la asociación local de graduados.

TITULO III

De las bases fundamentales de la enseñanza universitaria

Art. 13. — Las universidades, dentro del cuadro general común, diversificarán la organización de sus facultades e institutos superiores y sus planes de estudios, con asignaturas obligatorias y optativas, haciéndolos suficientemente elásticos para intensificar la propia obra e influencia sobre determinadas especialidades y en problemas relativos al desarrollo cultural, técnico, social, ético, político y económico de la República y a las necesidades y aspiraciones regionales, nacionales y continentales, por propia iniciativa o a requerimiento de otras instituciones oficiales o de los poderes públicos de la Nación.

Art. 14. — La enseñanza se impartirá en clases teóricas y en clases prácticas desarrolladas en laboratorios, seminarios, gabinetes, museos, cursos de adaptación profesional, hospitales, clínicas, campos de cultivos, chacras y granjas experimentales, establecimientos experimentales de ganadería, talleres, plantas pilotos, institutos y departamentos de investigación de ciencia pura y aplicada, a los que tendrán libre acceso, dentro de las disposiciones que fijen las ordenanzas, los alumnos y los graduados y todas las personas que deseen completar conocimientos o realizar trabajos especiales.

Art. 15. — Las universidades deben cumplir una acción social y una labor de extensión universitaria que difundan la obra que en ellas se realiza, para propender a la dignificación ciudadana, a la formación de una vigorosa conciencia nacional, a la mayor ilustración y a la capacitación técnica y artística del pueblo y para adoctrinarlo sobre las cuestiones atinentes a la libertad, al decoro, al bienestar y al progreso general.

La extensión universitaria es labor obligatoria para toda categoría de profesores, personal auxiliar de la docencia y técnico, y para los estudiantes que cursan los dos últimos años de su carrera, en forma que contribuya a prepararlos para su acción social en beneficio de la colectividad.

Dentro del año de promulgada esta ley, cada universidad deberá tener en funcionamiento un departamento de extensión universitaria con atribuciones y facilidades para la organización de misiones pedagógicas, exposiciones, ciclos de conferencias y la utilización de servicios y equipos radiotelefónicos y cinematográficos propios.

Art. 16. — Para completar la obra del servicio nacional de orientación profesional, que entre sus fines tendrá el de asesorar a los alumnos de los colegios y escuelas de enseñanza media y especial, funcionará en cada universidad un departamento de orientación profesional.

Art. 17. — Las universidades determinarán el sistema de promoción de los alumnos de sus diversas facultades, institutos, colegios y escuelas, y sólo será mantenido el régimen tradicional de exámenes en cuanto no pueda ser substituído, según las materias de estudio, por otras formas más ventajosas de apreciar el aprovechamiento de la enseñanza y la labor de los alumnos.

Art. 18. — Se estimulará la labor original y las tareas de investigación de profesores, estudiantes y graduados, individualmente, en colaboración y por equipos, con centros de estudios donde se realicen exposiciones y debates sobre temas investigados. Además de las becas de perfeccionamiento, se organizará el intercambio de profesores, alumnos y graduados con las universidades nacionales, americanas y extranjeras, y cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del continente.

Art. 19. — El personal docente y los alumnos de las facultades, institutos, colegios y escuelas de las universidades realizarán expediciones y excursiones de investigación, observación y estudio del territorio argentino y otros países, de acuerdo con un plan previo aprobado por el respectivo consejo directivo. Sobre los resultados obtenidos los profesores, auxiliares y alumnos deben dar conferencias y publicar memorias y monografías, siempre bajo la autoridad de la universidad.

Cada cinco años consecutivos en el ejercicio de la cátedra, los profesores tendrán derecho a una licencia con goce de sueldo, desde octubre a marzo inclusive, siempre que la empleen en realizar viajes de estudio al interior del país o al extranjero. Al término de la licencia deberán dar cuenta del resultado de sus observaciones y trabajos.

TITULO IV

De los profesores, estudiantes y graduados

Art. 20. — El régimen docente será oficial y libre.

La enseñanza oficial será dada por profesores titulares, adjuntos, extraordinarios, honorarios e interinos. Habrá tantos docentes full-time como las enseñanzas lo requieran y las ordenanzas y presupuestos lo determinen. El número de profesores adjuntos dependerá de las necesidades de cada curso.

La docencia libre no podrá ser restringida ni limitada la actuación de los profesores libres una vez reconocida la idoneidad del aspirante por el consejo directivo o por el consejo superior en apelación. El profesor libre integrará las comisiones examinadoras de su alumno siempre que haya dictado un curso completo.

Las funciones de las diversas categorías de profesores y auxiliares de docencia serán fijadas en los estatutos.

Art. 21. — Los profesores titulares y adjuntos serán seleccionados por concurso de títulos, antecedentes, méritos y aptitudes. Los tribunales asesores estarán integrados, en lo posible, por profesores de la materia y materias afines de la misma universidad o de otras universidades. En base al dictamen del respectivo tribunal, el consejo directivo formulará, por voto fundado y firmado de cada consejero, una terna de candidatos, colocados en orden de preferencia, que será pasada al consejo superior con todas las actuaciones del concurso y con la expresión de los fundamentos dados para elegir los candidatos que la integran, debiendo publicarse dicho informe por la imprenta y editorial de la universidad. El consejo superior, en votación nominal, y por mayoría absoluta de votos, resolverá respecto a la designación del profesor propuesto en primer

término. Para elegir otro de los miembros de la terna se requerirá el voto fundado de los dos tercios del total de miembros del cuerpo.

Art. 22. — Los cargos de auxiliares de docencia y técnicos y de profesores de los colegios y escuelas serán provistos por concurso de oposición.

Art. 23. — Los profesores tendrán amplia libertad para la exposición de sus ideas y doctrinas. Asimismo, será garantizado el derecho de pensamiento y de opinión, dentro de la universidad para todos sus miembros.

Art. 24. — La destitución de profesores titulares debe hacerse por la asamblea universitaria por propia iniciativa o a requerimiento, debidamente fundado, del consejo superior o del consejo directivo de la facultad o instituto con aprobación del consejo superior. Uno u otro cuerpo, según el caso, podrá suspender al profesor hasta la decisión del consejo superior o hasta la resolución de la asamblea universitaria, que deberán expedirse dentro de los tres meses. El consejo superior reglamentará la separación de las demás categorías de profesores oficiales y libres y del personal auxiliar de docencia, técnico y administrativo.

Art. 25. — Cada diez años de su ejercicio docente, todo profesor titular o adjunto, resumiendo sus informes anuales, presentará al consejo directivo una memoria sobre la labor desarrollada en ese período. Dicha memoria será publicada de inmediato.

El consejo directivo, al considerar ese informe general con todos los antecedentes reunidos al efecto, podrá proponer al consejo superior, por el voto fundado de las dos terceras partes del total de sus miembros, la reapertura del concurso para proveer el cargo respectivo. El consejo superior resolverá, por mayoría absoluta del total de sus miembros, si se reabre o no el concurso, al que podrá presentarse el profesor no confirmado.

Art. 26. — Los estatutos fijarán el régimen de incompatibilidad para los cargos directivos, docentes, técnicos y administrativos y los casos en que podrá no exigirse dedicación exclusiva.

Art. 27. — No podrán establecerse limitaciones numéricas a los que quieran ingresar a la universidad y hayan cumplido las etapas previas de la enseñanza.

Toda persona que lo solicite será inscrita como oyente de cualquier curso en las facultades e institutos superiores y podrá participar en las clases y trabajos de acuerdo con las reglamentaciones que dicten los consejos superiores.

Art. 28. — La enseñanza será gratuita y laica. No se exigirá contribución pecuniaria ni regirá tasa alguna para ingresar a las universidades, seguir los cursos, rendir las pruebas, realizar gestiones administrativas, obtener certificados de estudios, recibir el grado académico o título profesional y todo acto semejante.

Cuando la incorporación de un estudiante a la universidad implique la privación de un aporte económico indispensable para su familia, ésta tendrá derecho a una ayuda pecuniaria que le será asignada en la forma que determinen los estatutos y en la medida en que lo permita el estado del fondo propio.

Art. 29. — La asistencia de los alumnos a las clases teóricas es libre. Las facultades o institutos reglamentarán la asistencia obligatoria de los alumnos a las clases y cursos prácticos de los docentes oficiales y libres, de acuerdo con las exigencias de la enseñanza impartida.

Art. 30. — Cada facultad o instituto superior reconocerá oficialmente un centro de estudiantes formado por todos los alumnos inscritos en él; y la universidad reconocerá, asimismo, una federación de dichos centros. Ambos organismos presidirán la elección de los respectivos delegados estudiantiles anuales en los consejos y sus representantes en las asambleas de la universidad.

Art. 31. — En cada universidad se organizará la asociación de ayuda social de los estudiantes, estableciendo el hogar o residencia estudiantil, con alojamientos, comedores, salas de conferencias, bibliotecas, campos de deportes y locales para los centros; propenderá al cuidado de la salud física y moral de los jóvenes, con la asistencia médica correspondiente y sanatorios estudiantiles; facilitará a los estudiantes pobres la iniciación y prosecución de los estudios mediante cajas de anticipos de honor y becas, y con almacenes cooperativas para la adquisición de libros, materiales de estudio y otros elementos que se consideren indispensables.

El hogar o residencia estudiantil será dirigido y administrado por la federación universitaria local.

Art. 32. — Los estatutos deberán reglamentar la organización de los graduados a los efectos de la elección de sus representantes ante los consejos y asambleas y de su participación activa en la vida universitaria.

Mientras no se constituyan los centros de graduados en la forma estatutaria y cada vez que no intervengan sus representantes en la elección de autoridades, el número de delegados de los estudiantes será igual a la mitad del número de profesores citados para la asamblea respectiva.

TITULO V

De las autoridades universitarias

Art. 33. — Las universidades formulan sus estatutos, reglamentos y ordenanzas y proceden en materia didáctica, científica, administrativa, disciplinaria y de acción social, con entera autonomía, manteniéndose atentas al cumplimiento de los fines y de los deberes de las entidades

de enseñanza superior que han de estar permanentemente al servicio de los intereses sociales.

El consejo superior, y, en su caso, la asamblea universitaria, resuelven en última instancia las cuestiones disciplinarias y contenciosas que hayan fallado los consejos directivos, sin perjuicio de las acciones contenciosas-administrativas que puedan corresponder.

Art. 34. — Cada universidad, como persona jurídica, tiene plena capacidad para demandar y comparecer en juicio y para adquirir y administrar toda clase de bienes; pero el consejo superior no podrá resolver la enajenación de los mismos o la adquisición de otros nuevos a título oneroso, por encima de un monto que fijarán los estatutos, sin la autorización de la asamblea universitaria.

Art. 35. — Las actuales universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Litoral, Tucumán y Cuyo, y las que se funden en adelante, como unidades orgánicas de la cultura, podrán crear otras facultades, institutos superiores de investigación científica y de enseñanza, colegios, escuelas, secciones y departamentos especiales, en la forma que sus estatutos determinen.

Art. 36. — El Poder Ejecutivo, a requerimiento del consejo interuniversitario, podrá intervenir en las universidades por un término no mayor de tres meses y al solo objeto de restablecer su funcionamiento normal. Si no media requerimiento del consejo interuniversitario las universidades sólo podrán ser intervenidas por ley del Congreso.

Art. 37. — Cada universidad recibirá los bienes suficientes para asegurar con sus rentas su funcionamiento y permitir su progreso. Dichos bienes constituirán su fondo propio. A este fondo ingresarán las sumas que se recauden en concepto de impuestos a los réditos sobre los honorarios o sueldos y sobre toda otra retribución o ganancias que los graduados universitarios perciban en el ejercicio de su profesión o en su calidad de diplomados universitarios. Los fondos recaudados se acreditarán a la universidad nacional que haya expedido el diploma del graduado contribuyente y se liquidarán por semestre, quedando las universidades habilitadas para verificar la contabilidad pertinente y embargar los fondos que les correspondan en caso de mora en la liquidación.

Al fondo propio ingresarán las donaciones y legados, las sumas recaudadas por venta de productos agrícolas, ganaderos y manufacturados, los de sus talleres o departamentos y demás trabajos que se realicen en sus dependencias.

Art. 38. — Quedan eximidas las universidades del pago de toda clase de impuestos y de las tasas de correos y telégrafos.

Art. 39. — Anualmente cada universidad dará cuenta al Congreso de la inversión de su presupuesto y del estado de su fondo propio.

Art. 40. — El decano o director presentará anualmente al presidente o rector una memoria

sobre el estado de su respectivo instituto y acerca de las reformas didácticas, administrativas o relativas a la investigación científica que convenga introducir. El presidente o rector dirigirá al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública una memoria general sobre la forma cómo se han cumplido durante el año los fines que esta ley determina, los progresos realizados y las mejoras proyectadas.

TITULO VI

Disposiciones complementarias

Art. 41. — Quedan derogadas las leyes nacionales: 1.597, 3.271 y 4.416.

La Universidad Nacional de La Plata proyectará las modificaciones que corresponda introducir en la ley convenio 4.699, de 12 de agosto de 1905, entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, para adaptarla a la presente ley.

Art. 42. — Los consejos superiores, dentro de los tres meses de haberse constituido, formularán y sancionarán los nuevos estatutos de

su respectiva universidad, sin requerirse, en este caso, la aprobación de las asambleas universitarias. Entre tanto regirán los que estaban en vigencia, en cuanto no se opongan a la presente ley. Cada universidad dictará las ordenanzas de carácter transitorio para reorganizar sus autoridades.

Art. 43. — Los actuales profesores suplentes y adjuntos, designados por concurso de títulos, méritos y aptitudes, pasarán a figurar en la categoría de profesores adjuntos de la presente ley.

Art. 44. — Un delegado del Poder Ejecutivo, en cada universidad procederá a dejar constituidas sus autoridades dentro del plazo de dos meses a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 45. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 14 de diciembre de 1953.

Santiago I. Nudelman. — Santiago C. Fassi.

LEY UNIVERSITARIA COMPARATIVO

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

Ley 13.031

TITULO I

De las universidades

CAPITULO I

De las funciones, tareas, organización en general y capacidad jurídica de las universidades

Artículo 1º — (Objetivos). Las universidades tienen a su cargo la enseñanza en el grado superior, la formación de la juventud para la vida, para el cultivo de las ciencias y para el ejercicio de las profesiones liberales, debiendo actuar con sentido social en la difusión de la cultura para el prestigio y engrandecimiento de la Nación.

TITULO I

De las universidades

CAPITULO I

De la misión y organización de las universidades

Artículo 1º — Las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, a cuyo efecto tendrán los siguientes objetivos:

- 1º La enseñanza en el grado superior y el desarrollo de la cultura y la afirmación de la conciencia nacional, de acuerdo con la orientación fijada por la Constitución;
- 2º La integral formación humana de sus docentes y estudiantes, con preferencia a toda especialización técnica e inculcándoles la noción de su responsabilidad social y la conciencia de que han de servir al pueblo;
- 3º La organización de la investigación científica, la creación y sostenimiento de institutos de perfeccionamiento o de especialización y el fomento de publicaciones y actividades científicas, literarias y artísticas;
- 4º La creación de un cuerpo de docentes altamente especializados y consagrados a la enseñanza;
- 5º El otorgamiento de los títulos para el ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo;
- 6º La promoción de las relaciones culturales con las entidades similares de los demás países;
- 7º Asegurar la gratuidad de los estudios;
- 8º Interesarse por los problemas nacionales;
- 9º Prestar a los organismos del gobierno el asesoramiento que les fuere requerido;
10. Instituir cursos de extensión universitaria y favorecer toda forma de difusión de la cultura;
11. Organizar sus servicios asistenciales.

Cuentan para ello con la autonomía técnica, docente y científica que se les confiere por la presente ley y con el pleno ejercicio de su personalidad jurídica.

Art. 6º — Las universidades cuentan con autonomía docente y científica y gozan de la autarquía que en el orden administrativo les confiere la presente ley.

5º El otorgamiento de los títulos o diplomas para el ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo;

Ley 13.031

Art. 2º — (Funciones). Son funciones de las universidades de las cuales no podrán apartarse:

- 1º Afirmar y desarrollar una conciencia nacional histórica, orientando hacia esa finalidad la tarea de profesores y alumnos;
- 2º Organizar la investigación científica y preparar, para la ulterior dedicación a ella, a los que tengan vocación de investigadores, capaces por su aplicación, inventiva, sagacidad y penetración, de hacer progresar las ciencias, las letras y las artes;
- 3º Acumular, elaborar y difundir el saber y toda forma de cultura, en especial la de carácter autóctono, para la conformación espiritual del pueblo;
- 4º Estimular el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales;
- 5º Preparar para el ejercicio de las profesiones liberales, de acuerdo con las necesidades de la Nación, los adelantos técnicos mundiales y las transformaciones sociales, otorgando los títulos habilitantes con carácter exclusivo;
- 6º Crear un cuerpo docente dedicado exclusivamente a la vida científica y a la enseñanza universitaria, de suerte que cada escuela y cada facultad tengan la obligación de formar sus propios profesores e investigadores especializados;
- 7º Ofrecer una educación informativa y formativa, disciplinando el esfuerzo autodidáctico, el espíritu indagativo y las cualidades que habilitan para actuar con idoneidad, patriotismo y dignidad moral, en la profesión y en la vida pública y privada;
- 8º Correlacionar las formas del saber propendiendo a la cultura general de la juventud como base o complemento de la especial o técnica;
- 9º Propiciar y establecer la enseñanza práctica y la docencia libre, paralela a los cursos regulares, la que podrá extenderse a disciplinas no previstas en los planes de estudio. Estos cursos comprenderán además de las asignaturas obligatorias, otras optativas o libres;
10. Establecer una permanente vinculación entre ellas y con otras instituciones culturales argentinas y extranjeras;

Ley 13.031

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

11. Elaborar, conforme a las exigencias científicas y sociales, los planes de estudio de las respectivas facultades, escuelas y cursos especiales, en lo universitario y en los de especialización, procurando que exista la mayor unidad y coordinación entre los planes de estudios similares, sin perjuicio de la diversificación impuesta por las características regionales;
12. Crear y sostener institutos de investigación, cursos de perfeccionamiento o de especialización, para profundizar el estudio o aprovechamiento de las riquezas naturales de la zona del país donde tuviera su centro de acción cada universidad;
13. Reunir antecedentes y proponer soluciones para los diversos problemas económicos sociales de la Nación;
14. Divulgar las investigaciones científicas, fueren o no sus autores profesores universitarios y aunque no hubieran sido realizadas en instituciones oficiales;
15. Fomentar el desarrollo de publicaciones y actividades dedicadas al examen de cuestiones científicas, sociales, jurídicas, económicas, literarias y artísticas en general.

Art. 2º— Todos los planes de enseñanza comprenderán, además de sus materias específicas, cursos dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución.

Art. 3º— Ninguna institución pública o privada podrá usar la expresión «universidad», o sus derivadas, en su denominación o en los títulos que expida, salvo ley especial.

Art. 4º— El territorio nacional se dividirá en regiones universitarias, dentro de las cuales ejercerá jurisdicción la respectiva universidad. Corresponde a cada una de ellas organizar dentro de su zona de influencia los estudios regionales y promover las artes técnicas y aplicadas con vistas a la explotación de sus riquezas y al incremento de las actividades económicas locales.

Art. 7º— Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación compete al rector, quien podrá delegarla y otorgar, en su caso, los poderes necesarios.

Art. 3º — (Personería jurídica.) Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación

Art. 3º — Ninguna institución pública o privada podrá otorgar sin ley especial que lo autorice, títulos, grados u honores que puedan ser confundidos con los universitarios.

competé al rector, quien podrá delegarla y otorgar, en su caso, los poderes necesarios.

Art. 4º — (Funciones específicas.) Las universidades no deberán desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y alumnos no deben actuar directa, ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en transgresión de ello, de suspensión, cesantía, exoneración o expulsión según el caso. Esto no impide la actuación individual por la vía legítima de los partidos políticos, pero, en ese caso, actuarán como simples ciudadanos y no en función universitaria.

Art. 5º — (Integración.) Integran las universidades:

- a) Las facultades, sus escuelas y respectivas cátedras, departamentos, seminarios, institutos y secciones destinadas a la enseñanza teórica-práctica;
- b) Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria y los que se incorporaren posteriormente bajo la misma dependencia;
- c) Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales, que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad respectiva.

Art. 6º — (Cátedras.) La cátedra es la unidad docente básica de la universidad. Estará bajo la dirección del catedrático, de quien dependerá el personal auxiliar, encargado de transmitir los conocimientos para la formación de técnicos y profesionales de las carreras universitarias.

Las cátedras que alcancen un alto grado de evolución y perfeccionamiento en la técnica de la investigación científica, que cuenten con materiales y personal idóneo para esas tareas y que produzcan trabajos originales o trascendentes, podrán ser transformadas en institutos.

Art. 7º — (Institutos.) El instituto es la unidad universitaria para la investigación científica. El catedrático que se encuentre al frente del instituto ascenderá a la categoría de director del mismo. La

Art. 5º — Integran las universidades:

- 1º Las facultades y escuelas, con los organismos que establezcan sus reglamentaciones;
- 2º Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria y los que se incorporen posteriormente bajo la misma dependencia;
- 3º Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales, que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad competente.

Ley 13.031

universidad propenderá a que sus institutos cortelacionen la enseñanza y la investigación científica de modo tal que la docencia universitaria tenga su fuente natural en la investigación directa y profunda de la realidad.

Art. 8º.—(Departamento.) El departamento es la unidad de coordinación de las investigaciones científicas sobre una misma materia. La agrupación funcional de institutos, cátedras y centros de investigación afines, al margen de las respectivas actividades docentes constituye un departamento. Será dirigido por un jefe designado por rotación periódica entre los directores de institutos o catedráticos integrantes del departamento. Los institutos, cátedras o centros de investigación, que reunidos formen un departamento, pueden pertenecer a la misma o a distintas facultades e inclusive tener su sede en otras universidades. La organización departamental es optativa de cada universidad o facultad.

CAPÍTULO II

Del gobierno de la universidad

Art. 9º.—El gobierno de la universidad estará a cargo del rector y del Consejo Universitario.

A) Del rector

Art. 10.—(Designación). El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en funciones.

Art. 11.—(Requisitos). Para ser rector se requiere: ser ciudadano argentino, haber cumplido 30 años de edad y 10 años de diplomado; poseer el título máximo de la facultad nacional correspondiente o ser profesor titular o adjunto confirmado.

Art. 12.—(Deberes y atribuciones). Sin perjuicio de las demás funciones que le impone y otorga la presente ley y las que le asignen otras disposiciones legales, el rector tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- 1º Representar legalmente a la universidad;
- 2º Designar las personas que llevarán la representación oficial de la universidad;

CAPÍTULO II

Del gobierno de la universidad

Art. 8º.—El gobierno de cada universidad será ejercido por un rector y un Consejo Universitario.

Del rector

Art. 9º.—El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en sus funciones.

Art. 10.—Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario y 30 años de edad.

Art. 10.—Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino nativo y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario y tener treinta años de edad.

Art. 11.—Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuye la presente ley y las que le fijen otras disposiciones legales, el rector tendrá las siguientes:

- 1º Representar legalmente a la universidad;
- 2º Designar las personas que llevarán la representación oficial de la universidad;
- 3º Designar y remover al secretario y prosecretario de la universidad, que deberán tener título universitario;

Ley 13.031

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

- 3º Convocar al Consejo Universitario a reuniones ordinarias y extraordinarias, expresando en la convocatoria los asuntos a tratarse;
- 4º Firmar los títulos, diplomas, distinciones y honores universitarios;
- 5º Proponer a los consejos directivos de las facultades las ternas para la designación de decano de las mismas;
- 6º Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al Consejo Universitario o a las autoridades de las facultades;
- 7º Dirigir la administración de la universidad, pudiendo recabar de las facultades y demás institutos de la universidad los informes que estime convenientes;
- 8º Vigilar la contabilidad de la universidad y tener depositados a su orden los fondos universitarios;
- 9º Decretar por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la universidad y autorizar los demás que el consejo ordene;
10. Nombrar y remover el personal de la universidad, cuya designación y remoción no corresponda al Consejo Universitario o a las facultades de acuerdo con el artículo 123 de la ley 12.961 y su reglamentación;
11. Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la universidad, dando cuenta de ello al Consejo Universitario;
12. Ejercer la jurisdicción policial y la disciplina en primera instancia, en el asiento del rectorado y del consejo;
13. Conceder las licencias o permisos en los casos señalados por las reglamentaciones pertinentes;
14. Publicar durante el primer trimestre de cada año, una memoria que consigne la tarea docente y la gestión administrativa realizada en el período anterior.

Art. 13. — (Voto del rector). El rector tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 14. — (Incompatibilidad). El cargo de rector es incompatible con cualquier otra actividad pública excepto la docencia en la misma universidad, o la de conferenciante, investigador, autor o miembro de academia, institución, sociedad o comisión científica, jurídica, social, literaria o cultural.

- 4º Convocar al Consejo Universitario a reuniones ordinarias y extraordinarias;
- 5º Firmar los títulos, diplomas y distinciones universitarias;
- 6º Designar los decanos de las facultades;
- 7º Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al Consejo Universitario o a las autoridades de las facultades;
- 8º Dirigir la administración general de la universidad, pudiendo recabar de las facultades y demás organismos universitarios los informes que estime convenientes;

- 9º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional. Proponer al Poder Ejecutivo, para su confirmación, el personal administrativo que hubiere nombrado;
10. Adoptar las medidas urgentes para el buen gobierno de la universidad, dando cuenta de ello al Consejo Universitario;
11. Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el asiento del rectorado y del consejo;
12. Conceder las licencias en los casos señalados por las reglamentaciones pertinentes;
13. Publicar, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria que consigne la tarea docente y la gestión administrativa realizada, dando cuenta al Consejo Universitario.

Art. 12. — El rector tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

9º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional de cada cátedra;

Art. 15. — (Retribución). El rector recibirá como única retribución, la cantidad de cuatro mil pesos moneda nacional mensuales. En el caso de ser profesor, percibirá únicamente el sueldo de rector.

B) Del vicerrector

Art. 16. — (Funciones, requisitos y retribución). El vicerrector ejercerá las funciones del rector en ausencia, renuncia o impedimento de éste, o las que el mismo, expresamente y mediante la oportuna comunicación, le delegare. Para ser elegido vicerrector se requerirán las mismas condiciones que para ser rector. Percibirá para gastos de representación, la suma de quinientos pesos mensuales.

Del vicerrector

Art. 13. — El vicerrector ejercerá las funciones del rector:

- a) En caso de ausencia o impedimento;
- b) Cuando por cualquier causa el cargo quedare vacante;
- c) Cuando le fueren delegadas.

Para el caso de ausencia o impedimento del rector y vicerrector, o de vacancia, se hará cargo del rectorado el consejero de mayor edad, quien deberá dar cuenta de ello al Poder Ejecutivo.

C) Del Consejo Universitario

Art. 17. — (Constitución). El Consejo Universitario estará constituido por el rector, que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.

Art. 18. — (Atribuciones). El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le acuerdan en esta ley:

- 1º Ejercer la jurisdicción superior universitaria y resolver en última instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado el rector o las facultades, con excepción de aquellas atribuidas expresamente por esta ley a las facultades;
- 2º Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas facultades;
- 3º Dictar los reglamentos convenientes para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios;

4º Aprobar los planes de estudio a propuesta de las respectivas facultades;

5º Acordar por iniciativa propia o a propuesta de las facultades el título de doctor honoris causa, o de miembro honorario de la universidad, a las personas que sobresalieren por sus obras, estudios o trabajos de investigación;

Del Consejo Universitario

Art. 14. — El Consejo Universitario estará constituido por el rector, que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.

Art. 15. — El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le acuerdan en esta ley:

- 3º Ejercer la jurisdicción superior universitaria y resolver en última instancia universitaria las cuestiones contenciosas que hayan fallado el rector o las facultades;

9º Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas facultades;

17. Dictar los reglamentos para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios, con sujeción a las normas que dicte el Consejo Nacional Universitario.

11. Aprobar los planes de estudio y los reglamentos que dicte cada facultad sobre sus respectivas carreras;

12. Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, el título de doctor honoris causa, o de miembro honorario de la universidad, a las personas que sobresalieren por su obra, o por su labor científica, literaria o artística;

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

- 6º Decidir en última instancia las cuestiones sobre validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias que hubieran sido resueltas por los consejos de las facultades;
- 7º Acordar por iniciativa propia o a propuesta de las facultades la creación de nuevas escuelas e institutos;
- 8º Proyectar el presupuesto anual y aprobar las cuentas presentadas por el rector, y la inversión de los fondos asignados a la universidad, las facultades y demás establecimientos universitarios;
- 9º Resolver lo conducente al ejercicio de la personería jurídica de la universidad;
10. Dictar su reglamento interno y las ordenanzas necesarias para la buena marcha de la institución;
11. Aprobar o devolver observadas a las facultades las ternas formuladas por éstas para la provisión de cátedras titulares, así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para la designación de profesores adjuntos, extraordinarios y honorarios. El consejo universitario sólo tiene facultades para considerar el aspecto formal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca el orden de los nombres ni la competencia científica y didáctica que son privativos de cada facultad; durará tres años en funciones;
12. Elegir un vicerrector entre sus miembros, que durará tres años en funciones;
13. Fijar las épocas de inscripción y los aranceles universitarios, estos últimos ad referendum del Poder Ejecutivo;
14. Aceptar las herencias con beneficio de inventario, y los legados o donaciones que se den o hagan a las universidades o a las facultades o establecimientos que las integren;
15. Vender, con autorización del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles, títulos y valores pertenecientes a la universidad;
16. Modificar a propuesta de las facultades, las escuelas que las integren y sus títulos universitarios, como asimismo fijar por su sola decisión las proporciones en que éstas estarán representadas en los consejos directivos;
- 5º Decidir en última instancia las cuestiones sobre validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias, que hubieran sido resueltas por los consejos de las facultades;
10. Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, la creación de nuevas escuelas o institutos;
14. Aprobar el presupuesto general de la universidad y tomar conocimiento de la inversión de los fondos asignados a la misma;
- 7º Resolver lo conducente al ejercicio de la personería jurídica de la universidad;
- 2º Dictar su reglamento interno y las ordenanzas que requiera el funcionamiento de la universidad;
- 8º Aprobar o devolver observadas a las facultades las ternas formuladas por éstas para la designación de profesores titulares así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para el nombramiento de profesores adjuntos extraordinarios y honorarios. El consejo universitario sólo tiene facultad para considerar el aspecto formal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca el orden de los nombres ni la competencia científica y didáctica, que son privativos de cada facultad;
- 1º Elegir un vicerrector entre sus miembros, que durará tres años en funciones;
16. Aceptar las herencias con beneficio de inventario, y los legados o donaciones que se den o hagan a las universidades o a las facultades o establecimientos que las integren;
15. Vender, con autorización del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles, títulos y valores pertenecientes a la universidad;
- 4º Resolver la intervención de las facultades, cuando su funcionamiento no se ajuste a la presente ley;
13. Fijar la fecha de iniciación y terminación del curso lectivo y duración de las vacaciones;
14. Aprobar el proyecto de presupuesto general de la universidad y tomar conocimiento de la inversión de los fondos asignados a la misma;

17. Revalidar los diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales previo estudio, en cada caso, del valor científico y jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas y consideración que merecen sus títulos;
18. Ejercer las facultades disciplinarias que determina esta ley y los reglamentos que se dictaren;
19. Reglamentar, a propuesta de las facultades, las incompatibilidades para el ejercicio del cargo de profesor, según se exija o no dedicación exclusiva;
20. Aprobar las reglamentaciones que dicte cada facultad sobre sus respectivas carreras docentes o científicas.

D) De la Secretaría General de la Universidad

Art. 19. — (Designaciones.) La Secretaría General de la Universidad estará a cargo de un secretario y un prosecretario designado por el rector, que deberán tener título universitario nacional. Las funciones permanentes del secretario y del prosecretario, además de las consignadas en esta ley, serán las que se establezcan en la reglamentación correspondiente.

Art. 20. — (Atribuciones.) El secretario general deberá actuar en las sesiones del consejo universitario y llevar un libro de actas de las mismas; refrendará, además, todas las resoluciones del consejo universitario y del rector.

Art. 21. — (Atribuciones.) El prosecretario general deberá actuar como secretario en las comisiones del consejo universitario; tendrá a su cargo el despacho de los institutos y establecimientos dependientes del consejo universitario y refrendará todas las resoluciones del rector, dictadas para esas dependencias.

TITULO II

De las facultades

Art. 22. — (Gobierno.) El gobierno de la facultad estará a cargo del decano y un consejo directivo, que se constituirá por el decano y diez consejeros, que se

TITULO II

De las facultades

Del gobierno de las facultades

Art. 16. — El gobierno de cada facultad será ejercido por un decano y un consejo directivo, los que durarán tres años en sus funciones.

6º Revalidar, habilitar y reconocer los diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada caso, de la jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas;

6º Revalidar, habilitar y reconocer los títulos o diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada caso, de la jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas. Será condición indispensable para el ejercicio de las actividades profesionales el cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente;

designarán de entre los profesores de la respectiva facultad.

Art. 23. — (Duración). El decano y los consejeros durarán tres años en sus funciones no pudiendo estos últimos ser reelegidos, sino con intervalo de un período.

A) Del consejo directivo y de la elección de decano

Art. 24. — (Proporciones.) Cuando una facultad esté formada por más de una escuela, el consejo universitario fijará la proporción de consejeros con que cada una de ellas estará representada en el mismo.

Art. 25. — (Voto secreto.) La elección de los consejeros se efectuará en comicios de profesores, quienes votarán personalmente, en forma secreta, las listas de candidatos que los electores depositarán en dos urnas distintas; una reservada a los profesores titulares, que votarán, de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutes; y otra, para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros y otro número igual de substitutes.

Los consejeros que dejen de ser profesores, cesarán inmediatamente en el ejercicio de este cargo.

Art. 26. — (Escrutinio y proclamación.) El escrutinio y proclamación de los candidatos elegidos los harán el decano, el vicedecano y el consejero titular de más edad.

Art. 27. — (Elección de decano.) Los consejeros elegidos se reunirán bajo la presidencia del de mayor edad que sea profesor titular y elegirán, a su vez, por el voto de la mayoría, decano de la terna enviada por el rector de la universidad. Si la elección recaerá en un profesor (titular o adjunto) que no formara parte del consejo, quedará eliminado de hecho el consejero (profesor titular o adjunto, según sea la categoría del electo) que al ser elegido obtuvo menor número de votos. Si dos o más se encontrasen en estas condiciones, la eliminación se hará por sorteo, manteniendo siempre la proporción señalada en el artículo 25.

Art. 28. — (Consejeros substitutes.) Las vacantes de consejeros titulares que se produzcan antes de la fecha de renovación, serán llenadas por sorteo, que se realizará entre los con-

Del consejo directivo y de la designación de decano

Art. 19. — Para aquellas facultades que no estén en condiciones de ajustarse a las proporciones indicadas en el artículo precedente, el Consejo Universitario determinará las que hagan posible la constitución del consejo directivo y establecerá el quórum para sus reuniones.

Art. 18. — El consejo directivo se integrará con el decano y once consejeros.

La elección de consejeros se efectuará en comicios de profesores, quienes votarán personalmente, en forma secreta, las listas de candidatos que depositarán en dos urnas distintas; una reservada para los profesores titulares, que votarán de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutes; y otra para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros titulares y otro número igual de substitutes.

Los consejeros que dejen de ser profesores, cesarán inmediatamente en el ejercicio del cargo.

Art. 20. — El escrutinio y proclamación de los candidatos elegidos serán hechos por el decano, asistido por el vicedecano y el consejero titular de más edad.

Art. 21. — El decano será designado por el rector. En caso de que el nombramiento del decano recaiga en uno de los consejeros, el consejo directivo será integrado por el consejero substituto que corresponda a la categoría del profesor designado decano.

Art. 22. — Las vacantes de consejeros titulares que se produzcan antes de la fecha de renovación, serán llenadas por sorteo, que se realizará entre los con-

se realizará entre los consejeros substitutes de titulares o de adjuntos, según sea la vacante producida y manteniendo la representación de las escuelas.

Art. 29. — (Desintegración y acefalía.) Si por sucesivas vacantes o ausencias quedara agotado el número de consejeros substitutes, el consejo directivo —aun en minoría— designará de entre los profesores, según sea la vacante, el que deba llenarla para completar el período.

Art. 30. — (Quórum.) Las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de siete consejeros, y sólo podrán ser presenciadas por los profesores, por periodistas y por no más de quince estudiantes de la misma facultad, de acuerdo a la reglamentación que dicte oportunamente cada una de ellas. Las sesiones serán secretas, cuando así lo resuelva el consejo o el decano, en casos de excepción.

Art. 31. — (Consejos departamentales.) En aquellas facultades constituidas por departamentos, el consejo estará integrado por un representante de cada uno de ellos, sin exceder el número indicado en el artículo 24 y manteniéndose la proporción de dos tercios de titulares y un tercio de adjuntos, en la misma forma que lo establece el artículo 25.

Art. 32. — (Atribuciones.) El consejo directivo tendrá las siguientes atribuciones:

1ª Designar decano de entre la terna presentada por el rector;

2ª Designar vicedecano de entre sus miembros;

3ª Confeccionar y modificar los planes de estudios de las carreras o cursos especiales, aprobándolos en primera instancia y establecer, en cada caso, con la aprobación del consejo universitario, cuáles deben ser las cátedras que exijan de los profesores titulares una consagración exclusiva;

4ª Proponer y aprobar la creación de institutos o cursos de investigación;

5ª Organizar las actividades que para el fomento de la cultura en general, sean atinentes a cada facultad;

6ª Proponer al consejo universitario, por resolución adoptada por dos tercios de votos, la de-

sejeros substitutes de titulares o de adjuntos, según sea la vacante producida y manteniendo la representación de las escuelas.

Art. 23. — Si por sucesivas vacantes o ausencias quedara agotado el número de consejeros substitutes, el consejo directivo —aun en minoría— designará de entre los profesores, según sea la vacante, el que deba llenarla para completar el período.

Art. 24. — Las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de siete consejeros.

Art. 25. — El consejo directivo tendrá las siguientes atribuciones:

1º Designar vicedecano entre sus miembros;

5º Confeccionar y modificar los planes de estudios de las carreras o cursos especiales, aprobándolos en primera instancia;

4º Proponer al consejo universitario la creación, modificación o supresión de escuelas, como también la proporción en que estarán representadas en el consejo directivo, y la creación de institutos o cursos de investigación y para graduados;

7º Organizar las actividades de extensión universitaria atinentes a cada facultad;

signación de profesor titular en cátedra vacante, al profesor titular de la misma materia o materia afín, de otra universidad del país; como asimismo proponer a la universidad la designación de los profesores extraordinarios en la respectiva facultad;

- 7ª Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas necesarias para la buena marcha de la enseñanza o de la investigación científica;
- 8ª Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción y cumplimiento de los deberes de los profesores, y en única instancia las cuestiones que se susciten en la aplicación del inciso 10;
- 9ª Elevar al gobierno de la universidad, de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley, las ternas de profesores titulares propuestos por las comisiones asesoras y designar los profesores de las demás categorías;
10. Apercebir y suspender a los profesores por faltas en el cumplimiento de sus deberes;
11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los profesores titulares o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones;
12. Proyectar el presupuesto de la facultad.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

- 2º Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas que requiera su funcionamiento;
- 6º Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción, de acuerdo con lo que reglamente en general el Consejo Nacional Universitario;
- 9º Elevar al rectorado de la universidad las ternas de profesores titulares y designar los profesores adjuntos y honorarios;
10. Ejercer, con respecto a los profesores, la potestad disciplinaria con arreglo a la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;
11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los titulares o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones;
12. Proyectar el presupuesto de la facultad;
- 3º Proponer al consejo universitario la adopción de la estructura departamental en el orden docente de la facultad;
- 8º Establecer, en cada caso, con la aprobación del consejo universitario, el régimen de consagración exclusiva a la enseñanza;
13. Organizar la distribución o venta de publicaciones y productos.

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

- 9º Elevar al rectorado de la universidad las ternas de profesores titulares y designar los profesores adjuntos y honorarios, y proponer al Consejo Universitario los profesores extraordinarios;
11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los titulares o elevar sus renunciaciones.
Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones, con aprobación del Consejo Universitario;

Suprimido.

Art. 26. — Los miembros titulares del consejo directivo no podrán desempeñar empleos rentados dependientes de la universidad, con excepción de los cargos directivos y docentes. Tampoco podrán ser nombrados para cátedras, dirección, empleo o comisión rentada creados durante su mandato, hasta después de dos años de fenecido éste. Los aspirantes a

Ley 13.031

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

Art. 33.—(Incompatibilidades.) Los miembros titulares del consejo directivo no podrán desempeñar empleos rentados dependientes de la universidad, con excepción de los cargos directivos y docentes. Tampoco podrán ser nombrados para cátedras, dirección, empleo o comisión rentada creados durante su mandato, hasta después de dos años de fenecido éste. Los aspirantes a cátedras ya existentes podrán presentarse al concurso, previa renuncia como miembros del consejo directivo.

B) Del decano

Del decano

Art. 34.—(Requisitos.) Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino, haber cumplido treinta años de edad y ser profesor titular, honorario, o adjunto confirmado, de la respectiva facultad.

Art. 35.—(Duración.) El decano durará tres años en su cargo, y en caso de separación, renuncia o muerte, el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare para completar el período.

Art. 36.—(Voto del decano.) El decano tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 37.—(Gastos de representación.) El decano percibirá como gasto de representación la suma de mil pesos moneda nacional mensuales.

Art. 38.—(Facultades.) Son atribuciones y deberes del decano:

- 1º Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo;
- 2º Representar a la facultad en sus relaciones con las demás autoridades universitarias y corporaciones científicas;
- 3º Firmar, juntamente con el rector, los diplomas universitarios y certificados de reválida;
- 4º Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la falta de asistencia de los profesores a las aulas, de las pruebas de promoción y elevar al rector una relación de las mismas;
- 5º Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, de los consejos universitario y directivo;

Art. 27.—Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino, y ser profesor titular o adjunto confirmado en la respectiva facultad.

Art. 17.—Cuando el cargo de decano quedare vacante el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare para completar el período.

Art. 28.—El decano tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 29.—El decano tendrá las siguientes funciones:

- 1º Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo;
- 2º Representar a la facultad;
- 3º Firmar, juntamente con el rector, los diplomas universitarios;
- 4º Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la asistencia de los profesores;
- 5º Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los consejos universitario y directivo y del rector;

Art. 27.—Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino nativo, y ser profesor titular o adjunto confirmado en la respectiva facultad.

3º Firmar, juntamente con el rector, los títulos o diplomas universitarios;

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

6º Expedir concesiones de ingreso, permisos y certificados de promoción, con arreglo a las ordenanzas del consejo universitario y del consejo directivo;

7º Acordar a los profesores licencias que no excedan de 45 días y nombrar y separar por sí a los empleados cuya designación no corresponda al consejo directivo;

8º Ejercer la vigilancia de la enseñanza y de la administración y la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la facultad;

9º Designar el secretario de la facultad, el que tendrá que ser egresado de la misma;

10. Rendir cuenta de la inversión de fondos;

11. Fijar las épocas de examen, número de turnos y orden de los mismos;

12. Despachar definitivamente todos los asuntos de trámite, con el simple dictamen de la comisión respectiva del consejo directivo, salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto será tratado por el propio consejo.

Art. 39. — (Incompatibilidades). El decano tendrá las mismas incompatibilidades que el rector.

C) Del vicedecano

Art. 40. — (Duración y funciones). El vicedecano durará tres años en funciones. El vicedecano durante la ausencia o impedimento de éste, o las que el mismo expresamente y mediante la oportuna comunicación le delegare. En caso de vacancia del vicedecano, el consejo que lo substituya completará el período.

Art. 41. — En caso de ausencia, renuncia o fallecimiento del vicedecano en ejercicio del decanato, asumirá las funciones de vicedecano interino el consejo profesor titular de mayor antigüedad.

6º Autorizar el ingreso de alumnos y expedir certificados de promoción, con arreglo a las ordenanzas y reglamentos correspondientes;

7º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional. Proponer al Poder Ejecutivo, por conducto del rector, para su confirmación, el personal administrativo que hubiere nombrado;

8º Acordar a los profesores licencias, de conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;

9º Ejercer la vigilancia de la enseñanza, y la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la facultad;

11. Designar y remover al secretario de la facultad, el que deberá ser egresado universitario;

10. Dirigir la administración de la facultad y rendir cuenta de la inversión de los fondos;

12. Fijar las fechas de examen, número de turnos y orden de los mismos;

13. Despachar los asuntos de trámite, con el simple dictamen de la comisión respectiva del consejo directivo, salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto será tratado por el consejo.

Del vicedecano

Art. 30. — El vicedecano durará tres años en funciones. Ejercerá las del decano durante la ausencia o impedimento de éste, o las que el mismo le delegare. En caso de vacancia del vicedecano, el consejo que se haga cargo del mismo, completará el período.

Art. 31. — En caso de ausencia, impedimento, renuncia o fallecimiento del vicedecano en ejercicio del decanato, asumirá las funciones de vicedecano interino el consejo profesor titular de mayor antigüedad en la cátedra.

7º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional de cada cátedra;

Disposiciones complementarias y transitorias

TITULO III

De los profesores

TITULO III

De los profesores

Disposiciones generales

Art. 42.— (Categorías de profesores.) Las universidades tendrán cuatro categorías de profesores: titulares, adjuntos, extraordinarios y honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorías.

Art. 43.— (Equivalencias.) Si por los estatutos de algunas universidades, reglamentarios de la ley 1.597, se hubiera adoptado otra nomenclatura y concepto respecto de las categorías de profesores, las facultades establecerán las adaptaciones y equivalencias correspondientes, de acuerdo con la presente ley.

A) Profesores titulares

Art. 44.— (Autonomía de la cátedra.) Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teórica y el desempeño autonómico de la cátedra, bajo su exclusiva responsabilidad.

Art. 45.— (Requisitos.) Para ser designado profesor titular se requiere ser ciudadano argentino y poseer el título o diploma universitario.

Art. 46.— (Concurso.) Los profesores titulares serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo concurso de méritos, aptitudes técnicas, títulos, antecedentes y trabajos.

Art. 47.— (Dedicación.) El profesor titular está obligado a dedicar el máximo de su tiempo a las tareas de investigación y docencia. No podrá defender intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, salvo los casos de defensa de intereses personales del profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes, siendo pasibles, si lo hicieren, de suspensión, cesantía o exoneración.

Art. 32.— Las universidades tendrán cuatro categorías de profesores: titulares, adjuntos, extraordinarios y honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorías.

De los profesores titulares

Art. 36.— Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teórica y el desempeño autonómico de la cátedra.

Art. 37.— Los profesores titulares serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo concurso de méritos, aptitudes técnicas y pedagógicas, títulos, antecedentes y trabajos.

* Art. 33.— El profesor universitario, sea titular o adjunto, no podrá acumular más de uno de estos cargos en la misma facultad, ni en otras facultades y universidades. Son incompatibles, por lo tanto, los cargos de profesor titular con el de adjunto, o los de profesor adjunto en más de una asignatura, en la misma o en distintas facultades o universidades. No podrán los profesores prestar sus servicios profesionales en favor de intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, salvo los casos de defensa de intereses

(*) Este artículo coincide también con el 60 de la ley 13.031.

* Art. 47 (bis). — (Simultaneidad de funciones.) El profesor titular no podrá desempeñar simultáneamente la función docente y la de cualquier otra actividad pública.

1) De la formación de las ternas

Art. 48. — (Comisión asesora). El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión asesora compuesta por tres miembros sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares de la misma materia, si los hubiere, y de las materias afines a la cátedra, de la misma facultad o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquélla.

El orden de afinidad entre las materias se establecerá con carácter permanente por las facultades al aprobar los respectivos planes de estudio.

Art. 49. — (Elevación de la terna). La comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos, títulos, antecedentes y trabajos, la que quedará sujeta a las siguientes condiciones:

- a) El consejo directivo de la facultad podrá observar el aspecto formal de las ternas, variar su orden o integrarlas en forma distinta a la propuesta por la comisión asesora, requiriéndose para esto último dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros;
- b) La terna será elevada a la universidad, que juzgará sobre los aspectos formales del curso. En caso de que el consejo directivo hubiere modificado el dictamen de la comisión asesora, elevará un informe fundado al Consejo Universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la terna;
- c) La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo juntamente con los siguientes antecedentes:

personales del profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes, siendo pasible, si lo hiciere, de suspensión, cesantía o exoneración.

Art. 39. — El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión asesora compuesta por tres miembros, sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares, de la misma materia si los hubiere, y de las materias afines a la cátedra, de la misma facultad y/o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquélla.

El orden de afinidad entre las materias se establecerá con carácter permanente por las facultades al aprobar los respectivos planes de estudios.

Art. 40. — La comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos, títulos, antecedentes y trabajos, la que quedará sujeta a las siguientes condiciones:

- 1º El consejo directivo de la facultad podrá observar el aspecto formal de las ternas, variar su orden o integrarlas en forma distinta a la propuesta por la comisión asesora, requiriéndose para esto último dos tercios de votos de los miembros presentes;
- 2º La terna será elevada a la universidad, que juzgará sobre los aspectos formales del curso. En caso de que el consejo directivo hubiere modificado el dictamen de la comisión asesora, elevará un informe fundado al Consejo Universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la terna;
- 3º La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo juntamente con todos los antecedentes del concurso.

(*) Vetado por el Poder Ejecutivo. (Decreto 31.521/47.)

- 1º El dictamen de la comisión asesora;
- 2º Títulos universitarios de los candidatos, indicando los institutos que los hayan expedido y fecha de su otorgamiento;
- 3º Obras y publicaciones de aquéllos, consignándose, en primer término, las relativas a la materia del concurso.
- 4º Datos de la libreta de enrolamiento y del servicio militar;
- 5º Empleos y cargos que desempeñen o hayan desempeñado en la administración nacional, provincial o comunal, y, en su caso, las jubilaciones de que gocen;
- 6º Copia autorizada de las actas de las sesiones del consejo directivo y del Consejo Universitario, en que se hubiere tratado la terna.

Art. 50. — (Requisitos para figurar en terna). Para figurar en terna se requieren antecedentes morales inobjetables, ser egresado con cinco años por lo menos de antelación, poseer diploma universitario nacional y haber acreditado aptitudes docentes y trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella. El título de profesor adjunto se tendrá en cuenta en forma preferente al configurar la terna. La actividad científica y docente del candidato deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y cursos que se estimarán no sólo por el número, sino también y en primer término, por el mérito intrínseco. A los concursantes que no fueran profesores adjuntos, la respectiva facultad podrá exigirles una prueba complementaria.

Art. 51. — (Formación de la terna). Las ternas para profesor titular deberán formarse previo dictamen escrito y fundado de la comisión asesora del consejo directivo.

Art. 52. — (Inscripción extraordinaria). Hasta diez días después de cerrado el concurso, podrá proponerse al consejo directivo, por cuatro consejeros y con la

Art. 41. — Para ser admitido al concurso se requiere ser ciudadano argentino, poseer antecedentes morales inobjetables, poseer diploma universitario nacional con cinco años por lo menos de antelación y haber acreditado aptitudes docentes o trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella.

Art. 42 (Segundo párrafo). — Para configurar la terna se tendrá en cuenta en forma preferente, el cargo de profesor adjunto, en caso de igualdad de antecedentes. A los concursantes que no fueran profesores adjuntos, el consejo directivo podrá exigirles una prueba complementaria. La actividad científica y docente del candidato deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y cursos que se estimarán no sólo por el número, sino también y en primer término, por el mérito intrínseco.

Art. 42. — Las ternas para profesor titular deberán formarse previo dictamen escrito y fundado de la comisión asesora del consejo directivo.

Art. 43. — Cuando se haya declarado desierto un llamado a concurso por no haberse podido integrar la terna se procederá a un segundo llamado. En caso de repetirse la situación anterior el consejo directivo deberá dictaminar sin el requisito de la terna.

Art. 41. — Para ser admitido al concurso se requiere ser ciudadano argentino, poseer antecedentes morales inobjetables, poseer título o diploma universitario nacional con cinco años por lo menos de antelación y haber acreditado aptitudes docentes o trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella.

Ley 13.031

conformidad del interesado, la inscripción en el mismo de toda persona de relevante y notorio prestigio científico, en cuyo caso, para ser considerado por la comisión asesora, necesitará contar con la aprobación del consejo directivo por las dos terceras partes de sus votos.

Art. 53. — (Opción de los titulares). Los profesores titulares pueden presentarse a concurso para optar a otras cátedras afines, pero si obtuviesen la vacante están obligados a renunciar a la cátedra que hubieren estado dictando.

Art. 54. — (Plazo del llamado a concurso). Producida una vacante de profesor titular, se llamará a concurso dentro de un plazo no mayor de tres meses, poniéndose, interinamente, la cátedra a cargo de un profesor adjunto correspondiente a la misma materia y, a falta de éste, podrá designarse otro profesor de materias afines.

Art. 55. — (Prórrogas del ejercicio de la cátedra). El consejo directivo de cada facultad podrá, anualmente, autorizar por dos tercios de sus votos, a continuar en el ejercicio de la cátedra titular y hasta tres veces consecutivas a los profesores que estuvieren en condiciones de obtener su jubilación ordinaria.

Art. 56. — (Separación de profesores). Podrán los consejos directivos promover a la separación de los profesores, por las siguientes causas:

- 1º Condena criminal que no sea por hecho culposo;
- 2º Abandono de las funciones del cargo;
- 3º Violación de las disposiciones del artículo 47.

2) Atribuciones y deberes de los profesores titulares

Art. 57. — Son deberes y atribuciones de los profesores titulares:

- 1º Dictar el curso con arreglo a los programas y horarios oficiales;
- 2º Presentar anualmente su programa y proponer el plan de distribución de la enseñanza teórica.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

Art. 44. — Los profesores titulares pueden presentarse a concurso para optar a otra cátedra, pero si la obtuviesen estarán obligados a renunciar a la cátedra que hubieren estado dictando. Los profesores adjuntos se considerarán presentados automáticamente a los concursos de las cátedras titulares cuya adjuntía ejercen, salvo manifestación expresa en contrario.

Art. 38. — Producida una vacante de profesor titular, se llamará a concurso dentro de un plazo no mayor de tres meses, poniéndose interinamente la cátedra a cargo de un profesor adjunto correspondiente a la misma materia y, a falta de éste, podrá designarse otro profesor de materia afín.

Art. 35. — Los profesores podrán ser separados por las siguientes causas:

- 1º Condena criminal, que no sea por hecho culposo;
- 2º Abandono de sus funciones o negligencia grave en el ejercicio de las mismas;
- 3º Inconducta manifiesta;
- 4º Incapacidad sobreviniente.

Art. 44. — Son funciones de los profesores titulares:

- 1º Conducir la enseñanza de la cátedra, a cuyo efecto deberán: a) Presentar anualmente al consejo directivo, para su aprobación, el programa de la materia; b) Distribuir la enseñanza.

Ley 13.031

ricoprática con los profesores adjuntos, según la reglamentación de cada facultad;

3º Formar parte de las mesas examinadoras;

4º Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza;

5º Participar en las elecciones de autoridades universitarias;

6º Colaborar en las publicaciones de la universidad y en las investigaciones de los institutos científicos;

7º Informar anualmente a la biblioteca, en colaboración con los profesores adjuntos, sobre el movimiento bibliográfico fundamental de su materia;

8º Informar al consejo directivo sobre toda novedad científica o docente;

9º A más de su labor docente sobre la materia que enseña, deberá realizar aquella otra que establezca, con sus alumnos y colegas, una relación de comprensión y convivencia que facilite, en todo momento, la creación y el sentimiento de una concepción social y humanista de las funciones universitarias;

10. Desempeñar las comisiones que la universidad o la facultad le encomienden.

Art. 58. — (Obligación de colaborar oficialmente). El profesor que optare por dedicar todo su tiempo a la universidad, estará obligado a prestar su dirección y asesoramiento técnico cuando fuera requerido por el Poder Ejecutivo.

Art. 59. — (Dedicación a una sola cátedra). En ningún caso se podrá desempeñar, por un mismo profesor titular, más de una cátedra.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

fianza con los profesores adjuntos; c) Formar parte de las mesas examinadoras; d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza que se les encomienden; e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos. Todo ello con arreglo a las reglamentaciones que se dicten;

4º Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que le fuere requerido por conducto del consejo directivo.

2º Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;

Ver artículo 44, 1º, e).

3º Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;

Ver artículo 44, 1º, d).

B) Profesores adjuntos

Art. 60. — (Funciones y designación.) Los profesores adjuntos deben colaborar en la enseñanza oficial, de acuerdo con la reglamentación de cada facultad. Los profesores adjuntos serán nombrados por concurso por el consejo directivo, con aprobación del Consejo Universitario. Podrá admitirse a los concursos para profesores adjuntos, aun cuando no hayan seguido la carrera docente, a aquellos candidatos de reconocida personalidad científica probada con trabajos o actuación docente. En tal caso se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.

Art. 61. — (Designación extraordinaria.) Podrá prescindirse del concurso, cuando el candidato goce de reconocida personalidad científica, probada con trabajos o actuación docente. En tal caso, se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad y aprobado por dos tercios de votos del consejo directivo.

Art. 62. — (Régimen de adjuntos.) Cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos, requerirán aprobación del Consejo Universitario.

Art. 63. — (Confirmación.) Cumplidos cuatro años de su designación el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta lo siguiente: su comportamiento ético y moral; haber dictado por lo menos dos cursos complementarios, según la reglamentación de cada facultad, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados, quedarán de hecho cesantes.

Art. 64. — (Deberes y atribuciones.) Son deberes y atribuciones del profesor adjunto:

- 1º Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

De los profesores adjuntos

Art. 46. — Los profesores adjuntos serán nombrados por concurso por el consejo directivo, con aprobación del Consejo Universitario, de acuerdo con la reglamentación pertinente.

Para ser admitido al concurso se requieren las mismas condiciones exigidas en el caso de los profesores titulares, salvo la antigüedad como egresado que se reduce a dos años. Podrá admitirse a los concursos para profesores adjuntos, aun cuando no hayan seguido la carrera docente, a aquellos candidatos de reconocida personalidad científica, probada con trabajos o actuación docente. En tal caso se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.

Art. 47. — Cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos, requerirán aprobación del Consejo Universitario.

Art. 48. — Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta lo siguiente: su comportamiento moral; haber dictado por lo menos dos cursos complementarios, según la reglamentación de cada facultad, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte la facultad.

Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados cesarán automáticamente en sus funciones.

Art. 49. — Son funciones de los profesores adjuntos:

- 1º Colaborar en las tareas de la cátedra, a cuyo efecto deberán;

Art. 47. — Cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra, el que no podrá exceder el total del equivalente a un promedio de dos por cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos, requerirán aprobación del Consejo Universitario.

Art. 49. — Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta: su comportamiento moral y docente, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte la facultad.

Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados cesarán automáticamente en sus funciones.

- 1º Colaborar en las tareas de la cátedra de acuerdo con la reglamentación que dicte la facultad, a cuyo efecto deberán;

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

- a) Participar en la enseñanza de acuerdo con la distribución que haga el profesor titular;
- b) Formar parte de las mesas examinadoras;
- c) Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;
- d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza, que se les encomienden;
- e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos. Todo ello con arreglo a las reglamentaciones que dicte la facultad.

- 2º Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;
- 3º Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;
- 4º Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que les fuere requerido por conducto del consejo directivo.

- 2º Dictar cursos complementarios o de otro orden, de acuerdo con la reglamentación de la respectiva facultad;
- 3º Formar parte de los tribunales de promoción y de los jurados y desempeñar las comisiones que las facultades creyeren necesario encomendarles;
- 4º Participar en las elecciones establecidas en esta ley.

Art. 65. — (Asistentes.) Se designarán, cada año, hasta dos profesores adjuntos para actuar como asistentes del profesor titular. El profesor titular turnará entre los profesores adjuntos la designación de los asistentes. Serán nombrados por el decano a propuesta del profesor titular y tendrán, además de las obligaciones inherentes a su carácter de adjuntos, las que reglamente cada facultad para su condición de docentes auxiliares de la cátedra titular.

C) Profesores extraordinarios

Art. 66. — (Designación.) El Consejo Universitario, a propuesta del consejo de la facultad, podrá designar profesores extraordinarios, con carácter de contratados, a personas de nacionalidad argentina o extranjera, de reconocida reputación en la materia de que se trate. El límite de duración, la remuneración y las funciones de los profesores extraordinarios, serán determinados en cada caso por la facultad respectiva al formular la propuesta.

Al profesor extraordinario no le son aplicables las incompatibilidades y demás disposiciones análogas establecidas para los titulares o adjuntos.

De los profesores extraordinarios

Art. 50. — El Consejo Universitario, a propuesta del consejo de la facultad, podrá solicitar al Poder Ejecutivo, la contratación de profesores extraordinarios por un plazo que no deberá exceder de cinco años. La remuneración y las funciones de los mismos serán determinados en cada caso por la facultad respectiva al formular la propuesta.

- a) Participar en la enseñanza de acuerdo con la distribución que haga el profesor titular;
- b) Formar parte de las mesas examinadoras;
- c) Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;
- d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza, que se les encomienden;
- e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos.

D) Profesores honorarios

Art. 67. — (Designación.) Al profesor que se retire de la enseñanza podrá, en los casos de haberse despedido por su actuación científica, otorgársele el título de profesor honorario, por el consejo directivo, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación del consejo universitario en igual forma.

El título de profesor honorario es vitalicio. Sus funciones serán determinadas por las reglamentaciones de cada facultad, con la aprobación del consejo universitario.

E) De la retribución de los profesores

Art. 68. — (Remuneración mensual ordinaria.) Los profesores titulares gozarán de una remuneración mensual de \$ 1.800 moneda nacional, la que será aumentada cada cinco años en un 10 por ciento.

Art. 69. — (Remuneración mensual por dedicación exclusiva.) Los profesores a cargo de cátedras de consagración exclusiva, gozarán de una remuneración mensual de \$ 3.500 moneda nacional, la que será aumentada cada diez años en un 10 por ciento, no pudiendo percibir ninguna otra remuneración cualquiera sea la función que desempeñe dentro de la universidad.

Art. 70. — (Fijación de las retribuciones de los titulares.) En los casos en que un profesor titular hiciera expresa manifestación de querer consagrarse exclusivamente a la enseñanza, los consejos directivos por dos tercios de votos podrán, si lo encontrasen conveniente, aceptar este ofrecimiento, en cuyo caso gozará de la misma retribución fijada en el artículo anterior.

Art. 71. — (Retribución de los adjuntos.) En las cátedras establecidas por la facultad como dedicación exclusiva, los profesores adjuntos asistentes gozarán de una remuneración mensual de \$ 1.500 moneda nacional; los demás profesores adjuntos asistentes gozarán de una remuneración mensual de \$ 800 moneda nacional.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

De los profesores honorarios

Art. 51. — Al profesor que se retire de la enseñanza se le podrá otorgar, por el consejo directivo, en los casos de haberse destacado por su actuación, el título de profesor honorario, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación del Consejo Universitario en igual forma.

El título de profesor honorario es vitalicio. Sus funciones serán determinadas por las reglamentaciones de cada facultad, con la aprobación del Consejo Universitario.

TITULO IV

De las remuneraciones

Art. 56. — El rector y el vicerrector de la universidad, los decanos, directores de escuelas o institutos y profesores, percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas, que fije la ley general de presupuesto de la Nación a propuesta del Consejo Nacional Universitario.

Art. 57. — Los profesores titulares y adjuntos y el personal diplomado auxiliar de la docencia, gozarán de un aumento del 10 % en sus remuneraciones, cada 5 años de ejercicio de la docencia universitaria.

Art. 56. — El rector y el vicerrector de la universidad, los decanos, directores de escuelas o institutos y profesores, percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas, que fije la ley general de presupuesto de la Nación.

F) De la carrera docente y científica

Art. 72. — (Bases de la carrera docente.) Cada facultad reglamentará su carrera docente ajustándose a las siguientes bases:

- a) El aspirante a profesor universitario cursará un período de «adscripción», a una determinada cátedra, durante el cual realizará trabajos de investigación o de seminario en materias afines, bajo la dirección del respectivo profesor, y ejercicios docentes en la materia de su adscripción; completará sus obligatorios sobre materias de cultura general. Podrán implantarse o no, según las características de cada facultad, exámenes finales para la aprobación de las materias de adscripción;
- b) Cumplido esto, el aspirante a profesor pasará a ejercer la docencia complementaria bajo la dirección del profesor titular y durante el tiempo que fijará cada facultad para cada asignatura;
- c) Terminada esta etapa, y previo un examen o concurso general de competencia técnica y docente sobre la materia de su dedicación, será autorizado como docente;
- d) El docente autorizado tendrá las obligaciones que le fije cada facultad y un derecho de preferencia para presentarse a los concursos de profesor adjunto.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

Art. 53. — Cada facultad reglamentará su carrera docente ajustándose a las siguientes bases:

- 1º El aspirante a profesor universitario cursará un período de adscripción a una determinada cátedra, durante el cual realizará trabajos de investigación o seminario, bajo la dirección del respectivo profesor, y ejercicios docentes en la materia de su adscripción; completará su preparación con cursos obligatorios sobre materias de cultura general. Podrán implantarse o no, según las características de cada facultad, exámenes finales para la aprobación de las materias de adscripción;
- 2º Cumplido esto, el aspirante a profesor pasará a ejercer la docencia complementaria bajo la dirección del profesor titular y durante el tiempo que fijará cada facultad para cada asignatura;
- 3º Terminada esta etapa, y previo un examen general de competencia técnica y docente sobre la materia de su dedicación, será reconocido como docente autorizado;
- 4º El docente autorizado tendrá las obligaciones que le fije cada facultad y sus antecedentes serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

De la carrera docente

Art. 52. — Todo egresado de la universidad, con cinco o más años de ejercicio profesional que reúna trabajos, títulos y antecedentes científicos suficientes, podrá solicitar al consejo directivo un permiso para enseñar, y cumplidos los requisitos exigidos para demostrar su capacidad docente, que establecerá cada facultad, se le conferirá permiso para enseñar en carácter de *venia docendi*. Sus antecedentes como tal serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

El régimen de la enseñanza del *venia docendi*, será reglamentado por cada facultad.

Art. 73. — (*Venia docendi*). Todo egresado de la universidad, con diez o más años de ejercicio profesional, que reúna trabajos, títulos y antecedentes científicos suficientes, podrá solicitar al consejo directivo un permiso para enseñar, y cumplidos los requisitos exigidos para demostrar su capacidad docente y preparación técnica, que establecerá cada facultad, le conferirá la *venia docendi*, es decir, el permiso para enseñar en forma regular y sistemática. Sus antecedentes serán tenidos en cuenta para autorizar su inscripción en los concursos de profesor adjunto.

La forma regular y sistemática de la enseñanza del *venia docendi*, será reglamentada por cada facultad.

Art. 74. — (Carrera de investigadores). Cada facultad organizará la formación regular y metódica de los investigadores dedicados exclusivamente a trabajar por el progreso de la ciencia.

G) Del claustro universitario

Art. 75. — (Composición). Constituyen el claustro general de profesores de cada facultad todos los catedráticos, más un número de profesores adjuntos elegidos por sorteo, en una proporción igual a la tercera parte de los catedráticos de cada facultad. La asistencia a las reuniones de los claustros es obligatoria.

Art. 76. — (Reunión anual). El decano podrá citar al claustro general a fin de dar lectura a la memoria anual. Podrán constituirse también claustros parciales de las diversas escuelas, por separado, bajo la presidencia del decano, para considerar exclusivamente los resultados del plan de estudios y las reformas técnicas que se sugieran.

Art. 77. — (Facultades). Las sugerencias del claustro serán consideradas por el decano y el consejo directivo de la facultad, para resolver sobre su viabilidad. El claustro no tratará, bajo ningún concepto, cuestiones ajenas al plan de estudios y al desarrollo de la enseñanza. El claustro podrá también ser consultado por escrito.

De los claustros universitarios

Art. 54. — Constituyen el claustro general de profesores, todos los docentes titulares y adjuntos de cada facultad. Podrán también constituirse claustros parciales de las diversas escuelas, por separado, para considerar exclusivamente los resultados del plan de estudios y las reformas que se sugieran.

Los claustros serán citados y presididos por el decano de cada facultad.

Art. 55. — El decano citará el claustro general o parcial cuando lo considere conveniente, pudiendo consultarlos por escrito.

TITULO IV

De los estudiantes

A) Categorías

Art. 78. — (Estudiantes regulares). Los estudiantes serán regulares y libres. Los primeros deberán asistir obligatoriamente para mantener su situación de tales, a las clases prácticas y trabajos universitarios, en la proporción que fije cada facultad. Son los únicos que pueden obtener becas.

Art. 79. — (Estudiantes libres). Son estudiantes libres los que inscritos en la universidad, no cumplan los requisitos necesarios para conservar el carácter de regulares.

El estudiante libre rendirá examen en las siguientes condiciones:

- 1ª La prueba teórica no podrá durar menos de media hora;

TITULO V

De los estudiantes

Art. 58. — Los requisitos de admisión, categorías, promociones, concesión de becas, épocas de examen y todo lo atinente al régimen del estudiante, será reglamentado por el Consejo Nacional Universitario.

2° En caso de prueba práctica, se acreditará, a satisfacción del tribunal examinador, grado suficiente de preparación en la materia. Esta prueba es eliminatoria;

3° El examen teórico se hará con el programa oficial íntegro de la asignatura de que se trate, pudiendo el tribunal examinador elegir el tema o temas dentro del programa sobre el que deberá disertar el alumno.

Art. 80 (Estudiantes vocacionales).—Todo egresado en una carrera universitaria podrá inscribirse en cualquier asignatura de cualquier facultad sin rendir examen de ingreso. Los estudiantes quedarán sometidos exclusivamente a las restricciones de correlación de estudios que establecerá la universidad.

Art. 81 (Estudiantes vocacionales).—Los estudiantes inscritos en estas condiciones podrán rendir exámenes sometiéndose a las reglamentaciones vigentes para los alumnos regulares o libres, según la categoría que adopten; en las actas respectivas se hará constar su calidad de alumno vocacional.

Art. 82.—Los alumnos vocacionales podrán pedir certificado de las asignaturas aprobadas, y si su conjunto alcanzase a una carrera completa tendrán derecho al título profesional respectivo.

Art. 83.—El consejo universitario reglamentará las correlaciones de materias indispensables para autorizar la inscripción en cada asignatura determinada, con el objeto de evitar que se intente afrontar estudios sin bases preliminares insubstituíbles.

Esta correlación será dictada con la mayor libertad posible, tendiente a no restringir la ampliación de técnica y de cultura que se deriva de esta libre elección de estudios superiores.

B) De su representación

Art. 84.—Los estudiantes tendrán representación en los consejos directivos por intermedio de un delegado por cada escuela.

Art. 85.—Entre los diez alumnos que hubieran obtenido las más altas calificaciones en el transcurso de su carrera y se encuentren cursando el último

Art. 59.—Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado de la entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles.

Art. 59.—Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado, alumno regular de sus tres últimos años de estudio, y proveniente de entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles.

Ley 13.031

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

año, se sorteará el que ha de tener la representación estudiantil. Este cargo es irrenunciable, salvo causa justificada a juicio del consejo.

Art. 86. — El delegado será convocado a las sesiones que celebre el consejo directivo. En dichas sesiones el delegado podrá expresar libremente el anhelo de sus representados, no teniendo voto en las decisiones que adopte el consejo.

C) De las becas

Art. 87. — El Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distribución entre las diversas universidades de la Nación, se hará por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribución, se tendrán en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales, referidas a cada universidad, procurando que con la concesión de becas se cumplan, de la manera más acabada posible y con un sentido social, los fines asignados a la universidad.

Habrán dos clases de becas: las de estudio y las de estímulo. A la primera tendrán derecho y será otorgada a los estudiantes que poseyendo aptitud universitaria sean hijos de familias de obreros, artesanos o empleados cuyos ingresos, atendidas las circunstancias de cada caso no permitan costear los estudios universitarios ni prescindir en todo o en parte de la ayuda económica que aporte o pudiera aportar el becado. Dicha beca consistirá en obtener gratuitamente la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y grados, el suministro de libros y útiles, y en el otorgamiento del diploma o título que se obtuviere, y en conceder una compensación económica familiar que equivalga lo más aproximadamente posible a la aportación del alumno.

Lo anterior es aplicable a los casos en que la familia obrera, artesana o empleada, careciera de cabecera de la misma y se hallare en análogas condiciones económicas a las señaladas en el párrafo anterior, y a los jóvenes que sin familia y poseyendo la aptitud universitaria adecuada carecieren de los recursos necesarios para ingresar y estudiar en la universidad.

A la segunda tendrán derecho y será otorgada a estudiantes destacados, de familia obrera o de empleados, para compensar la privación total o parcial de aporte económico al hogar que les imponga el estudio.

D) *Concesión y pérdida de becas*

Art. 88. — (Solicitud de becas.) Las peticiones de becas serán dirigidas al Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (*), con los antecedentes tendientes a justificarlas, y serán resueltas, previas las informaciones del caso y las circunstancias del mismo, concediendo la clase de beca que corresponda.

Art. 89. — (Pérdida de las becas.) La condición de becario se pierde:

- 1º Por ser aplazado más de dos veces en una misma materia o en la mitad más una de un mismo curso;
- 2º Por observar mala conducta pública, dentro o fuera de la universidad, o por realizar dentro de ella actividades políticas;
- 3º Por haber sido objeto de medidas disciplinarias;
- 4º Por inasistencia reiterada e injustificada a las clases o incumplimiento repetido de las tareas universitarias;
- 5º Por haber falseado los elementos de juicio que invocó para solicitar la beca;
- 6º Por haber desaparecido las condiciones de necesidad acreditadas al solicitar la beca.

La cancelación se hará por el rector con aprobación del consejo universitario. Al alumno a quien le fuere cancelada la beca no se le otorgará otra en ninguna de las universidades de la Nación, salvo el caso del inciso 6º del artículo presente.

Art. 90. — (Otras becas.) Las becas otorgadas por el Estado no excluyen aquellas otras que puedan crearse u otorgarse por otras entidades o personas. Las que fueran de entidades o instituciones públicas oficiales o semioficiales, deberán ajustarse, en lo posible, al espíritu de las presentes disposiciones.

Art. 91. — (Pérdida de la condición de estudiante.) Perderá la condición de estudiante universitario, no pudiendo ingresar a ninguna otra universidad del país, todo alumno que incurriera en la misma causal de cesantía de los profesores, especificada en el inciso 1º del artículo 56 de la presente ley, sin perjuicio de las faltas y sanciones de orden disciplinario que establezca cada facultad en su reglamento interno.

(*) Foy Ministerio de Educación, ley 13.529.

De la enseñanza

A) Condiciones generales de ingreso

Art. 92. — (Admisión de alumnos.) Las condiciones de admisibilidad para los estudiantes a las universidades serán uniformes para todo el país y se fijarán por el Consejo Nacional Universitario.

Art. 93. — (Constancias.) Todo el que solicite ingresar a los cursos o rendir examen en las facultades, deberá acreditar tener aprobados los estudios que correspondan a la enseñanza media, normal o especial, de acuerdo a la reglamentación que se establezca.

Art. 94. — (Comprobación.) La comprobación a que se refiere el artículo anterior, podrá hacerse:

- 1º Por certificado de los colegios nacionales;
- 2º Por certificado de institutos de enseñanza secundaria, debidamente autorizados;
- 3º Por certificados o diplomas de facultades o institutos oficiales extranjeros, debidamente legalizados, siempre que se acredite la reciprocidad con nuestra República.

Art. 95. — (Pruebas de competencia previas.) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes se podrán exigir estudios complementarios o pruebas de competencia, antes de aceptar la incorporación de alumnos a las facultades.

Art. 96. — (Exámenes, clases y vacaciones.) La universidad fijará la fecha de comienzo y terminación de las clases y duración de las vacaciones, y cada facultad reglamentará la fecha de los exámenes.

Art. 97. — (Propiedad y responsabilidad intelectual.) La responsabilidad científico-legal de las enseñanzas y doctrinas expuestas en clase, concierne exclusivamente a los profesores que la dicten y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual, artística o literaria de su enseñanza; todo ello, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar los consejos directivos, cuando se comprometa el decoro y la seriedad de los estudios o cuando se desvíe de los fines específicos de la universidad, o comprometa el prestigio de la misma o de las facultades.

Art. 34. — La responsabilidad científico-legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en clase concierne exclusivamente a los profesores que las dicten y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual, artística o literaria de su enseñanza. Lo establecido precedentemente no se aplicará a los casos de investigaciones organizadas por la universidad, facultades e institutos.

Ley 13.031

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

Art. 98. — (Terminación de estudios y tesis.) No se otorgará diploma alguno a quien no haya aprobado todas las materias del plan de estudios de la respectiva carrera. Cuando un estudiante solicitare traslado para una facultad similar de distinta universidad, deberá requerir su diploma en aquella universidad donde hubiera aprobado más del 50 por ciento de las materias de su carrera. Para obtener el título de doctor deberá aprobarse un trabajo de investigación, que se llamará tesis de doctorado.

De la enseñanza libre

Art. 99. — (Autorización.) Podrán dictar circunstancialmente cursos libres, parciales o completos y paralelos, conferencias o lecciones sobre cualquier disciplina científica, previa autorización de la facultad respectiva y de acuerdo con su reglamento:

- 1º Los profesores universitarios;
- 2º Los diplomados, universitarios nacionales o extranjeros o personas de reconocida competencia.

La enseñanza libre, sistemática y regular, les corresponde a los docentes autorizados y a los *venia docendá*. Las facultades organizarán cursos populares de extensión universitaria a cargo de profesores y alumnos.

De la enseñanza para graduados

Art. 100. — (Cursos y carreras de especialistas.) Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando cursos de perfeccionamiento de especialización y carrera de especialistas, con el objeto de propender a la formación de los técnicos que necesita el país en cada una de las ramas de las ciencias y de actualizar los conocimientos de los profesionales. Se le dedicará preferente atención a aquellas materias que no figuren en el plan de estudios para estudiantes.

TITULO VI

Del patrimonio de la universidad
y su administración

A) De los bienes de la universidad

Art. 101. — (Patrimonio.) Forman el patrimonio de la universidad: el fondo universitario, los bienes in-

De la enseñanza para graduados

Art. 60. — Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando centros de graduados y cursos de perfeccionamiento o especialización.

TITULO VII

Del patrimonio y recursos de la universidad
y su administración*De los bienes de la universidad*

Art. 62. — Forman el patrimonio de la universidad los bienes que en virtud de ley o por otro título

muebles, muebles e inmateriales que en virtud de ley o por otro título, gratuito u oneroso, pasen al dominio de la universidad, así como las colecciones científicas, publicaciones y demás bienes que, actualmente o en el futuro, tengan las facultades, institutos o dependencias de la universidad.

B) De los recursos, donaciones y cuentas

Art. 102. — (Recursos en general.) Son recursos de la universidad:

1º El producido de las contribuciones que se establecen en la presente ley;

2º Las sumas que en cualquier concepto y forma se asignen por el presupuesto de la Nación a la universidad, facultades, institutos y establecimientos universitarios;

3º El producido de derechos arancelarios;

4º Los frutos, intereses y rentas de los bienes patrimoniales de la universidad;

5º Las rentas o donaciones de particulares en favor de la universidad, facultades, institutos o establecimientos universitarios;

6º Cualquier otro fondo que corresponda a la universidad.

De los recursos, donaciones y cuentas

Art. 63. — Son recursos de las universidades:

1º Las contribuciones de rentas generales que anualmente fije el presupuesto general de la Nación para cada organismo o en particular para sus facultades, institutos y establecimientos;

2º Los frutos, intereses y rentas de sus bienes patrimoniales;

3º Las donaciones de terceros a su favor o en beneficio de sus facultades, institutos o establecimientos;

4º Todo otro recurso que le corresponda o se le asigne.

Para compensar las contribuciones mencionadas en el apartado 1º del presente artículo, incorporarse a rentas generales los recursos a que se refiere la primera parte del artículo 8º de la ley 13.558.

Artículo 66. — Cuando se trate de herencias, legados o donaciones o cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el Consejo Universitario no podrá pronunciarse sin oír a éstas y no podrá aceptar aquellas que las facultades decidan rechazar. Estas contribuciones comprenden las condiciones o cargos que puedan imponer los testadores o beneficiarios. Aceptada una herencia, legado, donación u otra liberalidad, en contrato de donación, no podrá ser modificado sin oír nuevamente a la facultad beneficiada.

Art. 103. — (Donaciones). Cuando se trate de herencias, legados o donaciones o cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el consejo universitario no podrá pronunciarse sin oír a éstas y no podrá aceptar aquellas que las facultades decidan rechazar. Estas restricciones comprenden las condiciones o cargos que puedan imponer los testadores y beneficiarios. Aceptada una herencia, legado, donación u otra liberalidad, el contrato de donación no podrá ser modificado sin oír nuevamente a la facultad beneficiada.

Artículo 64.—Queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general de la Nación, con cargo a rentas generales durante el ejercicio de 1954, de conformidad con lo previsto por el apartado 1 del artículo 62 de la presente ley, los créditos que en la medida de las necesidades de cada organismo universitario, sean indispensables para su desenvolvimiento en el citado ejercicio. Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación de las deudas que al 31 de diciembre de 1953 cada universidad no haya podido atender con las disponibilidades con que hubiere contado, inclusive los anticipos efectuados oportunamente por el Tesoro Nacional para cubrir insuficiencias de los ingresos universitarios. Dichos gastos serán atendidos con los recursos a que se refiere el artículo 3º de la ley 13.654.

Art. 104.—(Recaudación). Salvo disposición especial del consejo universitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos los entregarán mensualmente a la tesorería de la universidad, cualquiera sea su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y explicativos del caso. Igual cosa se hará, aun cuando los fondos tengan un destino especialmente determinado.

Art. 105.—(Gastos). Ningún gasto o inversión de fondos podrá hacerse sin que se encuentre previsto en el presupuesto de la universidad u ordenado por el consejo universitario. Los pagos serán dispuestos por el rector, previa conformidad del contador, bajo la responsabilidad solidaria de los mismos, si contravinieren disposiciones legales.

El consejo universitario no podrá ordenar gasto alguno fuera del presupuesto, sin crear o tener el recurso. Será individualmente responsable de la violación de esta disposición, cada uno de los miembros que sancione el gasto.

Art. 106.—(Ingresos). Todas las sumas destinadas a la universidad o a cualesquiera de sus partes integrantes, ingresarán a los recursos generales de la universidad.

Los beneficios establecidos en el artículo 87 no serán satisfechos con los recursos enumerados en el artículo 102.

Artículo 67.—Salvo disposición especial del Consejo Universitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos, los entregarán mensualmente a la tesorería de la universidad, cualquiera sea su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y explicativos del caso.

Artículo 68.—Los fondos universitarios estarán depositados a la orden del rector, quien dispondrá de su inversión de acuerdo con el régimen financiero y contable vigente.

Artículo 65.—El uso de las atribuciones que la presente ley confiere a los organismos universitarios no podrá traducirse en erogaciones para cuya atención no se cuente con la pertinente autorización de crédito en sus respectivos presupuestos. En este caso, como así también cuando el ejercicio de dichas atribuciones demande la modificación de la estructura presupuestaria o importe un nuevo compromiso de gastos para ejercicios futuros, deberá requerirse la previa conformidad del Poder Ejecutivo.

Art. 64.—Queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general de la Nación, con cargo a rentas generales durante el ejercicio de 1954, de conformidad con lo previsto por el apartado 1 del artículo 63 de la presente ley, los créditos que, en la medida de las necesidades de cada organismo universitario, sean indispensables para su desenvolvimiento en el citado ejercicio. Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación de las deudas que al 31 de diciembre de 1953 cada universidad no haya podido atender con las disponibilidades con que hubiere contado, inclusive los anticipos efectuados oportunamente por el Tesoro Nacional para cubrir insuficiencias de los ingresos universitarios. Dichos gastos serán atendidos con los recursos a que se refiere el artículo 3º de la ley 13.654.

TITULO VII

De la dotación económica de las universidades

Art. 107. — (Recursos especiales). Para la realización de sus fines las universidades nacionales contarán con los siguientes recursos:

- 1º Con los fondos que el Estado les asignare respectivamente, en el presupuesto nacional;
- (*) 2º Con el impuesto del dos por ciento (2 %) que toda persona —de existencia física, ideal, con o sin personalidad jurídica, o sucesión individual— que empleare trabajo de otra, está obligada a satisfacer sobre el importe anual de los «sueldos» y «salarios» que abonare. Los «sueldos» y «salarios» sobre los que corresponderá ingresar el impuesto que se ha hecho referencia precedentemente, se determinarán de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2º del decreto ley 33.302/45 (ley 12.921).

Quedan exentos de este impuesto los «sueldos» y «salarios» que se paguen al servicio doméstico y los abonados por los fiscos nacional, provinciales y municipales y los de las entidades que en su totalidad pertenezcan a los mismos;

- 3º Con los ingresos obtenidos por matrículas y otros conceptos universitarios;
- 4º Con las donaciones o fundaciones que se hicieran a favor de las universidades;
- 5º Con cualquier otro ingreso.

Art. 108. — (Aplicación, percepción y fiscalización del recurso especial). La aplicación, percepción y fiscalización del impuesto a que se alude en el punto segundo del artículo 107 estará a cargo del Instituto Nacional de las Remuneraciones y se registrará, en lo pertinente, por las disposiciones del decreto ley 33.302/45 (ley 12.921) y demás disposiciones que complementen o modifiquen ese cuerpo legal, siendo facultad exclusiva del Poder Ejecutivo determinar cuáles de las citadas disposiciones serán de aplicación para el impuesto referido.

(*) Derogado por ley 13.343.

Art. 109. — (Forma y plazo para el pago). Los responsables abonarán el impuesto establecido en el punto segundo del artículo 107, mediante depósito en la cuenta «Instituto Nacional de las Remuneraciones —Recursos Universitarios—», del Banco Central, Banco de la Nación Argentina, o en los bancos particulares que a tales efectos habilite expresamente el Instituto Nacional de las Remuneraciones, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario sobre Buenos Aires, a la orden del «Instituto Nacional de las Remuneraciones —Recursos Universitarios—», dentro de los plazos que, anualmente o en períodos menores, establecerá el Poder Ejecutivo.

Carecerá de valor todo pago que no se efectúe en alguna de las formas indicadas precedentemente.

El Poder Ejecutivo queda facultado para exigir de los empleadores —en los casos que crea oportuno— anticipos a cuenta del importe que, en definitiva, deban ingresar aquéllos en concepto del impuesto que se establece en el punto segundo del artículo 107.

Art. 110. — (Distribución del producido del impuesto). El producido de este impuesto será distribuido en el presupuesto nacional según las necesidades de cada universidad nacional, atendidas las circunstancias peculiares de la región o provincia en que se hallaren, número de alumnos y de profesores y demás factores que hubieren de tenerse en cuenta a efecto de que se desarrollen con un sentido social las funciones que les están asignadas.

TITULO VIII

Del Consejo Nacional Universitario

Art. 111. — Créase el Consejo Nacional Universitario, el que estará constituido por los rectores de todas las universidades del país y será presidido por el ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 112. — El Consejo Nacional Universitario tendrá los siguientes deberes:

- 1º Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
- 2º Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;

TITULO VI

Del Consejo Nacional Universitario

Art. 61. — El Consejo Nacional Universitario estará constituido por los rectores de todas las universidades del país, será presidido por el ministro de Educación de la Nación y tendrá las siguientes funciones:

Art. 61. — El Consejo Nacional Universitario estará constituido por los rectores de todas las universidades del país. será presidido por el ministro secretario de Estado de Educación de la Nación, y tendrá además de las funciones que expresamente le acuerda la presente ley, las siguientes:

1. Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
2. Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;

Ley 13.031

3º Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número de cursos y título a otorgar para las mismas carreras.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

3. Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras;
4. Reglamentar y aconsejar lo concerniente a la extensión universitaria de cada universidad;
5. Coordinar, planificar y racionalizar las normas que regirán las publicaciones universitarias;
6. Promover la realización de congresos docentes universitarios;
7. Asesorar al Poder Ejecutivo en la creación, organización y funcionamiento de las academias nacionales, disponiendo lo conducente para que las universidades actúen en forma coordinada con ellas.

TITULO IX

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 113.—La antigüedad en la cátedra, a los efectos de las bonificaciones previstas en los artículos 68 y 69, comenzará a contarse desde la fecha del nombramiento efectuado por el Poder Ejecutivo.

Art. 114.—El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato la confección de nuevos presupuestos para las universidades nacionales, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

Art. 115.—El Poder Ejecutivo tomará las providencias necesarias para que las autoridades se constituyan de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

Art. 116.—Esta ley se aplicará desde su vigencia en la Universidad Nacional de La Plata, en todo cuanto no se oponga a las disposiciones del convenio celebrado el 12 de agosto de 1905, entre el gobierno de la Nación y el de la provincia.

Art. 72.—La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1954, quedando derogadas todas las disposiciones que le sean incompatibles.

Los requisitos y procedimientos para la designación de las autoridades de las universidades y facultades

Art. 70.—Los concursos para la provisión de cargos de profesores titulares y adjuntos, en trámite a la fecha de la sanción de la presente ley, se regirán por las disposiciones de la reglamentación bajo la cual se llamó a concurso.

Art. 71.—Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 47, los profesores adjuntos designados por el Consejo Universitario al 31 de octubre de 1953, tendrán derecho a la percepción de las remuneraciones a que se refieren los artículos 56 y 57.

Art. 72.—La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1954, quedando derogadas la ley 13.031 y todas las disposiciones que se opongan a la presente. Los requisitos y procedimientos para la designación de las autoridades de las universidades y facultades

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

Ley 13.031

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Modificaciones introducidas por el Honorable Senado

El Poder Ejecutivo de la Nación adoptará las medidas necesarias para la modificación del referido convenio, en condiciones que permitan la inclusión integral de la Universidad Nacional de La Plata en el régimen establecido por la presente ley universitaria.

Mientras tanto, las autoridades de la Universidad de La Plata procederán a la adaptación de su organización y funcionamiento con los principios y disposiciones de la presente ley.

Art. 117.—Todas las universidades existentes o a crearse, salvo la excepción del artículo 116, se regirán por la presente ley, que entrará en vigencia el 1º de enero de 1948, quedando —desde ese momento— derogada toda disposición que se oponga a su cumplimiento.

Art. 118.—Hasta tanto el consejo directivo de cada facultad fije la proporción de consejeros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24, se mantendrá la composición de los mismos en la forma actualmente existente.

Art. 119.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de septiembre del año mil novecientos cuarenta y siete.

tades establecidos en la presente ley, no se aplicarán a las actuales autoridades, mientras ejerzan su mandato.

Art. 73. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(Anexo a la orden del día 201)

ANTECEDENTES

I

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

De las universidades

CAPÍTULO I

De la misión y organización de las universidades

Artículo 1º — Las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, a cuyo efecto tendrán los siguientes objetivos:

- 1º La enseñanza en el grado superior y el desarrollo de la cultura y la afirmación de la conciencia nacional, de acuerdo con la orientación fijada por la Constitución;
- 2º La integral formación humana de sus docentes y estudiantes, con preferencia a toda especialización técnica e inculcándoles la noción de su responsabilidad social y la conciencia de que han de servir al pueblo;
- 3º La organización de la investigación científica, la creación y sostenimiento de institutos de perfeccionamiento o de especialización y el fomento de publicaciones y actividades científicas, literarias y artísticas;
- 4º La creación de un cuerpo de docentes altamente especializados y consagrados a la enseñanza;
- 5º El otorgamiento de los títulos para el ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo;
- 6º La promoción de las relaciones culturales con las entidades similares de los demás países;
- 7º Asegurar la gratuidad de los estudios;
- 8º Interesarse por los problemas nacionales;
- 9º Prestar a los organismos del gobierno el asesoramiento que les fuere requerido;
10. Instituir cursos de extensión universitaria y favorecer toda forma de difusión de la cultura;
11. Organizar sus servicios asistenciales.

Art. 2º — Todos los planes de enseñanza comprenderán, además de sus materias específicas, cursos dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la Doctrina Nacional y a la formación política ordenada por la Constitución.

Art. 3º — Ninguna institución pública o privada podrá usar la expresión «universidad», o sus derivadas, en su denominación o en los títulos que expida, salvo ley especial.

Art. 4º — El territorio nacional se dividirá en regiones universitarias, dentro de las cuales ejercerá jurisdicción la respectiva universidad. Corresponde a cada una de ellas organizar dentro de su zona de influencia los estudios regionales y promover las artes técnicas y aplicadas con vistas a la explotación de sus riquezas y al incremento de las actividades económicas locales.

Art. 5º — Integran las universidades:

- 1º Las facultades y escuelas, con los organismos que establezcan sus reglamentaciones;
- 2º Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria y los que se incorporen posteriormente bajo la misma dependencia;
- 3º Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales, que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad competente.

Art. 6º — Las universidades cuentan con autonomía docente y científica y gozan de la autarquía que en el orden administrativo les confiere la presente ley.

Art. 7º — Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación compete al rector, quien podrá delegarla y otorgar, en su caso, los poderes necesarios.

CAPÍTULO II

Del gobierno de la universidad

Art. 8º — El gobierno de cada universidad será ejercido por un rector y un Consejo Universitario.

Del rector

Art. 9º — El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en sus funciones.

Art. 10. — Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario y 30 años de edad.

Art. 11. — Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuye la presente ley y las que le fijen otras disposiciones legales, el rector tendrá las siguientes:

- 1º Representar legalmente a la universidad;
- 2º Designar las personas que llevarán la representación oficial de la universidad;
- 3º Designar y remover al secretario y prosecretario de la universidad, que deberán tener título universitario;
- 4º Convocar al Consejo Universitario a reuniones ordinarias y extraordinarias;
- 5º Firmar los títulos, diplomas y distinciones universitarios;
- 6º Designar los decanos de las facultades;
- 7º Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al Consejo Universitario o a las autoridades de las facultades;
- 8º Dirigir la administración general de la universidad, pudiendo recabar de las facultades y demás organismos universitarios los informes que estime conveniente;
- 9º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnicoprofesional. Proponer al Poder Ejecutivo, para su confirmación, el personal administrativo que hubiere nombrado;
10. Adoptar las medidas urgentes para el buen gobierno de la universidad, dando cuenta de ello al Consejo Universitario;
11. Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el asiento del rectorado y del consejo;

12. Conceder las licencias en los casos señalados por las reglamentaciones pertinentes;
13. Publicar, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria que consigne la tarea docente y la gestión administrativa realizada, dando cuenta al Consejo Universitario.

Art. 12. — El rector tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Del vicerrector

Art. 13. — El vicerrector ejercerá las funciones del rector:

- a) En caso de ausencia o impedimento;
- b) Cuando por cualquier causa el cargo quedare vacante;
- c) Cuando le fueren delegadas.

Para el caso de ausencia o impedimento del rector y vicerrector, o de vacancia, se hará cargo del rectorado el consejero de mayor edad, quien deberá dar cuenta de ello al Poder Ejecutivo.

Del Consejo Universitario

Art. 14. — El Consejo Universitario estará constituido por el rector, que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.

Art. 15. — El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le acuerdan en esta ley:

- 1º Elegir un vicerrector entre sus miembros, que durará tres años en funciones;
- 2º Dictar su reglamento interno y las ordenanzas que requiera el funcionamiento de la universidad;
- 3º Ejercer la jurisdicción superior universitaria y resolver en última instancia universitaria las cuestiones contenciosas que hayan fallado el rector o las facultades;
- 4º Resolver la intervención de las facultades, cuando su funcionamiento no se ajuste a la presente ley;
- 5º Decidir en última instancia las cuestiones sobre validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias, que hubieran sido resueltas por los consejos de las facultades;
- 6º Revalidar, habilitar y reconocer los diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada caso, de la jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas;
- 7º Resolver lo conducente al ejercicio de la personalidad jurídica de la universidad;
- 8º Aprobar o devolver observadas a las facultades las ternas formuladas por éstas para la designación de profesores titulares, así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para el nombramiento de profesores adjuntos, extraordinarios y honorarios. El Consejo Universitario sólo tiene facultad para considerar el aspecto formal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca el orden de los nombres ni la competencia científica y didáctica, que son privativos de cada facultad;

- 9º Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas facultades;
10. Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, la creación de nuevas escuelas o institutos;
11. Aprobar los planes de estudio y los reglamentos que dicte cada facultad sobre sus respectivas carreras;
12. Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, el título de doctor honoris causa, o de miembro honorario de la universidad, a las personas que sobresalieren por su obra, o por su labor científica, literaria o artística;
13. Fijar la fecha de iniciación y terminación del curso lectivo y duración de las vacaciones;
14. Aprobar el presupuesto general de la universidad y tomar conocimiento de la inversión de los fondos asignados a la misma;
15. Vender, con autorización del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles, títulos y valores pertenecientes a la universidad;
16. Aceptar las herencias con beneficio de inventario, y los legados o donaciones que se dejen o hagan a las universidades o a las facultades o establecimientos que las integren;
17. Dictar los reglamentos para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios, con sujeción a las normas que dicte el Consejo Nacional Universitario.

TITULO II

De las facultades

Del gobierno de las facultades

Art. 16. — El gobierno de cada facultad será ejercido por un decano y un consejo directivo, los que durarán tres años en sus funciones.

Art. 17. — Cuando el cargo de decano quedare vacante, el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare para completar el período.

Del consejo directivo y de la designación de decano

Art. 18. — El consejo directivo se integrará con el decano y once consejeros.

La elección de consejeros se efectuará en comicios de profesores, quienes votarán personalmente, en forma secreta, las listas de candidatos que depositarán en dos urnas distintas; una reservada para los profesores titulares, que votarán de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutes; y otra para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros titulares y otro número igual de substitutes.

Los consejeros que dejen de ser profesores, cesarán inmediatamente en el ejercicio del cargo.

Art. 19. — Para aquellas facultades que no estén en condiciones de ajustarse a las proporciones indicadas en el artículo precedente, el Consejo Universitario determinará las que hagan posible la constitución del consejo directivo y establecerá el quórum para sus reuniones.

Art. 20. — El escrutinio y proclamación de los candidatos elegidos serán hechos por el decano, asistido por el vicedecano y el consejero titular de más edad.

Art. 21. — El decano será designado por el rector. En caso de que el nombramiento del decano recaiga en uno de los consejeros, el consejo directivo será integrado por el consejero sustituto que corresponda a la categoría del profesor designado decano.

Art. 22. — Las vacantes de consejeros titulares que se produzcan antes de la fecha de renovación, serán llenadas por sorteo, que se realizará entre los consejeros sustitutos de titulares o de adjuntos, según sea la vacante producida y manteniendo la representación de las escuelas.

Art. 23. — Si por sucesivas vacantes o ausencias quedara agotado el número de consejeros sustitutos, el consejo directivo —aun en minoría— designará de entre los profesores, según sea la vacante, el que deba llenarla para completar el período.

Art. 24. — Las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de siete consejeros.

Art. 25. — El consejo directivo tendrá las siguientes atribuciones:

- 1º Designar vicedecano entre sus miembros;
- 2º Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas que requiera su funcionamiento;
- 3º Proponer al Consejo Universitario la adopción de la estructura departamental en el orden docente de la facultad;
- 4º Proponer al Consejo Universitario la creación, modificación o supresión de escuelas, como también la proporción en que estarán representadas en el consejo directivo, y la creación de institutos o cursos de investigación y para graduados;
- 5º Confeccionar y modificar los planes de estudios de las carreras o cursos especiales, aprobándolos en primera instancia;
- 6º Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción, de acuerdo con lo que reglamente en general el Consejo Nacional Universitario;
- 7º Organizar las actividades de extensión universitaria atinentes a cada facultad;
- 8º Establecer, en cada caso, con la aprobación del Consejo Universitario, el régimen de consagración exclusiva a la enseñanza;
- 9º Elevar al rectorado de la universidad las ternas de profesores titulares y designar los profesores adjuntos y honorarios;
10. Ejercer, con respecto a los profesores, la potestad disciplinaria con arreglo a la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;
11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los titulares o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones;
12. Proyectar el presupuesto de la facultad;
13. Organizar la distribución o venta de publicaciones y productos.

Del decano

Art. 26. — Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino, y ser profesor titular o adjunto confirmado en la respectiva facultad.

Art. 27. — El decano tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 28. — El decano tendrá las siguientes funciones:

- 1º Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo;
- 2º Representar a la facultad;
- 3º Firmar, juntamente con el rector, los diplomas universitarios;
- 4º Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la asistencia de los profesores;
- 5º Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los consejos universitario y directivo y del rector;
- 6º Autorizar el ingreso de alumnos y expedir certificados de promoción, con arreglo a las ordenanzas y reglamentos correspondientes;
- 7º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional. Proponer al Poder Ejecutivo, por conducto del rector, para su confirmación, el personal administrativo que hubiere nombrado;
- 8º Acordar a los profesores licencias, de conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;
- 9º Ejercer la vigilancia de la enseñanza, y la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la facultad;
10. Dirigir la administración de la facultad y rendir cuenta de la inversión de los fondos;
11. Designar y remover al secretario de la facultad, el que deberá ser egresado universitario;
12. Fijar las fechas de examen, número de turnos y orden de los mismos;
13. Despachar los asuntos de trámite, con el simple dictamen de la comisión respectiva del consejo directivo, salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto será tratado por el consejo.

Del vicedecano

Art. 29. — El vicedecano durará tres años en funciones. Ejercerá las del decano durante la ausencia o impedimento de éste, o las que el mismo le delegare. En caso de vacancia del vicedecanato, el consejero que se haga cargo del mismo, completará el período.

Art. 30. — En caso de ausencia, impedimento, renuncia o fallecimiento del vicedecano en ejercicio del decanato, asumirá las funciones de vicedecano interino el consejero profesor titular de mayor antigüedad en la cátedra.

TTTULO III

De los profesores

Disposiciones generales

Art. 31. — Las universidades tendrán cuatro categorías de profesores: titulares, adjuntos, extraordinarios y honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorías.

Art. 32. — El profesor universitario, sea titular o adjunto, no podrá acumular más de uno de estos cargos en la misma facultad, ni en otras facultades

y universidades. Son incompatibles, por lo tanto, los cargos de profesor titular con el de adjunto, o los de profesor adjunto en más de una asignatura, en la misma o en distintas facultades o universidades. No podrán los profesores prestar sus servicios profesionales en favor de intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, salvo los casos de defensa de intereses personales del profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes, siendo pasible, si lo hiciere, de suspensión, cesantía o exoneración.

Art. 33. — La responsabilidad científico-legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en clase, concierne exclusivamente a los profesores que las dicten y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual, artística o literaria de su enseñanza. Lo establecido precedentemente no se aplicará a los casos de investigaciones organizadas por la universidad, facultades e institutos.

Art. 34. — Los profesores podrán ser separados por las siguientes causas:

- 1º Condena criminal, que no sea por hecho culposo;
- 2º Abandono de sus funciones o negligencia grave en el ejercicio de las mismas;
- 3º Inconducta manifiesta;
- 4º Incapacidad sobreviniente.

De los profesores titulares

Art. 35. — Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teóricopráctica de su asignatura y el desempeño autonómico de la cátedra.

Art. 36. — Los profesores titulares serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo concurso de méritos, aptitudes técnicas y pedagógicas, títulos, antecedentes y trabajos.

Art. 37. — Producida una vacante de profesor titular, se llamará a concurso dentro de un plazo no mayor de tres meses, poniéndose interinamente la cátedra a cargo de un profesor adjunto correspondiente a la misma materia y, a falta de éste, podrá designarse otro profesor de materia afín.

Art. 38. — El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión asesora compuesta por tres miembros, sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares, de la misma materia si los hubiere, y de las materias afines a la cátedra, de la misma facultad y/o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquélla.

El orden de afinidad entre las materias se establecerá con carácter permanente por las facultades al aprobar los respectivos planes de estudios.

Art. 39. — La comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos, títulos, antecedentes y trabajos, la que quedará sujeta a las siguientes condiciones:

- 1º El consejo directivo de la facultad podrá observar el aspecto formal de las ternas, variar su orden o integrarlas en forma distinta a la propuesta por la comisión asesora, requiriéndose para esto último dos tercios de votos de los miembros presentes;
- 2º La terna será elevada a la universidad, que juzgará sobre los aspectos formales del concurso. En caso de que el consejo directivo hu-

biere modificado el dictamen de la comisión asesora, elevará un informe fundado al Consejo Universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la terna;

- 3º La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo juntamente con todos los antecedentes del concurso.

Art. 40. — Para ser admitido al concurso se requiere ser ciudadano argentino, poseer antecedentes morales inobjectables, poseer diploma universitario nacional con cinco años por lo menos de antelación y haber acreditado aptitudes docentes o trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella.

Art. 41. — Las ternas para profesor titular deberán formarse previo dictamen escrito y fundado de la comisión asesora del consejo directivo.

Para configurar la terna se tendrá en cuenta en forma preferente, el cargo de profesor adjunto, en caso de igualdad de antecedentes. A los concursantes que no fueran profesores adjuntos, el consejo directivo podrá exigirles una prueba complementaria. La actividad científica y docente del candidato deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y cursos que se estimarán no sólo por el número, sino también y en primer término, por el mérito intrínseco.

Art. 42. — Cuando se haya declarado desierto un llamado a concurso por no haberse podido integrar la terna se procederá a un segundo llamado. En caso de repetirse la situación anterior el consejo directivo deberá dictaminar sin el requisito de la terna.

Art. 43. — Los profesores titulares pueden presentarse a concurso para optar a otra cátedra, pero si la obtuviesen estarán obligados a renunciar a la cátedra que hubieren estado dictando. Los profesores adjuntos se considerarán presentados automáticamente a los concursos de las cátedras titulares cuya adjuntía ejercen, salvo manifestación expresa en contrario.

Art. 44. — Son funciones de los profesores titulares:

- 1º Conducir la enseñanza de la cátedra, a cuyo efecto deberán: a) Presentar anualmente al consejo directivo, para su aprobación, el programa de la materia; b) Distribuir la enseñanza con los profesores adjuntos; c) Formar parte de las mesas examinadoras; d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza que se les encomienden; e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos. Todo ello con arreglo a las reglamentaciones que se dicten;
- 2º Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;
- 3º Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;
- 4º Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que le fuere requerido por conducto del consejo directivo.

De los profesores adjuntos

Art. 45. — Los profesores adjuntos serán nombrados por concurso por el consejo directivo, con aprobación

del Consejo Universitario, de acuerdo con la reglamentación pertinente.

Para ser admitido al concurso se requieren las mismas condiciones exigidas en el caso de los profesores titulares, salvo la antigüedad como egresado que se reduce a dos años. Podrá admitirse a los concursos para profesores adjuntos, aun cuando no hayan seguido la carrera docente, aquellos candidatos de reconocida personalidad científica, probada con trabajos o actuación docente. En tal caso se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.

Art. 46. — Cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos, requerirán aprobación del Consejo Universitario.

Art. 47. — Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta lo siguiente: su comportamiento moral; haber dictado por lo menos dos cursos complementarios, según la reglamentación de cada facultad, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte la facultad.

Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados cesarán automáticamente en sus funciones.

Art. 48. — Son funciones de los profesores adjuntos:

1º Colaborar en las tareas de la cátedra, a cuyo efecto deberán:

- a) Participar en la enseñanza de acuerdo con la distribución que haga el profesor titular;
- b) Formar parte de las mesas examinadoras;
- c) Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;
- d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza, que se les encomienden;
- e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos. Todo ello con arreglo a las reglamentaciones que dicte la facultad;

2º Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;

3º Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;

4º Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que les fuere requerido por conducto del consejo directivo.

De los profesores extraordinarios

Art. 49. — El Consejo Universitario, a propuesta del consejo de la facultad, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la contratación de profesores extraordinarios por un plazo que no deberá exceder de cinco años. La remuneración y las funciones de los mismos serán determinados en cada caso por la facultad respectiva al formular la propuesta.

De los profesores honorarios

Art. 50. — Al profesor que se retire de la enseñanza se le podrá otorgar, por el consejo directivo, en los casos de haberse destacado por su actuación, el título de profesor honorario, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación del Consejo Universitario en igual forma.

El título de profesor honorario es vitalicio. Sus funciones serán determinadas por las reglamentaciones de cada facultad, con la aprobación del Consejo Universitario.

De la carrera docente

Art. 51. — Todo egresado de la universidad, con cinco o más años de ejercicio profesional que reúna trabajos, títulos y antecedentes científicos suficientes, podrá solicitar al consejo directivo un permiso para enseñar, y cumplidos los requisitos exigidos para demostrar su capacidad docente, que establecerá cada facultad, se le conferirá permiso para enseñar en carácter de *venia docendi*. Sus antecedentes como tal serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

El régimen de la enseñanza del *venia docendi*, será reglamentado por cada facultad.

Art. 52. — Cada facultad reglamentará su carrera docente ajustándose a las siguientes bases:

1º El aspirante a profesor universitario cursará un período de adscripción a una determinada cátedra, durante el cual realizará trabajos de investigación o seminario, bajo la dirección del respectivo profesor, y ejercicios docentes en la materia de su adscripción; completará su preparación con cursos obligatorios sobre materias de cultura general. Podrán implantarse o no, según las características de cada facultad, exámenes finales para la aprobación de las materias de adscripción;

2º Cumplido esto, el aspirante a profesor pasará a ejercer la docencia complementaria bajo la dirección del profesor titular y durante el tiempo que fijará cada facultad para cada asignatura;

3º Terminada esta etapa, y previo un examen general de competencia técnica y docente sobre la materia de su dedicación, será reconocido como docente autorizado;

4º El docente autorizado tendrá las obligaciones que le fije cada facultad y sus antecedentes serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

De los claustros universitarios

Art. 53. — Constituyen el claustro general de profesores, todos los docentes titulares y adjuntos de cada facultad. Podrán también constituirse claustros parciales de las diversas escuelas, por separado, para considerar exclusivamente los resultados del plan de estudios y las reformas que se sugieran.

Los claustros serán citados y presididos por el decano de cada facultad.

Art. 54. — El decano citará el claustro general o parcial cuando lo considere conveniente, pudiendo consultarlos por escrito.

TITULO IV

De las remuneraciones

Art. 55. — El rector y el vicerrector de la universidad, los decanos, directores de escuelas o institutos y profesores, percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas, que fije la ley general de presupuesto de la Nación a propuesta del Consejo Nacional Universitario.

Art. 56. — Los profesores titulares y adjuntos y el personal diplomado auxiliar de la docencia gozarán de un aumento del 10 % en sus remuneraciones, cada 5 años de ejercicio de la docencia universitaria.

TITULO V

De los estudiantes

Art. 57. — Los requisitos de admisión, categorías, promociones, concesión de becas, épocas de examen y todo lo atinente al régimen del estudiante, será reglamentado por el Consejo Nacional Universitario.

Art. 58. — Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado de la entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles.

De la enseñanza para graduados

Art. 59. — Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando centros de graduados y cursos de perfeccionamiento o especialización.

TITULO VI

Del Consejo Nacional Universitario

Art. 60. — El Consejo Nacional Universitario estará constituido por los rectores de todas las universidades del país, será presidido por el Ministro de Educación de la Nación y tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
2. Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;
3. Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras;
4. Reglamentar y aconsejar lo concerniente a la extensión universitaria de cada universidad;
5. Coordinar, planificar y racionalizar las normas que regirán las publicaciones universitarias;
6. Promover la realización de congresos docentes universitarios;
7. Asesorar al Poder Ejecutivo en la creación, organización y funcionamiento de las academias nacionales, disponiendo lo conducente para que las universidades actúen en forma coordinada con ellas.

TITULO VII

Del patrimonio y recursos de la universidad y su administración

De los bienes de la universidad

Art. 61. — Forman el patrimonio de la universidad los bienes que en virtud de ley o por otro título gratuito u oneroso, correspondan al dominio de la universidad, así como las colecciones científicas y publicaciones que tengan las facultades, institutos o dependencias universitarias.

De los recursos, donaciones y cuentas

Art. 62. — Son recursos de las universidades:

1. Las contribuciones de rentas generales que anualmente fije el presupuesto general de la Nación para cada organismo o en particular para sus facultades, institutos y establecimientos;
2. Los frutos, intereses y rentas de sus bienes patrimoniales;
3. Las donaciones de terceros a su favor o en beneficio de sus facultades, institutos o establecimientos;
4. Todo otro recurso que le corresponda o se le asigne.

Para compensar las contribuciones mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, incorporáanse a rentas generales los recursos a que se refiere la primera parte del artículo 8º de la ley 13.558.

Art. 63. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general de la Nación, con cargo a rentas generales durante el ejercicio de 1954, de conformidad con lo previsto por el apartado 1 del artículo 62 de la presente ley, los créditos que en la medida de las necesidades de cada organismo universitario, sean indispensables para su desenvolvimiento en el citado ejercicio. Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación de las deudas que al 31 de diciembre de 1953 cada universidad no haya podido atender con las disponibilidades con que hubiere contado, inclusive los anticipos efectuados oportunamente por el Tesoro Nacional para cubrir insuficiencias de los ingresos universitarios. Dichos gastos serán atendidos con los recursos a que se refiere el artículo 3º de la ley 13.654.

Art. 64. — El uso de las atribuciones que la presente ley confiere a los organismos universitarios no podrá traducirse en erogaciones para cuya atención no se cuente con la pertinente autorización de crédito en sus respectivos presupuestos. En este caso, como así también cuando el ejercicio de dichas atribuciones demande la modificación de la estructura presupuestaria o importe un nuevo compromiso de gastos para ejercicios futuros, deberá requerirse la previa conformidad del Poder Ejecutivo.

Art. 65. — Cuando se trate de herencias, legados o donaciones o cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el Consejo Universitario no podrá pronunciarse sin oír a éstas y no podrá aceptar aquellas que las facultades decidan rechazar. Estas contribuciones comprenden las condiciones o cargos que puedan imponer los testadores o benefactores. Aceptada una herencia, legado, donación u otra liberalidad, en

contrato de donación no podrá ser modificado sin oír nuevamente a la facultad beneficiada.

Art. 66. — Salvo disposición especial del Consejo Universitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos los entregarán mensualmente a la tesorería de la universidad, cualquiera sea su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y explicativos del caso.

Art. 67. — Los fondos universitarios estarán depositados a la orden del rector, quien dispondrá de su inversión de acuerdo con el régimen financiero y contable vigente.

TITULO VIII

Art. 68. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para reajustar los presupuestos de gastos y cálculo de recursos de las universidades a fin de adecuarlos a las disposiciones de la presente ley.

Art. 69. — La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1954, quedando derogadas todas las disposiciones que le sean incompatibles.

Los requisitos y procedimientos para la designación de las autoridades de las universidades y facultades establecidos en la presente ley, no se aplicarán a las actuales autoridades, mientras ejerzan su mandato.

Armando Méndez San Martín. — Pedro José Bonanni.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad propiciando la sanción del proyecto de ley que acompaña, por el que se modifica la ley universitaria 13.031.

La lectura de dicho proyecto llevará a Vuestra Honorabilidad a la conclusión de que se trata de algunas modificaciones parciales, sin alterar la estructura fundamental de la ley 13.031, con el objeto de contribuir a su mayor perfección técnica.

La sanción de la ley 13.031 ha marcado, sin duda alguna, una etapa decisiva. Significó nada menos que el tan anhelado advenimiento de la Nueva Universidad «señera y señora, libre de tutelajes e interferencias», de que había menester la Nueva Argentina.

Cabe felizmente afirmar, a los seis años de su vigencia, que ninguna de sus instituciones fundamentales requiere ser derogada. Pero ocurre que en ese lapso han acaecido dos hechos nuevos, dos sucesos trascendentes que imponen la necesidad de una parcial revisión de la Ley Universitaria: por una parte, la Constitución Nacional de 1949, y por la otra, el segundo Plan Quinquenal de gobierno (ley 14.184).

En ambos documentos, en los que se precisa con nitidez el estado actual de la Doctrina Nacional, se menciona reiteradas veces a las universidades, fijándose con inequívoca claridad sus lineamientos generales y su misión. Así, por ejemplo, la Constitución Nacional se refiere taxativamente a la autonomía universitaria, a la división del territorio nacional en regiones universitarias, a la Doctrina Nacional y formación política de sus estudiantes y a las academias (artículos 37-IV-4 y 37-IV-5).

Por su parte, el Segundo Plan Quinquenal alude, entre otras cosas, a la gratuidad de las enseñanzas en la universidad (IV-G-8-b), a su vinculación con los egresados (IV-G-8-f), a su deber de prestar aseso-

ramiento al Poder Ejecutivo (IV-G-8-h), y a las precitadas regiones universitarias (IV-E-12-b).

Tan claros resultan los designios expresados en la Constitución Nacional y en el segundo Plan de Gobierno, que el Poder Ejecutivo estima que se trata de mandatos cuyo cumplimiento ya no cabe postergar.

Por lo demás, no es inoportuno agregar que también existen razones de orden material que imponen la pronta revisión de la Ley Universitaria. Su título VII, referente a la dotación económica de las Universidades, vincula la financiación de sus gastos al producido de un impuesto especial. La experiencia demuestra que ello no es conveniente, porque la satisfacción de los primordiales objetivos que el Pueblo espera de sus Universidades no puede estar constreñida dentro de los límites infranqueables de un impuesto determinado.

Finalmente, también ha enseñado la experiencia la ventaja de eliminar de la ley, o de simplificar, algunas enunciaciones excesivamente detallistas, más propias de una flexible reglamentación ulterior que de un cuerpo legal básico.

Por las razones expuestas, quiera Vuestra Honorabilidad prestar su aprobación a éste proyecto, a fin de dotar a la nueva Universidad Argentina del instrumento legal que requiere para el cumplimiento de sus altos fines.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Armando Méndez San Martín. — Pedro José Bonanni.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Inclúyese en la ley 13.031, como inciso 16 del artículo 2º, las siguientes disposiciones:

Artículo 2º, inciso 16. — En todas las universidades del país se incorporará al plan de estudios de las respectivas facultades, con el carácter de ciclo preparatorio, las cátedras necesarias para impartir la enseñanza a que se refiere el párrafo final de la parte IV del artículo 37 de la Constitución Nacional, que dispone el establecimiento de cursos obligatorios y comunes destinados a la formación política de los estudiantes de todas las facultades, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados por la Constitución.

Los cursos integrantes del curso preparatorio se ajustarán a las siguientes normas generales:

- a) Serán esencialmente formativos y los programas de enseñanza deberán ajustarse a proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos y generales de «filosofía y ciencias políticas»; «historia política e institucional de la civilización occidental»; «historia política, social, económica y

cultural de la República Argentina»; e «instituciones y realizaciones de la Nueva Argentina»;

- b) Tendrán la duración de un año lectivo y la enseñanza a impartirse deberá destacar especialmente el contenido ético de las diversas disciplinas que lo integran.
- c) Los programas de enseñanza del ciclo preparatorio se correlacionarán adecuadamente a fin de que, en cada uno de ellos se proporcione a los estudiantes una síntesis de la realidad actual del país, considerada de acuerdo con la doctrina justicialista del general Juan Perón y la acción social desarrollada por la señora Eva Perón.

Art. 2º—Las universidades reglamentarán todo lo concerniente a la organización del ciclo preparatorio y dispondrán lo conveniente para que éste quede implantado en todas las facultades del país a partir del curso lectivo de 1953.

Art. 3º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos Inocencio Goitia. — Angel J. Miel Asquía. — Héctor J. Cámpora. — Eduardo J. Forteza. — José Alonso. — Antonio J. Benítez. — Luis Cantore. — Beato Miguel Tejada. — Eduardo I. Rumbo. — Celina E. Rodríguez.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—El inciso 2º del artículo 57 de la ley 13.031 (reforma universitaria) quedará redactado de la siguiente forma:

Presentar anualmente su programa y proponer el plan de distribución de la enseñanza teórico-práctica con los profesores adjuntos, según la reglamentación de cada facultad. En las asignaturas en que se estudie la economía, la soberanía y el proceso social y político de los Estados contemporáneos los programas de estudio deberán exigir el conocimiento de la actualidad económica, política y social de la República.

Art. 2º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Héctor J. Cámpora. — José Alonso. — Ernesto Carreras. — Aimar A. Balbi. — Amando Vergara. — Angel J. Miel Asquía.

Sr. Presidente (Benítez).—En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Forteza.—Señor presidente, señoras y señores diputados: el mensaje con que el Poder Ejecutivo ha acompañado el proyecto de reformas a la ley 13.031, que en este momento considera la Honorable Cámara, destaca con sobrada razón que la sanción de dicha ley ha marcado

una etapa decisiva en el proceso de renovación institucional en que se halla empeñado el superior gobierno de la Nación al significar nada menos que el anhelado advenimiento de la nueva universidad de que había menester en la nueva Argentina.

Pero las excelencias del documento legislativo no deben crear en gobernantes y gobernados la creencia de que se han alcanzado con él las cimas de la definitiva perfección, que no es de este mundo.

No hace mucho, en oportunidad de realizarse el Congreso de Derecho Comercial celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el excelentísimo señor presidente de la Nación aprovechó la coyuntura para fijar su pensamiento acerca de cómo deben jugar las nociones de estabilidad y de perfectibilidad en la vida de las instituciones, señalando que el alto grado de estabilidad que les confiere la Constitución no puede ser un óbice para su paulatina evolución, sin la cual los pueblos envejecen y mueren.

Y no podía ser otro su pensar, porque un gobierno esencialmente renovador y dinámico, como es el nuestro, nunca podrá considerarse definitivamente satisfecho con la obra realizada. En cierto sentido puede decirse que para todos los hombres y mujeres del movimiento peronista la obra de renovación institucional a que estamos dedicados hace ya más de una década comienza cada mañana de nuestra vida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos.)

Podría sostenerse quizás que las reformas de la índole de la que se proyecta para la ley universitaria no revisten el carácter de urgencia que deben tener los asuntos a tratarse en sesiones extraordinarias. Pero si se va al fondo de las cosas se advierte que tal afirmación es sólo valedera si se sustenta un concepto restringido, materialista de lo que es urgente. Para nuestro gobierno, que propugna un concepto espiritualista de la política, también la satisfacción de las necesidades de orden espiritual constituye una necesidad urgente. ¿Cómo podía ser de otro modo si la meta primera y postrera de todos nuestros afanes es la realización en la Argentina y por los argentinos de ese humanismo integral que está en la entraña misma de la doctrina justicialista? ¿Y cómo no habrían de merecer nuestras universidades una consideración preferente, siendo así que ellas constituyen los puestos de avanzada que deben dar el rumbo en la lucha por el triunfo de nuestra posición humanista?

La verdad es que si bien ninguna de las instituciones fundamentales de la ley 13.031 requiere ser derogada ocurre que —como bien lo subraya el Poder Ejecutivo— han acaecido dos hechos nuevos, cuya trascendental importancia impone la necesidad de una parcial revisión de la ley universitaria. En efecto, ha sido sancio-

nada en 1949 la Constitución justicialista, y, por si esto fuera poco, hemos tenido oportunidad de convertir en ley de la Nación el segundo Plan Quinquenal de gobierno proyectado por el Poder Ejecutivo.

En estos fundamentales documentos, al tratar de las universidades, no sólo se consolida la renovación de que fueron motivo al sancionarse la ley 13.031 sino que se especifican taxativamente algunas orientaciones que importa sean concretadas, sin demora, en el cuerpo de la ley universitaria.

En rigor, si fuese menester formular una apreciación de conjunto del proyecto sometido por el Poder Ejecutivo a nuestra consideración, diría que se trata no tanto de una nueva ley como de importantes reformas introducidas a la ley 13.031, tendientes, por una parte, a adecuarla integralmente a las exigencias impuestas por la Constitución Nacional y por el segundo Plan Quinquenal de gobierno, y por otra, a simplificar su articulado, difiriendo la regulación de muchas cuestiones de importancia secundaria a una etapa reglamentaria ulterior. En ambos aspectos cabe afirmar que el proyecto del Poder Ejecutivo logra ampliamente los objetivos perseguidos.

En todas las épocas, cualesquiera sean los países, el problema acerca de los objetivos primordiales de la universidad ha sido uno de los más arduamente discutidos, pues aun cuando en la teoría y la doctrina ha sido ya resuelto, no es menos cierto que las dificultades surgen en gran medida cuando se entra al terreno de la aplicación práctica.

Por tales motivos, todos los espíritus se han visto enfrentados cuando se ha pensado: ¿cuál es el ideal de la universidad?

De acuerdo a las distintas corrientes se han creado distintos tipos de universidades, y teniendo en cuenta los variados fines que cada sistema tiene en vista se han agrupado en tres tipos definidos. Así tenemos la universidad alemana, la inglesa y la latina.

La universidad alemana tiene como principal objetivo la investigación de la ciencia y la formación de hombres de ciencia. No se preocupa tanto de la ciencia conocida como de la manera de «enseñar a hacer ciencia». Como dice Giner de los Ríos en su obra *Pedagogía Universitaria*, tiene el inconveniente de ser demasiado intelectualista y de sacrificar el hombre al estudiante, por el olvido de lo que podíamos llamar humanismo. Es la universidad puramente científica.

La universidad inglesa, por el contrario, tiende a conseguir una educación general de sus alumnos; trata de dar a los estudiantes una cultura más intelectual que científica. Atiende al desarrollo general del estudiante, desde el vigor del cuerpo hasta la energía de la individualidad y de la independencia; al carácter

moral, al interés por la vida pública y, sobre todo, al hábito de los buenos modales, a fin de desenvolver en el universitario el ideal del *gentleman*, condición muy apreciada por el inglés.

La universidad latina, en términos generales, tiende a la preparación de carreras profesionales para que hagan de su actividad un medio más o menos lucrativo de vida.

Los fines enunciados en las tres corrientes no se excluyen entre sí. Su propio carácter de universalidad permite abarcar la totalidad de dichos objetivos a fin de lograr una adecuada educación formativa y total del hombre.

Por ello, dichos fines no deben necesariamente excluirse entre sí, sino más bien complementarse. De tal manera, en la actualidad nadie puede aspirar a un tipo ideal de universidad orientado exclusivamente a conseguir un solo objetivo.

Ortega y Gasset, en su libro *Misión de la Universidad*, expresa que los fines específicos de la universidad son: 1º, formar hombres cultos; 2º, buenos profesionales; 3º, hombres aptos para una futura labor científica.

Agrega más adelante que la universidad ideal consistirá por lo tanto, en primer lugar, en la enseñanza superior que debe recibir el hombre medio, es decir, que de este hombre medio hará un hombre culto, o sea: situarlo a la altura de los tiempos y finalmente hacer del hombre medio un buen profesional con aptitudes para desarrollar una futura labor científica.

Hablaré ahora de la nueva universidad argentina.

Estimo un extraordinario acierto la circunstancia de que el proyecto inicie su articulado, a modo de magnífico pórtico, con la afirmación de que las universidades argentinas habrán de cumplir su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social.

Es cada vez más notorio y patente que la doctrina nacional, a diferencia de otras ideologías que no es del caso especificar, se inspira en principios humanistas y de solidaridad social, que deben irradiar su luz generosa sobre todas las instituciones del país. Ello es particularmente importante en el caso de las universidades por la excepcional repercusión que cabe esperar de sus enseñanzas.

Por eso la nueva ley descansa en el inciso 1º de su artículo 1º que incumbe a las universidades, al par que la enseñanza en el grado superior, el desarrollo de la cultura y la afirmación de la conciencia nacional de acuerdo con la orientación fijada por la Constitución.

Por si eso no fuera bastante, el inciso 2º del mismo artículo le agrega el siguiente objetivo: «La formación humanista de docentes y estudiantes, con preferencia a toda especialización técnica, inculcándoles la noción de su responsabilidad social y la conciencia de que han de servir al pueblo.»

No necesito destacar la importancia que tienen estos postulados fundamentales. Ninguna institución más calificada que la universidad para promover la formación de una conciencia nacional inspirada en los principios fijados por la Constitución. También es básica la afirmación de que, sin perjuicio de las especializaciones técnicas, las universidades han de perseguir antes que nada a toda costa, la formación humanista de sus docentes y estudiantes.

En cuanto a la norma según la cual tanto los docentes como los estudiantes han de servir al pueblo, adquiere un sentido hondo y renovador al conferir a la universidad un sentido popular en la acepción más estricta y digna de la palabra, de que hasta hace poco había carecido.

En la nueva universidad argentina los fines concretos de la enseñanza son: cultura, ciencia, educación, profesión, humanización y solidaridad social con una amplitud que alcanza a toda clase de enseñanza y con el objeto de conseguir una educación integral. La universidad debe preparar tanto para el ejercicio de las profesiones liberales, como para la vida en toda su complejidad.

La universidad deberá ser una institución que promueva el progreso fijando normas para el adelanto de la colectividad, removiendo los obstáculos que la imperfección humana y las fuerzas regresivas levantan en el camino de su desenvolvimiento.

Sin la función social las universidades no tienen razón de existir, dice Prieto en su libro *El sentido social de la cultura universitaria*.

Tal concepto comparte Giner de los Ríos cuando sostiene que la universidad debe estimular la vocación y el saber, la reflexión intelectual y la indagación de la verdad, el desarrollo de la energía corporal, el impulso de la voluntad, las costumbres puras, la alegría de vivir, el carácter moral, los gustos sanos, el culto del ideal y el sentido social práctico y discreto de la conducta.

Como señala Vallejos en su trabajo *La función de las universidades y los seminarios jurídicos*, la universidad argentina debe servir a la argentinidad. Debe custodiar y defender la tradición política y social argentina; enaltecer la psicología del pueblo, verdadero constructor de la historia; determinar dónde está la independencia y dónde el vasallaje; qué es lo histórico y lo antihistórico; qué es lo nacional y lo antinacional; resaltar el significado de las fuerzas morales que animan los grandes ideales y la belleza espiritual y constructiva de las acciones que la realizan; robustecer la conciencia de ser un país políticamente soberano, socialmente justo y económicamente libre. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

La universidad argentina, como se ha repetido siempre, como órgano del Estado no puede substraerse a los problemas de la Nación ni ser ajena a la cultura de su época, si entendemos por tal lo que Ortega y Gasset llama el «conjunto de ideas vivas que el tiempo posee», tiene el mandato imperativo de la ley de cumplir una función social en beneficio del engrandecimiento colectivo, vincularse a la realidad del país y vivir al ritmo de las inquietudes de la hora. La Nación tiene el derecho de recibir de sus organismos soluciones para los diversos problemas que se le plantean.

El general Perón expresó: «hay que formar al alumno en las tres grandes y nobles actividades: su capacidad, su cultura física y su cultura espiritual y mental», agregando: «no podemos afirmar que un país sea culto ni tenga gran adelanto en su ciencia porque cuente con tres, cuatro o diez sabios u hombres cultos, mientras el resto es un mudo y torpe rebaño de ignorantes. La cultura del pueblo estriba en que aun cuando no poseamos ningún sabio ni ningún hombre extraordinariamente culto, tengamos una masa popular de una cultura aceptable. La patria del futuro ganará más si al par de cultivar la inteligencia de los alumnos, se cultiva su espíritu, para que los técnicos del futuro piensen antes como argentinos y como hombres, que como profesionales». Debemos retomar la senda dejada equivocadamente, para que nuestras universidades formen no sólo técnicos sino también ciudadanos de la nueva Argentina, y como dijo el general Perón, que «la ciencia y la cultura sean del pueblo y que el pueblo esté formado por hombres que amen a los hombres y no que preparen su destrucción o desgracia». (*Aplausos.*)

Queremos profesionales que no olviden la solidaridad, que se sepan iguales a los otros hombres que habitan el suelo argentino y que sientan con ello que el engrandecimiento individual de cada uno llevará al engrandecimiento de los otros y del país; queremos también que la universidad argentina esté imbuída de los principios del justicialismo, declarados por ley doctrina nacional.

El objetivo fundamental del país en materia de educación es realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo, sobre la base de los principios esenciales de la doctrina nacional, doctrina que tiene como fin esencial y supremo alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad.

Este es el concepto de la universidad argentina dentro de la concepción justicialista.

El inciso 7º del ya citado artículo 1º del proyecto impone a las universidades la obligación

de asegurar la gratuidad de los estudios. Adquiere así expresa concreción legal, en el orden universitario, otro de los postulados renovadores del movimiento justicialista. Una auténtica democracia sólo puede consistir en una absoluta e integral igualdad de posibilidades para todos. Ahora bien, ¿cómo pensar que se logra esa igualdad de posibilidades asegurando solamente la gratuidad de la enseñanza primaria y, eventualmente, la secundaria? Si hemos de ser consecuentes con este principio de la igualdad de posibilidades, fuerza es abrir las puertas de la universidad, de par en par, a todos, sin retaceos ni gabelas que signifiquen odiosas diferencias, que mantienen desigualdades con las que el justicialismo no puede transar.

El inciso 8º del artículo 1º del proyecto asigna a las universidades la obligación de interesarse por los problemas nacionales. Merece especial mención esta imposición porque termina, de una vez por todas, con la vieja concepción de orígenes medievales, según la cual las universidades son una suerte de torre de marfil, en la que sus integrantes podrían aislarse al margen de los problemas, pasiones, necesidades y dolores del pueblo circundante.

Sin asumir por ello funciones políticas o legislativas, la universidad tiene que hacerse cargo de los problemas nacionales de actualidad, suministrando los elementos de juicio teóricos indispensables para el mejor enfoque de estos problemas. No se le pide que los solucione, sino solamente —y ya es bastante— que ilumine sus vertientes, sus aspectos filosóficos, científicos y técnicos, contribuyendo con ello a su mejor solución.

Por si esto no fuera bastante, el inciso 9º del ya citado artículo 1º señala que en caso de que los organismos del gobierno consideren oportuno requerir concreto asesoramiento a las universidades, será obligación de las mismas la prestación de dicho asesoramiento. Por lo demás, se trata de una obligación que venía específicamente impuesta por el segundo Plan Quinquenal.

El artículo 2º de la ley establece, para todas las universidades, la obligación de que sus planes de enseñanza deberán incluir, además de sus específicos, cursos dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución. También esta disposición legal impuesta por la Constitución —artículo 37— constituye un gran paso adelante en la renovación de la enseñanza universitaria.

Tiende esta innovación hacia dos finalidades cuya importancia teórica y práctica me permito destacar muy especialmente. En efecto, al imponer la obligatoriedad de cursos de cultura filosófica a los estudiantes de todas las carreras universitarias, se superan los inconvenientes de la especialización científica y técnica, por el

procedimiento más apto para ello: la «compensación» de la especialización mediante el suministro de una cultura filosófica fundamental, adecuada para hacerse cargo del sentido del mundo, de la vida y de la propia ubicación en el cosmos.

Por otra parte, tampoco es posible que los egresados universitarios no tengan un conocimiento acabado de la doctrina nacional y una formación política a la altura exigida por el mismo nivel de su preparación.

El artículo 4º de la ley divide el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de las cuales ejercerá jurisdicción la respectiva universidad. Viene a cumplir con una obligación impuesta no sólo por la Constitución Nacional de 1949 (artículo 37), sino también por el segundo Plan Quinquenal. Tiende esta división, entre otras cosas, a facilitar la organización por cada universidad, dentro de su zona de influencia, de los estudios regionales así como la promoción de aquellas artes técnicas y aplicadas más aptas para el acrecentamiento de las actividades económicas locales.

Por supuesto que en estas materias el proyecto, con todo acierto, se limita a la enunciación de directivas, y la concreción dependerá de reglamentaciones a dictarse.

Hasta aquí me he ocupado de señalar los rasgos fundamentales de la nueva ley universitaria, tal como aparecen enunciados en el primer título de su articulado. Pero no se agotan con ello las reformas.

Ya he anticipado que el proyecto tiende también a mejorar en algunas cuestiones de detalle la ley vigente, introduciendo algunas reformas aconsejadas por la experiencia de los seis años transcurridos desde que entrara en vigor. Sin propósitos exhaustivos enunciaré a continuación, en forma sumaria, los principales puntos o cuestiones que han sufrido alteración con respecto a la ley 13.031.

Artículo 15, inciso 4º, intervención de las facultades. Para evitar algunas dificultades interpretativas a que había dado lugar toda vez que se trataba de intervenir una facultad, el proyecto atribuye específicamente al Consejo Universitario la atribución de resolver la intervención de las facultades cuando su funcionamiento no se ajuste a la ley.

Artículo 47: la ley 13.031 no limitaba el número de profesores adjuntos por cada cátedra; solamente establecía que podrán designarse hasta dos profesores adjuntos asistentes por cátedra, es decir, remunerados.

El proyecto (artículo 47), tal como la ley 13.031, no limita a las facultades fijar el número de profesores adjuntos que podrá tener cada cátedra, pero, eso sí, establece que en cuanto a la remuneración no podrán exceder de dos profesores por cátedra.

El artículo 71 del proyecto (modificaciones transitorias) determina que, sin perjuicio de lo expresado en el artículo 47, los profesores adjuntos que se encuentren designados al 31 de octubre de 1953, tendrán derecho a la percepción de las remuneraciones a que se refieren los artículos 56 y 57 del proyecto. Vale decir, que este artículo transitorio contempla la situación de las cátedras que actualmente tienen más de dos profesores adjuntos.

La comisión entiende que los Consejos Directivos deben arbitrar todas las medidas conducentes a turnar en *forma obligatoria* los dos cargos rentados para profesores adjuntos, entre los profesores adjuntos que existieran y a que se refiere el artículo 47 del proyecto.

Artículo 56: remuneración de los rectores, decanos y profesores. En vez de fijar en el cuerpo de la ley el monto de los sueldos de los rectores, decanos, como así también el de los profesores universitarios, el proyecto se limita, con buen criterio, a establecer el principio de la uniformidad de las remuneraciones en todas las universidades argentinas, dejando aquella fijación para la ley general de presupuesto de gastos de la Nación.

Artículo 57: régimen de los estudiantes. Esta materia, eminentemente flexible y reglamentaria, no se presta por sus características para ser regulada por la ley universitaria. De ahí que en el proyecto se haya optado por establecer que los requisitos de admisión, categorías, promociones, concesión de becas, épocas de examen, etcétera, serán reglamentados por el Consejo Nacional Universitario.

Artículo 58: representación estudiantil. Frente a la debatida cuestión acerca de si los estudiantes deben o no tener representación en los organismos de gobierno de las facultades, el proyecto se coloca en una posición extraordinariamente razonable. Por un lado, a diferencia de los que se empeñan en negarles derecho a participar en alguna medida del gobierno universitario, les reconocen expresamente este derecho, que parece indiscutible si se tiene presente que, al fin y al cabo, el estudiante es el factor esencial de la vida universitaria, en el que están cifradas las esperanzas del mañana. Pero esto no significa que debe atribuirseles facultad para resolver cuestiones que escapan a su esfera de competencia, capacidad y posibilidades. De ahí que el proyecto sólo concede el voto al delegado estudiantil ante el Consejo Directivo en aquellas cuestiones que afectan directamente a los intereses estudiantiles.

Artículo 59: la enseñanza para graduados. En esta materia, el proyecto se hace cargo de que la enseñanza impartida por las universidades no puede considerarse terminada con la graduación de sus egresados. Existe siempre la posibilidad de efectuar nuevas investigaciones o

especializaciones que hagan postergar los confines de la ciencia. De ahí que merezca aplauso la disposición del proyecto que establece para las facultades la obligación de organizar centros de graduados o cursos de perfeccionamiento o especialización para los mismos. Por lo demás, en este punto, la ley no hace más que llevar a la práctica un expreso mandato del segundo Plan Quinquenal.

Artículo 60: El artículo 60 de la ley enuncia las atribuciones conferidas al Consejo Nacional Universitario, las que aparecen indudablemente ampliadas con relación a las que le confiere la ley 13.031. No obstante ello, es de notar que el proyecto sólo le confiere facultades de coordinación, reglamentación, racionalización y asesoramiento, cuidándose muy bien de asignarles funciones administrativas o contenciosas. Este es un acierto, pues la integración descentralizada del organismo, constituido por los rectores de todas las universidades del país, presididos por el ministro de Educación, hace que no sea adecuado para resolver este tipo de asuntos.

Señor presidente: a partir del gobierno del general Perón la universidad inició una etapa consagratória para la enseñanza superior argentina. Sus puertas se abrieron sin distingo de clases ni diferencias económicas y el pueblo tuvo acceso a las aulas, sin otra condición que la acreditada por la capacidad y el afán de superación.

La importancia del progreso y de las mejoras introducidas en el régimen universitario, queda manifiesta con la enunciación de algunas de las innumerables medidas adoptadas y que pasaré a reseñar sintéticamente. Algunas de ellas nacieron por la gestión directa del excelentísimo señor presidente y otras se inspiraron en sus claras concepciones sobre los objetivos de la enseñanza universitaria.

La labor desarrollada en materia de cultura universitaria durante la primera presidencia del general Perón ya dejó expresamente determinada la misión formativa de la nueva universidad, sus objetivos científicos y culturales, el carácter de la enseñanza, las funciones de las autoridades rectoras, las condiciones del estudiantado y las fuentes de sus recursos.

Veamos, pues, algunas de las innúmeras medidas adoptadas, como ya dije.

Primero: se coordinaron los planes de las carreras similares que se cursan en las distintas universidades, las condiciones de admisión y las correspondencias de estudios, sobre las que pesaba la más injustificada anarquía. De igual manera se facilitó la rendición de los exámenes y se suprimieron las pruebas de equivalencias o de ingreso que resultaban innecesarias o injustificadas para establecer la preparación de los aspirantes.

Segundo: numerosas facultades e institutos nacieron de la necesidad y no de artificiosas e interesadas planificaciones. Y al calor de la obra creadora del general Perón, los vetustos e inadecuados locales en donde se impartía la enseñanza se substituyeron con adecuadas y confortables edificaciones. Los créditos de la comisión de construcciones universitarias superan los 200.000.000 de pesos, gran parte de los cuales se han concretado en los modernos y monumentales edificios que en todo el país constituyen el orgullo de la arquitectura del género.

Tercero: la creación de nuevas cátedras enderezadas a ahondar el sentimiento argentinista de los jóvenes y a dotarlos con la mejor interpretación de la doctrina justicialista, en la revisión de los planes y los programas de estudio, con la inclusión del contenido espiritual de cuya falta adolecían; el auspicio y la organización de congresos científicos de resonancia mundial y de indiscutible provecho para la ciencia argentina y la conexión de la universidad con los distintos sectores de la actividad nacional. La labor de extensión universitaria desarrollada con los obreros en los sindicatos y fábricas y con los industriales, son proficuas realizaciones que también cuentan merecidamente en el haber de la obra universitaria.

Frente al total de 69.497 alumnos de 1946, eran 129.843 los jóvenes que cursan estudios en la universidad en 1952, vale decir, que la inscripción registra un aumento del 189 por ciento. Frente a un presupuesto de 48.234.561 pesos para 1946, el de 1952 se eleva a 307.101.126 pesos, vale decir, que las cifras acusaron el 636 por ciento de progreso. En este caso las cifras son por demás elocuentes.

Cuarto: casi 4.000.000 de pesos insumen al erario público las becas de estudio, que traducen el apoyo estadual a los bien dotados intelectualmente pero carentes de recursos para satisfacer su afán científico, literario o artístico.

Quinto: la distribución gratuita de 174.642 ejemplares de apuntes magistrales que abarcaron 90 títulos y cuya edición insumió más de un 1.000.000 de pesos, permitió a los alumnos de las universidades nacionales contar con valiosísimos elementos de estudio por los que habrían debido desembolsar una suma superior a los 4.000.000 de pesos.

Sexto: por primera vez el Estado instaló residencias para los estudiantes de ambos sexos y de todas maneras apoyó las inquietudes artísticas, facilitó viajes al interior del país y a zonas marítimas y de veraneo, las actividades gimnásticas y deportivas y habilitó campamentos de vacaciones.

Dejo así, someramente, esbozado el contenido doctrinario de este proyecto de reformas a la ley universitaria 13.031, que implica un paso adelante, un vuelo de altura, en la integral so-

lución de los problemas espirituales, tal como lo postulara el general Perón en su cruzada revolucionaria.

Con esta sanción daremos cumplimiento a uno de los objetivos especiales del segundo Plan Quinquenal, de realización inmediata e imprescindible.

Su articulado está plenamente de acuerdo con las aspiraciones de la gran comunidad universitaria argentina, en la etapa justicialista, con su sed de pueblo y su afán señero en la cultura de occidente.

Este proyecto está cobijado bajo la sombra augusta de la Constitución peronista de 1949, símbolo de la autodeterminación de un pueblo viril, que ha puesto sobre la balanza de su devenir histórico realidades incommovibles que ningún otro país de la tierra ha realizado: la dignificación del trabajo, la unidad del pensamiento y de la acción, la perfecta armonización de la labor del músculo y del pensamiento.

Y todo ello, señor presidente, por obra y gracia del jefe de la revolución, el insigne conductor del movimiento, el Libertador de la República, nuestro jefe, el general Perón, para que en su obra redentora convierta esta bendita tierra en el edén que ha soñado su corazón de patriota y su incomparable genio político. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Se define nuestro programa partidario por una cultura al servicio de la emancipación espiritual y capacitación técnica del hombre; por una educación en la libertad y para la libertad, que respete el alma del estudiante y desarrolle su personalidad moral; educación integral que garantice al pueblo y a las naciones igualdad de condición, y oportunidades en el pleno desarrollo de la personalidad física, moral y cultural, para el cumplimiento de las responsabilidades nacionales y humanas.

Es también nuestra decisión dar vigencia a los ideales sustentados por la reforma universitaria de 1918, hoy abatida por la reacción.

Al amparo de esos conceptos quedará fijada nuestra posición en el debate y asimismo señalada la orientación de nuestro despacho, en total coincidencia con el presentado en 1947 por los talentosos representantes de nuestro sector, Alfredo Calcagno y Luis Dellepiane.

La universidad, en su misión formativa y orientadora, no puede permanecer al margen de la vida ni ser insensible a los estremecimientos de un mundo en permanente evolución. En esa tarea de integración y perfeccionamiento es evidente que han caducado las viejas fórmulas que hacen de la universidad escuela de profesionales encerrada en claustros

sin contacto con el pueblo. Por eso, el profesor que orienta la juventud no puede ser ya un funcionario sin alma, que olvide enseñar con el ejemplo de una conducta insobornable al servicio de la justicia y de la libertad, que son exigencias de nuestro destino en las grandes realizaciones del futuro.

Las nuevas formulaciones del equilibrio social nos dicen también que la universidad no puede desentenderse de los problemas que plantea la cultura integral, además del aspecto científico y técnico profesional...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — ...es por eso que se exige del educador ser un verdadero maestro capaz de exaltar la personalidad, fortalecer el carácter y desarrollar el espíritu crítico para estimular todas las posibilidades creadoras haciendo del educando un instrumento consciente de la actividad social y política del país. Junto con el estudio de las ciencias y de la investigación, la universidad debe ser capaz de sugerir ideales de convivencia solidaria que permitan la formación del hombre argentino con clara conciencia nacional y americana. Esos fueron los ideales de la reforma universitaria para obtener los verdaderos «constructores de almas» ideales que animaron nuestra adolescencia y que Yrigoyen consagró en 1918, resolviendo una grave crisis de su tiempo.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — La universidad, dijo Joaquín V. González al inaugurar los cursos de 1917 en La Plata, debe mantener la orientación general de los estudios, sin mengua de la más completa libertad individual del profesor. Es un organismo; vive en el medio humano, no puede desentenderse de los movimientos de la vida y del medio. La universidad es una educación del individuo, de la sociedad y del Estado y así de los Estados, formando el hombre culto forma la sociedad de los hombres y las naciones cultas. En la faz política, agregaba, es menester educar en y para la libertad, formar una entidad nacional capaz de perpetuarse y mejorar las condiciones de la vida asociada, libre y progresiva, para hacer una patria culta y fuerte.

Ingenieros sostenía, con razón, que las sociedades americanas se han constituido diversamente de las naciones orientales y europeas, en otro medio y con otra amalgama inicial. El ambiente, los elementos étnicos en él refundidos, los orígenes de su cultura y las fuentes de su riqueza, la volición de sus ideales, todo lo que converge a plasmar una mentalidad propia, difieren en muchas partes de los modelos conocidos. Por eso la renovación de las ideas generales

deberá operarse en el continente americano con ritmo diverso, diverso al de las distintas naciones formadas por elementos y tradiciones también distintas.

La caducidad de los viejos esquemas para dar paso a los nuevos sistemas de ideas haciendo de la universidad organismos de coordinación y de síntesis en la vida social, nada tienen que ver con el cálculo utilitario de aparcería política que sólo sirve para matar la universidad. Dijo Gabriel del Mazo en el debate de la ley vigente, a propósito de parcialismo político, que Yrigoyen, lejos de considerar a la universidad propiedad del partido triunfante, amparó objetivamente su transformación y los principales actores jóvenes no pertenecían a su política. Ayudó así a que los estudiantes realizaran en el país una obra imperecedera en procura de las bases pedagógicas y por lo tanto, correlativamente políticas, económicas y sociales de una cultura nacional auténtica en la identificación del saber y de la justicia.

Nosotros sostenemos la reforma universitaria, hoy más necesaria que nunca, porque ella significó el impulso de progreso, el espíritu de una inquietud expansiva y universalista dentro del viejo claustro. Renovó métodos a la enseñanza y le dió contenido social en su afán de estructurar las bases de una universidad nueva al servicio de nuevas concepciones. La experiencia demostró que tenía razón la juventud: le quitó su antigua tristeza al aula y trajo en su santa rebeldía preocupaciones que venían del pueblo abriendo las compuertas de un profesionalismo de privilegios doctorales, para ampliarse en la vida social con claro contenido anti-imperialista.

Fundado en esos conceptos es que nosotros afirmamos nuestra disidencia total con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

La ley 13.031 en vigor es deficiente, significa un grave retroceso en cuanto termina con principios fundamentales de organización universitaria esbozados ya en 1884 con la reforma de Avellaneda en materia de autonomía económica y universitaria. La ley que estamos considerando —según lo voy a demostrar— retrocede mucho más: en materia de docencia libre, métodos pedagógicos de investigación científica, extensión cultural y social y gobierno de la universidad, elementos indispensables para promover las mejores fuentes de toda actividad creadora.

Sr. Albrieu. — Nunca se han cumplido.

Sr. Nudelman. — En materia de gobierno de la universidad se anula el derecho del profesorado, de los egresados y de los estudiantes a tener la dirección de su propia casa, colocándolos así en peores condiciones de la que tienen los sindicatos obreros.

Sr. Albrieu. — ¿Cuándo han tenido esos derechos los universitarios?

Sr. Nudelman. — La universidad desaparece como tal para ser manejada como un organismo burocrático desde la Casa de Gobierno.

Sr. Albrieu. — Cuando intervenían los estudiantes lo hacían gobernados por los grupos oligárquicos que tenían en sus manos la universidad.

Sr. Nudelman. — El proyecto sometido a la consideración de la Honorable Cámara —repite— no sólo mantiene las deficiencias de la ley de 1947, sino que las acentúa. Por este proyecto no solamente el rector será un simple funcionario designado por el Poder Ejecutivo, sino que también lo serán indirectamente los decanos elegidos por el rector...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — ...los profesores y todo el personal docente, auxiliar de la docencia y técnicoprofesional de cada cátedra.

Ya no se exigirá como condición para ser rector la de poseer el título máximo de la facultad nacional correspondiente y la antigüedad de diez años como diplomado, que exigía la ley anterior.

En la reforma del Senado se agrega que el rector debe ser argentino «nativo». No es suficiente que sea solamente argentino. Como muy bien lo dijera el diario «La Nación» en su editorial del 11 de diciembre último, un recién egresado con treinta años de edad, sin ninguna experiencia docente o en el gobierno universitario, podrá asumir las delicadas funciones de rector de la universidad argentina.

Sr. Albrieu. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Nudelman. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — La Constitución Nacional establece, como requisitos para el desempeño de una función un poquito más difícil que la de rector, cual es la de presidente de la Nación, los de ser argentino nativo y ser mayor de treinta años de edad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Efectivamente, la Constitución Nacional establece las condiciones que ha señalado el señor diputado para ser candidato a presidente de la República. Pero eso nada tiene que ver con el asunto que consideramos, porque la consagración de presidente de la República es el resultado de una elección del pueblo soberano, quien decide sobre el caso de acuerdo con la Constitución.

Aquí es el Poder Ejecutivo, y sólo él, quien va a elegir al rector de la universidad, elección

que sin duda recaerá —según ocurre actualmente en todos los órdenes— en un elemento adicto a su política. Nosotros sostenemos, en cambio —y lo proponemos en nuestro proyecto—, que deben ser los profesores, los estudiantes y los egresados, quienes en conjunto orienten y dirijan su propia universidad, eligiendo al rector y al resto de sus autoridades, profesores y personal técnico auxiliar.

Para ser decano se suprime el requisito de los treinta años. Es decir que será suficiente con que haya pasado los dieciocho años... También el Senado agrega el requisito de argentino «nativo». En materia de designación de profesores se mantiene el sistema de sorteo para la formación de los jurados. De manera tal que profesores sin la competencia especializada, por haber resultado electos de materias afines, pueden ser los encargados de discernir sobre las condiciones científicas o docentes de un candidato a profesor. Se trata, señor presidente, de una cuestión demasiado seria, de la que dependerá la formación jurídica o técnica del país, o de la salud del pueblo, en el caso de la Facultad de Medicina, como para confiar en el azar la elección del cuerpo docente.

Por lo demás se liquidan totalmente los pocos elementos de autonomía económica que tenía la universidad. Nosotros, en cambio, tratamos de dar plena autonomía a la universidad. Consideramos que ésta debe ser integral, en el gobierno y en la capacidad de organizarse, por medio de sus consejos universitarios, y en el manejo de sus finanzas.

De acuerdo con el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, la universidad pasa a ser una simple dependencia burocrática del gobierno. Y esto ocurre en un momento en que todos los congresos universitarios de América y del mundo sostienen la necesidad de un régimen de autonomía para el cumplimiento de sus objetivos fundamentales: la docencia, la investigación y la cultura integral.

Desaparece la universidad cuando se elimina su autonomía. Es la sombra de una universidad transformada en un instituto dependiente del Poder Ejecutivo. En la falta de autonomía se compromete el interés y el prestigio de la universidad, pero sobre todo el interés del país.

De la universidad depende el progreso de la ciencia, la capacidad de los profesionales, el proceso de propagación de la cultura. No puede pesar sobre ella otra preocupación que las señaladas para buscar la verdad y servir al pueblo.

El Estado debe limitar su intervención a una función de simple contralor y, en todo caso, de coordinación para el cumplimiento de las leyes.

En las conferencias mundiales de universidades reunidas en Utrecht, Holanda, en el año 1949, y en Niza, en el año 1950, se dejó establecido por unanimidad de los presentes que la autonomía era una de las columnas sobre las

que debía basarse la vida universitaria. Decisiones análogas se tomaron en el primer Congreso Centroamericano de Universidades, reunido en San Salvador en 1948, y en el primer Congreso de las Universidades Latinoamericanas, de Guatemala de 1949.

Hace muy pocos días se reunió en Chile, desde el 23 de noviembre al 4 de diciembre último, el segundo Congreso de Universidades de Latinoamérica y primera asamblea general de la Unión de Universidades Latinoamericanas, con representación, incluso, de la actual universidad argentina. Por unanimidad se refirmó allí la necesidad de defender la autonomía, estableciéndose, entre otras cosas, que: «En caso de ser violada la autonomía de una universidad de Latinoamérica, la Unión Latinoamericana de Universidades puede protestar ante el gobierno responsable, previa consulta a las universidades asociadas.» ¡Pobres de los profesores argentinos que se atrevieran a la denuncia! Inmediatamente serían tildados de vendepatrias y juzgados como traidores.

También se resolvió que los profesores cesantes de las universidades asociadas que lo deseen deben ser recibidos en su seno, donde se les conferirá tareas similares a las que han perdido. Ya antes de esto, las universidades de América recibieron fraternalmente los valores más representativos de la universidad argentina, que, parias en su propia tierra, debieron emigrar. A maestros eminentes, valores esclarecidos de la cultura y de la ciencia, la universidad argentina les prohibía los derechos de enseñar y de aprender que consagra la Constitución.

Es decir, que mientras en todas partes del mundo, a través de los congresos que vengo señalando, hay una coincidencia, en el sentido de defender la autonomía como elemento vital para la subsistencia de la universidad, en nuestro país, cuna de la reforma universitaria, se acentúa la tendencia autocrática y de «pupilage» que orienta actualmente la dirección de todos los organismos del Estado, destruyendo la universidad, a la vez que los ideales que animó una generación, escribiendo páginas admirables en jornadas heroicas de Córdoba y del resto del país, y extendiendo sus principios por América; principios que, hoy implantados en las principales universidades donde hemos tenido el honor de ocupar sus cátedras, muestran sus grandes beneficios para la ciencia y formación de la juventud, de la que depende el porvenir de la Nación. Se ha dado un gran salto atrás. La reacción contra la que se luchó en 1918 cobra su desquite con este gobierno que se llama a sí mismo de la nueva Argentina.

Sr. Gómez. — Es totalmente falso...

Sr. Nudelman. — Pero siempre ocurre igual. Cada vez que peligra la democracia y se ador-

mece la libertad, también peligra la universidad. Es un hecho conocido; puede confrontarse con la experiencia de América y de Europa.

Se ha demostrado, con documentos a la vista, que el proyecto del año 1947 no era sino una imitación del proyecto de la Italia fascista. Mussolini, al enviar el proyecto de reformas, había manifestado que la universidad nunca «sería suficientemente fascista».

En nuestro proyecto, al sostener la autonomía en la forma más completa, destacamos especialmente el aspecto ético pedagógico. Se faculta al Consejo Superior Universitario, y en algunos casos a la asamblea universitaria, para entender únicamente en apelación para ciertas cuestiones disciplinarias o contenciosas resueltas por los consejos directivos, sin perjuicio de las otras acciones que pudieran corresponder.

El proyecto del Poder Ejecutivo acentúa también un particular retroceso en materia de intervención estudiantil en el gobierno de la universidad. Se dice que tendrán voto solamente en aquellas cuestiones que «afecten a los intereses estudiantiles».

¿Cuáles son las cuestiones de la universidad que no afectan a los intereses estudiantiles? ¿No son todos los intereses de la facultad los que deben importar a los estudiantes, la designación de profesores, incluso? El cuidado de la conducta moral y la libertad de juicio; el embanderamiento sectario y parcial que compromete el libre desarrollo intelectual y moral de la juventud; el manejo de los fondos, la formación de las mesas examinadoras, forma de tomar exámenes, ¿no son acaso todas cuestiones que afectan a los intereses estudiantiles?

Sr. Rocamora. — El señor diputado está creando una universidad al revés.

Sr. Nudelman. — Nada dice el proyecto sobre qué aspectos se ejercerá la limitación. De todas maneras no puede haber restricciones. Todas las cuestiones que afectan a la universidad afectan a los intereses de los estudiantes y en todas deben intervenir.

Sr. Rocamora. — Con ese criterio ustedes llevaron la anarquía total a la universidad.

Sr. Nudelman. — Tienen miedo a los estudiantes, porque los estudiantes, que todavía no han tenido tiempo de contaminarse, mantienen el espíritu insobornable y las manos limpias. Jamás entrarán en combinaciones que afecten la conducta moral y el plano superior de los ideales. Ya voy a demostrar cómo en la actual universidad ha sido posible para la corrupción invadir todos los intersticios. Exhibiré algunos ejemplares y prontuarios como índice elocuente...

Sr. Rocamora. — Los que prostituyeron a los estudiantes en combinaciones raras han sido ustedes.

Sra. Ortiz de Sosa Vivas. — Antes se pagaba a estudiantes para que apoyaran a determinado candidato.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Nudelman. — En el capítulo respectivo del proyecto del Poder Ejecutivo se habla de la representación estudiantil; pero en realidad, con ese nombre y con esa bandera, se trata de cubrir la verdadera mercancía. No puede darse el nombre de representación estudiantil a la que investirá una entidad gremial adicta previamente reconocida. Esa no es la representación de los estudiantes.

Sra. Ortiz de Sosa Vivas. — Y antes ¿qué pasaba?

Sr. Nudelman. — Ya se sabe cómo han sido digitadas esas entidades gremiales reconocidas, pasando antes por el cernidor...

Sr. Otero. — ¿A qué entidades se reconocía antes?

Sr. Nudelman. — ... eso no puede llamarse representación del estudiantado. En el mejor de los casos será una representación parcializada y totalmente sectaria, porque a esa «entidad reconocida» no pueden ingresar sino los que manifiesten absoluta adhesión al régimen imperante...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Otero. — El señor diputado por la Capital insiste en su táctica de costumbre.

Sr. Nudelman. — Autorizo al señor diputado una interrupción para que pueda ilustrarnos acerca de la orientación de la enseñanza universitaria.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital, a quien no se le ha solicitado ninguna interrupción.

Sr. Nudelman. — La representación de los estudiantes debe emanar del voto directo de los propios estudiantes, realizado en comicios libres como proponemos en nuestro proyecto, y tal cual regía en la época de los gobiernos radicales en que se sancionó la reforma universitaria.

Sr. Balbi. — Me permite una interrupción, señor diputado por la Capital, con autorización de la Presidencia?

Sr. Nudelman. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbi. — Quisiera que el señor diputado me contestase si es, o no, exacto que en el año 1923 se mandaron los célebres «cosacos» —como se los llamaba en aquella época— a la Facultad de Ciencias Económicas para reprimir una candidatura que el gobierno de aquel tiempo no quería que fuese elegida.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — El supuesto que plantea el señor diputado es inadmisibile para la época que menciona...

Sr. Balbi. — Ocurrió, señor diputado.

Sr. Nudelman. — ...porque se trataba nada menos que de un gobierno que consagró tras denodados esfuerzos, y en lucha contra la reacción, lo que era aspiración de los estudiantes; mal podría aparecer en los hechos subvirtiendo una decisión que constituía uno de sus grandes méritos.

Sr. Miel Asquía. — Una cosa es la teoría y otra la práctica, señor diputado.

Sr. Nudelman. — La representación de los estudiantes, como he dicho, debe emanar de comicios garantizados por la propia autoridad universitaria y de la libre elección de los estudiantes. Las entidades gremiales o agrupaciones estudiantiles deben tener previamente la oportunidad de debatir los problemas. En el comicio ciudadano consciente de una universidad libre, los estudiantes elegirán luego a aquellos que crean mejores y más dignos. Entonces los elegidos podrán invocar legítimo título. En el proyecto del Poder Ejecutivo se pretende que la invista una entidad que sólo representa un número limitado de estudiantes vinculados por intereses políticos al servicio del régimen gobernante.

El sistema de la elección que sostenemos es el que propugnó entre otras cosas la reforma universitaria de 1918. Estuvo en boga en todas las universidades hasta los luctuosos sucesos del año 30 que determinaron la caída del gobierno legítimo de la Constitución.

Sr. Bustos Fierro. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la autorización de la Presidencia?

Sr. Nudelman. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — La interrupción para la que solicito el consentimiento del señor diputado —cuya exposición he venido siguiendo atentamente— tiende a que signifique si, a su juicio, la participación del estudiantado en la vida universitaria está exclusivamente determinada por la representación de los estudiantes en los consejos, porque el criterio que adopta la ley de 1947 y que mantiene el proyecto actual es el de la representación del estudiantado en el seno de los consejos por intermedio del alumno mejor calificado de los cursos superiores, en vez del principio electoral a que aludía el señor diputado.

Pregunto al señor diputado si la representación del estudiantado en los consejos —que fué realmente la bandera del 18, en un momento en que aquél permanecía totalmente ajeno a la vida universitaria, como no fuera la

simple asistencia a las aulas—, si la intervención y la compenetración de los estudiantes en la vida universitaria se ha de juzgar solamente por la participación del delegado en el seno del consejo, o si se ha de juzgar a la luz del enfoque mucho más amplio de la participación de ellos en todos los aspectos de la vida universitaria.

Deseo preguntar al señor diputado —y éste será motivo de mi exposición— si conoce de qué manera el estudiante está vinculado a todos los aspectos de la vida universitaria, a la extensión universitaria, a las cooperativas, al movimiento de trabajos prácticos, a las organizaciones estudiantiles, como, por ejemplo, el Ateneo Universitario de la Facultad de Derecho que cuenta con 3.729 afiliados, contra 500 que tiene el centro de estudiantes que responde a FUBA. En una palabra, me refiero a todos los aspectos extra e intrauniversitarios en los cuales los estudiantes tienen una participación activa y permanente juntamente con el gobierno y con el cuerpo docente de la universidad.

Le pregunto, concretamente, si es posible que en 1953 estemos tomando el planteo literal del año 18 sobre este particular, que pedía la representación estudiantil nada más que para que hubiera una voz de los estudiantes en el seno del consejo.

Esa voz existe, desde luego, en la ley de 1947, y se mantiene en el proyecto actual a través del mejor alumno, pero está superada por el planteo de la participación y compenetración de la vida estudiantil toda en las actividades de la universidad. Todo ello está amplísimamente superado a través de los aspectos que el señor diputado ha omitido y que no sé si los conoce. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Nudelman. — Señor presidente: si la reforma universitaria se hubiera limitado a la simpleza que señala el señor diputado, poca cosa habría sido la reforma. No habrían lógicamente alcanzado trascendencia universal aquellos principios normativos de conducta que, en su militancia ideal, trataban de asegurar para los pueblos una vida cada vez más justa, más bella y más libre.

La democracia representativa quiso llevarse al seno de los consejos directivos y rectorales para que desde allí, desde el gobierno, pueda realizarse la extensión universitaria, la investigación y los trabajos prácticos a que se ha aludido, en la medida y en la amplitud en que fueran necesarios para su mayor eficacia.

Por eso es que la auténtica representación estudiantil tiene un propósito que va más allá que el de participar en el gobierno por el gobierno mismo. Se trata de tener en el gobierno esa representación para realizar los principios que se postularon en beneficio de todos los as-

pectos de la vida universitaria, que había terminado con el claustro cerrado y monacal para abrir el campo a las inquietudes más nobles del espíritu en su función de cultura general, investigación científica, formación profesional y de acción social.

Es en ese aspecto que la representación estudiantil tiene vital importancia. Ella trae el aporte renovador de la juventud en la ardua y difícil tarea de maduración de la conciencia colectiva, frente a la inercia y la rutina, que tratan de poner trabas al avance incesante del progreso. Junto a los egresados y profesores, en la dirección de la universidad, los estudiantes forman parte importante en el conjunto, capaz de trabajar en la tarea de coordinación y difusión de doctrinas y normas de ciencia y de técnica en beneficio de la comunidad.

Para los estudiantes, es, además, escuela de ejercicio cívico que se desarrolla simultáneamente con el aprendizaje profesional y científico, permitiéndoles actuar en la iniciativa y en la responsabilidad, es decir, en los aspectos éticos y de conducta moral.

Su presencia es siempre saludable. Expresan aspiraciones y críticas a veces legítimas y otras no. Pero que se depuran en la luz y la contradicción. Son desinteresados y generosos. Por eso son siempre esperanza, sobre todo cuando muchas veces los mejores espíritus vacilan.

No hay que temer la voz estudiantil; es la voz de la mayoría del pueblo universitario. Es para ellos que se ha hecho la universidad. No hay que disfrazar la representación con caricaturas de representantes, que agobiados por el peso de las circunstancias obstruyen el camino a las mejores palpitaciones del alma de la juventud. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

En la confrontación de las ideas, la mayoría decidirá. Muchos valores extraordinarios vivieron y se formaron en el ejercicio de esa representación estudiantil o en los movimientos vinculados a la reforma universitaria. Ahí están Sayago, Calcagno, Mantovani, del Mazo, Dellepiane, Orgaz, González, Deodoro Roca, Sánchez Viamonte, Sanguinetti, Rojas, Palacios y centenares más, demostrando lo que puede el ejercicio fecundo de una democracia vitalizada con el esfuerzo de todos sus integrantes.

Este proyecto significa un paso atrás con respecto a la ley vigente y un retroceso mayor con respecto al año 1918. Significa la muerte de la democracia dentro de la universidad.

En el primer congreso de estudiantes americanos reunido en Montevideo en 1908, fecha en que se fundó la Federación Universitaria de Buenos Aires, reconocida entonces por las autoridades y hoy perseguida en toda forma, por eso desde estas bancas le rindo el homenaje emocionado que merece junto a su generación, y las del 18 y 45 señalando gloriosas

etapas en la lucha por las libertades argentinas, esa entidad fundada en 1908, que hoy tiene que vivir en las catacumbas, perseguidas por el régimen...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Nudelman. — ...proclamó ya entonces la necesidad de la representación estudiantil bajo el auspicio de Juan Luis Ferrarotti, y de Baltasar Brum, en aquel entonces estudiante y posteriormente presidente de la república hermana, que enseñó con la inmolación de su propia vida hasta donde debía llegarse para defender la libertad de su patria.

El diputado Jorge Raúl Rodríguez proyectó en 1917 la fundación de la Universidad del Litoral, y por primera vez en el articulado de la ley figura una propuesta de participación de estudiantes en la dirección.

En 1918 el primer congreso reunido en Córdoba afirmó el concepto político y pedagógico de que el gobierno debía estar integrado por los profesores, egresados y alumnos y garantizar su participación en forma de una democracia efectiva para serle después confiada, decía, la orientación de la enseñanza y la dirección de la labor científica.

Alfredo L. Palacios, que fué profesor eminente y que gobernó la universidad con el auspicio de los estudiantes, afirma en un libro en el que destaca la importancia de la representación estudiantil, que la cultura, la ciencia y la técnica profesional —tres formas del conocimiento— deben ser estructuradas jerárquicamente por acción de leyes y estatutos; que para que esa acción se desenvuelva dentro de la universidad es necesaria la colaboración de los estudiantes. No hay un elemento más precioso para el verdadero maestro, que el interés apasionado de sus alumnos por participar en su labor docente y en preocuparse por los problemas del gobierno universitario. Esa intervención ha sido a veces hosca y tumultuosa, debido al ambiente subalterno de menguados intereses personales que suelen prosperar indebidamente en las casas de estudios. Pero el maestro deberá actuar con el ejemplo de su personalidad y su conducta, y así la injerencia estudiantil se trocará en emulación y en estímulo de disciplina, y se utilizará el poder adquirido no para estudiar menos, sino para requerir la intensificación de los estudios.

Sr. Cantore. — ¿Me permite el señor diputado, con permiso de la presidencia?

Sr. Nudelman. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Cantore. — He seguido atentamente la disertación del señor diputado por la Capital. Ella vuelve sobre un problema considerado en

debates anteriores y que conozco de cerca, lo mismo que el señor diputado.

No hay que entender libertad por inmoralidad. En el ambiente universitario son dos conceptos completamente distintos. Los estudiantes bien intencionados eran manejados por profesores que en aquel momento de la universidad argentina hacían su política o su trenza política. Lo demostraré leyendo lo que en un debate de 1947 dijo un gran profesor, diputado radical, presidente de la Universidad de La Plata en aquel entonces —Universidad Eva Perón ahora—, con respecto a la función que tuvieron los estudiantes en las luchas dentro de la universidad.

Expresó: «Durante muchos años las camarillas habían gobernado a la universidad, como gobernaron al país. Después de una lucha tenaz contra las camarillas académicas y el espíritu medieval enquistado en la enseñanza, no se pudo impedir en algunas universidades y especialmente en determinadas facultades, que ciertos representantes del grupo oligárquico y de los grupos de presión capitalista, subsistieran en ellas o volvieran a infiltrarse una vez desalojados.

«Esos representantes, limitados hasta 1930 por la orientación política que el radicalismo imprimía desde el gobierno —ésta es la autonomía universitaria— se quitaron después el embozo y facilitaron el equipo de técnicos que colaboró en la desdichada tarea de degradar trece años la vida política nacional —cuyos únicos responsables y culpables son ustedes, que la gobernaron, porque en el llano son revolucionarios y en el gobierno son conservadores—.

«En vano lucharon contra ellos estudiantes y profesores. Fueron universitarios, desgraciadamente, quienes ocuparon ministerios en la dictadura uriburista; fueron profesores de derecho quienes suministraron la teoría justificatoria del atraco a la soberanía popular.»

Pregunto al señor diputado qué enseñanza pueden dar estos señores profesores que pertenecieron a una oligarquía cerrada y que ustedes conocen bien. Daban dinero a los estudiantes y luego les hacían aprobar en un solo turno de exámenes hasta la mitad de la carrera.

Nosotros estamos en desacuerdo con esa libertad mal entendida, por la que un alumno, que no conocía ni siquiera la facultad podía determinar las tareas de los profesores.

Nosotros no entraremos al terreno de la inmoralidad, porque no queremos repetir los errores que ustedes han cometido durante trece años de la vida universitaria. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Con respecto a la degradación a que se ha referido el señor diputado, debo decir que hay en esta Cámara representantes

de su sector que actuaron en aquel entonces en el movimiento de la reforma. Ellos podrán decir en qué medida esa degradación pudo gravitar en su espíritu. Nosotros rechazamos toda posibilidad de contaminación de la verdadera juventud que ha pasado indemne por sobre las miasmas del pantano. Es cierto que han habido —y se han denunciado— hechos de corrupción y de inmoralidad; pero han sido, precisamente, los hombres de la reforma quienes denunciaron esos hechos y ordenaron la investigación y la limpieza.

Cito el caso concreto —que seguramente estaba en la mente del señor diputado Cantore cuando pronunciaba sus palabras— de la Facultad de Medicina, que tuvo por interventor, para asegurar la investigación, a un magistrado probo que honró la cátedra con dignidad y que fué un juez excepcional por su autoridad científica y moral: Eusebio Gómez. Este magistrado denunció públicamente las comprobaciones efectuadas. Allí quedaron señalados los responsables. Uno de ellos era nada menos que José Arce. Dirigía las corruptelas de la universidad. Fué después representante mimado del actual régimen y expresión auténtica de las peores afrentas que en todos los órdenes debió soportar la universidad argentina. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Rumbo. — El doctor Arce no ocupa ninguna posición pública actualmente.

Sr. Bustos Fierro. — Con permiso de la Presidencia, ¿me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Nudelman. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — ¿Existía en la época a que hace referencia el señor diputado el movimiento peronista? No existía. El doctor José Arce había sido llevado al rectorado de la universidad por un concurso de fuerzas en el que el peronismo no tenía nada que ver, porque aun no existía. En cambio existía, sí, el pensamiento de muchos hombres que militaban en las fuerzas reaccionarias radicales de ese entonces, y que le dieron su voto. Por ejemplo, el actual presidente del bloque opositor, señor diputado Ravignani. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

El señor diputado por la Capital se está refiriendo a la personalidad del rector doctor José Arce en función del peronismo, siendo así que el peronismo en ese momento no existía.

Por otra parte, yo pregunto al señor diputado Nudelman si él ha revisado detenidamente los pronunciamientos de los estudiantes reformistas, de los profesores, incluso del profesor Houssay, de quien tantas veces los señores diputados de la oposición han hecho bandera, denunciando el estado de corrupción en que se encontraba la universidad, y la necesidad imperiosa de su re-

forma, y si ha leído, incluso, las opiniones traídas al debate de 1947 por los propios legisladores del Mazo, Calcagno, Dellepiane, Rojas, confesando abiertamente el estado de anarquía y de desorganización de la universidad.

Yo pregunto al señor diputado que acaba de hacer la apología de esa universidad —y la ha calificado de gloriosa— si hombres como Vicente C. Gallo, que dirigía la Universidad de Buenos Aires; o como Rodolfo Martínez y Novillo Corvalán, en Córdoba; o como Correa, en Cuyo, a pesar de su valor personal que yo respeto, eran banderas y podían ser símbolos personificados de la reforma de 1918. Esta es la pregunta que formulo, y ruego la conteste, ya que la anterior que le hice quedó sin contestación.

Sr. Alende. — El argumento que utiliza el señor diputado podría esgrimirse para decir que se reniega de la democracia porque existe el cohecho.

Sr. Ravignani. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado por la Capital, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Nudelman. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Tenía noticias de una información buscada debajo de algo así como de la cama, pero voy a poner las cosas en su sitio.

En primer lugar, no sé a qué período universitario de Arce se refiere, porque fué candidato dos veces.

En segundo término, es exacto que el doctor Arce fué candidato a rector, pero entonces la universidad era autónoma, y los consejos directivos decidieron sostener la candidatura de Arce. Entre los miembros del consejo había distinguidos profesores de todos los colores políticos, porque en ese momento no había más que profesores en la universidad sin odios políticos. Eminente cirujano, gran profesor, Arce fué escogido después por el peronismo para enviarlo a la UN. Y debo decir más: el doctor Arce benefició enormemente a la universidad, porque tendió a que se desarrollara la investigación técnica y científica.

Repito que el doctor Arce fué dos veces candidato, y no me avergonzaría si en un momento determinado, en interés de la universidad, tuviera que votar por el doctor Arce o por un peronista eminente en la cátedra, en la enseñanza, sin color político.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Deseo decir al señor diputado por Córdoba, para que no quede en el ambiente la afirmación que ha hecho atribuyéndome lo que no he dicho, que sólo he exaltado, entre otras, a la generación del 45, y no a la universidad del 45. Cosa completamente distinta. Precisamente, si fué gloriosa esa generación, es porque luchó heroicamente y con res-

ponsabilidad solidaria en defensa de la libertad de la patria, cuyos padecimientos futuros se preveían entonces. Y no se equivocaron.

La Federación Universitaria Argentina, la FUBA, la Confederación de Ateneos Universitarios Rosarinos, el Ateneo Universitario de Santa Fe, la Confederación de Ateneos de Santa Fe y el Ateneo Universitario de Ciencias Económicas, con documentos que tengo en mi poder ratifican totalmente la posición de nuestro proyecto. Ese es también el pensamiento de los profesores universitarios de la hora actual, que sin embargo no se animarían —y eso muestra el clima de libertad universitaria en que se vive— a dar públicamente su opinión.

En el diario «La Nación» de fecha 20 de noviembre de 1953 se ha filtrado, sin embargo, una noticia informando de la reunión del Consejo Universitario, celebrada bajo la presidencia del rector Taiana, en el que, entre otras cosas, se dice: «Finalizada la sesión, en forma extraoficial se solicitó a los consejeros presentes que, antes de retirarse del recinto, escucharan la palabra del vicerrector Fernández Moreno a propósito del anteproyecto de modificación de la ley universitaria, que tiene actualmente en estudio la Federación de Docentes Universitarios.» Allí aparece el detalle de cómo los profesores se expresan en conceptos totalmente coincidentes con los nuestros en la defensa de la autonomía, para que no se «convierta la universidad en un organismo de carácter administrativo». Se objeta la forma de designación del rector, del decano y personal de enseñanza, y se habla de autonomía financiera. Al finalizar la reunión algunos consejeros manifestaron «no estar en condiciones de pronunciarse». Sabían lo que les esperaba si «estuvieran en condiciones».

—Suenan la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para su exposición.

Sr. Presidente (Benítez). — Ha vencido el término de que disponía el señor diputado por la Capital para hacer uso de la palabra.

Sr. Nudelman. — Aunque es angustiosa la forma en que las interrupciones han limitado el plazo de mi exposición, voy a concluir, lamentando no poder analizar las funciones del Consejo Nacional Universitario que anula las características regionales en el afán de «uniformar», y sobre todo el hecho grave de la supresión del artículo 4º de la ley vigente, que convertirá a la universidad en instrumento político del régimen gobernante. También hubiera deseado hacer el cuadro panorámico de la estructura moral y pedagógica de la universidad actual. Debo concluir.

El progreso no es sino la lucha incesante en defensa de la libertad. En el año 1930, junto

con la dictadura, la universidad y la reforma comenzaron a padecer. Siguen padeciendo todavía. Mientras Uruguay, Chile, Cuba, Guatemala, Méjico, etcétera, cuentan con universidades autónomas y en las cuales los estudiantes participan activamente, con gran resultado en su gobierno, en la Argentina, cuna de la reforma, asistimos a sus últimos estertores.

Se teme la universidad de la democracia como se teme la democracia en el país. Pero nosotros tenemos fe en el porvenir. La reforma universitaria presidirá, sin duda alguna, el futuro de la universidad argentina, porque la libertad es eterna como el espíritu y, por eso, no puede perecer.

Termino, señor presidente, con José Ingenieros, afirmando que la universidad no puede ser sino el organismo representativo de las más altas funciones ideológicas, elaboración de doctrinas, determinación de normas y precisión de ideales. Hará más digno a los hombres, aumentando su capacidad para la vida civil, y hará más justa la sociedad, multiplicando los vínculos de la solidaridad humana. Sería estéril seguir escuchando a sofistas y escépticos envenenados por la ideología del pasado. En horas como ésta conviene más que nunca escuchar a los optimistas y a los creyentes iluminados por la ideología del porvenir.

Al amparo de esas palabras, y haciendo votos por que cuanto antes se cumplan las profecías de porvenir, yo afirmo que tarde o temprano, con esfuerzo más o con esfuerzo menos, en la medida en que se recuperen las libertades argentinas se recuperará la reforma universitaria argentina para bien del país y de la universidad (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Bustos Fierro. — Yo desearía que se ampliara el plazo acordado al señor diputado por la Capital, si por falta de tiempo no ha podido dar término a su exposición.

Sr. Presidente (Benítez). — El plazo es improrrogable.

Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Dada la gran capacidad y las condiciones intelectuales del señor diputado por la Capital, hubiera deseado escuchar de sus labios una exposición ajustada al despacho sobre modificaciones a la ley universitaria 13.031, que la Cámara trata; pero desgraciadamente el señor diputado se ha referido en forma tangencial al proyecto de ley, para defender cosas que, en estas horas que vive la República, no tienen razón de ser ni tienen defensa en la enseñanza primaria, ni en la enseñanza secundaria, y mucho menos en la universitaria.

No podré seguir en todos los detalles al señor diputado por la Capital, a quien, por mandato de mi bloque, debo contestar. Me limitaré a

informar, en nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre los aspectos principales del proyecto.

El señor diputado por la Capital y la prensa, en cuyas columnas se ha publicado la opinión de la oposición, atacan a este proyecto de ley —que en realidad es la ley vigente votada por el Parlamento peronista— en dos aspectos sustanciales: 1º, el artículo 9º, que se refiere a la designación del rector; 2º, el artículo 63, inciso 2º, relativo a los recursos universitarios que permiten el desenvolvimiento económico de la universidad argentina.

Debo ocuparme en forma particular de estas dos cuestiones: en primer término, por el escaso tiempo de que dispongo, y luego, porque son muchos los diputados que se disponen a hacer uso de la palabra, y que han de tratar otros aspectos de este problema. Me adelanto a afirmar que los señores diputados de la oposición son injustos en sus observaciones y carecen de la más elemental razón para oponerse a este despacho.

Se dice y se repite en todos los ámbitos opositores que el hecho de que el rector sea designado por el presidente de la República cercena la autonomía de la universidad y que la transferencia de los fondos que se recauden para el sostenimiento de la vida universitaria —que según el proyecto deben pasar directamente a rentas generales— también trae como consecuencia el cercenamiento de esa autonomía.

En tercer lugar, se ataca el proyecto sosteniéndose que la intervención que se da a los alumnos es una enormidad.

Considero que estas tres observaciones que ha formulado la oposición no tienen asidero, no tienen razón de ser, son absolutamente inexac-tas y no se ajustan al concepto exacto de la autonomía universitaria.

La designación del rector se ajusta estrictamente al artículo 83, inciso 10, de la Constitución Nacional. En más de una oportunidad me he preguntado: ¿cómo es posible que hombres que saben tanto de la Constitución y de las leyes pretendan que el rector de la universidad —que es una gran rama de la administración pública— no deba ser designado por el Poder Ejecutivo y no deba ser controlado por el gobierno nacional? Las universidades todas del país han venido desenvolviéndose dentro de una autonomía exagerada, yo diría impropia de un régimen republicano representativo federal de gobierno. La misión fundamental de la universidad, como la de los colegios nacionales y la de las escuelas primarias, es instruir y educar a nuestra juventud. ¿Es posible que esto pueda hacerse sin el contralor, sin la dirección del gobierno nacional? No es posible, me contesto, y lo digo con la autoridad moral que me otorga el haber sido profesor durante veinte años, si

bien no en la universidad, pero sí en un colegio nacional.

¿Cómo es posible que pretendamos en este momento que la universidad deba gobernarse a su antojo sin que el Poder Ejecutivo o el ministro de Educación pueda tener una intervención directa? ¿Acaso la función de educar, de enseñar y de cultivar el espíritu de la juventud no es una de las misiones fundamentales y especiales del gobierno? ¿Cómo es posible que pueda existir una institución que esté prácticamente en manos de terceros? ¿Cómo es posible que puedan existir cátedras en donde algunos profesores, abusando de su posición, la aprovechen para fustigar al gobierno y lanzar su prédica en contra de su orientación y de la doctrina nacional? ¿Cómo es posible permitir semejante dualidad en un régimen republicano? ¿Acaso esto no se prestaría a una corruptela? ¿No nos llevaría al desconcierto, a la desorganización y a la desorientación intelectual?

Sr. Nudelman. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con el consentimiento de la Presidencia?

Sr. Fernández (H. S.). — ¿Cómo no, señor diputado!

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Los argumentos que acaba de dar el señor diputado son los mismos con los que se defendieron la vieja universidad de la época medieval y la universidad enclaustrada de Córdoba, abatida por la reforma de 1918 que abrió sus puertas al pueblo y dió paso y ofreció perspectivas amplias a las inquietudes juveniles.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa con la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — He sido actor de la reforma del año 1918, y conozco también todo lo que ocurrió en la universidad con posterioridad.

Quiero referirme a los antecedentes históricos de la universidad argentina y a los fundamentos de esa autonomía un tanto claustral que se buscaba y que servía a muchos hombres para desenvolverse como opositores. Leía los otros días el famoso debate del año 1947, que han citado los señores diputados —y le recomiendo al señor diputado Nudelman que me escuche porque me voy a referir a un ex compañero de bancada— y recordé así las manifestaciones del ex diputado Del Mazo, que habló en esta Cámara, no ya como radical, sino como argentino. Los demás —lo digo con todo respeto y sin agravio— hablaron como resentidos y expulsados de las cátedras.

Sr. Alende. — No es exacto. Todos hablaron con unidad de criterio y coincidieron con Del Mazo.

Sr. Fernández (H. S.). — Del Mazo dijo su verdad como argentino, y yo lo respeto. Y

agrego que habló como peronista, porque en ese instante nos interpretaba en nuestro pensamiento.

Sr. Alende. — El señor diputado está haciendo un agravio a esa figura maciza que es Gabriel del Mazo, uno de los hombres que intelectualmente mejor pueden enfrentarse y chocar con el peronismo, porque se encuentra en las antípodas de sus ideas. Es un agravio decir que habló como peronista. No es posible hacer una substitución de su pensamiento.

Sr. Fernández (H. S.). — Habló como argentino, y dijo su verdad tal cual la sentía...

— Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Fernández (H. S.). — En la exposición del ex diputado Del Mazo pueden encontrarse hasta las propias palabras de nuestra Constitución y del pensamiento peronista. Por eso digo que habló con verdad.

— Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — He de continuar exponiendo mi pensamiento, del que los señores diputados han pretendido hacerme desviar.

Me preguntaba cómo las universidades argentinas se venían desenvolviendo con una autonomía que rayaba en la independencia. Y yendo a los antecedentes históricos me detengo en la famosa Universidad de Córdoba, que tantos talentosos valores ha producido, que tanto ha hecho por nuestra cultura; es un germen que viene de muy atrás, el que vino a crear la universidad como un apéndice de la Nación. Había sido creada y dirigida por Trejo y Sanabria y traía la inspiración de los viejos jesuitas. Así se originó su independencia. A pesar de que los jesuitas habían sido expulsados en la época de la colonia, su espíritu, su pensamiento y su dirección impregnaban la institución.

¿Por qué fueron disueltas las comunidades jesuíticas y expulsados sus componentes en la época de Carlos III y su ministro Aranda? Porque el gobierno fuerte y vigoroso de Carlos III, que yo lo parangonaría con el de Juan Perón, que no admite escollos en el camino de sus grandes ideales, un día comprendió que la Compañía de Jesús, con su dominio de las universidades, con su poder económico, con su influencia en el espíritu de las personas mediante la confesión, podía tanto como el gobierno. Entonces Aranda, el ilustre ministro de Carlos III, resolvió suprimir a la Compañía de Jesús, porque no podía aceptar que dentro del Estado existiera otro ente poderoso que pusiera vallas a la dirección general del gobierno.

Contra la corriente espiritual que inspiraba

la Universidad de la Colonia, Rivadavia tuvo que dictar el decreto por el que creaba la primera universidad. Años después, Avellaneda se inspiró en el mismo criterio con que hoy proyecta su ley universitaria el peronismo, que no acepta ni tolera que pueda existir dentro del Estado otro poder que pretenda intervenir en la dirección general del país.

Sr. Nudelman. — Es la tesis más reaccionaria y conservadora que pueda sostenerse.

Sr. Latella Frías. — ¿Me permite el señor diputado por San Luis, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Fernández (H. S.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Latella Frías. — Con los conceptos que acaba de expresar, el señor diputado ha colocado el debate en el terreno que nosotros presentimos se iba a ubicar: por un lado, la doctrina democrática, liberal y de autonomía universitaria nuestra y, por el otro, la doctrina absolutista y totalitaria de ustedes.

Al decir, además, el señor diputado, que Carlos III es semejante al gobierno del señor Juan Perón, ha hecho una afirmación grave de la cual su propio partido y sus colegas le reclamarán. Carlos III es el símbolo del absolutismo de la Casa de Austria y uno de los autores de la decadencia española. Vale decir que al parangonarlo con el general Perón ha dicho que éste es el autor de la decadencia argentina. (Aplausos.)

Ese es el concepto que queda en el ambiente a raíz de las propias expresiones del señor diputado.

Por nuestra parte, hacemos presente que la historia da lecciones y que los hombres deben inspirarse por eso en los conceptos fundamentales de la libertad y de la democracia cuando quieren defender instituciones como la universidad y la patria.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa con la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — En primer término, el señor diputado me atribuye determinada posición ideológica: al hacerlo no me afecta, porque he actuado mucho en diversas esferas del país, y siempre he sido considerado como hombre liberal, de manera que no se me puede tildar de nazi.

En cuanto a las conclusiones extraídas del parangón que he formulado, corren por su cuenta. He comparado al gobierno de Carlos III con el de Juan Perón porque ambos se caracterizan por la actuación con mano firme en la dirección del Estado y con conocimiento del camino por donde debe irse para cumplir los objetivos propuestos.

Sr. Latella Frías. — ¡Así le fué a España después del reinado de Carlos III y de los reyes absolutista!

Sr. Eustos Fierro. — El señor diputado por San Luis no ha hecho una identificación total

de ambos gobiernos, sino que ha destacado la similitud en un aspecto determinado.

Sr. Fernández (H. S.). — El principio de autonomía que se pretende para nuestras universidades es el que sirve a los profesores universitarios para apoltronarse en la cátedra y despotricar cuanto quieran desde ella. La prueba la tenemos en lo ocurrido a Hipólito Yrigoyen con los profesores universitarios anteriores a 1918. La reforma de 1918 —a la que muy brevemente me voy a referir— se originó en el deseo de destruir a la oligarquía apoltronada en las universidades, que pretendía manejarse por sí y actuar contra el gobierno sin que éste pudiera intervenir para nada en el gobierno de las universidades. Yrigoyen llegó a comprender la imprescindible necesidad de gravitar en las universidades para poder llevar adelante la acción de su gobierno. Por ello fué que en 1918 introdujo en la vida universitaria la política del comité, la que le había dado tan buen resultado en otros sectores del país.

—Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente 1ª de la Honorable Cámara, doña Delia D. Degliuomini de Parodi.

Con el debido respeto a que es acreedor el señor Yrigoyen, debemos decir que fué un excelente ingeniero para obtener votos: fué habilísimo y, como no disponía de otros grupos, tomó a los jóvenes estudiantes para que hicieran lo que se estimó convenía en los ambientes de las universidades, y cuando los estudiantes echaron a todos los profesores enclaustrados, que diariamente se desayunaban con improperios de toda índole contra el presidente de la Nación, muchos creyeron que el país se venía abajo. En ese año vinieron hombres del radicalismo a ocupar las cátedras y a substituir a los viejos maestros de la oligarquía; pero, desgraciadamente, con el virus que el propio Yrigoyen había introducido en la universidad, se corrompieron, constituyéndose en apóstoles de la política. Lo dicen los profesores Calcagno, Rojas, Dellepiane y todos los que actuaron entonces y ya se han retirado, al denunciar aquello que en el año 1918 había hecho tanto mal: la baja politiquería.

Sr. Alende. — No es exacto. El señor diputado está totalmente equivocado. Dellepiane jamás fué profesor.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Alende. — Calcagno y Rojas estuvieron luchando siempre por los problemas morales de la universidad.

Sr. Fernández (H. S.). — Aunque no he podido escuchar al señor diputado por Buenos

Aires, quiero afirmar que no he dicho nada que pueda molestar personalmente.

Sr. Alende. — El señor diputado dijo que los profesores Calcagno, Rojas y Dellepiane habían luchado por los principios reformistas en el año 1918 y que, cuando llegaron a ser profesores de la universidad, se corrompieron y cayeron en los vicios nefastos de la política inficionada en las aulas.

Sr. Fernández (H. S.). — Me he referido a la politiquería...

Sr. Alende. — El doctor Luis Dellepiane, extraordinario arquetipo humano de argentino, de reformista y de radical, nunca fué profesor y en toda su vida pública y universitaria fué un leal sostenedor de los principios de la reforma universitaria de los que glosó a menudo su enorme y hermoso contenido americanista y anti-imperialista; y los profesores Nerio Rojas y Alfredo Calcagno, honra y orgullo de la universidad argentina, uno de ellos profesor de medicina legal en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y el otro rector de la Universidad Nacional de La Plata e investigador en su Facultad de Humanidades, honraron a la reforma, a la universidad y al radicalismo. Fueron luchadores permanentes contra la infiltración de la corrompida política dentro de la universidad, de la que fueron principales responsables los oligarcas que en vísperas de la revolución del 4 de junio firmaron —y entre los firmantes hay actuales ministros de la Nación— un manifiesto de adhesión a Patrón Costas, y después se sumaron al furgón de cola de todo lo que aprovechó el 4 de junio y culminó con el régimen peronista, que sumó a todos los oligarcas corrompidos y politiqueros de la vieja universidad, esos politiqueros con apetencias y siempre dispuestos a venderse al mejor postor, se llamara gobierno conservador, se llamara Patrón Costas o se llamara peronismo.

Sr. Albrieu. — ¿Me permite el señor diputado por San Luis, con la venia de la Presidencia?

Sr. Fernández (H. S.). — Sí, señor diputado.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Hace mal el señor diputado por Buenos Aires en tomar tan a lo personal un cargo que ha formulado el señor diputado Fernández, que, por otra parte, es algo denunciado públicamente en su oportunidad por los propios centros estudiantiles de aquella época.

Sr. Alende. — Pero no con referencia a Rojas, Dellepiane y Calcagno.

Sr. Albrieu. — Precisamente con respecto a ellos. Voy a dar un ejemplo. Un alto dirigente actual del Partido Radical, con respecto al doctor Rojas, le impugnó la comisión de los mayores estragos en la Universidad de Buenos Aires

en su rectorado de 1926-1930. Figura en los archivos de la universidad, página 645. Ese profesor le llamó dictador y le hizo una serie de cargos graves.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Alende. — Esa discrepancia es la que vale dentro de la libertad, pero no dentro de la universidad peronista.

Sr. Albrieu. — Para mí, quien hizo esa manifestación en aquella oportunidad, tiene la alta autoridad que le da su sapiencia y su conducta política. Lo que expresa el señor diputado demuestra que el radicalismo juzga buenos o malos a los hombres según estén con el partido o contra él.

En aquella oportunidad el doctor Rojas era antirradical; era el autor de la *Literatura* y de la *Historia de la Literatura*.

Sr. Alende. — Entró gloriosamente al radicalismo después de la revolución del 30.

Sr. Albrieu. — En cuanto a que después entró gloriosamente al radicalismo, está la histórica convención del radicalismo de la que al doctor Rojas lo tuvieron que sacar por una ventana por propiciar la abstención.

Sr. Alende. — No es exacto. Conozco muy bien lo sucedido en esa convención...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Aquellos hombres que entraron después de 1918 a la universidad llevados por la muchachada y por la política que había introducido el señor Yrigoyen, llegaron a ser profesores. Todos eran jóvenes, hombres nuevos y sin prestigio en la cátedra, pero llegaron a ser más tarde grandes profesores, grandes valores. Sin embargo, por la politiquería también llegaron después a corromperse, y cuando el peronismo ocupó el gobierno esos profesores convirtieron sus cátedras en tribunas de diatribas y de insultos en contra del gobierno del general Perón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

El gobierno del general Perón no podía tolerar que en la universidad se siguiera en ese ritmo proporcionado por el viejo concepto de la autonomía, y que quienes, creyéndose completamente independientes y libres de decir y hacer todo lo que se les antojara, porque no era un gobierno de pacotilla sino, por el contrario, un gobierno vigoroso y fuerte, que por boca de su jefe decía: «En el país se va a hacer lo que manda la Constitución y lo que el pueblo argentino me ha impuesto.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Con excepción del ingeniero del Mazo, todos los diputados que intervinieron en el debate de 1947 lo hicieron con el ánimo dolorido por haber perdido la cátedra. (*Aplausos.*)

Sr. Alende. — Hablaron, además, otros diputados que no fueron profesores; infórmese el señor diputado.

Sr. Albrieu. — Al ingeniero del Mazo lo entendemos nosotros, pero no lo entienden los radicales.

Sr. Fernández (H. S.). — Esos señores serán maestros, serán profesores, serán sabios, pero eso no quita que en los años 1945, 1946 y 1947, hasta la intervención peronista en la universidad, hubieran abusado de su posición de profesores.

Sr. Nudelman. — Nunca abusaron de su posición de profesores, señor diputado; fueron una gloria argentina.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Fernández (H. S.). — Si esos profesores hubieran actuado dentro de la verdadera libertad de enseñanza, que siempre se ha predicado en el país, nadie los hubiera molestado. Pero el gobierno peronista no podía aceptar que esos señores, desde la cátedra, hicieran política. (*Aplausos.*)

Sr. Nudelman. — La ficha de Gestión Universitaria es la declinación del profesorado.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — La Presidencia ruega al señor diputado por la Capital que no interrumpa al orador que está en el uso de la palabra.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — El artículo 99 de este proyecto de ley es perfectamente constitucional, y se adapta al principio que rige todo nuestro ordenamiento jurídico nacional. Si el Poder Ejecutivo puede nombrar a sus ministros, ascender a los generales, nombrar a los almirantes, designar a los jefes de todas las grandes reparticiones autónomas del país ¿por qué no va a designar al rector de la universidad, si una de sus funciones principales es dirigir la enseñanza?

Sr. Perette. — El señor diputado está haciendo la apología de la regresión universitaria.

Sr. Fernández (H. S.). — Eso es lo que piensa la oposición, pensamiento que no interesa a la bancada mayoritaria.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Fernández (H. S.). — El pueblo sabe lo que quiere; el pueblo sabe perfectamente que esto que existe como un apéndice del gobierno, que pudiera ser otro gobierno, no puede existir. Y así vemos establecido el principio de que el Poder Ejecutivo debe designar al rector, y éste a los decanos, para hacer un gobierno de orden, de absoluto orden en la universidad, dejando la más absoluta autonomía para que se enseñe y aprenda con libertad, dentro de un régimen constitucional (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

El segundo aspecto, que es el que especialmente se refiere a la comisión de que formo parte, se vincula con la crítica que se hace diciendo que se cercena la autonomía universitaria desde el momento que los fondos de las leyes que anteriormente establecían los medios económicos para sostener las universidades, deben pasar directamente a rentas generales de la Nación.

Yo sé que los que están especialmente interesados en este asunto reconocen que el paso que da esta ley, volviendo al régimen que existía antes de la ley 13.031, está completamente ajustado a las normas que rigen la percepción de la renta pública y la inversión de la misma en los gastos generales de la Nación.

Se había establecido en una cuenta especial dónde iban a parar todos los fondos de las leyes que debían sostener la enseñanza universitaria, y se encontraban las universidades con que, en el momento en que debían disponer de esos fondos, no existían los suficientes y el Poder Ejecutivo no tenía tampoco facultad para adelantarlos, con lo que se llegaba, al final del ejercicio económico, con un déficit bastante apreciable. Ello era así porque la percepción de esos impuestos no es posible hacerla en los meses de enero, febrero, marzo o abril, en tanto que los gastos de la universidad sí se realizan, precisamente, en los meses de enero, febrero, marzo o abril. Nos encontramos que llegaba fin de año y había un déficit que no podía cubrirse.

En un comienzo parecía que este impuesto iba a ser sumamente rendidor e iría a solventar los gastos universitarios, sobre todo en el año 1947. Pero hoy esos gastos han aumentado extraordinariamente porque el peronismo ha abierto las puertas de la universidad al pueblo todo de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) La cantidad de alumnos universitarios ha aumentado extraordinariamente. Como otros señores diputados darán datos estadísticos a este respecto, no me voy a detener en ellos, pero es un hecho palmario que, dado el número de estudiantes y profesores, los gastos de sostenimiento de las universidades han aumentado en forma notable. Por ello, el Poder Ejecutivo, deseando ampliar el campo de la enseñanza universitaria, ha dispuesto por el artículo 63, inciso 2º, de esta ley que todos los fondos que

recauden las universidades deban pasar a rentas generales, de donde se irán pagando paulatinamente estos gastos.

En el año 1947 los gastos de la universidad no excedían los cincuenta o sesenta millones de pesos, en tanto que ahora están muy cerca de los cuatrocientos millones de pesos. ¿Es posible, entonces, que con esa única fuente de recursos se atiendan las necesidades universitarias? Indudablemente, no. Sería injusto que el Poder Ejecutivo no atendiera con la diligencia y atención que lo caracteriza, los gastos de las universidades, en la misma forma en que lo hace con las otras reparticiones del Estado. El Poder Ejecutivo, celoso defensor de los intereses de la universidad, pasa esa fuente única de recursos a rentas generales, y de allí tomará los fondos para atender todas las necesidades. Tendremos entonces que las necesidades de los profesores, los empleados y los estudiantes serán atendidas por el gobierno a su debido tiempo y en perfectas condiciones.

De modo, entonces, que la crítica que hace la oposición a este artículo del proyecto no tiene ninguna razón de ser.

Sr. Nudelman. — Me permite el señor diputado, con permiso de la Presidencia?

Sr. Fernández (H. S.). — Sí, señor diputado.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Nosotros sostenemos simplemente que si no alcanzan los fondos para el mantenimiento de las facultades y sus institutos, lo legítimo es que se amplíen las bases autonómicas de su economía para que puedan tener así los recursos necesarios, impidiendo que con fines de parcialidad política el Poder Ejecutivo pueda asfixiar las posibilidades de su propio desarrollo.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa con la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Desearía me indicara el señor diputado qué repartición nacional, creada y sostenida por el Estado, y que sea una institución similar a la universidad, tiene recursos propios y los maneja por su cuenta.

Sr. Nudelman. — El señor diputado confunde la universidad con una oficina burocrática.

Sr. Fernández (H. S.). — No confundo...

Sr. Nudelman. — La universidad tiene una función totalmente distinta a las de una oficina administrativa. Allí radica la necesidad de su autonomía. La universidad es el centro motor del intelecto, como dijera alguna vez Ortega y Gasset. Por eso hay que asegurarle en todo lo posible su expansión y desarrollo para beneficio del país. Es lamentable la confusión de conceptos del señor diputado.

Sr. Fernández (H. S.). — No hay tal confu-

sión, señor diputado. Lo que no acepto es la ficción con que los señores diputados pretenden hacer de la universidad una especie de artillero por su cuenta, el apéndice de un ejército que pueda tirar contra la Nación o hacer lo que se le antoje en el país. La universidad tiene que estar en el mismo cauce general en que están todas las instituciones de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Nudelman. — Lamento que el señor diputado tenga ese concepto.

Sr. Rumbo. — Con autorización de la Presidencia, ¿me permite el señor diputado por San Luis?

Sr. Fernández (H. S.). — Sí, señor diputado.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rumbo. — El debate gira en estos instantes sobre el concepto de autonomía. El señor diputado Nudelman dijo que hay que incrementar las bases autonómicas de la universidad, y buscar que ésta tenga los recursos suficientes para asegurar esa base autonómica. De paso, el señor diputado por la Capital hizo el cargo de que, de acuerdo con nuestra concepción, la universidad sería organización de tipo burocrático.

El concepto está equivocado de suyo. Debo recordar lo que ocurre en las clásicas universidades del mundo. Veremos cuáles son los recursos con que esas universidades se desenvuelven.

Tomemos, por ejemplo, las universidades inglesas de Oxford y Cambridge. En esas casas de estudio, que son las más caras del mundo, los gastos tienen que ser solventados con recursos propios, por lo cual sólo pueden concurrir a ellas los integrantes de las clases más privilegiadas y oligárquicas. Lo mismo ocurre con el colegio Eton, de Inglaterra, anexo a las universidades. Son, pues, ejemplos de universidades aristocráticas reservadas para los núcleos privilegiados de la sociedad.

Si tomamos el caso de las universidades norteamericanas, tenemos las de Harvard, Yale y Columbia, entre otras, que son también de enseñanza costosísima, y sólo los alumnos que cuentan con recursos pueden ser partícipes o beneficiarios de esas universidades.

¿Cuál es la situación de la universidad argentina? La situación de la universidad argentina es justamente distinta, porque el pueblo paga su universidad para que los hijos del pueblo concurren gratuitamente a ella. Nuestra universidad es absolutamente gratuita. Entonces, si el pueblo paga para que la universidad sea sostenida con sus propios fondos y sean alimentados espiritualmente los hijos del pueblo, y si el gobierno es la auténtica expresión del pueblo, es el gobierno el que le imprime su sello para que se dé al pueblo lo que el pueblo quiere. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Por ello es que nosotros no podemos plantear el principio de la ampliación de las bases autonómicas de la universidad por el procedimiento de reclutar fondos propios, porque el primer recurso propio habría que obtenerlo de los estudiantes, con recursos extraños a la contribución del pueblo, y cada estudiante universitario tendría que pagar su propio aprendizaje; cada alumno que concurriese a la universidad se pagaría la enseñanza. Entonces nos encontraríamos con que el acceso a la universidad ya no sería en función del intelecto, sino en función del dinero. Habríamos establecido una discriminación en términos de dinero y no en términos de capacidad. Esa es la razón de la auténtica democracia universitaria argentina dentro de la concepción peronista, para que cualquier estudiante, en función de su propia capacidad y tesón, pueda seguir los cursos universitarios y graduarse con prescindencia absoluta y total de si él puede o no puede pagarse esa enseñanza.

No debemos confundir la universidad argentina con otros tipos de universidades, como las universidades sostenidas por la industria pesada, las universidades sostenidas por la industria metalúrgica o por los grandes consorcios de la química, de la industria pesada, de la química o de la siderurgia. Lo mismo ocurre en Inglaterra, para citar el caso típico de universidades costosas, que tienen fondos propios y que son sostenidas con recursos de grupos económicos con influencia política.

Entre nosotros el pueblo paga su universidad y la universidad está al servicio del pueblo. La universidad tendrá que ser lo que el pueblo quiera, como expresión del gobierno, ya que hasta la función de gobierno es en función de lo que el pueblo quiere. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — La exposición que acaba de hacer mi colega el señor diputado Rumbo me releva de referirme en detalle a ciertos aspectos relacionados con la faz económica de la universidad, para que quedase bien aclarado cuál es el pensamiento de la comisión sobre este punto.

Nosotros no tenemos universidades del tipo norteamericano ni del tipo inglés o francés, ni de otros países extranjeros. En nuestro país, la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, por obra del gobierno peronista, es absolutamente gratuita y el pueblo tiene abiertas las puertas de la universidad para poder beber en las fuentes del saber y de la cultura. Pareciera que los señores diputados del sector minoritario no comprenden estas cosas.

En Inglaterra y en los Estados Unidos, señores poderosos o grandes compañías, para no pagar crecidas sumas en concepto de impuesto

a los réditos, hacen una donación o una fundación, crean un colegio, pagan a los profesores; en esos casos yo aceptaría en principio que tengan una orientación o una forma de dirigirse, aunque para mí, si llegaran a fundarse en el país universidades de ese tipo, nunca podrían actuar con absoluta libertad y siempre deberían hacerlo de acuerdo a las directivas del gobierno.

A este respecto recuerdo lo que ocurría en el país con las escuelas primarias y secundarias de algunas colectividades extranjeras que no deseo nombrar, en las que se enseñaba todo lo referente a sus respectivas nacionalidades, olvidando lo que era netamente argentino.

Sostengo que si se crea en el país alguna universidad del tipo de las existentes en Estados Unidos e Inglaterra, costeadas por algún mecenas o por alguna institución, en el fondo tendrán que ajustarse a las directivas generales del gobierno.

Desde luego, las universidades actuales costeadas por el erario público deben seguir fielmente la inspiración del gobierno nacional, que tiene como finalidad principal educar y defender la cultura de acuerdo a la doctrina nacional, que, por más que los señores diputados no quieran aceptar, es ley de la Nación. (Aplausos.)

Para terminar —porque hay muchos oradores que desean referirse al importante problema en debate— quiero manifestar que los dos ataques fundamentales que se hacen a esta ley, con respecto a la designación de rectores y con respecto a los fondos que antes por ley especial pertenecían a las universidades y que ahora pasan a rentas generales de la Nación —debiendo las universidades ahora elevar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo para que éste lo incluya en el presupuesto general de la Nación que debe aprobar el Congreso—, carecen de total asidero, por cuanto es lo que ordena la Constitución Nacional que los peronistas estamos dispuestos en todo instante a hacer cumplir para bien del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Prolongados aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sra. Presidenta (Degliomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ferrer Zanchi. — Autonomía universitaria significa la facultad de las universidades para elegir sus autoridades con total y absoluta independencia del poder público, por elección directa de quienes integran la universidad.

La autonomía universitaria comprende la autonomía docente, administrativa y económica.

Entendemos que la autonomía universitaria debe estar tratada en una ley sobre la base de los siguientes puntos: a) la universidad debe tener facultad de proyectar la ley universitaria; b) de dictar sus estatutos; c) de nombrar rec-

tores, decanos, profesores, personal administrativo y de removerlos de acuerdo con lo dispuesto en la ley universitaria; d) de constituir sus consejos directivos; e) de preparar su presupuesto; f) de poseer bienes propios y tener afectación de rentas generales tendientes a una autonomía económica progresiva; g) administrar sus bienes y recursos; h) la organización democrática interna de la universidad, sobre la base del poder electivo y consiguiente representación de alumnos, profesores y egresados.

La autonomía universitaria existía en tiempos remotos en gran número de universidades extranjeras. Ya en el siglo XII, en el año 1158, la Universidad de Bolonia por decreto del emperador Federico I gozaba de plena autonomía; lo mismo ocurría en la Universidad de París, acen- tuándose más con la creación de la Sorbona. De igual autonomía gozaban las universidades de Palermo y Nápoles. En esa época ni siquiera por el presupuesto dependían del Estado y recién en el siglo XVI el Estado comenzó a pagar a los maestros. La Universidad de Salamanca tenía amplia autonomía. Alfonso el Sabio la colmó de privilegios y rentas y esta universidad elegía sus autoridades por el voto de los profesores y estudiantes. En Perú y en Méjico, en la época de la dominación española, los rectores se elegían por libre elección.

En la actualidad la autonomía es total en gran número de universidades, como las universidades ejemplares de Oxford, de Cambridge y de Harvard.

La universidad alemana antes de estar sometida a la tiranía de Hitler tenía autonomía técnica y administrativa para la elección de sus autoridades.

En la actualidad, en Chile, Perú, Méjico, Bolivia, Brasil, los rectores son elegidos directamente por los profesores.

Me referiré ahora brevemente a la historia de las universidades argentinas.

Durante la dominación española fué fundada la Universidad de Córdoba, por real cédula de Carlos III. El deán Funes, nombrado antes de la Revolución de Mayo en el cargo de rector, fué elegido por el voto de los profesores. Esta autonomía duró hasta 1829.

La Universidad de Buenos Aires creada en 1821 y gobernada por el doctor Antonio Sáenz, siguió procedimientos similares a los de la Universidad de Córdoba. Dejó de funcionar, por falta de recursos, durante la tiranía de Rosas.

En 1872, uno de los más eminentes rectores, Juan María Gutiérrez, redactó «bases» para una ley orgánica de instrucción pública. Juan María Gutiérrez, que gobernó la universidad desde 1861 a 1873, luchó continuamente por una real autonomía universitaria.

Juan R. Fernández, profesor y académico de la Facultad de Medicina en 1899, en un interesante y completo artículo publicado en la «Re-

vista de Derecho, Historia y Letras», se constituye en el más celoso defensor de la autonomía universitaria.

En 1883 el doctor Avellaneda, siendo rector de la universidad y senador nacional, presentó el proyecto sancionado por ley número 1597. En el año 1885, en virtud de dicha ley, se concedía una relativa autonomía a la universidad.

El 15 de junio de 1918 los estudiantes universitarios de Córdoba se apoderaban del edificio de la universidad en son de protesta contra las camarillas reaccionarias que gobernaban la universidad. Comenzaba de esa manera la lucha por una nueva universidad, por una universidad liberal y democrática. Esa actitud estudiantil tuvo repercusión nacional y no tardaron en producirse movimientos de la misma índole en otras casas de estudio dentro y fuera del país.

El ex diputado nacional, representante de la Unión Cívica Radical, Gabriel del Mazo, líder de la reforma universitaria, ex presidente de la Federación Universitaria Argentina, en un libro sobre la reforma universitaria demuestra cómo el movimiento reformista argentino fué seguido de cerca por toda la juventud universitaria de América.

Haya de la Torre y José Carlos Mariategui, en numerosos trabajos han expresado cuánto deben las universidades de habla castellana al movimiento reformista de 1918.

La chispa encendida en Córdoba provocó, pues, un incendio continental; y es obra de justicia dejar constancia, una vez más, de la significación americana de este movimiento argentino, profundamente argentino, iniciado por las nuevas generaciones de nuestro país, que no olvidaron, llegada la hora, las tradiciones liberales y progresistas del pueblo de Mayo y supieron defenderlas y acrecentarlas, convencidas de que las mismas marcan un camino de dignidad a todos los hijos de esta tierra.

Los organismos estudiantiles leales al credo reformista han estado siempre en lucha contra todas las manifestaciones regresivas en el campo político e institucional. En horas de total descalabro, sus voces se han levantado, entre las altas y autorizadas, para combatir los males, para señalar el camino del deber. Todos los despotismos que han padecido los pueblos de América llevan su marca, la marca de la reforma universitaria. En la lucha por la escuela laica y para la defensa de las tradiciones liberales de la República, los reformistas han ocupado desde el primer día un lugar de vanguardia.

Las campañas contra todos los imperialismos, económicos, financieros o políticos, los han tenido entre los más entusiastas animadores. Las primeras asambleas populares contra el fascismo, pocos meses después de la ascensión de Mussolini al poder, fueron actos universitarios organizados por centros estudiantiles reformistas que

expresaban así su solidaridad con los perseguidos por el régimen de los «camisas negras» y su adhesión irrevocable a la causa de la libertad y de la democracia.

¿Quién no recuerda las campañas estudiantiles de apoyo a Sandino, el valiente nicaragüense que peleó en defensa de la soberanía de su patria, contra las huestes al servicio de Wall Street; los actos de repudio a la dictadura de Primo de Rivera, los de apoyo a la causa de la República Española, las campañas reformistas contra los Leguía y Sánchez Cerro, dictadores peruanos; contra Ibáñez, dictador —era dictador— de Chile; contra los regímenes de Siles y de Villarroel en Bolivia; contra Vargas, cuando era dictador del Brasil; contra Terra, del Uruguay; contra Uriburu en nuestro país; contra Morínigo, el déspota paraguayo?

No haya dudas al respecto. La reforma ha sido, es y será un movimiento juvenil, expansivo, altruista, atento a los reclamos del pueblo y a sus afanes de justicia social; y por esto mismo cabe decir en su honor que su mundo está más en el porvenir que en el pasado, en las cosas que tiene que hacer que en las realizadas, en los combates que tiene que pelear que en los que libró. Podemos decir que la reforma implicó, en esencia, la democratización de las casas de estudio.

El radicalismo, como siempre, estuvo presente y solidario con el sentir del pueblo, máximo que en este movimiento de amplia superación principista, estaban unidos estudiantes y obreros.

El 31 de julio de 1918 el presidente Yrigoyen elevó al Congreso de la Nación un mensaje, acompañando un proyecto de ley orgánica de instrucción pública. Con respecto al gobierno y régimen de las universidades, el mensaje expresa que responde no sólo a dar unidad y forma orgánica a la ley general, sino en especial a colocar las universidades «dentro del espíritu nuevo», «con bases y orientaciones abiertas» que permitan utilizar las energías y aptitudes de «todos sus componentes: los profesores (titulares, adjuntos y extraordinarios) y los estudiantes, esencia y vida de las instituciones de cultura superior». La Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados lo despachó en el año 1922, en la orden del día 75, ante la reiteración del mensaje del Poder Ejecutivo del año 1918. El artículo 260 del despacho de la comisión establecía, al referirse a la representación en el consejo directivo de las Facultades, «tres como representantes de los estudiantes, elegidos por éstos».

Hipólito Yrigoyen, en el mensaje enviado al Congreso en 1918 y 1919, se refirió a la reforma universitaria. Decía el mensaje del año 1918: «El régimen universitario necesita asimismo modificar su ambiente en cuanto a los métodos de gobierno, administrativo y de enseñanza, rompiendo viejos moldes a efectos de

evitar la concentración en pocas manos y sin solución de continuidad del manejo de los respetables intereses encomendados a esas instituciones, dando intervención en la selección de autoridades directivas y cuerpos docentes a todos los elementos constitutivos que los componen.»

En el mensaje de apertura del año 1919, se manifestaba: «Los institutos universitarios han recibido y sentido desde el año próximo pasado la saludable influencia de las reformas iniciadas en sus estatutos.

«El espíritu nuevo que los impulsa y guía, por imperio de la reforma apenas comenzada, ha producido ya un evidente mejoramiento en el régimen de su gobierno, en la organización de sus cuerpos directivos, en la orientación de su docencia y en la técnica de sus métodos de enseñanza, desenvolviéndose dentro de normas liberales y francamente democráticas, cual corresponde a las exigencias renovadoras de la civilización argentina.»

El 21 de mayo de 1918 la Federación Universitaria remitió un telegrama manifestando que «La juventud universitaria hace llegar al primer magistrado de la República la expresión de su júbilo y gratitud por la acertada solución del conflicto en que ha tenido parte y que vuestra excelencia ha dirimido con recto e ilustrado criterio en el amplio y trascendental decreto de reforma del estatuto universitario, dictado el 9 de mayo del corriente año.» Termina diciendo: «La juventud universitaria, representada por la federación que presidimos, tiene así la oportunidad de ratificar el juicio elevado que le ha merecido la política universitaria del señor presidente de la República, inspirada en altos y sanos ideales de mejoramiento del régimen de la enseñanza superior en nuestro país. La juventud universitaria no ha dudado un instante, ni duda, de la abnegación, del patriotismo, del desinterés de vuestra excelencia. Es por ello que lleva estos hechos a su conocimiento, creyendo que su simple enunciación ha de ser un freno poderoso para impedir la resurrección de las camarillas desalojadas justicieramente y la explotación de su nombre prestigioso.»

Firmaban, entre otros, Enrique F. Barros, Horacio Valdez, Ismael Bordabehere y Ernesto Garzón.

Los postulados de la reforma universitaria los resumiré en los siguientes puntos: 1, autonomía universitaria; 2, participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad; 3, asistencia libre; 4, docencia libre (libertad de enseñanza y libertad de aprender) 5, periodicidad de la cátedra; 6, extensión universitaria.

Hoy la reforma no existe. Los tradicionales centros estudiantiles no existen, como el Centro de Estudiantes de Ingeniería, al que por decreto 5.481/52 se le retiró la personería jurídica;

este centro fué fundado en 1894, contaba con 5.000 socios, y editaba una revista que tenía fama mundial. Hoy el Centro Estudiantes de Ingeniería está reemplazado por el Centro «La línea recta.»

Es bien conocida la firme posición de los estudiantes universitarios en 1945, al tomar las casas de estudio en protesta por la anormalidad en que vivía el país y que es uno de los heroicos capítulos que escribió la juventud argentina.

La universidad pagó un caro tributo por su altivez a doblegarse al régimen imperante en el país y entonces se le pretendió o, mejor dicho, se le dominó por el terror. Ilustres profesores, maestros de muchas generaciones, fueron declarados cesantes, exonerados o jubilados de oficio; se quería en los cargos universitarios gente que acatara dócilmente las voces de mando, y eso está casi conseguido. Recordemos algunos profesores que por su fe democrática fueron obligados a abandonar sus cargos; entre ellos se destaca la figura del profesor Bernardo Houssay, el primer argentino que obtuvo el premio Nóbel de fisiología. Esta es la más alta recompensa mundial que se otorga a los trabajadores de la ciencia. El premio le fué conferido en el año 1947, distinción que produjo inmensa satisfacción en el mundo científico argentino. Sólo el gobierno permaneció indiferente a tan alta distinción de la ciencia mundial.

El profesor Houssay en 1946, cuando contaba 49 años de edad, fué jubilado de oficio; esto determinó un desquicio sin igual en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que era un modelo dentro de los similares del mundo dedicados a la investigación científica.

Entre los profesores declarados cesantes en la Universidad de Buenos Aires, se puede recordar a Nicolás Romano, profesor de clínica médica; Manuel Varela, profesor titular de histología; Esteban Ochoa, profesor de terapéutica; Héctor Gotta y Juan Silvestre, de semiología; Miguel Derito, de química analítica.

Debo recordar también el caso de un destacado cirujano, del profesor Alejandro Ceballos, que fué declarado cesante en su calidad de jefe en el Hospital Ramos Mejía y Hospital Central, sin dársele nunca los motivos de tal determinación. Al quedar sin servicio hospitalario se vió imposibilitado de continuar en su cátedra de clínica quirúrgica, debiendo renunciar a dicha cátedra.

Un caso más reciente, de todos conocido, es el del profesor de derecho administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor Rafael Bielsa.

En total fueron declarados cesantes más de 260 profesores de las universidades de Buenos

Aires, La Plata, Tucumán, Córdoba, Cuyo y Litoral.

Solicito se inserte en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados el folleto titulado «Avasallamiento de la universidad argentina» editado en 1947; en él figuran todos los profesores universitarios exonerados, cesantes, jubilados de oficio o que renunciaron a sus cátedras.

Sr. Nudelman. — A la fecha suman mucho más: alrededor de 2.000.

Sr. Cantore. — Tengo una lista de la Facultad de Derecho: figuran 51, con las razones por las que renunciaron...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Cantore. — Hablan de la autonomía. El señor diputado Nudelman se ha pasado 45 minutos hablando de ella, y ha hecho el elogio del doctor Eusebio Gómez, interventor de la facultad: fué una vergüenza para toda la universidad...

Sr. Nudelman. — No diga eso; Eusebio Gómez fué magistrado que honró al país.

Sr. Cantore. — No es admisible que se aplauda una intervención a una casa de estudios, porque es desconocer el estatuto, la ley y la reforma...

Sr. Nudelman. — Fué precisamente para poner coto...

Sr. Cantore. — Fué un agravio el hecho de que se mandara a la Facultad de Medicina, por un consejo formado también por radicales que están en la Cámara, a un abogado interventor.

Ahora quieren representación estudiantil. ¡Y pensar que cuando, como delegados estudiantiles, pedimos la intervención a la Facultad de Agronomía, nos echaron!

¿Qué dicen los señores diputados que actualmente ocupan bancas y que estaban en el consejo superior cuando, sin quórum, sin conocer el reglamento, modificó el estatuto? A eso le llaman autonomía; para eso piden autonomía. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ferrer Zanchi. — Desde el año 1952 a todo el personal docente de la universidad se le exigió la presentación de la ficha «garantía personal» y los que no lo hacían quedaban cesantes. Entre otros recuerdo al doctor Alejandro Pavlovsky, profesor adjunto de clínica quirúrgica, y al docente libre, doctor Yacobone. A mí mismo, como docente de la cátedra de medicina legal de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, en mayo de 1953 se me envió una nota en la cual se me exigía la presentación de la ficha de «garantía personal».

Comenzaré ahora a efectuar algunas consideraciones sobre el gobierno de la universidad de acuerdo al proyecto de ley que consideramos.

El artículo 9º de este proyecto de ley dice: «El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en sus funciones.» El artículo 10 dice: «Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario y 30 años de edad.» Es decir, que el rector va a ser nombrado directamente por el Poder Ejecutivo.

Además, no es necesario poseer título máximo de la facultad para ser rector, ni antigüedad alguna como diplomado.

El artículo 11 de la ley 13.031 dice: «(Requisitos). Para ser rector se requiere: ser ciudadano argentino, haber cumplido 30 años de edad y 10 años de diplomado; poseer el título máximo de la facultad nacional correspondiente o ser profesor titular o adjunto confirmado.» Por lo tanto, según esta ley, para ser rector de la universidad sólo es necesario un simple título universitario y tener más de treinta años de edad.

El rectorado de una universidad argentina, según este proyecto de ley, podrá ser ocupado por una persona recién graduada, sin experiencia alguna en los problemas universitarios; sólo será preciso tener como antecedente básico para el cargo el de ser amigo personal del presidente de la República que gobierne al país en ese momento. El rector debe ser un hombre que conozca los problemas universitarios, y sólo los podrán conocer aquellos que han ejercido la docencia universitaria.

La ley Avellaneda, sancionada en 1885, en el inciso 1º de su artículo 1º decía: «La universidad se compondrá de un rector elegido por la asamblea universitaria.» Es decir, que la ley que estamos estudiando sesenta y ocho años después, es más oligárquica que la sancionada en el año 1885. Por la ley Avellaneda se reconocía la autonomía de la universidad para elegir rector, y éste debería ser electo del seno de la asamblea universitaria.

En un proyecto de ley sobre régimen orgánico educacional enviado al Congreso de la Nación por el doctor Yrigoyen en julio de 1918, en el artículo 149 se mantenían principios análogos. Es decir, que reconocía que el rector debía ser nombrado por los profesores universitarios titulares, adjuntos o extraordinarios reunidos en asamblea y elegido de entre ellos; lo mismo establecían los proyectos de ley universitaria presentados por los diputados pertenecientes al sector de la Unión Cívica Radical, señores Gabriel del Mazo, Alfredo Calcagno, Luis Dellepiane y otros. El profesor Nerio Rojas, en el debate sobre la ley universitaria del año 1947, expresó de manera amplia y completa lo que representaba para la autonomía

universitaria la designación de rector por medio del Poder Ejecutivo.

El artículo 11 de este proyecto, que se refiere a las facultades del rector de la universidad, dice en el inciso 9º: «Designar y remover el personal docente, auxiliar de la docencia y técnico-profesional.» Vale decir, que puede designar y remover al personal docente, que comprende profesores titulares, suplentes, jefes de trabajos prácticos, ayudantes de cátedra. Por lo tanto, se da al rector de la universidad un poder enorme. Esta facultad que se da al rector es más amplia que la que se establece en la ley 13.031, cuyo artículo 12, inciso 10, dice: «Nombrar y remover el personal de la universidad, cuya designación y remoción no corresponda al Consejo Universitario o a las facultades, de acuerdo con el artículo 123 de la ley 12.961, y su reglamentación.» Es decir, que el personal docente no podía ser removido de su cargo.

Además, la incompatibilidad establecida en el artículo 14 de la ley 13.031, desaparece ante esta ley.

Aquí se habló, hace pocos momentos, de la corrupción que imperaba en la universidad antes de 1946. Los señores diputados de la mayoría han olvidado casos como el del ingeniero Carlos Pascali, rector de la Universidad Nacional de La Plata en 1951. Este señor tiene un prontuario policial muy frondoso, toda vez que tiene entradas por lesiones en los años 1910, 1917 y septiembre y noviembre de 1922; ha sido acusado de estafas contra el Estado mismo (venta de rieles viejos); tuvo algún *affaire* en el turf, cuando Vignart presidía la comisión de carreras del Jockey Club de La Plata, en un asunto turbio, por cuanto pintaron a un caballo de carrera para reemplazarlo por otro. Estos son los antecedentes universitarios del señor Pascali, hasta hace poco representante en la UNESCO. La corrupción, pues, es más grave ahora que en 1946.

El artículo 14 del proyecto de ley que estudiamos se refiere a la constitución del consejo superior universitario, y establece al respecto lo siguiente: «El Consejo Universitario estará constituido por el rector, que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.» Como los decanos son nombrados por el rector, las reuniones del Consejo Superior se realizarán en familia.

El inciso 11 del artículo 18 de la ley 13.031 dice que las atribuciones del consejo universitario serán las de «aprobar o devolver observadas a las facultades las ternas formuladas por éstas, para la provisión de cátedras titulares, así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para la designación de profesores adjuntos, extraordinarios y honorarios. El Consejo Universitario sólo tiene facultad para considerar el aspecto formal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca el

orden de los nombres ni la competencia científica y didáctica que son privativos de cada facultad». De manera similar se expresa el artículo 15, inciso 8º, del proyecto de ley que estudiamos.

Sin embargo, han ocurrido últimamente serias anomalías en concursos efectuados en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Después de haber sido aprobados por unanimidad por los respectivos jurados los doctores José Celasco, en Clínica Médica; Alberto Goñi, en Semiología y Clínica Propedéutica; Andrés Santos, en Cirugía Torácica; Roberto Pintos, en Clínica Obstétrica; Atilio Bottini, en Clínica Quirúrgica; y Carlos Lanari, en Radiología, el Consejo Superior Universitario, luego de transcurridos en algunos casos más de ocho y diez meses sin dar razón alguna, no hizo lugar a la designación de profesor adjunto a los profesionales citados, todos ellos universitarios correctos, de alta capacidad científica, y que en todo instante han demostrado su cariño a la docencia. La razón real es que la sección universitaria de Control de Estado indicó que convenía no designar a los mencionados médicos por ser personas que, a juicio de Control de Estado, no estaban identificadas con el actual sistema de gobierno. Y como el rector y demás miembros del Consejo Superior dependen directamente del Poder Ejecutivo, se apresuraron a acatar las órdenes emanadas de esa dependencia del Estado.

Este episodio demuestra lo grave que es para la universidad su falta de autonomía y su dependencia total y absoluta del Poder Ejecutivo.

Tenemos otro caso: el de un profesor que todavía no tiene sesenta años de edad, pero hay interés en colocar a otro profesor en esa cátedra; se trata del profesor de Radiología y Fisioterapia de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ya se murmura que lo reemplazará el doctor Rienzo, de Córdoba.

El artículo 27 de la ley 13.031 establecía las condiciones para la elección de decano de la facultad. Dice dicho artículo: «Los consejeros elegidos se reunirán bajo la presidencia del de mayor edad que sea profesor titular, y elegirán, por el voto de la mayoría, decano de la terna enviada por el rector de la universidad.»

En cambio, el artículo 21 del proyecto de ley que consideramos dice: «El decano será designado por el rector. En caso de que el nombramiento de decano recaiga en uno de los consejeros, el consejo directivo será integrado por el consejero sustituto que corresponda a la categoría del profesor designado decano.» Quiere decir, que el rector ya no manda la terna, sino que envía directamente el decano. Las facultades no pueden optar entre otros candidatos. Además, el artículo 26 suprime la edad mínima para ser decano, que se establecía por el artículo 34 de la ley 13.031.

Se señala, además, que el decano tiene amplias facultades sobre el personal.

El inciso 7º del artículo 29 establece que el decano «puede designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional». Es decir, que todo el personal docente de las facultades no sólo está en manos del rector, sino en manos de los decanos.

Las incompatibilidades establecidas en el artículo 39 de la ley 13.031 han desaparecido, lo mismo que los gastos de representación que figuraban en el artículo 37 de dicha ley, y que no figuran en el proyecto que estamos estudiando.

El artículo 23 del proyecto de ley que tratamos —tiene mucha importancia y ruego a los señores diputados que presten atención— dice: «Si por sucesivas vacantes o ausencias quedare agotado el número de consejeros sustitutos, el consejo directivo, aun en minoría, designará de entre los profesores, según sea la vacante, el que deba llenarla para completar el período.» Es un verdadero absurdo que un consejo directivo de una facultad, desintegrado —dicho artículo dice «aun en minoría»—, esté facultado para nombrar los profesores que deberán ocupar las vacantes hasta completar período. Lo lógico y justo es que se convocara a elecciones. Este artículo puede prestarse a la realización de maniobras de toda índole dentro de las facultades.

El artículo 30 de la ley 13.031 dice: «Las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de siete consejeros y sólo podrán ser presenciadas por los profesores, por periodistas y por no más de quince estudiantes de la misma facultad.» Afortunadamente, en el proyecto de ley que tratamos esa disposición fué derogada, pues era totalmente antidemocrática.

La provisión de cátedras por concurso es tradición universitaria argentina. Ya desde la época del virreynato se proveían las cátedras por concurso; en la actualidad también se establece el concurso como único medio de proveer las cátedras. Este sano principio no debe ser desvirtuado; ninguna clase de partidismo político debe gravitar en los concursos para la designación de los profesores. Yo creo que lo más correcto y práctico es el nombramiento automático de los jurados, que estarían integrados por los profesores titulares de la asignatura llamada a concurso de las demás universidades del país. De esa manera se aseguraría la imparcialidad del jurado, pues no sería nombrado por los consejos directivos, sino que su designación emanaría de la propia ley. Los profesores titulares, además, son quienes están en mejores condiciones para apreciar la capacidad técnica, los trabajos, su dedicación a la docencia.

El artículo 38 del proyecto de ley que consideramos dice: «El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión

asesora compuesta por tres miembros, sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares de la misma materia, si los hubiera, y de las materias afines a la cátedra de la misma facultad y/o de otras facultades si no alcanzare a integrarse con los de aquélla.»

Yo creo conveniente que el artículo relacionado con la designación de profesores titulares estuviera redactado de la siguiente manera: «Las cátedras vacantes serán provistas por concurso. El jurado estará compuesto por los profesores titulares de la disciplina llamada a concurso de las demás universidades del país y por el profesor de la disciplina más afín de la propia universidad. Sobre la base de dicho dictamen el claustro de profesores de la respectiva facultad votará una terna de candidatos por orden de méritos, que será pasada al Consejo Superior y, si éste la apróbase, el Poder Ejecutivo, quien designará de ella al profesor que deba ocupar la cátedra. El Consejo Superior sólo podrá rechazar las ternas por objeciones de orden moral a los candidatos o vicios legales en la tramitación del concurso. No podrá alterar el orden de la terna ni juzgar acerca de la competencia científica o didáctica de los candidatos, por ser esto privativo de las facultades.»

Relacionada con la destitución de los profesores ésta debe ser severamente reglamentada; es necesario, básico, fundamental, para que la investigación científica sea fecunda, que a los profesores se los ponga a cubierto de las luchas políticas y se asegure a los mismos la estabilidad necesaria para asegurar la autonomía docente en uno de sus aspectos fundamentales, creo que debía reglamentarse de la siguiente manera: «La destitución de profesores titulares será decretada por el Poder Ejecutivo a pedido del claustro, por mayoría de dos tercios de votos de la respectiva facultad. Asistirán, con voz y voto, los delegados estudiantiles.»

Las siguientes son las únicas causas por las cuales puede separarse a un profesor, cualquiera sea su categoría: a) Condena criminal que no sea por hecho culposos; b) Inconducta; c) Incompetencia; d) Inasistencia reiteradas; e) Aceptación de empleos o comisiones incompatibles con el cargo.

Creo que de esta manera se evitarán los hechos vergonzosos ocurridos en la universidad argentina a partir del año 1946, en que los profesores que no pensaban de la misma manera que los hombres del oficialismo fueron perseguidos, separados de sus cargos, ya declarándolos cesantes o por el procedimiento de jubilarlos de oficio.

El artículo 45 del proyecto del Poder Ejecutivo dice: «Los profesores adjuntos serán nombrados por concurso por el consejo directivo, con aprobación del consejo universitario, de acuerdo con la reglamentación pertinente.

«Para ser admitido al concurso se requieren las mismas condiciones exigidas en el caso de

los profesores titulares, salvo la antigüedad como egresado, que se reduce a dos años. Podrá admitirse a los concursos para profesores adjuntos, aun cuando no hayan seguido la carrera docente, a aquellos candidatos de reconocida personalidad científica, probada con trabajos o actuación docente. En tal caso, se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.»

No creo práctico este artículo 45. Debe respetarse la carrera docente y permitir que sólo puedan presentarse a concurso los que hayan seguido dicha carrera. El ser propuesto por cuatro consejeros en los casos de no haber seguido la carrera docente se puede prestar a maniobras interesadas. Conozco personalmente el caso de un profesor adjunto a determinada cátedra de la Facultad de Medicina que nunca tuvo, durante largos años, contacto con dicha especialidad, que sólo se interesó por esa materia cuando fué nombrado, por razones de parentesco, médico en un importante cargo nacional. Posteriormente, sin tener el título de la especialidad e invocando antecedentes científicos basados en el cargo que tenía, fué admitido en un concurso en el que se presentó solo y fué nombrado profesor adjunto de dicha materia.

El artículo 65 de la ley 13.031 establecía: «Se designarán cada año hasta dos profesores adjuntos para actuar como asistentes del profesor titular. El profesor titular turnará entre los profesores adjuntos la designación de los asistentes. Serán nombrados por el decano a propuesta del profesor titular y tendrán, además de las obligaciones inherentes a su carácter de adjuntos, las que reglamente cada facultad para su condición de docentes auxiliares de la cátedra titular.»

Este artículo ha sido derogado. Creo que es un error. Es lógica y necesaria la colaboración directa, por rotación, de los profesores adjuntos en la cátedra oficial. Este procedimiento era de gran utilidad, sobre todo en las cátedras de la Facultad de Medicina. No comprendo cuál es la razón que determinó la derogación de este artículo.

Es inconcebible que haya sido derogado el artículo 69 de la ley 13.031. Al sancionarse esta ley, la propaganda oficialista giró de manera espectacular con el *full-time*, y tanto, que se llegó a decir que en un tiempo cercano, todos los profesores serían *full-time*. Por experiencia personal creo que el *full-time* es necesario en ciertas cátedras, como, por ejemplo, en fisiología, anatomía, patología, terapéutica, farmacología, etcétera.

El maestro Bernardo Houssay, del cual tuve el honor de ser ayudante durante diez años, se dedicaba exclusivamente a la enseñanza y a la investigación, y recuerdo que en el año 1935

el sueldo que percibía como *full-time* era de mil doscientos pesos. El resultado fué excelente: con su dedicación exclusiva, el doctor Houssay efectuó trabajos científicos de gran valor, haciendo conocer la ciencia argentina en todo el mundo. El premio Nóbel que obtuvo fué el resultado de la dedicación exclusiva a la ciencia.

Creo que debe incluirse el *full-time* nuevamente, pero no con la asignación que establecía la ley 13.031 (que era de 3.500 pesos mensuales) sino adaptada a las actuales circunstancias.

Debo destacar que el *full-time* era una vieja aspiración reformista, y que ya en 1918 se consideró de manera favorable el *full-time*.

Igualmente la categoría de profesores adjuntos asistentes debe restablecerse con una retribución lógica, y todos los adjuntos deben recibir una remuneración mensual como establece la ley 13.031.

Sobre la jubilación de los profesores creo que debe efectuarse tomando como base el último sueldo.

Relacionado con la carrera docente estoy perfectamente de acuerdo que se establezca con carácter obligatorio en todas las universidades y en todas las facultades del país.

En la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires hace años que está establecida. Es una selección severa y si se quiere difícil, pero los resultados en general son óptimos; casi todos los profesores de esa facultad son hombres que demuestran, además de una excelente preparación profesional, cariño a la docencia y amplio espíritu investigador.

Debo poner de relieve que la carrera docente está establecida en la Facultad de Medicina desde el año 1930, de manera rigurosa y con excelentes resultados.

Desgraciadamente en otras facultades, como en la de Derecho, por ejemplo, eso no ocurre. Los profesores titulares son nombrados sin anteriores antecedentes docentes, a raíz de la renuncia de numerosos profesores titulares con motivo de la intervención en las universidades en el año 1946. Estos fueron reemplazados por hombres sin antecedentes docentes de ninguna especie, pero, eso sí, todos peronistas.

Es de desear que se cumplan estrictamente los requisitos que determinan la carrera docente y que las cátedras sean ocupadas por quienes tienen cariño verdadero por la ciencia.

El artículo 53 del proyecto de ley que consideramos se refiere al claustro universitario, pero lo hace de un modo impreciso y vago, sin especificar qué misión tiene. La reunión del mismo queda librada a la voluntad del decano como bien lo dice el artículo 54, que dice: «El decano citará el claustro general o parcial cuando lo considere conveniente, pudiendo consultarlos por escrito.»

A mi juicio, la autoridad máxima de cada facultad debe ser el claustro de profesores, inte-

grado por la totalidad de los profesores titulares, los representantes de los demás docentes en número no mayor a la mitad de los profesores titulares y los representantes de los graduados y estudiantes en el Consejo Directivo. El claustro entiende en todas las cuestiones de orden docente: planes de estudio, creación de institutos, departamentos, cátedras nuevas, nombramientos de profesores, etcétera. Debo mencionar que la ley 13.031, en su artículo 76, establecía una reunión anual por lo menos del claustro de profesores.

El título V en los artículos 58 y 59 se refiere a los estudiantes, en especial el artículo 59, que dice textualmente: «Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado, alumno regular de uno de los tres últimos años de estudio, y proveniente de entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles.»

Según este artículo, no existe verdadera representación estudiantil, pues dichos delegados no serán la genuina representación de todos los estudiantes. Lo lógico y razonable, lo verdaderamente democrático sería que todos los estudiantes eligieran por libre votación a su delegado. Además, no se especifica qué condiciones son necesarias para que los consejos directivos de las facultades reconozcan como artificial a determinada entidad gremial.

Sin duda alguna, la verdadera entidad gremial que cuenta con la mayor parte de los estudiantes democráticos y reformistas es la FUBA, pero la FUBA no será reconocida. Los principios democráticos, reformistas e independientes hacen que la nueva oligarquía la tema y le convenga que la FUBA desaparezca. En cambio, será reconocida la CGU, que no tendrá prestigio entre la masa estudiantil, que no sustenta principios democráticos ni reformistas, pero en cambio sustenta y sostendrá una obsecuencia y sometimiento total a todas las directivas que emanen de la Casa de Gobierno o de sus representantes.

Además, el artículo 59 dice que tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles. Sería interesante que se aclare qué asuntos pueden existir en las universidades que no interesen a los estudiantes. Creo que todos los asuntos universitarios interesan al estudiantado.

Por el artículo 58, los delegados estudiantiles serían elegidos, como se dice vulgarmente, «a dedo».

Creo que los alumnos de la universidad deben participar en el gobierno de la misma. Los representantes estudiantiles deben actuar en los consejos directivos de las respectivas facultades y en los consejos superiores de cada universidad.

Muchas iniciativas reconocen como fuente la opinión estudiantil. Sería interesante que en todas las cuestiones debatidas en los consejos directivos de las facultades se conozca la opinión estudiantil expresada por medio de sus representantes legales.

Los delegados estudiantiles a los consejos directivos deben ser elegidos por el voto obligatorio de todos los estudiantes de cada facultad; y los delegados estudiantiles al Consejo Superior Universitario deben ser elegidos por el voto obligatorio de todos los alumnos de cada universidad.

El doctor Nicolás Romano, ex profesor titular de clínica médica de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, en su libro titulado *Dichos y hechos al servicio de la universidad*, expresa conceptos sumamente interesantes sobre el voto y agremiación obligatoria.

El voto debe ser obligatorio, de manera que los delegados a los consejos directivos de las facultades y consejos superiores universitarios sean la representación legal y genuina de los estudiantes. El no votar sería castigado con la imposibilidad de presentarse a rendir examen en la época inmediata posterior al acto electoral. Debo destacar que si era malo el artículo 85 de la ley 13.031, peor es el procedimiento que establece el artículo 58 para la designación de delegados estudiantiles, pues permite maniobras de camarillas estudiantiles.

En la actualidad la Universidad de Buenos Aires cuenta con 64.000 estudiantes. Su distribución, comparada con la de 1940, 1952 y 1953 es la siguiente: Facultad de Derecho: en 1940, 2.900; en 1952, 9.840; en 1953, 14.328; Ciencias Médicas: 7.000, 12.123 y 14.664, respectivamente; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: 2.700, 4.472 y 8.460; Filosofía y Letras: 920, 1.750 y 1.137; Ciencias Económicas: 2.500, 15.200 y 19.660, y Odontología: 1.660, 2.850 y 3.456. El 15 % del total son estudiantes extranjeros. En Medicina, el 21 % son estudiantes extranjeros, casi todos americanos y gran cantidad de centroamericanos.

Nuestro deseo ferviente es que todos los años aumente el número de estudiantes, pero sin que la preparación teórica y práctica de los estudiantes se resienta. Conozco bastante lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Médicas. El número de estudiantes aumentó de 7.759, en 1945, a 14.664, en 1953; es decir que se duplicó en siete años. Pero no se aumentó el personal para trabajos prácticos ni el material para realizarlos. Además se han simplificado los estudios. Existen catorce materias, como neurología, psiquiatría, dermatología, oftalmología, radiología, tuberculosis, que se aprueban sin rendir examen, sólo con efectuar los correspondientes trabajos prácticos que, dada la gran cantidad de alumnos y la falta de material y de personal, se hacen de manera muy deficiente,

con descenso de la preparación de los futuros médicos.

Hasta hace pocos años —y en eso estarán de acuerdo los señores médicos que se sientan en esta Cámara— la preparación teórica de los médicos argentinos era una de las primeras del mundo, quizá un poco débil en la parte práctica, pero que se corregía fácilmente ante la sólida preparación teórica. Hoy es débil la preparación teórica y más débil aún la práctica; descende la preparación de los médicos de nuestra patria.

Sr. Rumbo. — ¿Me permite el señor diputado una interrupción, con la venia de la Presidencia?

Sr. Ferrer Zanchi. — Sí, señor diputado.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rumbo. — Sin ánimo de molestarlo, rogaría al señor diputado que, a los efectos de esclarecer el tema en debate, nos explicara por qué es débil la enseñanza, tanto en su aspecto teórico como en su aspecto práctico.

También ha dicho el señor diputado que no hubo mayor disponibilidad de elementos de enseñanza para un incremento tan grande de alumnos. Estoy de acuerdo con esa afirmación porque en más de una oportunidad me he tomado el trabajo de concurrir a cursos de primer año de la Facultad de Medicina y me encontré con un extraordinario hacinamiento de estudiantes.

De las cifras que ha mencionado el señor diputado se deduce, en forma palpable, que uno de los efectos trascendentes de la ley universitaria reformada por el Congreso de 1947, al establecer el principio de absoluta gratuidad, se tradujo en el mayor número de estudiantes inscritos. ¿Estamos de acuerdo, señor diputado?

Sr. Ferrer Zanchi. — Sí, señor diputado; pero...

Sr. Rumbo. — Ello significa que la ley ha tenido un resultado notablemente beneficioso para los intereses del pueblo, porque al incrementarse en tan breve tiempo hasta el cien por ciento las inscripciones se pone en evidencia que el principio de la semigratuidad que regía anteriormente excluía a una masa considerable de alumnos.

El sector de la mayoría desea que con esta ley que ya nutre la enseñanza absolutamente gratuita, por vía del rubro rentas generales, se le provea de los elementos que ella necesita en cuanto a profesorado, a instrumental y edificios, a efectos de que la enseñanza universitaria superior sea impartida en las óptimas condiciones que el desarrollo cultural y político de la Nación requiere. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ferrer Zanchi. — En anatomía descriptiva se enseña con láminas y los trabajos prácticos que antes se hacían en comisiones formadas por 25 alumnos hoy las forman 80.

En cuanto a la gratuidad de la enseñanza, es relativa. La libreta universitaria antes costaba 20 pesos, ahora 30; los derechos de exámenes, 12 pesos y en la actualidad 30; el diploma actualmente cuesta alrededor de 300 pesos y el anterior arancel universitario era de 210 pesos, se pagaba en cinco o seis cuotas.

Los precios de los libros de texto también han subido en forma notable. Por ejemplo, *Patología Quirúrgica*, de Igarzábal, que constaba de 4 tomos, costaba 220 pesos; ahora cuesta 950. *Anatomía Descriptiva*, de Testud-Jacob, actualmente cuesta 1.690 pesos; encuadernado en tela, en 1946, su precio era de 385 pesos y de 500 en 1949. *Anatomía Topográfica*, Testud-Jacob, 2 tomos, en tela, en 1948 costaba 198 pesos; en 1953 cuesta 825 pesos. Di Fiori, *Histología*, rústica, 2 tomos, en 1946 costaba 70 pesos; 150 en 1951 y 250 en 1953. Todos los libros han sufrido aumentos paralelos.

Sra. Rodríguez (C. E.). — ¿Me permite el señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. Ferrer Zanchi. — Sí, señora diputada.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez (C. E.). — En la época en que los libros eran más baratos, ¿cuánto ganaba un sastre, un albañil, un pintor, un electricista, un obrero del puerto? Hoy pueden mandar sus hijos a la facultad; ayer no, porque sus entradas materiales eran sueldos de hambre que no les permitían no sólo comprar un libro, ni pagar los derechos de exámenes.

Sr. Nudelman. — ¿Y todos los universitarios que se sientan en estas bancas?

Sr. Ferrer Zanchi. — Nunca los sueldos aumentaron en la misma relación que el costo de los libros. El que habla y todos los compañeros de mi sector somos hijos de gente pobre y sin embargo hemos podido estudiar.

Sr. Albrieu. — Antes el sueldo no alcanzaba ni para los zapatos.

Sr. Da Rocha. — ¿Me permite una interrupción, con el consentimiento de la Presidencia?

Sr. Ferrer Zanchi. — Sí señor diputado.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Da Rocha. — Ampliando lo que el señor diputado Rumbo manifestó recién respecto de las dificultades, que aduce el señor diputado de la minoría, existentes para las prácticas que se realizan en la Facultad de Medicina, en mi

concepto hay dos factores importantísimos que se deben tener en cuenta: primero, la plétora de estudiantes, que no se debe exclusivamente a los motivos que se han expuesto, sino a que hay muchos estudiantes extranjeros.

Sr. Ferrer Zanchi. — Ya hice referencia a ese aspecto, y dije que hay un 21 % de estudiantes extranjeros.

Sr. Rumbo. — Hay dieciséis mil estudiantes extranjeros.

Sr. Da Rocha. — En segundo lugar hay otro factor mucho más importante, que es el material, sobre todo anatómico, que se necesita para la práctica de los estudiantes de medicina, el que escasea debido exclusivamente al estado económico en que ahora se hallan los obreros, quienes ya no abandonan los cadáveres en los hospitales porque disponen de medios para enterrarlos y, además, porque el standard de vida hace que haya disminuído mucho el estado de gravedad de las enfermedades que determinan la muerte. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sra. Presidenta (Degliomini de Parodi). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ferrer Zanchi. — En radiología los trabajos que se realizan son deficientes, a pesar de los enormes esfuerzos del personal técnico, porque no hay material. Lo mismo ocurre en anatomía patológica y en otras cátedras que conozco.

Se debe destacar también que las bibliotecas de las facultades cuentan en la actualidad casi con el mismo número de libros que tenían en el año 1943, cuando la cantidad de alumnos era menor.

Creo que tiene gran sentido el artículo 28 del proyecto presentado por los señores diputados Nudelman y Fassi, que se refiere a la ayuda que debía dar el Estado a los estudiantes que no tienen medios para costear sus carreras.

El proyecto de ley que esta Cámara está considerando sólo se refiere a los egresados en el artículo 60, que dice: «Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando centro de graduados y cursos de perfeccionamiento o especialización.» En cambio —y estoy de acuerdo con los cursos de especialización para graduados— creo conveniente, tanto para la universidad como para los egresados, que exista una vinculación directa entre ambos. El egresado, al mantener su vinculación con la universidad, continuará recibiendo la influencia de un medio científico moderno y al día. La participación de los egresados en los consejos directivos de las facultades es necesaria, pues de esta manera se conocería la opinión de los egresados sobre la orientación universitaria, sobre la preparación teóricopráctica que se dispensa a los alumnos, etcétera.

Estimo que es necesario contemplar la posibilidad de mantener vinculados a los egresados con las facultades. En este sentido, este proyecto de ley no se refiere para nada a este aspecto.

En síntesis, en el proyecto de ley que estamos considerando la autonomía universitaria no existe, pues el rector es un agente directo del gobierno que ni acuerdo del Senado necesita, y los decanos de las respectivas facultades son nombrados directamente por el rector.

No existe tampoco auténtica representación estudiantil. El representante estudiantil no es elegido por el voto de todos los estudiantes, sino que lo es por las entidades estudiantiles reconocidas.

La situación de los egresados no se contempla. El artículo 49 de la ley 13.031 desaparece. Dicho artículo decía: «Las universidades no deberán desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y alumnos no deben actuar directa ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en transgresión de ello, de suspensión, cesantía, exoneración o expulsión según el caso. Esto no impide la actuación individual por la vía legítima de los partidos políticos, pero, en ese caso, actuarán como simples ciudadanos y no en función universitaria.»

Con este artículo se pretendía desterrar la política dentro de la universidad, al menos en sentido teórico, pues en la práctica esto no se cumplía: la adhesión y la solidaridad de la universidad con el Partido Peronista era total; en todos los actos políticos la universidad estaba presente.

Este artículo, al sancionarse la ley en 1947, fué señalado como la expresión de neutralidad de la universidad en materia política.

Igualmente se deroga el artículo 99 de la ley 13.031, que se refiere a la enseñanza libre, conquista reformista. En el nuevo proyecto no se tiene en cuenta la enseñanza libre.

Por el inciso 9º del artículo 11, y 7º del artículo 28, se faculta, respectivamente, al rector y a los decanos a remover al personal docente de las casas de estudio. Esto es el absolutismo total.

En una palabra, más de treinta años de sacrificios por sustentar los ideales reformistas de 1918 desaparecen con la sanción de esta ley; las universidades argentinas retroceden a la época colonial en que las camarillas oligárquicas eran señores feudales dentro de las universidades.

Sr. Rumbo. — Está incurriendo en error.

Sr. Ferrer Zanchi. — En esta nueva ley universitaria han sido proscritos los enunciados de la reforma universitaria y con ello proscrita la juventud del país, malograda en su magnífico empeño de construir una universidad emancipada y autónoma, puesta al servicio del pueblo, con un alto propósito de investigación y cultura, con libertad de pensamiento, sin el embretamiento de la domesticidad política, y como una expresión de la pujanza de una nación joven, que marcha a la conquista de sus altos destinos.

Para esa juventud y para nuestro pueblo, que empieza a despertar del deslumbramiento de las ficciones con que se le asedia, son estas palabras de la Unión Cívica Radical, reclamo y compromiso para la reconstrucción de la auténtica universidad argentina en un futuro quizá no tan remoto. (*Aplausos.*)

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Goitia. — Con verdadera satisfacción puede la Honorable Cámara recoger las expresiones con que el Poder Ejecutivo propicia estas reformas parciales a la actual ley universitaria.

Esa ley, se dice en el mensaje, ha marcado una etapa decisiva en la necesaria evolución que se está operando en la enseñanza superior; y constituye el instrumento del tan anhelado advenimiento de la nueva universidad de que había menester la nueva Argentina.

Conocemos la patente verdad que traducen estas manifestaciones del Poder Ejecutivo, que, como digo, complace señalarlas. Si era suficiente un simple cotejo de la ley 13.031 con la antigua ordenación legal de la universidad, para apreciar la hondura de la reforma que el general Perón propició en 1947, las expresiones del mensaje a que acabo de referirme testimonian claramente, no sólo la amplitud de una concepción universitaria notoriamente inspirada en los postulados generosos del justicialismo, sino la realidad fecunda de la obra realizada por el gobierno en este campo, tan eminente como delicado, en que desarrollan su cometido los institutos de enseñanza superior universitaria.

Entiendo que la Cámara debe prestar su aprobación a las reformas parciales a que se refiere el despacho que estamos considerando.

Ellas perfeccionan técnicamente a la ley 13.031; adecuan sus finalidades a las nuevas normas de la Constitución de 1949 y a los objetivos del segundo Plan Quinquenal; y facilitan su desenvolvimiento financiero.

De modo que no puede, a mi juicio, haber dificultad en la aceptación de esas reformas, cuyo fundamento ha dado mi distinguido colega el señor diputado Forteza.

Deseo, sin embargo, destacar, en breves palabras, lo que en verdad merece ser señalado en

esta materia como la innovación más importante y trascendente.

Me refiero a lo que se establece en el artículo 2º sobre la inclusión en todos los planes de enseñanza, además de las materias específicas, de cursos de carácter formativo, dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución.

Estoy cierto que las universidades, en cumplimiento de esta cláusula, habrán de seguir las orientaciones que en materia educativa y cultural prefijan la Constitución Nacional y los objetivos del segundo Plan Quinquenal.

Resulta de toda evidencia la alta significación y trascendencia que una formación como la prevista está llamada a tener en la cultura y en la vida universitarias. Esta decisión es un índice elocuente del espíritu que anima a la ley y de la conducción con que el gobierno se apresta a la práctica para hacer efectivo en la universidad un viejo anhelo de nuestra cultura. Me refiero a esa integral formación humana de sus docentes y estudiantes a que las universidades deben aspirar aun con preferencia a la misma especialización técnica.

Solamente así podrá extirparse de raíz ese nefasto virus individualista, esa desviación egoísta, materialista, a que conduce el solo afán de obtener un título profesional, una habilitación, por más importante que sea, para actuar mejor en la lucha por la vida. Sólo mediante un serio esfuerzo de la docencia formativa y cultural, puede ser vencida esa lamentable tendencia que tan crudamente se evidenció en la vieja universidad. Sólo así se puede llegar a la obra formativa, que el general Perón reclama, en todos los tonos y casi todos los días, con ese fervor de apóstol con que sabe inculcar y hacer triunfar las fecundas ideas que nutren su doctrina. Solamente así, como quiere la ley que estamos considerando, se realizará ese esfuerzo formativo en que docentes y alumnos concurrirán al pleno ejercicio de realizar la responsabilidad social universitaria, y adquirirán conciencia, como se dice en la ley, de su obligación de no olvidarse de que su empeño debe tener también la finalidad de servir al pueblo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Pues ésa es, señora presidenta, como sabemos —y conviene siempre recordarlo en esta materia—, la misión que la Constitución justicialista encomienda a las universidades: preparar a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad.

Debemos, consiguientemente, contribuir al perfeccionamiento de una ley mediante la cual se realizan tan altos objetivos de orden científico, docente y cultural; y por ello corresponde aprobar, a mi juicio, las modificaciones de de-

talle que ha propuesto el Poder Ejecutivo con el ánimo de proveer mejor a la realización de las finalidades que determinan la orientación universitaria a que me he referido. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — Reanudamos la labor, señora presidenta, después de un acto legislativo excepcional que, según expresiones del Poder Ejecutivo, tiende al reencuentro de los argentinos. Fué ocasión para que el señor ministro del Interior concurriera al recinto, sentando un precedente que lamentablemente no sigue el señor ministro de Educación, y en virtud de lo cual, por primera vez en la historia parlamentaria argentina, trataremos una ley tan fundamental, como la que hace a la instrucción superior, sin la presencia del ministro del ramo.

El señor ministro del Interior expresó en su discurso que, sin perjuicio de la pureza con que cada fuerza política mantenga su ideario, el Poder Ejecutivo está dispuesto a considerar y aun a utilizar las iniciativas de bien público que brinde la oposición como un aporte al común menester. En esta ocasión en que se trata la ley universitaria, no nos hemos concretado a una disidencia estéril, brindándole a la Honorable Cámara un proyecto de ordenamiento para la universidad, que reputamos más conveniente para los intereses públicos, que el sostenido por la mayoría. Reiteramos la solución sometida ya a la consideración de la Honorable Cámara en 1947.

Queremos emplazar el debate en su verdadero terreno, pues no se trata, señora presidenta, de expresar un memorial de cargos ni de hurgar en el pasado para evidenciar las fallas que éste pueda exhibir, sino que se trata de construir para el futuro, para darle a la universidad argentina el ordenamiento jurídico que atienda mejor a su progreso.

Es con ese criterio que penetro en el debate. Soy de los profesores que debieron alejarse de la universidad argentina en los acontecimientos de 1946, pero no lo hice con heridas ni con cicatrices. En mi renuncia decía: «No deseo contribuir con una sola palabra al enardecimiento de los espíritus, sino que todas ellas sean un llamamiento a la cordura, para que quienes tienen medio para hacerlo no trabajen por la desintegración de nuestra cultura sino que reencaucen las universidades en un fecundo clima de paz, de libertad, de dignidad y de eficiencia.»

Así me fuí de la cátedra, impresionado por esa tremenda crisis que estaba barriendo su libertad y poniendo en peligro su eficiencia; en ella he vivido las mejores horas de mi vida y de ninguna manera podría utilizar mi banca sino para el servicio de la universidad, que es la mejor manera como puedo devolver todo lo que

ella me ha brindado y todo lo que de ella he recogido.

Estamos en un debate de gran trascendencia. Todos nosotros, los que hemos traspuesto sus umbrales y los que no han tenido esa oportunidad, pero que tal vez entregarán a la universidad la formación espiritual de sus hijos, deben venir con el ánimo sereno a buscar la mejor solución. Nosotros afirmamos que la que vamos a propugnar en este debate está más de acuerdo con la altura de los tiempos, con la Constitución que nos rige y aun con las ideas que son comunes a todos los argentinos, que proclama el radicalismo desde la oposición y que hemos escuchado de los labios de muchos de los señores diputados de la mayoría. Por eso pedimos atención para nuestras ideas, clima sereno para nuestra exposición; que debe necesariamente bordear zonas de tormenta, pero que es necesario no derivar hacia el episodio intrascendente de que a ello nos obliga la importancia del tema, pues la sociedad, para una vida plena y rica de contenido material y espiritual, requiere en pareja medida los frutos del trabajo y las flores de la cultura.

Venimos a este debate a brindar una solución. El señor ministro del Interior decía en la oportunidad que mencioné, que cuando no se cree en el apaciguamiento, no se puede trabajar por esa causa.

Yo le diría que en los ejércitos compuestos de héroes se lucha por la victoria, pero también se lucha por el honor de la bandera. Y nosotros desconfiamos de la victoria de esta iniciativa de bien público que presentamos a la consideración de la Honorable Cámara, pero venimos con todos nuestros entusiasmos, con ánimo heroico, porque estamos luchando por nuestra bandera.

La universidad, señora presidenta, es algo más que un ordenamiento legal. La universidad es un producto social. No puede ser ni mejor ni peor que su medio. Yo me animaría a decir que cada país y cada época tiene la universidad que merece, la universidad que puede sustentar en su medio social. La nuestra se fué elaborando en un largo proceso, una de cuyas más largas etapas empezó en junio de 1885 y fué regida por una ley que yo llamaría sabia, que sólo estaba compuesta de cuatro artículos, de los cuales uno era de forma.

La universidad argentina era autónoma y gobernada por su claustro de profesores, y a partir de la reforma de 1918, con alguna ingerencia estudiantil, que variaba en cada universidad. Con sus valores humanos, influida por su medio, con escasos recursos, la universidad formó nuestro cuadro de profesores, nuestra clase gobernante, nos dió jueces, nos dió médicos, nos dió ingenieros, nos dió filósofos y nos dió investigadores. Esa universidad, a la que ha querido exhibirse a través de sus defectos y de sus errores, es la que permitió que un hombre de ciencia argentino recibiera el premio Nóbel; es

la que permitió que otro hombre de ciencia argentino figure entre los benefactores de la humanidad, por una de las conquistas con que la ciencia va curando el dolor humano. Esa universidad nos permitió figurar con dignidad en congresos internacionales y sostener ante el mundo doctrinas como la de Bernardo de Irigoyen y la de Drago. Esa universidad, señora presidenta, es la que ha estado cumpliendo en el país la obra en cuya virtud nos exhibimos ante el mundo con una cultura, que aunque no sea la cultura a que aspiramos, es la cultura que hemos podido alcanzar, que es blasón de patria y, en consecuencia, patrimonio de todos los argentinos, y a la cual desde esta banca yo le rindo el homenaje de mi reconocimiento y de mi admiración.

No es que la universidad no mereciera críticas. No hay institución humana que no las merezca. Además, aunque hubiera alcanzado un gran estado de progreso, no es propio del hombre renunciar al perfeccionamiento, porque cualesquiera sean las excelencias de una institución, siempre está en el pensamiento soñar con una institución mejor.

¿Qué es lo que esas críticas presentan en concreto contra la universidad argentina? Que había dado nacimiento en su seno a un grupo oligárquico que la dominaba. Yo diría que al través de la ley Avellaneda, con sus cuatro artículos que no torturaban la evolución, sino que permitían un desenvolvimiento singular, no todas las universidades presentaron el mismo cuadro. Yo me animaría a decir que esa universidad, a la que llegué, humilde hombre de trabajo, para sentarme en sus bancos; esa universidad que me dió un título y una preparación; esa universidad que me abrió luego sus puertas como profesor y un día me honró llevándome a su consejo académico; esa universidad que luego me hizo su vicedecano; a esa universidad, durante el curso de mi vida en la misma, como alumno, como profesor y como gobernante, no se le pueden hacer los cargos que se han enunciado.

Sr. Albrieu. — También se le hicieron esos cargos a la universidad anterior al año 1918, a la que también habían concurrido estudiantes pobres, que obtuvieron sus títulos, y de esos graduados algunos se sentaron en estas bancas.

Sr. Fassi. — Esa universidad no estaba al servicio de ningún gobierno. Basta comparar quiénes ocupaban el poder político en las distintas etapas de la vida argentina, con los presidentes de las mismas, con los decanos de sus facultades y con los directores de sus institutos, para notar cómo en ella la condición política, la militancia política, no era un mérito para llegar a las más altas posiciones universitarias. Los concursos eran limpios y la injerencia estudiantil, de una magnitud que no tuvo en ninguna otra universidad argentina,

se inspiró siempre en una limpia, ardorosa, pero consciente y reflexiva inspiración.

Por eso cuando escucho que la injerencia estudiantil sólo ha sido fuente de escándalos, de corruptela, aduzco como la mejor réplica la circunstancia de que la universidad que marchaba mejor era aquella en la que había más injerencia estudiantil.

Pero vamos a suponer que esa universidad, como todas, estuviera en manos de un núcleo cerrado de profesores, que no quisieran abrirla a todas las vocaciones y a todas las capacidades. Vamos a suponer que hubiera llegado a convertirse en una oligarquía, y en ese supuesto cabe preguntarse: ¿si el peronismo es el afloramiento de un movimiento popular y democrático, cuál es el remedio que debe ofrecer a esos males? ¿El unicato y el absolutismo, o, por el contrario, el remedio de la democracia? ¿Se pretende reemplazar a una oligarquía por la voluntad de un hombre, en vez de haber buscado la solución en las formas democráticas, entregando su gobierno a todos los que la constituyen!

Nosotros no venimos a pedir la reimplantación de la ley Avellaneda y de sus estatutos, sino que venimos a ampliar la base del gobierno de las universidades. Entendemos que los profesores deben intervenir en el gobierno de la universidad, puesto que debemos atribuirles vocación docente, ya que están cumpliendo un verdadero apostolado. Entendemos que los alumnos no pueden ser masa amorfa y sin pensamiento, sino que deben intervenir en la vida de la universidad. Entendemos que la mejor manera de corregir los males de la democracia es ampliando los cuadros y por eso propugnamos en nuestro proyecto que los graduados deben también intervenir en el gobierno de la universidad.

Se ha dicho: ¿cuándo los graduados han intervenido en el gobierno de la universidad argentina? Yo contesto que nunca, pero agregó: ¿cuándo en un Parlamento se niega una reforma porque no tenga precedentes? Eso significaría anquilosarnos en el pasado y negar la posibilidad del progreso.

El docente representa la herencia cultural acumulada. Es al mismo tiempo crecimiento de cultura por sus investigaciones propias y da lugar a veces, tocado por las alas del genio, a algunas de esas grandes figuras que marcan con su estela el progreso de las ciencias y de la cultura.

El alumno es el receptáculo de la enseñanza universitaria, que la recibe en la medida de su vocación, de su avidez de conocimientos y de la preparación previa que le ha proporcionado la enseñanza secundaria. Estos dos valores deben trabajar de consuno. No puede ser que en una República, que asienta sus instituciones en el voto popular, se cometa la tremenda contra-

dicción de decir que todo ciudadano puede intervenir en el gobierno del Estado y que el estudiante, que ya tiene una preparación previa —bachiller o perito mercantil—, y el profesor, que debe acumular valores intelectuales y morales, no están en condiciones de gobernar su propia casa y de asentar sus autoridades en el sufragio secreto, base sobre la cual se asientan todas nuestras autoridades y todas nuestras libertades. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Claro está que para que la universidad esté a la altura de su cometido, se necesitan, además de los valores humanos, elementos técnicos, edificios adecuados, laboratorios bien provistos, instrumentales modernos, bibliotecas nutridas.

Nicolás Romano, en un meduloso ensayo sobre el mejoramiento de la enseñanza universitaria, dice, con su experiencia de maestro, conceptos que repetiré, señora presidenta, para que nos acerquemos a la razón por la cual la República Argentina todavía no contribuye, en mayor medida, a los progresos científicos universales: «La investigación científica está subordinada entre nosotros a modestos impulsos desprovistos de resonancia universal, no sólo porque son modestos sino, y muy principalmente, porque nos faltan recursos, instalaciones, materiales, estímulos, por cuyo motivo la labor científica en el país es mínima, insignificante, comparándola con la producción de otros que no tienen ni el número ni la calidad de los hombres de ciencia argentinos.»

Pero no se vaya a creer, porque sería incurrir en un manifiesto error, que este producto social que es la universidad se pueda trocar en otra cosa por arte de encantamiento o como consecuencia de la reforma de las leyes que nos rigen. Ya lo dijo Dilthey con su larga experiencia de las universidades de Basilea, Kiel, Breslau y Berlín: «Verdaderas reformas educacionales sólo pueden lograrse con un constante y difícil trabajo pedagógico a realizarse en el aula escolar. Leyes y decretos sólo pueden preparar los caminos de la reforma, en el sentido de evitarles obstáculos y, además, darles valor a los resultados obtenidos en el aula escolar. Pero ahí terminan su misión leyes o decretos; no pueden jamás crear nuevas realidades pedagógicas.»

Cuando después de la primera guerra, Alemania no podía convencerse de su derrota y comenzaban a actuar en su seno elementos deletéreos, para tratar de conjurarlos, la preocupación del Estado se dirigió a la enseñanza y se le confió a Otto Boëhler emprender la reforma total de la escuela prusiana. Aquel ministro, que era eminente pedagogo, dijo una verdad que no podemos dejar de repetir en este debate: «El Estado sólo debe organizar fuerzas ya existentes. El Estado puede dotar a las escuelas, que son los laboratorios de la reforma educacional, de buenos edificios con aire y luz; pero el Estado por sí mismo no puede crear fuerzas creadoras. El Poder del Estado no puede

substituir las fuerzas vitales de la conciencia individual, única capaz de crear nuevos ideales.»

¿Cómo se contempla esta aspiración de una universidad mejor, en la ley 13.031 y qué sentido tiene la reforma que estamos considerando?

Así como el naturalista logra reconstruir una especie extinguida sobre la base del hallazgo de algún resto fosilizado de su estructura ósea, creo que el sociólogo del futuro podría reconstituir el contenido del peronismo si contara como único elemento con el que le da la ley 13.031 y el despacho que considera la Honorable Cámara, porque esta ley está inspirada en el mismo pensamiento que concita nuestra divergencia y nuestra oposición.

En vano se pretende derivar nuestra actitud hacia la cuestión social, con la cual no disentimos en cuanto puede significar un progreso hacia la justicia social. Nuestra oposición, nuestra divergencia de fondo, consiste en que nosotros queremos la efectiva vigencia de la forma representativa, republicana de gobierno. La queremos, señora presidenta, con la división de poderes; con el juego de los pesos y contrapesos, en cuya virtud el destino de la patria no sea entregado al pensamiento de un hombre, por grande que él fuere.

Esta ley que permitiría reconstruir todo el proceso a que asiste la Nación —y que nosotros combatimos—, nos presenta como solución del problema del gobierno de la universidad el absolutismo presidencial.

Concebiría que el sector mayoritario hubiera defendido ese pensamiento en el año 1947, porque entonces constitucionalmente estaba liberado para sostenerlo; pero lo que no concibo es que después de la reforma constitucional de 1949 venga a exhibir tan tremenda contradicción al exagerar los trazos de centralización y de sacrificio de la autonomía universitaria que depara la ley que estamos considerando. No debemos olvidar que en 1949 el peronismo asumió la responsabilidad de la reforma y tuvo los poderes para hacerla como quisiera. Pudo darle a la Constitución Nacional el contenido que quiso y se lo dió. Ahora tiene la obligación de respetar ese contenido, que es su obra.

¿Y qué dice la Constitución reformada en 1949, con un texto que no tiene precedente, que es esencialmente peronista, que el peronismo no puede repudiar sino repudiando a su propio hijo? Dice que «la universidad tiene el derecho de gobernarse con autonomía dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento».

Yo quiero acentuar las palabras de la Constitución, porque es de hermenéutica jurídica que el intérprete siempre debe encontrar en cada palabra de la Constitución su sentido preciso y no otro.

Cuando escuchaba al señor diputado por San Luis haciendo la apología del poder supremo del presidente, que debe ejercerse en la universidad como en las demás entidades autárquicas, o como en cualquier repartición de la administración, estaba pensando en este texto de la Constitución reformada en 1949, que solamente con respecto a la universidad dice que ella debe gobernarse con «autonomía». No olvidemos, señora presidenta, que en esa convención había muchos hombres surgidos de la universidad argentina y que uno de los temas más dilucidados y más conocidos es la del sentido de la soberanía, de la autonomía y de la autarquía; que en todos los textos de derecho administrativo se afirmaba que dentro de la Constitución de 1853 la universidad era autárquica. Estos convencionales, que conocían el contenido de cada concepto, que sabían la diferencia existente entre autonomía y autarquía, en un único caso —vuelvo a repetirlo—, cuando se trató de la universidad, dijeron que ella es «autónoma».

¿Y qué significa ser autónoma? ¿Significa, acaso, tener la misma independencia que puede tener el Banco de la Nación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales o la Flota Mercante del Estado? No, señora presidenta; significa mucho más.

Sr. Fernández (H. S.). — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Fassi. — No voy a autorizar ninguna interrupción. Dispongo de muy breve tiempo para lo mucho que tendría que decir.

Sr. Fernández (H. S.). — Es que el señor diputado me ha aludido.

Sr. Fassi. — Autonomía significa que, además de la autodeterminación, del autogobierno que tienen las entidades autárquicas, ésta, porque es autónoma, tiene también la facultad de gobernarse, de elegir sus autoridades.

Sr. Fernández (H. S.). — Es autónoma en la enseñanza, pero no para la designación de sus autoridades ni para el gobierno.

Sr. Fassi. — No podría afirmarse en el texto constitucional la opinión de que esta autonomía debe cumplirse exclusivamente en la órbita de la enseñanza. Si fuera así, diríamos que la habríamos conservado en lo más importante y, justamente, contra lo que se han dirigido todos los dardos de los señores diputados de la mayoría, que lo que no quieren es libertad en la enseñanza, porque lo que desean es la enseñanza sojuzgada al pensamiento presidencial.

Lo que establece la cláusula constitucional es que la ley debe fijar los límites de la autonomía; pero obsérvese bien que en este caso no se trata de una entidad autárquica, creada por ley, que al crearla puede fijar a su arbitrio los límites de la autarquía.

Ninguna ley, dentro del concepto de la supremacía de la Constitución, puede ir más allá del pensamiento de la Constitución misma. Vale decir, que es posible dictar una ley que limite la autonomía universitaria; pero no es posible

dictar una ley que suprima la autonomía universitaria. Esta ley, como lo demostraré, la suprime.

La universidad está gobernada por un rector y por un consejo superior. El rector, por la ley vigente, es nombrado por el señor presidente de la República, el cual debe ajustarse a algunos requisitos. El primero de ellos, que sea ciudadano argentino; el segundo, que tenga treinta años de edad; el tercero, que sea diplomado universitario; el cuarto, que tenga el título máximo de alguna de las facultades o que sea profesor de alguna de ellas.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Antonio J. Benítez.

La reforma no coloca el nombramiento en la posición en que se ha pretendido en el curso de una interrupción. Lo que ahora se propone es ampliar la órbita de la facultad discrecional del presidente de la República, suprimiendo, primero, la antigüedad en el título y, segundo, que el título para ser rector en los que no son profesores, sea el máximo que otorga cada una de las facultades.

El argumento, aparentemente impresionante, de que si cualquier argentino que tenga treinta años de edad puede ser presidente, no se puede exigir otro requisito para ser rector de la universidad, no resiste, señor presidente, el análisis. Porque con ese criterio tendríamos que sostener que si para ser presidente de la República bastan los treinta años de edad, bastarían los treinta años de edad para que se nombre general de la Nación a quien no ha pasado por la escuela militar, ni por todos los grados del escalafón; sería lo mismo que decir que puede llegar a la dirección del gremio de los papeles un hombre que trabaja en el gremio de los metalúrgicos; sería romper lo que parece estar en la esencia de la doctrina peronista: el concepto de la corporación, el concepto de que, por lo menos en la función profesional o docente, se necesita una vida de consagración a la misma, para llegar al más alto honor y a la más alta jerarquía que puede brindar.

Si nosotros queremos un profesorado dignificado, si nosotros queremos prestigiar la función docente, ¿cómo es posible que establezcamos por ley de la Nación la posibilidad de que un mal estudiante, de esos que recién llegan al título más fácil a los treinta años de edad, pueda presidir la universidad y el claustro de profesores?

Entiendo que esta reforma no significa ninguna ventaja; entiendo que al cargo de rector deben llegar los hombres que pertenecen al claustro universitario.

Sr. Díaz de Vivar. — Señor diputado...

Sr. Fassi. — No acepto interrupciones.

Voy a referirme ahora, señor presidente, al otro valor humano que integra la universidad: al estudiante.

Creo, señor presidente, que la universidad realmente no tiene por única función habilitar para el ejercicio profesional. La universidad forma valores de cultura y hombres de gobierno. La universidad debe ser una escuela, no solamente de las materias de utilidad práctica, sino de la formación integral del hombre. Así lo proclaman la ley vigente y los dos proyectos que estamos considerando.

Pero véase cómo a ese estudiante, al que es necesario proveerlo de todas las virtudes del ciudadano, se le encarrila hacia la formación espiritual que lo convierte en hombre de gobierno, diciéndosele que él no tendrá los derechos que tiene el obrero en el taller de formar su gremio y elegir sus autoridades, y que su maestro no puede estar en el gobierno de la casa de estudios, porque se duda de que tenga las condiciones morales necesarias para dirigir esa casa de estudios. Lo único que se le da por el proyecto es un delegado de la C. G. U.

En el debate de 1947 se pronunciaron largos discursos para defender la eficacia de la representación de los alumnos más preparados. En aquella ocasión disintimos los hombres del radicalismo, y hoy volvemos a disentir con ese sistema. Pero, señor presidente, no lo podemos reemplazar con el delegado de la C. G. U. La representación estudiantil, que debe intervenir en el gobierno todo de la universidad, debe surgir del sufragio secreto de los estudiantes, debe representar a todo el estudiantado.

Veamos, señor presidente, la razón por la cual nosotros auspiciamos que integren el cuerpo electoral del cual nace el gobierno de la universidad, los graduados. Muy pequeña, insignificante, es la relación del graduado con la universidad.

Son muchos los estudiantes que suponen que después de haber cursado las disciplinas universitarias ya están provistos de todos los conocimientos que necesitan para el ejercicio de las profesiones que han abrazado. Bernardo Houssay, a quien me complazco en citar no obstante mi divergencia profunda con su pensamiento en materia de gobierno universitario, pero a quien proclamo un honor para la patria, refiriéndose a esta cuestión tan importante para el progreso cultural argentino, decía: «Debe considerarse defectuosa la universidad cuyos graduados no sientan cariño por los estudios cursados, rompan los programas o libros después de examen.» Y agregaba: «A la universidad se va a aprender los métodos mejores, más acertados y seguros que permitan instruirse durante toda la vida. Un universitario está obligado a estudiar durante toda su existencia. Al cumplir sus bodas de plata con la profesión de químico,

físico, médico o naturalista, serán tanto y tan trascendentales los adelantos realizados desde que recibió su diploma, que quedará convertido en un ignorante peligroso aquel que no haya asimilado constantemente por la experiencia y la meditación y por una lectura asidua de buenos libros y revistas los conocimientos sobre el progreso de la ciencia.»

Pero, además, señor presidente, es necesario que el graduado, al esfuerzo individual que preste a su propia cultura, agregue la frecuentación de las aulas para ponerse en contacto con los nuevos conocimientos y para ampliar las bases de su cultura. Si nosotros queremos vincularlos para que sigan siendo estudiantes en el curso de toda su existencia, —no con la asiduidad de los años de la formación, porque ellos tendrán que desperdigarse por el país para cumplir su ministerio y apartarse de los centros universitarios; y porque deben responder a los requerimientos de su hogar en materia económica por lo menos—, con esporádicos cursos intensivos de ampliación de los conocimientos.

Uno de los caminos para hacerles comprender que la universidad no está en el pasado de sus vidas sino en toda sus vidas, es que ellos también integren las asambleas de las que surja el gobierno de la universidad.

Es una contradicción la preocupación para organizar a los profesionales, en lo relativo a sus intereses económicos, en confederaciones de profesionales para que atiendan a sus apetencias físicas, con la dificultad que se opone cuando intentamos vincularlos a las más elevadas y a las más nobles apetencias espirituales. Sobre todo cuando tal conducta no concuerda con el propósito de proporcionar al estudiante, además de los conocimientos meramente prácticos, los conocimientos humanistas.

La reforma de 1947 no marchó, pues, en el sentido del progreso, y la reforma actual todavía acentúa los vicios de la universidad porque en aquella ley de 1947, que todavía nos rige, hay un atisbo de control del rector en el consejo superior, aunque en muy pequeña medida. El consejo superior se compone del rector, que tiene voto decisivo, de todos los decanos y vicedecanos de las facultades; vale decir que la mitad de ese consejo superior que con el rector forman la mayoría y deciden sobre todos los asuntos sometidos al consejo, está integrado por los decanos, que según la ley vigente son elegidos dentro de una terna por los consejos de las facultades. Por lo menos los profesores que forman los consejos pueden elegir entre tres profesores de cada casa de estudios para mandarlo a cumplir la función de control del gobierno de la universidad. En cambio, por el despacho que estamos considerando, el rector elige a los decanos; es como decir, por vía de ejemplo, que el reo elige a su juez.

¿Cómo es posible dar el gobierno de la universidad a este delegado del Poder Ejecutivo para que cumpla su cometido con el control de un cuerpo cuya mitad él elige a su solo arbitrio y con el cual tiene voto decisivo? Si en algún momento no coincidiera el pensamiento de los vicedecanos, surgidos del claustro de profesores, con los decanos elegidos por el rector, el rector y sus elegidos son los que, en el hecho, predominan y dictan la ley en la universidad.

¿Por qué se llega a esta situación? Se llega a esto porque no estamos frente a una ley de progreso sino a una ley de lucha; porque la ley vigente se sancionó en uno de los momentos críticos de esa lucha, a la que pareciera que el Poder Ejecutivo está dispuesto a dar término con la ley de amnistía.

Conocemos los episodios anteriores a la ley universitaria en vigencia. En 1943 habíamos sido expulsados los profesores; en 1945 se produce en la política del gobierno de facto una evolución que ojalá se repita en la política del gobierno constitucional. Reintegran en sus cargos a los profesores y en el gobierno autónomo a las universidades. En el acto solemne en que se puso en posesión de sus cargos a los elegidos para el gobierno de la universidad de Buenos Aires, el entonces interventor, que ahora es presidente de este cuerpo, pronunció un discurso al que yo rindo el homenaje de mi respeto, porque me parece inspirado en las mejores tradiciones. En esa ocasión el interventor universitario dijo: «el gobierno desea que se restablezca la plena autonomía universitaria, que la universidad se trace sus propias normas de vida, que constituya sus organismos rectores, que realice sus altos fines en el desenvolvimiento de nuestro país; quiere que la universidad, elevándose por sobre rencores y divisiones estériles, contribuya con su extraordinaria gravitación a la construcción de nuestro futuro. Queremos que se haga la paz en ella. Ponemos a su disposición todos los medios precisos y esperamos triunfar en la empresa».

Refiriéndose a las palabras del entonces vicepresidente coronel Perón, que sería el inspirador de los conceptos enunciados, agrega: «Si en las elecciones resultaran designados para las funciones directivas los más engegucidos opositores al gobierno, entenderíamos haber triunfado si la elección es un ejemplo de honrada corrección, de absoluta imparcialidad, de libre ejercicio de los derechos de cada uno.» Y luego agregaba: «Ni la más leve incidencia alteró la normalidad del proceso electoral. Los señores profesores, con severa dignidad, los señores estudiantes, con alborozado entusiasmo, usaron de sus derechos y no declinaron de sus responsabilidades.»

Así se eligieron las autoridades de la Universidad de Buenos Aires en un acto en el cual

triunfaba el gobierno, aunque vencieran los más enconados opositores, y en el cual el acto eleccionario no mereció una sola crítica. No obstante esas fueron las mismas autoridades que apenas instalado el gobierno constitucional son intervenidas. Luego expulsan profesores y traen un proyecto de ley, como un episodio de la lucha para establecer el predominio del señor presidente de la República sobre la universidad, privada de su autonomía.

¿Por qué se procede de esta manera con la Universidad de Buenos Aires y con todas las demás universidades? ¿Acaso por que en esas universidades se hablara un lenguaje reaccionario? ¿Acaso por que esas universidades se oponían al progreso social?

Yo me voy a permitir, para que se tenga el tono de la enseñanza que se impartía, de la influencia que se ejercía sobre la juventud universitaria, traer a la Honorable Cámara las palabras que pronunciaban los rectores en los actos solemnes. Comenzaré, para demostrar que no era una universidad que se oponía al progreso social, con las palabras pronunciadas en 1935 por el doctor Vicente Gallo, rector de la Universidad de Buenos Aires y contrario político al que en aquel entonces ocupaba la presidencia de la República. Decía Gallo refiriéndose al tesoro sagrado de instituciones jurídicas y sociales que ha creado el esfuerzo afanoso de muchas generaciones: «Ese tesoro no es por cierto intangible. El progreso debe enriquecerse con el aporte de sus conquistas y un esfuerzo permanente de adaptación a nuevas necesidades y de realización de nuevos ideales humanos; tiene que imprimir a las piezas que lo forman el sello de inaplazables transformaciones.»

Habiendo vencido el término que a mi exposición fija el reglamento, lamento no poder continuar en el análisis exhaustivo de la ley, y he de concluir con las palabras del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, contrario político al presidente de la República de aquel entonces: me refiero al doctor Alfredo L. Palacios, quien decía al dar cuenta de la labor cumplida en 1943: «Después de la contienda que obscurece el derecho y suprime la dignidad habrá que organizar a los pueblos, dar normas nuevas a la producción, al intercambio y al consumo, utilizando la técnica para el bien colectivo, porque los regímenes económicos que sancionan el privilegio y no pueden garantizar el pan de cada día deben desaparecer si no queremos que las guerras se sucedan indefinidamente.»

Señor presidente: fruto de esas universidades, he hablado el lenguaje que aprendí de sus rectores, decanos y maestros. Usándolo, vengo a manifestar mi decisión inquebrantable de luchar con todas mis fuerzas por el progreso de la cultura dentro del ámbito sereno de la libertad.

(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Señor presidente: mi modesta intervención en este debate se habrá de reducir a formular algunas acotaciones a afirmaciones de los señores diputados.

Nosotros hemos precisado ya en debates anteriores que tenemos una profunda fe en el futuro argentino. Por eso, no renunciamos a formular críticas a la Argentina de ayer. No renegamos de ella —lo hemos dicho— ni nos avergüenza, puesto que, al contrario, sentimos una profunda solidaridad espiritual con su pasado glorioso, pero, por lo mismo que nos angustian algunos errores del pasado, nuestra crítica estará movida siempre por una sana pasión argentina.

Los señores diputados oponentes han disparado ya sus más eficaces y envenenados dardos. En consecuencia, tenemos la ilusión de que haya quedado completamente agotado su carcaj.

Sr. Belnicoff. — Sobran todavía muchos dardos, que no son envenenados y que son certeros.

Sr. Díaz de Vivar. — Lo lamento, señor diputado. Con toda serenidad de espíritu pienso que es siempre fecundo recordar la aleccionante y vieja leyenda bíblica de los dientes del perro. Es así como, sin entrar a hacer un análisis exhaustivo de la ley a nuestra consideración, tarea que fué cumplida de manera estimable por el señor presidente de la comisión, he de significar algunas de las muchas excelencias de esa ley, tan duramente impugnada por los señores diputados de la oposición.

En un memorable debate del año pasado hemos advertido como hay poderosas instituciones extranacionales que con lemas inocentes y hasta con marbetes amistosos pretenden inmiscuirse en la vida cultural de un país con el propósito de efectuar un proceso de colonización espiritual cumpliendo la misión que le asignaran algunos de los compartimientos oficiales de los grandes imperios que se disputan la supremacía en el mundo del poder.

Hace poco experimenté profunda tristeza al leer un magnífico libro de Huizinga, que se titulaba *El homo ludens*, «el juego como factor determinante de la historia», perteneciente a una colección de *Conocimientos del Hombre* dirigida por el ilustre maestro Ortega y Gasset. Y así precisamente éste dice su dolor porque la editorial se mantenía con muchas dificultades porque no había querido humillar su bandera y entregarse a cualquiera de esas fundaciones imperialistas que exigen antes que nada una humillante genuflexión intelectual.

Me siento orgulloso de esta ley, a pesar de los errores que pueda contener, porque por sobre todas las cosas ella impondrá al futuro do-

cente de las casas de estudio que viva hipnotizado, que viva seducido por el destino nacional y que no preste nunca su inteligencia a los intereses foráneos, que más de una vez dirigieron los destinos del país. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.)

En realidad, no he tenido la fortuna de escuchar a la mayoría de los señores diputados que han intervenido en este debate. Por circunstancias personales he llegado recién ahora al recinto y sólo he escuchado la palabra enjundiosa del doctor Fassi; y perdóneme el señor diputado esta acotación marginal, al manifestarle mi sorpresa, pues habitualmente es un hombre de buenas maneras parlamentarias, pero que esta tarde ha venido al debate con mal humor, dado que no me permitió una interrupción amable para convalidar algunas de sus afirmaciones, aunque —claro está— para rectificar otras. (Risas.)

Sr. Fassi. — Señor diputado por Corrientes: no me lo permitía el término; ahora el señor diputado tiene oportunidad de expresar su pensamiento.

Sr. Díaz de Vivar. — Todo este debate ha estado centrado fundamentalmente en el problema de la autonomía, la supuesta hollada autonomía universitaria. Se anunció una tesis que la estimo totalmente insostenible a la luz de la consideración científica del derecho constitucional y del derecho político, al afirmar que habría incompatibilidad insuperable entre esta universidad sin autonomía y la estructura del Estado constitucional, la estructura del Estado de derecho. Incluso se llegó a afirmar que corría peligro la división de funciones.

No quiero cansar a la Honorable Cámara con un debate que, aunque puede resultar iluminador sobre este aspecto, me absorbería la totalidad del tiempo de que dispongo; pero en nombre de mi bloque me veo en la necesidad de ratificar una vez más que la revolución nacional ha sido una fuerza política capaz de rejuvenecer y dar perennidad a ese Estado constitucional.

Nosotros no creemos que la teoría de la división de las funciones llegue a su ocaso como, por ejemplo, creo que lo sostiene un autor francés, que si no me traiciona la memoria es de la Bigne de Villeneuve, en un libro cuyo título puede ser traducido como *El fin* o *El final*. Por el contrario, tenemos suprema fe en la excelencia de esa figura histórica y por eso mismo la Constitución Nacional ha venido con su histórica reforma del 49 a darle lucida y plena mocedad.

Creo que en definitiva lo que diversifica nuestra posición espiritual de la de los señores diputados de la oposición es, en última instancia, un problema de fe. Los señores diputados de la Unión Cívica Radical, que se muestran —yo creo, muy sinceros a este respecto— como cam-

peones entusiastas de la libertad de espíritu, estimo que en el fondo carecen de fe en las posibilidades de esta libertad. Nosotros, por el contrario, pensamos que la auténtica libertad creadora del espíritu está asegurada en su vida creadora por sus mismas cualidades inmanentes.

La libertad creadora del espíritu del hombre no podrá ser encadenada jamás como Prometeo, por más que hurte todos los secretos a los dioses, porque por sobre todas las cosas ella se ha exhibido siempre como una favorita del destino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*) La historia es una prueba cabal de este aserto.

Voy a reducir mi ocasional intervención en este debate a la acotación de dos tópicos que me parecen fundamentales y que de alguna manera fueron subestimados por los señores diputados de la oposición. En primer término, me refiero a la fundamental misión cultural de la universidad, y en segundo lugar, a una institución que tuvo su fe bautismal en la República Argentina y que esta ley no sólo no la ha colocado en crisis, sino que ha asegurado su futuro: me refiero a la coparticipación estudiantil en el gobierno de las casas universitarias, la máxima conquista de la frustrada reforma de 1913.

Sr. Perette. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Díaz de Vivar. — Con mucho gusto, siempre que sea breve. Sabe el señor diputado que tengo una especial simpatía por su espíritu combativo.

Sr. Perette. — El señor diputado se ha dedicado en estos últimos debates a elogiar mi combatividad. Le agradezco, porque su experiencia legislativa le está indicando su buen acierto.

Lo que quiero señalar —en lo que se refiere a la misión cultural de la universidad— es que este sector ha fijado en forma concreta la más amplia defensa de la libertad de espíritu y de la verdadera misión fecunda de la universidad para el acrecentamiento de la cultura.

En segundo lugar, con respecto a la invocada «coparticipación estudiantil», este sector ha hecho una defensa celosa de la intervención del estudiantado en la vida de la universidad. Y quiero preguntarle al señor diputado —por la autoridad constitucional que tiene— si es concebible que esa cooperación estudiantil pueda sostenerse con este proyecto que establece un sistema en el que únicamente tendrán representación quienes pertenezcan a la «asociación gremial con personalidad reconocida», lo cual significa someter al movimiento estudiantil al discrecionalismo de las autoridades de la casa de estudios y, más precisamente, al discrecionalismo del poder administrador.

Sr. Díaz de Vivar. — Cuando me refiera a ese tema de modo preciso tendré el placer de responder al señor diputado por Entre Ríos.

Yo decía —y esto es un lugar común en la materia— que son tres los fines que específicamente debe perseguir la universidad. Estas aseveraciones andan por todos los caminos del intelecto y ya es clásico al respecto el famoso esquema de Ortega. Podemos, por tanto, decir que en esta materia no hay nada nuevo bajo el sol.

Las tres finalidades que debe perseguir la universidad son: formación profesional, investigación científica y enseñar al profesional a ser un hombre culto. Esta última es sobre todo, en mi opinión al menos, su misión fundamental.

Lamento, en este último día de nuestra convivencia parlamentaria, disenter con el señor diputado Fassi, de manera tan radical, sobre un tema que puede y debe ser tratado con pulcra objetividad.

La universidad argentina, a la que me referiré con todo respeto, e incluso mi respeto llega a la universidad de la época imperial, de la época en que conformábamos un imperio —aludo a la Universidad de Córdoba anterior a 1810—, a esa antigua universidad imperial y a la nueva universidad republicana rindo un homenaje emocionado.

Ello no obstante, tengo derecho a formular las críticas que estime de mi deber para el mejoramiento de nuestras costumbres universitarias.

Lamento no poder participar del optimismo y del entusiasmo del señor diputado Fassi por ese pasado universitario argentino, y menos por el pasado inmediato.

Concedo que la universidad ha logrado una excelente formación profesional; concedo, asimismo, que la universidad ha logrado la obtención de investigadores científicos de nota, de los que nos debemos sentir orgullosos ya que coparticipamos de la misma comunidad nacional, aunque —lo declaro entre paréntesis— me habría sentido mucho más satisfecho de ellos si, además de ser hombres ilustres en su especialización, hubieran sido también hombres alocucionantes en su vida pública y hubieran puesto las excelencias de su espíritu y de su talento al servicio de la comunidad nacional. (*Aplausos.*)

Si bien concedo de buen grado que se ha obtenido excelente formación profesional; que se han logrado competentes investigadores científicos, es en la tercera misión, la formación de la cultura del profesional —la tarea de mayor dimensión— donde creo que la universidad argentina ha sido notoriamente deficitaria.

Recordemos que la misión primigenia de la universidad, de la «universitas», cuando fué creada allá en la alta Edad Media, era precisamente dar a los estudiantes una visión panorámica de la cultura mundial, porque el universitario es, por sobre todas las cosas, un dirigente nato en la vida de relación.

Sr. Nudelman. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Díaz de Vivar. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Concretamente deseo preguntar al señor diputado —a quien escuchamos con toda atención— si cree que después de una purga de más de dos mil profesores, que son expresión de la inteligencia y capacidad esclarecida a que se ha referido, por una parte, y con la obligación de firmar una ficha que se llama «gestión universitaria», en la que entre otras cosas debe declararse desde cuándo se es afiliado al Partido Peronista, por otra, sin libertad de pensamiento y de trabajo científico, es posible reestructurar la universidad con ese tipo de conciencia nacional a que aspira el señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Señor presidente: deseo que los señores diputados de la oposición, con quienes mantenemos desde hace ocho años —y formulo votos porque podamos mantenerlo tres años más (*Risas*)— un diálogo movido, a veces áspero, otras apasionado, pero siempre honradamente guiado por un impulso superior de servir al país y a la comunidad, me permitan que les formule una concitación, aun cuando personalmente carezca de título para ello.

He sostenido en diversas oportunidades que la República Argentina —y esto no es fruto de un chauvinismo de mal gusto— tiene un destino peligroso. En el mundo del poder se mueven tres tipos de potencias: aquellas que han renunciado a ser protagonistas, que se sienten simple escenario y, a veces, escenario envilecido del acontecer universal; el segundo tipo pertenece a los que deben cumplir algún «destino manifiesto», y en tal sentido son los máximos protagonistas en el mundo del poder; pero hay todavía un tercer tipo de destino político, que es el que orgullosamente reclamamos para nuestra comunidad.

No aspiramos ni tenemos vocación por cumplir un destino imperial, porque tenemos plena conciencia de nuestra limitación geográfica y de otras limitaciones, aun cuando afirmo que la calidad del hombre hispanoamericano es tan alta —y lo digo con orgullo— como para que viva las más finas y las más delicadas vibraciones de la civilización occidental.

Pero esta tercera actitud que asigno al destino peligroso de la República Argentina exige, en mi opinión al menos, que todas las fuerzas espirituales de la patria se nucleen alrededor de un ideal común, que no significa el entecamiento de la cultura, que no significa podar

todas las posibilidades creadoras del espíritu, pero que significa sí una cosa concreta, y es que cuando la patria está asediada desde el exterior, todos tenemos el deber moral, todos debemos tener el coraje supremo de renunciar hasta a nuestras propias convicciones personales para servir a nuestra patria en peligro. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Para mí esto es lo más importante, y lo digo, no para usar y abusar de la peripecia, ya que ella está manida por el uso, sino para convalidar la afirmación de que nosotros deseamos que en la universidad argentina no se repitan episodios del pasado, a los que me he de referir en su oportunidad. Como el tiempo avanza, quiero decir que me siento profundamente complacido por el artículo 2º, tan vituperado, del proyecto a nuestra consideración, por el cual se establecen cursos dedicados a la cultura filosófica. Ello viene a ser la expresión de una exigencia que ya se torna inexcusable en la materia.

Extraigo de Ortega y Gasset cinco proposiciones para que sirvan de ejemplo de lo que entiendo debe ser la misión cultural de la universidad, y que éstas o parecidas disciplinas deben ser tenidas muy en cuenta en una organización ulterior de esta tercera función cultural ya aludida. Las proposiciones son: primero, imagen física del mundo (física); segundo, los temas fundamentales de la vida orgánica (biología); tercero, el proceso histórico de la especie humana (historia); cuarto, la estructura y funcionamiento de la vida social (sociología) y quinto, el plano del universo (filosofía).

Naturalmente, yo no puedo plantear en la emergencia, por la exigüidad del tiempo, un problema de génesis cultural. Pero creo que puedo decir, a manera de síntesis, que la cultura se vincula, ante todo, con la creación de valores humanos. Entre muchas, acaso esta sencilla oración puede servirnos como síntesis de mi pensamiento. Permítaseme acotar, empero, una nota que alguna vez me sirvió para una conferencia respecto a un tema que tratamos.

Decía: «La historia universal es casi la cultura; digo casi porque el ámbito de ésta es de otra dimensión. Acaso la idea del proto-fenómeno nos sirva de explicación, idea que en Goethe es muy clara y que Spengler ha intelectualizado.

«Goethe nos habla del proto-fenómeno que descubrió en su *Naturaleza viviente* y que le sirvió de base a las lucubraciones científicas. Un proto-fenómeno, dice Spengler, es aquel en el que se nos aparece en toda su pureza la idea del devenir. Y yo digo entonces que el proto-fenómeno se convierte en el tipo, en el patrón, en el índice síntesis de todo un género, y en imagen de procesos semejantes en cuya virtud se pueden conocer formas del pasado y advertir también formas que han de venir.»

Spengler cree que la cultura es el prototipo de toda la historia universal. «Las culturas son organismos —decía el filósofo alemán—, la historia universal es su biografía... Una cultura nace cuando un alma grande despierta de su estado primario y se desprende del eterno infantilismo humano; cuando una forma surge de lo informe; cuando algo limitado y efímero emerge de lo ilimitado e imperdurable; florece entonces sobre el suelo de una comarca, a la cual permanece adherida como una planta.» Lástima que a esta proposición spengleriana no la hubiera podido acotar con otras formulaciones que siguen esta línea (la de Toynbee, por ejemplo), como hubiera sido mi deseo, o con todas las rectificaciones que se han hecho a este planteo interesante. Pero la perentoriedad del tiempo me impone muchos renuncios de este tipo.

Tenía una serie de notas referentes a la misión cultural de la universidad, pero —lo reitero— la dictadura del reloj me advierte que carezco de tiempo para ello.

Voy a decir dos palabras, sin embargo, sobre el artículo 59 de esta ley, que mueve también mi entusiasmo. Me refiero a la coparticipación del estudiante en el gobierno del instituto de nuestra consideración. Yo admito, señor presidente, que la reforma universitaria —lo dije alguna vez— fué un movimiento de mayor plenitud juvenil, el de mayor dimensión también en los últimos años, y, además, el más completamente frustrado de la vida argentina. Fué un pleno querer juvenil, que venía arrastrándose de antiguo, informe, inconcreto, anheloso y querulante. Fué un noble ideal que pudo ser realidad y que no mereció el destino de seguir siendo quimera. Fué acaso el acucioso añorar de formas nacionales en una casa que día a día iba divorciándose más de la realidad argentina. Fué acaso también el deseo de realizar una versión propia de planteos intelectuales que habían recibido ya plena acuñación foránea. Pudo ser todo eso, pero fué antes que nada un movimiento de juventud que se mantuvo impoluto mientras no fué requerido por la realidad, que muy pronto habría de frustrarlo.

No puedo, lamentablemente, profundizar este tema, porque mi discurso ha sido frustrado por el tiempo.

A manera de síntesis final he de formular algunas aspiraciones que creo han de interpretar plenamente el pensamiento de la revolución nacional.

Nosotros deseamos una universidad libre y una docencia libre, que de hecho existe, aunque la afirmación calumniosa diga lo contrario.

Aspiramos a que los profesores universitarios no usen sus prestigios académicos como un pedestal para comerciar mañana con intereses foráneos que pueden ser violatorios del interés nacional.

Nosotros deseamos que no se repita el caso de aquel mentecato embajador norteamericano, figura de décimoquinta categoría en la política de su país, que alguna vez holló la dignidad argentina y humilló nuestra bandera, dirigiendo, con profesores y rectores, una tremenda confabulación contra el destino argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Nosotros queremos la coparticipación estudiantil. Queremos un gobierno universitario con los tres protagonistas, con los tres ingredientes de toda cultura: el maestro, la materia operante y el alumno.

Queremos que los alumnos sean seleccionados de entre los auténticos estudiantes y que no se haga una profesión, como antaño, de la política estudiantil, cuando se producía una verdadera colusión entre el profesor electoralista y el estudiante permanente, que jamás aprobó una asignatura en su carrera. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Nuestra revolución nacional puede cometer errores. Esta ley puede ser defectuosa. Araso se regateen aspectos de la autonomía universitaria —lo digo a título personal—, como lo afirman con voces dispares los señores diputados oponentes; pero éstos son aspectos de menor dimensión, porque lo importante es que la revolución justicialista está dispuesta a asegurar la libertad de enseñanza y la cogobernación de la casa por los estudiantes. Estas dos conquistas son dignas de ser exaltadas y de ser reverenciadas como auténticos logros que llenan y satisfacen la aspiración nacional. (*Aplausos.*)

Somos un movimiento revolucionario. Se nos ha objetado muchas veces que éramos groseros e improvisados protagonistas metidos en compartimientos que antaño compartían solamente una casta privilegiada de intelectuales, auténticos unos, y otros sólo henchidas medianías.

Pero yo tengo sobre mi banca, y pido, señor presidente, que como un colofón de mis palabras se agreguen al final de mi discurso, con la anuencia de la Honorable Cámara, numerosas páginas que demuestran que en los últimos años se ha producido en la universidad, sobre todo en la Facultad de Derecho, un intenso, vigoroso y fecundo cambio intelectual con el aporte de las mejores inteligencias del mundo. Han venido, señores diputados de la oposición, maestros de izquierda, insospechados de toda simpatía con fuerzas reaccionarias, como Kelsen, que fué honrado por esa universidad peronista, por esa universidad justicialista, por esa universidad a la que los señores diputados de la minoría y la extremada adversidad de los profesores que se fueron no cesan de juzgar con tono peyorativo o juicios despectivos.

Kelsen, Freyer y muchos otros maestros de Europa han honrado en los últimos años a la universidad argentina. Para que se tenga plena conciencia del movimiento cultural promovido

por el extraordinario aporte intelectual de esos grandes maestros, es que solicito la inserción a que me he referido de las anotaciones que voy a hacer llegar a los estrados de la Presidencia.

Termino diciendo que la revolución nacional, que está en el ápice de su poderío político, se siente henchida de futuro y trémula de vida espiritual, acepta con serenidad los vituperios y los denuestos de sus adversarios. Pero quiere dejar bien sentado que la universidad argentina seguirá siendo materia de preocupación principal de este poderoso movimiento que aglutina a las fuerzas del trabajo y a las fuerzas de la inteligencia y que sueña con alegría con una patria mejor. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Inserción solicitada por el señor diputado Díaz de Vivar, y autorizada por la Honorable Cámara (1):

Año 1949

- Abril. — Conferencia por el doctor José Vasconcellos, mejicano, sobre: «Tentativas de acercamiento económico en hispanoamérica».
- Mayo. — Conferencia por el doctor Jacques Bernard Herzog, francés, sobre: «La reforma de la justicia criminal en Francia».
- Julio. — Conferencia por el doctor Isidro de Arcenegui y Carmona, español, sobre: «Aportación del derecho canónico a la ciencia jurídica».
- Agosto. — Conferencia por el doctor Isidro de Arcenegui y Carmona, español, sobre «Valoración jurídica de las fuentes de conocimiento del derecho canónico».
- Conferencia por el doctor Isidro de Arcenegui y Carmona, español, sobre: «Régimen orgánico judicial en el derecho comparado».
- Conferencia por el doctor Hans Kelsen, norteamericano, sobre: «Primer problema fundamental de la teoría pura del derecho».
- Conferencia por el doctor Hans Kelsen, norteamericano, sobre: «La libertad de la conducta en el primer cotejo concreto con la egología».
- Conferencia por el doctor Hans Kelsen, norteamericano, sobre: «La norma y la lógica».
- Conferencia por el doctor Manuel de la Plaza, español, sobre: «Posibilidades para la construcción de una teoría general del proceso».
- Conferencia por el doctor Hans Kelsen, norteamericano, sobre: «La sanción y la norma».
- Conferencia por el doctor Manuel de la Plaza, español, sobre: «Bases políticas y bases técnicas para una reforma de las leyes procesales civiles».
- Conferencia por el doctor Hans Kelsen, norteamericano, sobre: «Algunos problemas del derecho internacional».
- Conferencia por el doctor Manuel de la Plaza, español, sobre: «La casación civil. Ventajas e inconvenientes de este medio de imputación. Sus resultados según la doctrina y la jurisprudencia española».
- Septiembre. — Conferencia por el doctor León Mazeaud, francés, sobre: «Los contratos sobre el cuerpo humano».

(1) Véase la resolución de la Honorable Cámara en la página 2792.

Conferencia por el doctor Felipe de Solá Cañizares, español, sobre: «Introducción. La personalidad de las sociedades; la doctrina inglesa de *ultra vires*; la teoría dualista germánica; el sistema italiano. Los diversos tipos de sociedades. Las tendencias del derecho comparado».

Conferencia por el doctor Eloy Montero y Gutiérrez, español, sobre: «Algunos aspectos de las nulidades en el matrimonio canónico».

Conferencia por el doctor Eloy Montero y Gutiérrez, español, sobre: «Crisis de la familia en nuestro país».

Conferencia por el doctor Benigno Di Tullio, italiano, sobre: «Criminología»; inicia un curso.

Conferencia por el doctor Francisco Urutia Holguín, colombiano, sobre: «Historia de las primeras relaciones diplomáticas de la Gran Colombia con Inglaterra y los Estados Unidos».

Conferencia por el doctor Felipe de Solá Cañizares, español, sobre: «La constitución de las sociedades. Las concepciones doctrinales. Las legislaciones; la publicidad y la intervención del Estado».

Conferencia por el doctor Andréa Piola, italiano, sobre: «El matrimonio civil y el matrimonio religioso en Italia».

Conferencia por el doctor Felipe de Solá Cañizares, español, sobre: «La administración de las sociedades. Las concepciones contractual, orgánica, autoritaria e institucional. Las tendencias recientes de las legislaciones».

Conferencia por el doctor Felipe de Solá Cañizares, español, sobre: «La protección de las minorías, de la empresa y del interés público. Los hechos, la doctrina y la legislación».

Octubre. — Conferencia por el doctor Gonzaga de Reynold, suizo, sobre: «Porqué hay una Europa».

Conferencia por el doctor Gonzaga de Reynold, suizo, sobre: «Porqué hay una Europa» (continuación).

Conferencia por el maestro español Joaquín Rodrigo, sobre tema de su especialidad.

Conferencia por el doctor Benigno Di Tullio, italiano, sobre «El actual desarrollo de la antropología criminal en los distintos países».

Conferencia por el doctor Guillermo Izquierdo Araya, chileno, sobre: «Aspectos de la reforma constitucional argentina».

Conferencia por el doctor Alamiro de Avila Martel, chileno, sobre: «El contenido de la enseñanza de la historia del derecho en Chile».

Conferencia por el doctor Guillermo Izquierdo Araya, chileno, sobre: «Aspectos de la reforma constitucional argentina».

Conferencia por el doctor Antonio Ambrosini, italiano, sobre: «La reforma en el régimen bancario argentino. Los problemas del dinero y el crédito».

Noviembre. — Conferencia por el profesor doctor Emilio Coornaer, francés, sobre: «Movimiento obrero en Francia y en Inglaterra durante los siglos XIX y XX».

Año 1950

Abril. — Conferencia por el doctor Ismael Sánchez Bella, español, sobre: «La enseñanza de la historia del derecho».

Mayo. — Conferencia por el doctor Felipe de Solá Cañizares, español, sobre: «El derecho francés de sociedades comerciales».

Junio. — Conferencia por el jurista francés doctor René David sobre: «Derecho comparado. Su interés para el conocimiento del derecho nacional».

Conferencia por el doctor Alberto Puig Arosemena, ecuatoriano, sobre: «La carta de Quito (unión económico-aduanera Gran Colombiana)».

Conferencia por el doctor Secundino Vázquez, uruguayo, sobre: «Observaciones críticas e informaciones de biblioteca».

Conferencia por el doctor Jorge Ugarte Vial, chileno, sobre: «Organización de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile».

Conferencia por el profesor Charles Moraze, francés, sobre: «Métodos franceses actuales en materia de ciencias sociales».

Julio. — Conferencia por el actor francés Jean Louis Barrault sobre: «Amour du théâtre».

Conferencia por el doctor Alamiro de Avila Martel, chileno, sobre: «Los estudios e investigaciones acerca de la historia del derecho en Chile».

Agosto. — Conferencia por el R. P. Louis Lachance, O. P., canadiense, sobre: «La situación del derecho sobre el plano de la vida».

Conferencia por el R. P. Louis Lachance, O. P., canadiense, sobre: «La función esencial del derecho».

Conferencia por el doctor Valentín Paz Andrade, español, sobre: «El sentido jurídico popular en Galicia».

Conferencia por el R. P. Louis Lachance, O. P., canadiense, sobre: «El derecho, la responsabilidad y la pena».

Conferencia por el R. P. Louis Lachance, O. P., canadiense, sobre: «Positivismos y derecho positivos».

Septiembre. — Conferencia por el doctor José Larraz, español, sobre: «Línea histórica del pensamiento social y comunión».

Conferencia por el doctor José Larraz, español, sobre: «Meditación jusnaturalista».

Conferencia por el doctor Gregorio de Santiago y Castiella, español, sobre: «La protección de menores y los tribunales especiales en España».

Conferencia por el doctor Armando Braun Menéndez, chileno, sobre: «José Gabriel Ocampo y el Código de Comercio de Chile».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Una ciencia nueva».

Octubre. — Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Subhistoria, historia y cultura».

Conferencia por el doctor Henri Puget, francés, sobre: «La mise en oeuvre de la nouvelle constitution française».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Las constantes históricas».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «El eterno femenino y el eterno viril».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Roma y Babel».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «El ecúmeno y el exótero».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Lo clásico y lo barroco».

Conferencia por el doctor Carlos Keller, chileno, sobre: «La economía chilena; su estructura y sus problemas».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Lo paterno y lo fraterno».

Conferencia por el doctor Carlos Keller, chileno, sobre: «La Patagonia occidental».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Las razas y la guerra».

Conferencia por el doctor Eugenio D'Ors, español, sobre: «Morfología e historia de la cultura».

Noviembre. — Conferencia por el doctor Luiz da Costa Carvalho, brasileño, sobre: «Exposición panorámica del reordenamiento jurídico brasileño».

Conferencia por el doctor Luiz da Costa Carvalho, brasileño, sobre: «Reforma procesal y unificación del proceso».

Conferencia por el doctor Luiz da Costa Carvalho, brasileño, sobre: «Mandato de seguridad o derecho de amparo».

Año 1951

Marzo. — Conferencia por el doctor Pierre Larroque, francés, sobre: «La seguridad social en Francia».

Abril. — Conferencia por el doctor Torquato Carlo Giannini, italiano, sobre: «Las repúblicas marineras italianas en el medioevo».

Conferencia por el doctor José Muñiz de Figueiredo, brasileño, sobre: «Temas de servicio social y obras asistenciales».

Junio. — Conferencia por el doctor Furio Lilli, italiano, sobre: «El sacro fuego en la lírica religiosa de Iacopone de Todi».

Conferencia por el doctor Carlos Viada López Puigcerver, español, sobre: «Clasificación de los procesos. El proceso penal».

Agosto. — Conferencia por el doctor Jacques Bernard Hertzog, francés, sobre: «El delito de omisión en el Código Penal francés».

Conferencia por el doctor Miguel Schweitzer, chileno, sobre: «Ensayo interpretativo acerca del principio de ejecución en el delito de violación».

Conferencia por el doctor Felipe de Solá Cádiz, español, sobre: «La nueva ley española sobre sociedades anónimas».

Conferencia por el señor José M. Miranda Saavedra, boliviano, sobre: «Esbozos de la previsión social en Bolivia».

Conferencia por el doctor Ismael Sánchez Bella, sobre: «Gobierno y hacienda en el virreinato del Perú a mediados del siglo XVI»; español.

Septiembre. — Conferencia por el catedrático español doctor Manuel Ballesteros Gaibrois, sobre: «Instituciones medioevales en el derecho indiano».

Conferencia por el doctor Filippo Vasalli, italiano, sobre: «Examen de conciencia de un jurista europeo».

Conferencia por el señor Carlos Julio Tovar Gutzlaff, boliviano, sobre: «Nuestro ensayo sobre tribunal tutelar de menores».

Conferencia por el profesor español doctor Guillermo Céspedes del Castillo sobre: «Los virreinos españoles en el siglo XVIII».

Conferencia por el profesor francés, doctor Laiguel Lavastine, sobre: «La personne humaine en criminologie».

Conferencia por el médico español doctor Carlos Blanco Soler, sobre: «La leyenda de Goya». Octubre.— Conferencia por la señorita Isabelle de Hurtado, francesa, sobre: «El servicio social frente al individuo, a la familia y a la sociedad».

Conferencia por el doctor Luis Legaz y Lacambra, español, sobre: «La filosofía del derecho como filosofía y como teoría de la ciencia jurídica».

Conferencia del profesor nicaragüense Julio Icaza Tijerino, sobre: «Las diversas interpretaciones culturales de hispanoamérica».

Noviembre.— Conferencia por el doctor Phanor J. Eder, norteamericano, sobre: «La sociedad anónima latinoamericana vista por un norteamericano».

Año 1952

Abril.— Conferencia por el R. P. doctor Juan Bautista Se-Tsien Kao sobre: «La familia china».

Mayo.— Conferencia por el profesor paraguayo doctor Juan José Soler sobre: «Recepción del derecho argentino en el Paraguay».

Junio.— Seminario a cargo del profesor español doctor Manuel García Pelayo sobre: «Los derechos políticos de la persona humana».

Julio.— Conferencia por el doctor Bernardo Reyes, mexicano, encargado de negocios de México, sobre: «Panorama de la revolución mexicana y su reflejo en la bibliografía de su país».

Agosto.— Ciclo de conferencias a cargo del catedrático español doctor Javier Conde sobre el tema general: «Los fundamentos del orden político».

Conferencia por el doctor Luis E. Nieto Arteta, colombiano, consejero de la embajada de Colombia, sobre: «Datos bibliográficos sobre la sociología colombiana del siglo XIX».

Septiembre.— Conferencia por el doctor Joseph Hamel, francés, sobre: «El cheque sin provisión de fondos».

Conferencia por el jurista catalán doctor Felipe de Solá Cañizares sobre: «El derecho civil catalán».

Octubre.— Conferencia por el doctor Luis E. Nieto Arteta, colombiano, sobre: «Lógica y ontología en la esfera de lo jurídico».

Año 1953

Abril.— Conferencia por el doctor Guillermo Izquierdo Araya, chileno, sobre: «Orientación internacional de la política chilena».

Agosto.— Conferencia por el catedrático español doctor Luis García Arias sobre: «La reforma de la carta de las Naciones Unidas».

Septiembre.— Conferencia por el señor embajador de México ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, doctor Luis Quintanilla, sobre: «El panamericanismo: su estructura y propósito».

Conferencia por el sociólogo alemán doctor Hans Freyer sobre: «La nueva imagen de la historia universal».

Conferencia por el sociólogo alemán doctor Hans Freyer sobre: «El hombre y el orden social del presente».

Año 1949

1.— Dr. José Vasconcellos, eminente publicista y escritor mexicano.

2.— Dr. Jacques Bernard Herzog, Procurador General de la República de Francia.

3.— Dr. Isidro de Arcenegui y Carmona, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Madrid.

4.— Dr. Hans Kelsen, profesor del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales; profesor de Derecho Internacional Público y Filosofía del Derecho de la Universidad de Génève.

5.— Dr. Manuel de la Plaza, Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia de Madrid.

6.— Dr. León Mazeaud, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de París.

7.— Dr. Felipe de Sola Cañizares, doctor en Derecho de la Universidad de París.

8.— Dr. Eloy Montero y Gutiérrez, Decano de la Facultad de Derecho y catedrático titular de Derecho canónico de la Universidad Central de Madrid.

9.— Dr. Benigno Di Tullio, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Roma.

10.— Dr. Francisco Urrutia Holguín, embajador de la República de Colombia.

11.— Dr. Andrea Piola, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Roma.

12.— Dr. Gonzaga de Reynold.

13.— Dr. Joaquín Rodrigo, músico español.

14.— Dr. Guillermo Izquierdo Araya, profesor extraordinario de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

15.— Dr. Alamiro de Avila Martel, profesor de la Universidad de Chile y del Seminario de Derecho Público de Chile.

16.— Dr. Antonio Ambrosini, profesor ordinario de Derecho Aeronáutico de la Universidad de Roma.

Año 1950

1.— Dr. Ismael Sánchez Bella, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de las Islas Canarias.

2.— Dr. Felipe de Sola Cañizares, doctor en Derecho en la Universidad de París.

3.— Dr. René David, profesor de derecho comparado de la Facultad de Derecho de París.

4.— Dr. Alberto Puig Arosemena, embajador de la República del Ecuador.

5.— Dr. Secundino Vázquez, Director de la Biblioteca del Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay.

6.— Dr. Jorge Ugarte Vial, Director de la Biblioteca del Congreso de Chile.

7.— Dr. Charles Moraze, Director de la Sección Sociales de la Escuela de Altos Estudios de París.

8.— D. Jean Louis Barrault, eminente actor francés.

9.— Dr. Alamiro de Avila Martel, profesor de la Universidad de Chile y del Seminario de Derecho Público de Chile.

10.— R. P. Louis Lachance, O. P. profesor de filosofía general y del Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá).

11.— Dr. Valentín Paz Andrade, escritor y abogado gallego, especialista en derecho mercantil y marítimo.

12.— Dr. José Larraz, jurisconsulto español, miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid.

13. — *Dr. Gregorio de Santiago y Castiella*, secretario del Consejo Superior de Protección de Menores de España.

14. — *Dr. Armando Braun Menéndez*.

15. — *Dr. Eugenio D'Ors*, miembro de la Real Academia Española, universitario.

16. — *Dr. Henri Puget*, juriconsulto francés, presidente de la Comisión de Recursos de la UNESCO; profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París; director de la Sección de Derecho Público en el Instituto de Derecho Comparado de París.

17. — *Dr. Carlos Keller*, profesor de Geografía Económica y Sociología de la Universidad de Chile.

18. — *Dr. Luis Da Costa Carvalho*, profesor de Derecho Procesal y decano de la Facultad Nacional de Derecho de Río de Janeiro.

Año 1951

1. — *Dr. Pierre Larroque*, Director General de Previsión Social de Francia.

2. — *Dr. Torquato Carlo Giannini*, profesor de derecho comercial en las universidades de Ferrara y Macerata; profesor de Economía y Legislación del Tráfico en el Real Instituto Superior de Comercio y en la R. Escuela de Aplicación de la Real Universidad de Roma.

3. — *Dr. José Muñiz de Figueiredo*, profesor brasileño de sociología en la Escuela de Asistencia Social de Río de Janeiro y Director de Obras Asistenciales en el Estado de Paraná (Brasil).

4. — *Dr. Furio Lilli*, profesor en letras, pedagogía y psicología de la Universidad de Friburgo.

5. — *Dr. Carlos Viada López Puigcerver*, secretario general del Instituto Español de Derecho Procesal y profesor adjunto de derecho procesal en la Universidad Central de Madrid.

6. — *Dr. Jacques Bernard Herzog*, procurador general de la República de Francia.

7. — *Dr. Miguel Schweitzer S.*, profesor titular de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Santiago de Chile.

8. — *Dr. Felipe de Sola Cañizares*, doctor en derecho de la Universidad de París.

9. — *Dr. José M. Miranda Saavedra*, becario y abogado boliviano.

10. — *Dr. Ismael Sánchez Bella*, catedrático de historia del derecho en la Universidad de las Islas Canarias.

11. — *Dr. Manuel Ballesteros Gaibrois*, catedrático de historia de América Prehispánica en la Universidad de Madrid.

12. — *Dr. Filippo Vassalli*, decano de la Facultad de Derecho de Roma y profesor de derecho civil.

13. — *Dr. Carlos Julio Tovar Gutzlaff*, abogado boliviano.

14. — *Dr. Guillermo Céspedes del Castillo*, profesor español de historia.

15. — *Dr. Laignel Lavastine*, miembro de la Academia de Medicina de Francia y profesor de medicina legal en el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de París.

16. — *Dr. Carlos Blanco Soler*, médico español, conferencista y publicista; doctor en medicina en la Universidad Central.

17. — *Srta. Isabelle de Hurtado*, secretaria general del Comité Francés del Servicio Social; secretaria general para Europa de las conferencias internacio-

nales del servicio social; Caballero de la Legión de Honor; Oficial de la Orden de la Academia (Ministerio de Educación.)

18. — *Dr. Luis Legaz y Lacambra*, rector de la Universidad de Santiago de Compostela; profesor titular de filosofía del derecho y senador por las universidades.

19. — *Julio Icaza Tijerino*, profesor de sociología en la República de Nicaragua.

20. — *Phanor J. Eder*, catedrático de la universidad estadounidense de Columbia; profesor de derecho civil.

Año 1952

1. — *Rvdo. Padre Dr. Juan Bautista Se-Tsien-Kao*, religioso de la orden de los frailes menores de San Francisco de Asís; graduado en filosofía en la Universidad Colegio de San Antonio de Roma; doctor en ciencias políticas y sociales en la Universidad Católica de Lille (Francia); director del Departamento de Educación en la Oficina Central Católica en China.

2. — *Dr. Juan José Soler*, profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción; profesor titular de introducción al estudio del derecho y de práctica forense.

3. — *Dr. Manuel García Pelayo*, juriconsulto español, especializado en derecho político; no pertenece a ninguna universidad.

4. — *Dr. Bernardo Reyes*, encargado de negocios de México.

5. — *Dr. Javier Conde*, catedrático de derecho político de la Universidad Central de Madrid y director del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad.

6. — *Dr. Luis E. Nieto Arteta*, consejero de la embajada de Colombia.

7. — *Dr. Joseph Hamel*, jurista francés, profesor de derecho comercial de la Facultad de París.

8. — *Dr. Felipe de Sola Cañizares*, doctor en derecho de la Universidad de París.

Año 1953

1. — *Dr. Guillermo Izquierdo Araya*, profesor extraordinario de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

2. — *Dr. Luis García Arias*, catedrático de derecho internacional de la Universidad de Zaragoza.

3. — *Dr. Luis Quintanilla*, embajador de México ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos.

4. — *Dr. Hans Freyer*, profesor de sociología de la Universidad de Leipzig (Alemania.)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — Señor presidente: la Cámara trata un proyecto de ley en revisión que, según el mensaje del Poder Ejecutivo, ha de adecuar la ley universitaria a las prescripciones de la Constitución Nacional y del segundo Plan Quinquenal, y a nuestro criterio incluye modificaciones substanciales que acentúan sus tintes antirreformistas y, por ende, reaccionarios.

Definimos y acusamos que ellas, en esencia, integran no el propósito de aunar las voluntades argentinas para formar un estado de conciencia que posibilite la defensa del destino peligroso a que ha hecho referencia el señor diputado por Corrientes; destino peligroso que el radicalismo advirtió y puntualizó en cada una de sus horas y para lo que puede estar tranquilo el señor diputado ha de encontrar alineados a los hombres del radicalismo para su defensa con todos los argentinos, sino nuevas cláusulas destinadas a imprimir a la enseñanza universitaria, como a la secundaria y primaria, las modalidades que emplean los modernos gobiernos de fuerza, los que actúan al margen de sus constituciones, no ya para cortar las cabezas de sus opositores, a fin de suprimirlos, sino para domesticar a las que podrían rebelarse, pues, como señalaba José Ingenieros, «cortar algunas cabezas que piensan no es tan grave como impedir anticipadamente que las cabezas piensen», es decir, procurar que las generaciones de estudiantes universitarios, secundarios y primarios se dobleguen en un adocenamiento de conciencias que posibilite la persistencia *sine die* de un partido político y su régimen en las esferas del gobierno.

El señor diputado por Corrientes ha traído de nuevo al debate un tema que aparece ya fuera de moda: el proceso de la influencia cultural de los imperios, tan pernicioso al ejercerse sobre las jóvenes naciones latinoamericanas, aun en naciente desarrollo de su cultura.

Afirmo desde ya tajantemente que está de más en este momento y en esta época la afirmación del señor diputado. No han sido nuestros los universitarios que fueron a firmar los pactos de Río de Janeiro; no son nuestros los graduados que van a formular suplicantes pedidos al capital extranjero; no son nuestros los universitarios que, como registra la crónica de la fecha, han de entregar la explotación del petróleo argentino con la promesa de suculentos dividendos, a los inversores extranjeros.

Sé, señor presidente, que la vieja universidad ha merecido justas críticas y ha provocado muchos resentimientos. No me refiero ya a la universidad anterior a 1918, que provocó el grito de la reforma, ni a aquella generación que se forjó a sí misma y forjó a sus maestros, sino a la otra universidad, la que le sucedió.

Dejo también aclarado que el radicalismo ninguna implicancia tiene con los errores de esa universidad. Los señores diputados confunden lamentablemente el concepto. Cuando nosotros nos referimos a la universidad y agradecemos su aporte a la cultura del país, nos referimos a las universidades argentinas en su universalidad, integradas por profesores, estudiantes y graduados; a esas universidades en las que alguna vez, aun no teniendo veinte años de edad, tuve el honor de integrar uno de sus consejos,

como representante estudiantil; a esas universidades que nos vieron llegar y seguir la carrera, pobres, sin vinculación con los maestros, y nos otorgaron un título mediante el cual habríamos de desempeñar una función útil con la sociedad.

Cuando los señores diputados de la mayoría se refieren a la universidad, la confunden con los círculos de profesores que la dirigían, los más de las veces contrarios a la reforma; con esa universidad no ha tenido ninguna complicidad el radicalismo y, lejos de ello, fué nuestro partido, aunado con los estudiantes, quien con mayor saña los acusó y con mayor justicia los combatió.

Sobre la universidad, tal como nosotros la vemos, se han volcado resentimientos, muchas veces injustos, que a veces cada cual debería reflejar sobre su propia incuria, sobre su propia incapacidad, o derivarlo hacia las imperfecciones de la sociedad, en el seno de la cual se anida realmente el privilegio.

En lo que se refiere a la reforma, de nuevo me refiero al concepto del señor diputado por Corrientes; aquí se produce un proceso a la inversa. No existe proceso de penetración imperialista, dado que la Argentina tiene la enorme responsabilidad americana de haber dado a luz un movimiento reformista que cruzó los Andes, llegó a toda América y conquistó a casi todas las universidades del continente. Sus propósitos y sus programas se hicieron carne en los estatutos y en las leyes de más de diez naciones americanas, por ese movimiento que en Latinoamérica es conocido con el nombre de «reforma argentina». Ella ha dado ejemplares como el de Arévalo, en Guatemala; como el de la generación de Venezuela; como Arciniegas, en Colombia; como Haya de la Torre y Sánchez en el Perú; y como tantos otros hombres que hoy tienen derecho a dar su palabra sobre la reforma universitaria, mientras en el propio lugar de su origen el régimen peronista celebra las exequias de ese avanzado y trascendente programa.

Sr. Díaz de Vivar. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con el consentimiento de la Presidencia?

Sr. Alende. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Quería manifestarle al señor diputado que no entra dentro de la lealtad del fuero parlamentario traer a colación temas de la complejidad que comporta discutir los pactos de Río, so capa de discutir la ley universitaria. Ello nos coloca —a los que hemos sido asesores del ministro de Relaciones Exteriores— en inferioridad de condiciones, dado que no podemos replicar al señor diputado con la seriedad que el tema impone.

Pero le recuerdo al señor diputado que los pactos de Río han sido discutidos con amplitud por una bancada numerosa de la oposición, y al respecto me remito a los principios que en esa oportunidad expusimos.

Para no restarle tiempo al señor diputado por Buenos Aires, quiero decirle que si el señor Germán Arciniegas viniera al país suscribiría la política internacional justicialista y no la de la Unión Cívica Radical. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa con la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — Contesto al señor diputado por Corrientes diciendo que el señor Germán Arciniegas, en su último libro, se ha definido sobre el proceso argentino considerando a la elección del radicalismo del 11 de noviembre de 1951 —en la que aportó 2.500.000 votos—, como uno de los ejemplos más extraordinarios de lo que significa la lucha exitosa de un partido con limpia conducta en su enfrentamiento a un régimen totalitario, como el peronismo.

Y para agregarle al señor diputado, para corroborar y contestar su interrupción, quiero decirle algo más. A mí la reforma me dió, como a tantos otros, una formación cultural y conceptual, en lo económico, en lo político y en lo social, anterior aún a mi formación política, que me evita caer en errores como el del señor ministro del Interior, quien en el debate sobre amnistía, con motivo de una interrupción que le formulara, diciéndole: «señor ministro: si son tantos los argumentos que en mi concepto hacen que ustedes no tengan formada la conciencia de la necesidad de votar una amplia ley de amnistía, ¿no puede ser que esto obedezca a la necesidad de exhibir un país tranquilo frente al capital extranjero?», contestó: «Y aun cuando así fuera, eso exhibiría un propósito patriótico.»

Quiero contestar al señor diputado diciéndole que todas sus referencias y comentarios quedan rectificadas con esa afirmación del señor ministro del Interior, en la que implícitamente va afirmado que la convivencia entre los argentinos y las relaciones políticas y sociales de los argentinos están supeditadas a los intereses de inversión del capital extranjero.

Esos hombres que se educaron y propiciaron en sus respectivas tierras la reforma universitaria tienen derecho, como Arciniegas, a hacer la crítica de la orientación totalitaria de la educación en el régimen peronista.

Pero antes de seguir más adelante deseo manifestar que, recordando el debate anterior sobre la ley universitaria, todas las predicciones de los diputados de la Unión Cívica Radical se han cumplido. Por ejemplo, lo que se llamó elección democrática y quebrantó la autonomía de las universidades, mediante lo cual los señores diputados de la mayoría establecieron la necesidad de la designación del rector por par-

te del Poder Ejecutivo. Ahí está el ejemplo de lo sucedido en seis años de vigencia de la ley. No hubo gobiernos duraderos y regulares, se sucedieron las intervenciones, los conflictos y las remociones de personal, y, lo que es más grave, la suerte de las universidades argentinas, o de algunas de ellas, ha estado en manos de hombres que se han nombrado en este debate y de cuya «virtud espartana» no puede hacer crédito ni el sector de la mayoría ni el de la minoría.

Tampoco se cumplió la retribución adecuada de los profesores ni la selección mediante concursos, porque como ya lo ha referido el señor diputado Ferrer Zanchi, las designaciones de profesores han venido acopladas con un informe de Control de Estado, que ha hecho que la sola firma de algún manifiesto de oposición al gobierno fuera suficiente para que no se cumpliera el nombramiento de los profesores designados por concurso.

Pero hay algo más. He de tratar de sintetizar mis objeciones respecto a la ley, dado el breve tiempo con que cuento para poder desarrollar mi exposición. He de hacerlo con los conceptos de mi partido, que hablan en su plataforma de bregar por dar a todos los ciudadanos igualdad de condición y de oportunidades, de procurar un pleno y libre desarrollo de la personalidad para el cumplimiento de la responsabilidad nacional y humana, y que procura la vigencia plena de la reforma universitaria. He de resumir los aspectos endebles de la ley y de sus modificaciones en cuatro puntos fundamentales: primero, el propósito de convertir indefinidamente a las universidades en universidades políticas peronistas. Segundo, sobre los cursos de formación ciudadana que incrementan la política sectaria de la ley, al mismo tiempo que se suprimen las disposiciones sobre dedicación exclusiva a la cátedra y se limitan las tendencias a intensificar la experimentación y la investigación que, desgraciadamente, se hallan abandonadas casi totalmente en las facultades del peronismo. En tercer término, el concepto de la autonomía a que ha hecho referencia el señor diputado por Corrientes, que no es en nuestro concepto autonomía de los profesores, sino que debe ser autonomía de la universidad. Por último, las modificaciones que hacen que se deposite todo el régimen vinculado a los estudiantes, a la parte viva, actuante, dinámica, sistólica de la universidad, en un consejo nacional universitario cuyos miembros serán todos designados por el Poder Ejecutivo.

Huelga recordar que cuando se trató el proyecto de ley anterior del Poder Ejecutivo, fué la acusación contra una universidad política lo que movió los argumentos de los señores diputados de la mayoría. Así lo dijo el miembro informante de la mayoría de la comisión y así lo dijo el señor ministro Gache Pirán, expresando que la política había hecho estragos y

socavado los cimientos de la universidad argentina.

En mérito a ello se introdujo el artículo 49, que quedará anulado así como el que establece las incompatibilidades de los rectores y decanos.

Ese artículo 49 establece: «Las universidades no deberán desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y alumnos no deben actuar directa, ni indirectamente en política, invocado su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en transgresión de ello, de suspensión, cesantía, exoneración o expulsión según el caso.»

Este artículo, en realidad, no ató mucho las manos ni de profesores ni de estudiantes, porque no sólo las universidades, oficialmente, sino los alumnos de la CGU, hicieron llegar reiterados homenajes a los hombres del oficialismo, su adhesión y su voto por la reelección del presidente de la República. Este artículo no ha de figurar en la futura ley, lo que tiene una gran significación.

Quiero aclarar nuestro concepto en lo que respecta a la función política de la universidad.

Luis Alberto Sánchez, ex rector de la Universidad de San Marcos, de Lima, en un libro publicado en 1949 sobre *Caracterización de las universidades latinoamericanas*, con referencia a las leyes del peronismo, expresa: «La dependencia de la universidad del poder público que inspira la reciente ley de la Argentina, es la menos indicada, pues provoca abusos y excesos peores que los males que pretende remediar. Hay que preservar la universidad de la influencia política por la acción directa, cortesana y corruptora de los regímenes oligárquicos, plutocráticos o dictatoriales, así como las pasiones separatistas de los partidos. Es el concepto de universidad del Estado, vigente ahora en la Unión Soviética, y hasta hace poco en la Alemania nazi y en la Italia fascista. La autonomía es lo más conveniente a nuestras universidades latinoamericanas, siempre que no erijan una oligarquía profesoral cerrada, como ha ocurrido a menudo; es decir, debe ser una autonomía amplia, en función de la mayor democratización interna y de la mayor libertad y actividad del órgano universitario del Estado y de sus relaciones con los demás grados de la enseñanza.»

En coincidencia con el concepto de este ilustre pensador nosotros queremos decir, señor presidente, que entendemos que debe ser un derecho y una obligación la del estudiante universitario el actuar en política. Juan José Arévalo, en su libro *Escritos pedagógicos y filosóficos*, bien dice que los profesores y estudiantes van a la universidad para satisfacer necesidades espiri-

tuales de la colectividad. Pero cuando esta colectividad está retorciéndose bajo una humillación material o moral, de cualquier clase que ella sea, el profesor y el estudiante están en la obligación impostergable de dejar de ser profesor y estudiante, para asumir en toda su plenitud la defensa de la dignidad nacional. Y eso es lo que hicieron los estudiantes argentinos frente a aquel círculo cerrado de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que seguían usufructuando sus cátedras mientras al mismo tiempo servían los intereses de las potencias colonialistas extranjeras.

Sr. Cantore. — En el mismo concepto universitario estaban ustedes.

Sr. Alende. — Eso es lo que hacían los estudiantes argentinos cuando se pronunciaron contra Fresco en la provincia de Buenos Aires, a tal punto de que aquel gobernante, en septiembre de 1936, se dirigió por nota al gobierno nacional manifestándole que estaba dispuesto a colaborar en toda medida destinada a terminar con ese peligrosísimo foco de subversión. Foco de subversión era aquella magnífica muchachada revolucionaria y combativa de la Universidad de La Plata que, con motivo de la visita de un interventor en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, exhibía contra los machetes de los esbirros del gobierno aquel cartel simbólico que decía: «Se necesita un sinvergüenza.» Bien cumplían con su deber esos estudiantes de la universidad argentina, como también lo cumplieron en el año 1945 los estudiantes y los profesores de las universidades argentinas para reclamar la pronta vuelta a la normalidad, que no se producía porque el señor presidente de la República no tenía montado el aparato electoralista que pudiera hacer fructífera la presentación de su candidatura a la presidencia de la Nación.

Esto que hoy aparece en la nueva ley suprimiendo el lazo legal que ataba a estudiantes y a profesores para la lucha política —aunque en verdad no la cumplieron— tiene el significado de preparar el advenimiento de una universidad política al servicio del peronismo, con profesores que —como ya sucede— antes de ejercer sus cátedras tienen que hacer una profesión de fe peronista; con rectores que afirman que han de peronizar a las universidades, con pretendidos maestros, que en realidad no están cumpliendo otra cosa que una función administrativa, y que ha hecho que las universidades argentinas, pierdan, magüer la visita de profesores extranjeros, la elevada jerarquía que hacía de los centros estudiosos de la Argentina el foco en el cual se emulaba toda la atención estudiantil de latinoamérica.

Sr. Cantore. — Por eso tenemos 5.000 becados en Buenos Aires.

Sr. Alende. — Esa es la misma razón por la cual el artículo 29 del proyecto establece la

formación de cursos de formación política, que han de colocarse al exclusivo servicio de las necesidades electorales del partido del gobierno y no al servicio de la alta misión política que la reforma universitaria confería a estos centros de altos estudios.

Quiero recordar que esta formación ciudadana concuerda con aquello que en los Estados de vocación totalitaria fija la necesidad para los grupos que dominan, de ejercer influencia permanente en todas las esferas, como bien lo anota Karl Manhein en su libro *Libertad y planificación*: «como resultado de la amplia movilización de los miembros del Estado moderno, la resistencia que los dictadores tienen que vencer es tan grande que han de penetrar hasta en las asociaciones y rincones más pequeños —aun en los pequeños grupos que se reúnen para discutir en los restaurantes y en los cafés—, a fin de adueñarse del poder y conservarlo».

Como lo decía Benito Mussolini, «cualquier régimen diferente del nuestro puede creer en la utilidad de renunciar a la educación de las generaciones jóvenes. En este respecto no admitimos transacciones de ninguna especie; la educación debe estar en nuestras manos».

A tal punto se insistió en esa práctica que ella provocó un choque con la Iglesia Católica y en su oportunidad una réplica del Papa, mediante la célebre encíclica, *Non abbiamo bisogno*.

El concepto está también implícito en lo que Adolfo Hitler afirmaba, que la única forma de crear una conciencia uniforme y permanente del Estado finca en utilizar la educación y la escuela. Es lo que establece también su *Mi lucha*: «para unificar el pueblo alemán, comenzando por el primer libro del niño hasta el último periódico; cada teatro, cada sala de cinematógrafo, cada cartelera, cada columna debe estar al servicio de esta gran misión.»

Hubiera deseado referirme en abundancia a muchos otros aspectos que ofrece esta nueva tentativa regresiva de sofocar el pensamiento argentino; hubiera deseado referirme a lo que implica esta ley en lo que supone una tentativa de sofocación y de domesticación, que será frustrada, de los estudiantes argentinos, a cuya emoción el régimen no ha podido llegar; ellos serán indomeñables, porque a pesar de lo que les mandan a escribir y de lo que se les dicte, los estudiantes argentinos no estarán ni creerán jamás en el peronismo.

Apremiado por el tiempo, recuerdo, para terminar, aquellas palabras de Unamuno, cuando en la dictadura de Primo de Rivera expresaba: «que nos roben el dinero, que entreguen España a la explotación de compañías extranjeras, que vendan la justicia, que subasten el favor, que arruinen a sus censores, que encarcelen y torturen durante meses y meses a inocentes, que restauren la inquisición, pero que

no nos roben nuestra alma, el porvenir y la juventud de España».

Yo digo, señor presidente, que nosotros también como el señor diputado por Corrientes tenemos una profunda fe en los destinos del pueblo argentino. Nosotros también creemos como él, pero a diferencia de él decimos que la libertad está, como Prometeo, encadenada en la República.

Tenemos una profunda fe porque conocemos a muchos de esos profesores, no a aquellos que con lengua obsecuente tratan de sumarse siguiendo el camino de los mediocres y de los débiles a la nefasta política del régimen, sino a aquellos otros que estudian, y se capacitan, desligándose de lo que es la política actual de la Argentina.

Tenemos profunda fe en los estudiantes y en el destino de la República, que ha de superar esta desagradable anécdota de un gobierno que pretende domesticar las conciencias no en servicio de una superior conciencia nacional o de una idea que aglutine a todos los argentinos, sino en el deseo de servir su idea política sectaria y sus necesidades electorales para persistir en el gobierno.

Y para terminar, hago más las palabras del manifiesto de Córdoba, vertidas cuando los muchachos terminaban de golpear en los viejos muros de la casa de Trejo —que parece que se están levantando de nuevo para lapidar conciencias—, de aquellos muchachos que afirmaban al caer la vieja universidad: «Tenemos una libertad más; los dolores que quedan, son las libertades que faltan.» Y yo digo, señor presidente, en esta hora de la Argentina, que los dolores que restan a la República son las libertades que faltan, las libertades que más tarde o más temprano el pueblo argentino habrá de reconquistar con su sacrificio y con su fe. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — En rigor de verdad, este debate no se ha centrado ni se ha dirigido específica y analíticamente al examen de las reformas que propone el Poder Ejecutivo a la ley 13.031, sino que se ha extendido y se ha ubicado sobre la cuestión universitaria en general retrotrayendo y replanteando en cierto modo los debates que en dos memorables oportunidades tuvimos que confrontar en este recinto con nuestros opositores políticos. Me refiero, señor presidente, al debate del año 1947, cuando se sancionó la ley 13.031 y al que tuvo lugar en 1948 con motivo de la creación de la Universidad Nacional Obrera, que se sancionó bajo el número 13.229.

El examen posterior de este debate dirá que en la jornada de hoy no hemos presenciado sino la reactualización en su mayor parte de los

argumentos que en aquellas oportunidades hiciera el sector político opositor, argumentos que a mí me place recordar estuvieron en boca de hombres que además de tradición universitaria, tenían una fuerte personalidad política y parlamentaria, como Gabriel del Mazo, Luis Dellepiane, Alfredo Calcagno, Antonio Sobral y todos los hombres de la oposición a quienes en aquellas oportunidades tuvimos que rebatir. Tengo el absoluto convencimiento —lo digo con sinceridad y sin afán de falsa modestia de ninguna especie— que rebatimos plena y victoriosamente en aquellos debates, a nuestra oposición. Cuando hago esta afirmación no me refiero solamente al éxito muchas veces transitorio de la polémica parlamentaria, a la sola victoria retórica o dialéctica, que del examen de la discusión puede surgir, sino fundamentalmente al testimonio y a la prueba de los hechos, vale decir a la entrega de la institución a la experiencia de la vida, que el peronismo realizó en ese momento bajo su sola responsabilidad y que mirada ahora con algo de perspectiva por el tiempo transcurrido, nos permite decir que estuvimos, siguiendo en aquellas circunstancias como en todas, las inspiraciones de nuestro jefe político y conductor, en la verdad, y que dimos en la tecla del arduo problema universitario.

Esto es evidente. La reapertura de aquel debate de 1947 y de aquella discusión de 1948 nos obligaría, en cierta manera, a volver sobre los mismos, puesto que todas las observaciones que han formulado hoy los señores diputados de la oposición han corrido por esos carriles; nos obligaría, consiguientemente, a ocupar otra vez la atención de la Cámara para refrescar la memoria del pueblo argentino sobre cuál era el estado de la universidad argentina en el momento en que llegó Perón a actuar por vez primera en los primeros planos de la vida pública y, especialmente, al hacerse cargo del gobierno constitucional en el año 1946. ¿Será acaso necesario que releamos otra vez al pie de la letra los centenares de juicios que se examinaron en aquellas oportunidades y en todo el proceso precedente, formulados por profesores, por alumnos, por egresados, por periódicos, por todo lo que conforma la opinión pública, acerca del estado de crisis que vivía la universidad argentina cuando Perón llegó al gobierno de la República? Yo no voy a fatigar a la Cámara con la enumeración y la cita prolija de todos los antecedentes que podría traer a este respecto, porque están frescos en la memoria de los señores diputados y en la memoria del pueblo, pero así, al pasar, quiero recordar sintéticamente lo que decía el señor Luis Reissig en 1943, cuando inauguraba el Colegio Libre de Estudios Superiores. Expresaba que «una de las razones de la creación había sido la indiferencia de la universidad para con muchos problemas referidos a sus disciplinas de trabajo y,

sobre todo, para aquel medio social que le permitía su existencia».

¿Qué había dicho el señor rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Vicente Gallo, a quien, según las expresiones del señor diputado Nudelman, parecería que ha querido poner la bandera de la reforma en sus manos? El doctor Gallo, en discurso reciente había dicho «que la universidad se encontraba en manifiesto divorcio con el medio ambiente».

¿Qué había expresado el señor profesor Houssay, especie de *enfant gaté* de la oposición...

Sr. Nudelman. — El doctor Houssay es un sabio que honra al país.

Sr. Bustos Fierro. — ... en un artículo que se publicó en el diario «La Prensa» bajo el título «La crisis universitaria»? «existe una crisis universitaria por falta de orientaciones modernas definidas, por falta de estímulos...» «Electoralismos perniciosos y demagógicos esterilizan...; poca investigación profunda, falta de ayuda a los hombres capaces, métodos de enseñanza anticuados y deficientes...», etcétera.

¿Qué había dicho el profesor Clodomiro Zavalia en aquel apasionado artículo de defensa de la Facultad de Derecho que terminó empero confesando?: «sea todo ello lo que fuere, es evidente que ha sobrevenido una crisis en la vida universitaria». ¿Qué decía el ingeniero Cortés Pla, otro de los *enfant gaté* de la oposición, hombre de la reforma del año 18, en aquel ciclo de conferencias que pronunciara con el título de «Crisis de la universidad» a mediados del año 1943, coincidiendo con el 25º aniversario de la reforma? ¿Qué había dicho el periodismo, aun el más adherido y paralelo al régimen gobernante de la universidad, en ese momento? ¿Qué habían dicho los estudiantes en su manifiesto aun en la oportunidad recordada por el señor diputado Fassi de su reposición a la cátedra? ¿Qué había dicho el manifiesto del 15 de marzo de 1945, después de la reincorporación de los profesores dejados cesantes? «la corrupción de la Universidad de Buenos Aires es un hecho evidente... más que nunca, camarillas manejan arbitrariamente las casas de estudio pensando únicamente en sus intereses».

¿Qué habían dicho los estudiantes reformistas de Córdoba? En esa misma ocasión dijeron: «todos los males desde hace mucho tiempo aquejan a todos los institutos universitarios; falta de austeridad en los nombramientos, etcétera».

¿Qué había dicho la prensa periódica ocupándose de estos problemas? ¿Qué dijeron en el debate a que asistimos en 1947 esos diputados que al mismo tiempo habían sido hombres vinculados, como dije hace un instante, a la universidad de ese momento? ¿Qué dijo el diputado Calcagno?: «Reconozco que durante muchos años las camarillas han gobernado a la universidad». ¿Qué dijo el diputado Nerio Ro-

jas, hombre conspicuo de aquella universidad?»: «Reconozco que la universidad se ha convertido en centro de reacción de la oligarquía... Durante 23 años he sido profesor de la facultad donde los peores vicios...», etcétera.

No quiero que esta parte de mi exposición me insuma más del tiempo necesario para recordar a través de ello cuál era el panorama de la universidad argentina en circunstancias en que el general Perón se hacía cargo del gobierno y el Parlamento dictaba la ley universitaria cuya reforma está tratando el cuerpo.

La ley universitaria que lleva el número 13.031 no aspiró naturalmente, desde luego, a dar solución instantánea a un viejo, a un hondo, a un grave problema de la vida argentina. ¿Cómo podría el solo estatuto legal por perfecta que hubiera sido su concepción, y la sola intención y el propósito del gobierno y del Parlamento de concurrir a solucionar ese problema, dar una solución de instantaneidad al viejo y conceroso problema de la vida universitaria argentina?

La ley dictada en ese momento respondía al propósito de iniciar una firme política educacional enunciada por el gobierno de la Nación, secundado por el Parlamento, y a tender —no podía hacerse otra cosa— a poner en marcha el mecanismo universitario, a iniciar una solución al problema de la universidad, frente a la honda crisis descrita con los más dramáticos acentos por los mismos hombres que convivían la universidad argentina.

Nos encontramos en el día de hoy abocados a una reforma de aquel estatuto, frente a un proyecto del Poder Ejecutivo tendiente a complementarlo, atendiendo fundamentalmente a que desde 1947 hasta ahora se han producido dos acontecimientos de extraordinaria magnitud: la reforma constitucional de 1949 y la sanción del segundo Plan Quinquenal de la Nación.

Esa es la razón esencial de la reforma. Lo demás está constituido por modificaciones secundarias que recogen lo que la experiencia ha enseñado para el mejor manejo de las universidades y en manera alguna tiene trascendencia de problema universitario.

Al inaugurarse el Segundo Congreso de Derecho Comercial, hace unos pocos meses, el general Perón explicó de manera más explícita que en otras ocasiones, los conceptos de estabilidad y de perfectibilidad y la manera como esos dos conceptos deben jugar simultáneamente para que, de una parte, sean realizados los grandes objetivos de la Nación y, de otra parte, no se detenga nunca el ritmo progresivo de la vida nacional.

Aun cuando pensaba extenderme más adelante al respecto, anticiparé lo siguiente a título de glosa de lo referido. No se piense que el peronismo cree que con la sanción de la ley universitaria de 1947 y la actual reforma de 1953 deja resuelto el problema universitario. Sabe-

mos que estamos caminando mediante una reforma que ha recibido las grandes banderas de 1918 y además todas las experiencias transcurridas desde entonces, y tenemos la absoluta convicción de que, a pesar de lo mucho andado, el objetivo está todavía a medio camino.

Lo ha dicho recientemente desde muchas tribunas y lo repitió ayer mismo el presidente de la República: recién vamos a comenzar la gran batalla por la cultura del pueblo; y al servicio de esa batalla, la universidad argentina y todos los organismos de cultura serán elementos que aportarán cuanto puedan dar para lograr el objetivo que algún día veremos cumplido: que el pueblo se haga universidad y que la universidad se haga pueblo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos.*)

Los discursos de los señores diputados de la oposición han tendido uniformemente a dejar flotando en la Cámara la sensación de que el antiperonismo, representado en este Cámara por conducto del partido que lleva la denominación de radical, es el heredero y el portaestandarte de la reforma de 1918. Todos sus discursos han estado encaminados al propósito de querer confundir la opinión pública en el sentido de que el movimiento peronista enfrenta la reforma del año 18 y que la fuerza opositora mantiene la bandera de esa reforma, que vuelven ahora a agitar, como si en 1953 el planteo histórico del país y del mundo fuese el planteo histórico del año 1918.

Me detendré en ese aspecto porque interesa fundamentalmente que sea esclarecido porque interesa a la opinión pública, al Parlamento y a los hombres que, como el diputado que habla, sin haber participado directamente en el movimiento reformista de 1918, lo hemos amplificado. El diputado que habla, que en aquel entonces no pudo participar en el movimiento porque recién le estaba naciendo el acento cordobés, como diría el diputado Alende (*Risas*), y que ha tenido en dos oportunidades el honroso mandato de los estudiantes reformistas de llevar su representación en la Universidad de Córdoba, como consejero en la Facultad de Derecho.

Sr. Alende. — Quiero aclarar un error de concepto del señor diputado por Córdoba, en lo que se refiere a nuestra acción.

Nosotros actuamos en función de las valorizaciones positivas de nuestro radicalismo y no en función de reacciones negativas al peronismo.

Sr. Bustos Fierro. — La frase del señor diputado Alende huele un poco a metafísica.

Sr. Alende. — Ustedes son los antirradicales, nosotros somos radicales, y no somos antiperonistas.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Bustos Fierro. — No he alcanzado a percibir el sentido de la observación del señor diputado Alende: a través de la expresión citada que ha vertido, ¿quiere significar que nosotros somos representantes de la reacción y que ellos, en cambio, son los representantes del pensamiento reformista?

Sr. Alende. — Esa es una interpretación que puede dar el señor diputado a mis palabras y que, por cierto, está de acuerdo con mi pensamiento.

Lo que he querido significar es que nosotros actuamos en función de radicales y que, cuando decimos una cosa, no nos preocupa lo que el peronismo piensa de ella. No actuamos en función negativa de antiperonistas, sino afirmados en nuestro mundo constructivo del radicalismo.

Sr. Bustos Fierro. — El señor diputado por Buenos Aires quiere reivindicar el pensamiento radical olvidando que actualmente es un partido ausente de pueblo. Olvida que no se trata de radicales de espíritu revolucionario, que se trata de un partido constituido por descarte reaccionario de toda la oposición antiperonista del país, que siguen manteniendo una bandera que no es la que representa a su origen histórico. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sr. Alende. — ¡Eso es lo que cree!

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Bustos Fierro. — Decía hace un momento que nuestros opositores, en la impugnación de esta ley, ostensiblemente han encaminado sus exposiciones con el propósito de dejar sentada la premisa de que el movimiento peronista ataca los principios de la reforma o está en contra de los principios de la reforma del 18, y que, en cambio, son ellos los herederos, los únicos hombres que en el escenario de la República y de América pueden agitar los principios de esa reforma. A ese efecto se ha preguntado al través de los distintos oradores, cuál es la posición del estudiantado, cuál fué la preocupación suprema del movimiento del año 18 y el por qué del gobierno de las universidades, no por aquella república universitaria sino por la política educacional del Estado.

Voy a dar respuesta a esas preguntas que fueron motivo de algunas intervenciones mías durante las exposiciones de los señores diputados y que quedaron incontestadas.

Se ha insistido vivamente, con gran alarde retórico, en un amplio despliegue de argumentos espectaculares e impresionantes, en que desapareció en el año 1947 —y desaparece ahora con este estatuto— la participación estudiantil en la vida de la universidad, por el hecho de

que el delegado estudiantil en los consejos no es designado por el sistema electoral.

La reforma universitaria de 1918, magnífico movimiento del despertar de la juventud argentina, proyectada en toda América, situada en su momento en su campo histórico preciso, atiende fundamentalmente a tres objetivos que han sido precisados por todos los hombres que dieron nacimiento a ese movimiento y por los que continuaron la batalla proyectándolo, ensanchándolo, engrandeciéndolo cada día más.

¿Cuáles fueron esos objetivos? Primero, la participación efectiva del estudiantado en la vida universitaria, alejado en la universidad anterior al año 18 de todo aquello que no fuera ser mero convidado de piedra, que asistía a recibir la lección magistral repetida monótona e insuficientemente.

Segundo, el planteo de la formación integral del estudiante, vale decir, el planteo de superar la universidad puramente profesionalista para volcar los afanes de la universidad en todas las dimensiones del hombre.

Tercero, la proyección, dentro de la vida universitaria, del pensamiento y del contenido nacional, de la determinación de la especificidad de lo argentino, totalmente ausente en el planteo de una universidad que a fuerza de abstractiva era totalmente inoperante.

Estos tres puntos fueron las banderas supremas del movimiento; y voy a leer a los señores diputados de la oposición las palabras de un ex colega de ellos, a quien nosotros hemos distinguido porque era evidentemente un hombre que tenía grandes quilates morales, que ha librado la batalla de la reforma. Dijo el ex diputado Gabriel del Mazo acerca de los hechos de la reforma: «Desde el año 1918 quedaron planteados por la juventud estudiosa los dos grandes problemas que configuran la crisis de las universidades sudamericanas en la crisis contemporánea de la universidad y de su idea histórica: primero, el problema universal de la universalidad, el de la formación humana completa, el de integrarnos educativamente pensando en el hombre, en su íntegra humanidad, antes que en la sola profesión o en la técnica que el hombre ha de usar; segundo, el problema específicamente nuestro, es decir, el problema correspondiente a estas naciones donde la civilización no es hija de la cultura, el problema de que ese hombre integralmente formado sea aquí nuestro hombre, situado en nuestra tierra, que es donde su universalidad arraiga, y no un hombre de mentalidad importada o abstraída no coincidente ecológicamente con nuestro hombre.»

Sr. Nudelman. — Ratificamos totalmente esas palabras.

Sr. Bustos Fierro. — También nosotros, pero apunto que el planteo reformista que hace el

ingeniero del Mazo no es el que pretende el señor diputado Nudelman.

Se ha hecho la batalla parlamentaria, como se hizo en la discusión pasada, sobre si el alumno tiene actualmente o no participación en la vida universitaria por el hecho de que su representante en el consejo no sea elegido por votación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don José V. Tesorieri.

El representante estudiantil en el consejo es el vocero de los intereses estudiantiles. Por eso luchó la reforma. En el año 1918 pareció una herejía que los estudiantes se permitiesen la arrogancia de pretender penetrar en los claustros universitarios para actuar junto con los maestros y profesores. El planteo universitario de 1918 tendió, como una gran bandera, la representación estudiantil en el seno de los consejos. La mecánica propuesta en ese momento fue el voto.

A los fines de establecer la representación estudiantil, el estatuto de 1947 siguió otro criterio, que puede contraponerse al anterior con muchas razones de hecho y de derecho, que pueden dar motivo a la réplica, pero que en definitiva apunta al mismo propósito. El estatuto de 1947 estableció que el representante estudiantil en el seno del consejo tiene que ser el mejor alumno.

Sr. Fassí. — ¿Por qué se apartan de ese sistema?

Sr. Bustos Fierro. — Quedaba cumplido el reclamo de la reforma del 18 en lo que respecta a la representación estudiantil.

Yo pregunto si a esta altura que estamos viviendo, con la revolución de Perón llevada a través de profesores, alumnos y egresados, el problema de la participación del estudiante en la vida universitaria queda limitado a la intervención en el seno de los consejos.

El estudiante interviene en la vida universitaria en muchas formas. Interviene en los ateneos universitarios, y es así que sólo en la Facultad de Derecho de Buenos Aires congregan una inmensa cantidad de estudiantes, que están asistiéndose recíprocamente, intelectual y materialmente; interviene en los centros estudiantiles, en las cooperativas estudiantiles, en la formulación de los planes de enseñanza, en la edición de obras destinadas gratuitamente para los de escasos recursos, como gratuitamente se imparte la enseñanza universitaria en toda la República, interviene en la conducción de los institutos de investigación y de enseñanza práctica; interviene en todo el movimiento que abarca la dimensión completa del alumno: la formación humanista, que va desde el cultivo de su mente hasta el cultivo de su físico, porque para ello, por primera vez en la Argentina, se han

establecido residencias para estudiantes, campos gimnásticos, colonias de vacaciones a todo lo largo del país; interviene en establecimientos nuevos en su aspecto y orientación y en las nuevas facultades y cátedras que se han creado; interviene permanentemente en tareas de conducción de responsabilidad a punto tal que la universidad argentina en este momento es obra de una acción incesante, fraternal, de estudiantes, de profesores y egresados mancomunados con el pueblo, porque nuestra universidad, señor presidente, va y recibe al pueblo, como lo recibe específicamente a través de la Universidad Obrera Nacional —otro de los grandes aciertos, de las geniales creaciones del general Perón—, también impugnada por los señores diputados de la oposición. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Nudelman. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Bustos Fierro. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — En primer lugar quiero hacer la aclaración de que en el año 1947 la impugnación estuvo también dirigida a ese tipo de representación que ha señalado el señor diputado.

En segundo lugar, nosotros compartimos totalmente la conveniencia de la intervención estudiantil en los aspectos relativos a extensión universitaria, cooperativas, deportes, etcétera, a que se ha referido.

Pero el problema no es ése. Se trata del problema de la representación estudiantil, que nosotros sostenemos, y que para ser tal debe surgir de una votación democrática en la que intervengan todos los estudiantes, para que el electo sea así la expresión auténtica de la mayoría. Eso es totalmente distinto de la representación ejercida por el delegado de una entidad reconocida previamente y que ya se sabe que debe ser adicta al gobierno.

Felicito al señor diputado por el esfuerzo dialéctico que está haciendo...

Sr. Bustos Fierro. — No es dialéctica; es un planteo realista.

Sr. Nudelman. — ...para demostrar lo indemostrable. Me gustaría mucho que volviera a consultar con los estudiantes de Córdoba para ver si comparten hoy la opinión de aquel representante estudiantil de aquel entonces, Bustos Fierro, y que honró, según dijo el señor diputado, la representación de Córdoba.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Si los estudiantes de Córdoba fueran consultados, tal como lo desea el señor diputado, se llevaría el doctor Nudelman un nuevo chasco, porque acaban de ofre-

cerma recientemente el apoyo para la representación en los consejos. (Aplausos.)

Comprenderá el señor diputado Nudelman que el argumento que acaba de exponer en su interrupción, no se nos ha escapado. Todo el arsenal de argumentos de la oposición en lo que se refiere a participación del estudiantado en la vida universitaria se concentra en el sistema de su elección. Nosotros ratificamos el concepto de que la representación del alumnado a estos efectos debe ser ejercida por el mejor alumno, porque allí no hay representación política. El principio electoralista rige para la vida política del país, rige para el momento en que el estudiante o el profesor actúan como ciudadanos, en el momento de dirigirse a las urnas, cuando eligen el poder público. En esas circunstancias actúan políticamente, como ciudadanos. En tanto que en el claustro universitario actúan esencialmente como profesores o como estudiantes; como docentes y como dicentes.

Repito, pues, que no es un concepto político el que rige en el seno de los consejos universitarios, sino que es un concepto pedagógico, un concepto de filosofía pedagógica, que podrá ser combatido por otro criterio pero que está perfectamente ajustado a la auténtica realidad de la vida universitaria.

De otra parte, insisto en que la intervención del estudiantado en los consejos, a través de una representación, que fué la bandera del movimiento revolucionario de 1918, ha sido inmensamente superada por la participación plena en la vida universitaria que hace actualmente, bajo el gobierno de Perón, el estudiantado argentino.

Sr. Alende. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Bustos Fierro. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — Deseo decirle, primero, que con respecto a la experiencia sufrida con motivo del nuevo tipo creado para la representación estudiantil por la ley del año 1947 en los casos en que el mejor alumno ha resultado ser un estudiante de notoria filiación reformista, el ejemplo que puede brindar la Universidad de Córdoba en su Facultad de Ciencias Económicas es significativo. Allí el estudiante Nivio Cragnolino fué elegido para esa representación estudiantil en el consejo, y como hiciera manifestaciones de defensa reformista, éste lo dejó de lado y se intentó, incluso, hacer un proceso al centro de estudiantes que apoyaba su representación. De manera que en esa forma el peronismo ha tergiversado incluso ese tipo de representación estudiantil.

Segundo, el concepto que tenemos de la intervención estudiantil en la vida universitaria

es amplio en cuanto a todos sus aspectos, según el proyecto, ha de hacerse elementalmente por el camino y la vía de la agremiación obligatoria. En este caso la agremiación debe ser documentada, lo mismo que en el caso de organizaciones de trabajadores, en un registro especial. De modo que esas agremiaciones de estudiantes se transforman en agremiaciones oficialistas de carácter corporativo que subvierten el concepto de libre agremiación estudiantil.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — No es propósito mío substraerme a las interrupciones, pero los señores diputados deben advertir que hablo con término fijo...

Sr. Alende. — Quería decir también que por primera vez en la vida universitaria argentina se han exigido certificados de buena conducta...

Sr. Bustos Fierro. — Permítame continuar el señor diputado.

Las palabras pronunciadas por el señor diputado las someto a la consideración reflexiva de la Honorable Cámara. Trae como argumento del fracaso del sistema, el pequeño, el minúsculo caso de un estudiante, que no anduvo bien. En un problema de política educacional del país, en un problema que atañe al destino y a la función del estudiantado, mancomunado con el pueblo, para labrar el destino y la grandeza de la Nación, el señor diputado, cuya alcurnia intelectual es bien conocida, trae como gran prueba de error del sistema, el caso de un alumno que anduvo mal. Creo que esto inferioriza la categoría de este debate y es una prueba cabal de la sinrazón que asiste a los señores diputados. (Aplausos.) Prosigo, señor presidente.

La reforma del año 18, con esas aspiraciones y contenido que dejó perfilados a través de mis palabras y las de otros hombres que piensan distinto a nosotros, ¿alcanzó a realizarse en el país? ¿Qué pasó desde el año 1918 hasta el advenimiento de Perón? ¿Las fuerzas políticas y sociales del país estaban en condiciones de gravitar para que el programa universitario del 18 se realizara? ¿Qué pasó con la reforma universitaria? ¿Cuál fué la suerte que corrió la universidad argentina hasta el momento en que Perón llegó al gobierno?

No entraré a compulsar juicios de tirios y troyanos, de hombres que estaban dentro y fuera de la universidad, de los que convivían en ella y de los que la observaban desde afuera, a veces acusando su divorcio con el pueblo o su entrega a camarillas oligárquicas, a veces la corrupción y la ineficacia y señalando la urgencia fundamental que había, para lograr el destino del país y de la universidad de superar esa etapa y poner la universidad en marcha como

instrumento definitivo de cultura popular en la vida de la Nación.

Y algo más que no quiero dejar pasar por alto. El señor diputado, con su habitual elocuencia, ha dicho en algunos de los párrafos de su exposición que las profecías de los diputados de la oposición en su mayoría se cumplieron.

Para bien de la República, esas profecías, lo mismo que otras que hicieron en todos los órdenes, jamás se cumplieron. Pareciera que los opositores del peronismo tienen la rara habilidad de ser profetas al revés: basta que auguren una cosa para que salga precisamente lo contrario. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Hombres que tenían mayor responsabilidad en el peso de su palabra, como Gabriel del Mazo y Luis Dellepiane, no aventuraron juicios de tal naturaleza. Se pusieron en actitud opositora porque eran opositores, pero no aventuraron juicios semejantes. El profeta Calcagno, en cambio, dijo que la sanción de esta ley habría de ser «un instrumento desquiciador de la universidad argentina»...

Sr. Nudelman. — Eso fué.

Sr. Bustos Fierro. — ...que habría de ser «un elemento perturbador del trabajo y de la paz de la universidad argentina»; que esta sanción estaba «irremediabilmente destinada a no subsistir».

Y yo pregunto a los señores diputados de la oposición si es exacto que en los cinco años transcurridos no han visto que la universidad argentina ha vivido como jamás en paz, más serenamente, más constructivamente y más fraternalmente con el pueblo, a través de todas sus manifestaciones, que en cualquier otro momento de su historia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Nudelman. — La universidad está llena de delatores.

Hay estudiantes que no han podido proseguir sus estudios porque no les otorgan certificado de buena conducta.

Sr. Bustos Fierro. — Cuando a instancias del genio creador de Perón sancionamos la ley de creación de la Universidad Nacional Obrera, y también entonces nuestra oposición política incurrió en el gravísimo error —de que acaso alguna vez se cure, para bien de la República— de oponerse a las creaciones del peronismo...

Sr. Nudelman. — De no someterse, que es otra cosa.

Sr. Bustos Fierro. — ...diciendo que la universidad obrera estaba destinada al fracaso, que era un experimento destinado a hacer una conformación clasista de la sociedad argentina y nos ofrecieron, como siempre nos han ofrecido, la solución de la utopía, que puede describirse muy bonitamente con palabras pero que no es la función del político y del estadista, que debe mirar las realidades concretas y posi-

bles para bien de su país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Ahí está, señor presidente, la Universidad Nacional Obrera, creada después de aquel debate en que yo tuve el altísimo honor de llevar la voz de mi sector; ahí está floreciendo magnífica y extraordinariamente en los cuatro rumbos del horizonte argentino. Ahí están sus facultades regionales y ahí están esos hombres que, como dijo el presidente Perón hace algunos días, llegan a las aulas de la Universidad Obrera con la huella indeleble de la grasa y de las herramientas para ser —y están siéndolo ya— los grandes ingenieros de fabricaciones, magníficos ingenieros de fabricaciones de obras, ingenieros de construcciones navales, ingenieros de mecánica, ingenieros de mecánica rural, ingenieros de química industrial, ingenieros de aeronáutica, ingenieros electrotécnicos y de los tantos cursos que existen en la universidad, que nos van a dar y nos están dando el elenco técnico y humanista que el país necesita para el gran salto hacia la cristalización definitiva que consolide nuestra independencia económica. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Esa obra está hecha por hombres surgidos auténticamente del corazón proletario, de ese corazón proletario que sabe armarse cuando es necesario con las armas de la guerra para defender a sus gobernantes y que sabe también armarse con las armas de Minerva cuando tiene que penetrar en el reino del saber. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Se ha objetado como uno de los puntos neurálgicos en la solución de la ley universitaria el tipo de gobierno que se realiza al no dejarlo librado exclusivamente al juego de la voluntad de profesores y estudiantes; se ha objetado la decisión de la ley de conferir la designación del rector al Poder Ejecutivo.

Este problema ya lo debatimos también en aquellas oportunidades. Ya demostramos que ésta no es una solución que viene del fascismo sino de la Constitución Nacional de 1853. Por eso me permití decir, en el curso del debate, que resultaba una cosa curiosa la que habían descubierto los diputados de la oposición: que los Constituyentes del 53 eran fascistas. (*Risas.*)

Sr. Nudelman. — No resultaba eso, señor diputado. Esa es una interpretación que hace el señor diputado.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Hay algo más. No está sola la ley argentina en este tipo de soluciones. Es el tipo de solución que adopta la republicana Francia, la magnífica universidad brasileña, que tiene a su frente en Río al eminente profesor

Pedro Calmón, designado por el gobierno; es el tipo de solución que adopta la gran universidad de Columbia, la más importante de todas las universidades de Estados Unidos, que ha tenido como rector al actual presidente de la nación americana. Es el tipo de solución que adopta la Universidad de Austin, en los Estados Unidos, que está considerada como el arquetipo de las universidades.

Sr. Nudelman. — ¡Qué tiene que ver eso!

Sr. Bustos Fierro. — No es solamente la solución de la Constitución Nacional y de las grandes universidades que existen en el mundo; es también la consecuencia absolutamente necesaria de la existencia de una política educacional.

¿Es posible que los señores diputados de la oposición no adviertan la imperiosa necesidad de establecer una política educacional del Estado? ¿De qué manera podría realizarse una política educacional que requiere el concurso de todos los ciudadanos, desde la cuna hasta la tumba, sino por conducto de su gobierno universitario? ¿Cómo podrían manifestarse esos objetivos de la política educacional en el régimen de la universidad? ¿Qué quieren los señores diputados de la oposición? ¿Que la política educacional se manifieste a través de preceptos a los profesores y a la enseñanza? Entonces si tendrían derecho para expresar ese pensamiento; si la política educacional del Ejecutivo se reflejara en la tiranía de la cátedra, si restringiera la independencia de la investigación científica, si ordenara y señalara como política educacional el contenido científico de las disciplinas.

Sr. Nudelman. — Entonces ¿Houssay puede enseñar?

Sr. Bustos Fierro. — Si se presenta a concurso y lo gana, sí; desde luego; entonces podría sí, digo, hablarse de una educación dirigida.

La política educacional es la que se determina en nombre del pueblo argentino que la señala al consagrar sus gobernantes, y al ejercer la majestad de su voluntad soberana ante el poder público.

Hubiese sido grato que a lo largo de este debate hubiésemos podido referir, con la extensión que las circunstancias requieren, cómo la reforma del año 1918 está extraordinariamente superada por la reforma de la universidad de Perón.

¿Qué fué la reforma del año 18? Fué un alarido de la juventud argentina, cautiva y prisionera de una universidad monacal; fué una rebelión de los estudiantes alejados totalmente de la vida universitaria, en la que tenían solamente la situación de convidados de piedra. Y allí quedó como postulado, como anhelo irrealizado, como postulados sepultos, como anhelos malogrados y traicionados, a lo largo de las décadas que se sucedieron después de 1918. Y viene la reforma de Perón, que no se limita a

tomar meros enunciados de la reforma de 1918; los recoge, los amplifica, y los insufla en el espíritu argentino, en el espíritu popular; no limita tampoco la batalla universitaria al estrado universitario, sino que lleva al pueblo todo a participar y a interesarse en ella; y, como lo dije hace un instante, ha comenzado recién la batalla de la cultura, estableciendo una comunión de pueblo y universidad, para que —como dije antes y ahora repito— el pueblo se haga universidad y la universidad se haga pueblo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

El proyecto de reformas del Poder Ejecutivo no comporta, como han dicho bien nuestros distinguidos colegas, una reforma de fondo a la ley 13.031. Es la continuación ampliificada de su desenvolvimiento progresivo, que habremos de retocar cuantas veces sea necesario en el futuro de los tiempos, a medida que el instrumento lo requiera, para ir cumpliendo sus altos fines, a medida que esos conceptos que apunté al comienzo de mi exposición, de estabilidad y perfectibilidad de las instituciones, lo vayan requiriendo. Pero esta reforma estaba absolutamente impuesta por dos acontecimientos fundamentales en la vida del país que los señores diputados opositores han olvidado precisar en sus exposiciones; ¿acaso no tenemos del año 1947 en adelante la reforma constitucional de 1949? ¿Acaso no tenemos del año 1947 en adelante la sanción de la ley del segundo Plan Quinquenal que establece los objetivos que ha de perseguir la Nación?

En la Constitución de 1949, Constitución que todos hemos jurado respetar, que todos juramos defender, porque no puedo siquiera pensar que haya un solo ciudadano argentino que haya podido jurar la Constitución por cobardía, porque no puedo creer que haya en el país un perjurio, que haya entre los ciudadanos argentinos un cobarde que haya jurado la Constitución si no es para cumplirla y defenderla... (*Aplausos.*)

¿Qué nos dice esa Constitución que todos hemos jurado respetar, que todos hemos jurado defender aun con nuestra vida para mantener su vigencia, acerca de la universidad?

La Constitución, como recordaba el señor diputado Fassi hace unos momentos, tiene preceptos esquemáticos en esta materia. Y esa Constitución Nacional dice que las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, como decía el señor diputado Fassi, aunque omitió la otra parte del artículo que establece que lo será dentro de los límites establecidos por una ley especial. Vale decir, que el concepto de completa autonomía docente, científica e incluso funcional, el concepto que hace a la laboración fundamental que debe tener por misión la universidad, lo vamos a mantener incólume y lo habremos de sustentar cada día. Pero el concepto utópico de la

republicueta universitaria, que jamás existió en el mundo y no podrá existir nunca porque es un absurdo y un contrasentido, no podrá ser impuesto porque la política educacional del Estado y la del pueblo que la respalda, están exigiendo la conexión permanente entre los institutos de alta cultura y el destino del pueblo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

La Constitución Nacional nos manda, entre otras cosas, señores diputados, que proveamos a la formación política del estudiante universitario; formación política en su alto y noble sentido; que no es la aparcería sectaria que lleva a buscar prosélitos para un partido político dentro de las aulas universitarias, porque en cuanto a nosotros se refiere, los correligionarios nos sobran. Los que estamos al lado de Perón y seguimos su pensamiento claro y prístino no necesitamos reclutar votos en las universidades, cuyos integrantes constituyen al fin de cuentas una cantidad reducida dentro del conjunto de las grandes masas de la población del país.

La formación política de los universitarios, que manda la Constitución Nacional, queremos verla implantada con el alto sentido nacional y cristiano que exige la realidad actual y la doctrina nacional, porque cuando la Constitución manda que se hagan cursos de esa especie quiere evitar el profesionalismo amorfo y carente de la capacitación necesaria para afrontar los grandes problemas de Estado que la vida puede entregar a su responsabilidad. (*Aplausos.*)

Pensadores tan eminentes como Ortega y Gasset, tantas veces citado en este debate, han puesto de relieve en sus medulosas elaboraciones acerca de la misión de la universidad, cómo el conjunto de ideas vivas de su tiempo —según lo definió Ortega y Gasset; como lo reconocieron también algunos opositores de 1947 y como también lo defiende Arciniegas en su libro—, el conjunto de las ideas vivas del tiempo, el conjunto de objetivos supremos de la Nación, debe ser el motivo de la formación política específica de los universitarios. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Señor presidente: como ha vencido el término de mi exposición, debo sacrificar muchos aspectos. Concluiré diciendo que un maestro eminente de la pedagogía y de la sociología universales, Max Scheller, en un juicio concordante con el que acabo de citar demostró en una de sus valiosas obras que estaba perfectamente evidenciado que el progreso científico se debe a la emancipación del trabajo y que no es válida la fórmula inversa.

No es el progreso científico el que produce la emancipación del trabajo; es el proceso social y económico, la emancipación del trabajo, lo que promueve el progreso científico. Esa es la premisa de nuestro pensamiento sociológico que se avala con un juicio de la calidad del

que acabo de citar. Por eso, para el peronismo, la reforma social y económica debía preceder a la reforma cultural. El mismo Scheller, en su famoso discurso pronunciado en la Academia de Lessing, dió el concepto del maestro, que es el que hemos recogido quienes tratamos de vivir acordes con la personalidad de Perón y tenemos vocación universitaria: maestro es, dijo, por encima de todo, el que sabe llegar al corazón de sus discípulos por amor e inculcar en sus almas el modelo valioso de su persona. (*Aplausos.*)

Hemos recogido ese concepto al amparo de la figura y de las enseñanzas vitales atinentes al destino nacional, inculcadas por Juan Perón, batallador en este aspecto de la cultura, en este prado de la universidad argentina, con el mismo denuedo, con la misma pasión patriótica con que libró sus batallas por todos los ámbitos de la vida de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Hemos recogido su ejemplo y yo quiero citar estas palabras del general Perón como término de mi exposición, porque las considero inolvidables: «Hace casi un siglo comenzaba Sarmiento su obra en pro de la enseñanza de nuestro pueblo y se ha cumplido solamente una etapa de su plan. Nosotros cumpliremos una segunda etapa, preparando una nueva Argentina. Esta universidad de la segunda etapa será universidad señora y señora, una universidad libre de tutelajes e interferencias. Pero quiero que sepan, claramente que cuando el calor oficial se necesita para dar impulso a la labor universitaria, prometo, como que hay Dios, que allí encontréis siempre al general Perón.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se va a votar en general el proyecto de ley.

Sr. Alonso. — Solicito que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Tesorieri). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se votará nominalmente.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Prosecretario (Pardo). — Han votado 115 señores diputados por la afirmativa y 13 por la negativa.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Acosta, Agüero, Aguilar de Medina, Albarelllos, Alonso, Alvaredo de Blanco Silva, Alvarez, Argumedo, Arias, Balbi, Bidegain, Biondi, Blasi, Brigada de Gómez,

Brizuela, Bustos Fierro, Campano, Camus, Cantore, Carballido, Carena, Carreras, Carrizo, Castagnino, Castro, Casuccio, Caviglia de Boeykens, Clement, Cobelli, Chalup, Dacunda, Da Rocha, Deimundo, del Río, De Prisco, Díaz de Vivar, Di Bernardo, Diskin, D'Jorge, Domínguez (R.), Dussaut, Espejo de Ramos, Fernandez (E.), Fernández (H. S.), Flores, Forteza, Gaeta de Iturbe, Gago, García, Gianola, Gobello, Goitia, Gómez, Gomis, González (A. F.), González (V.), Gramajo, Gro, Idománico, Labanca, Lanfossi, Lannes, Loguercio, López (N.), López (P.), López (P. G.), Luna, Macabate, Macri, Maestro, Martínez, Mattis, Merlo, Messina, Miel Asquía, Miguel de Tubío, Montes, Moreno, Moreschi, Moya, Musacchio, Ordóñez Pardal, Orlandi, Ortiz de Sosa Vivas, Osella Muñoz, Otero, Pallanza, Paz, Pellerano, Peralta, Pericás, Piovano de De Castro, Posada, Pracánico, Presta, Rinaldi, Rocamora, Roche, Rodríguez (C. E.), Rodríguez (M. F.), Rouggier, Rumbo, Sáinz, Salaber, Scandone, Siboldi, Spachessi, Tejada (B. M.), Tejada (M. U.), Tofanelli, Ulloa, Vergara, Villa Maciel, Villarreal y Zerega.

—Votan por la negativa los señores diputados: Alende, Belnicoff, Fassi, Ferrer Zanchi, Gallo, Latella Frias, Marcó, Nudelman, Perette, Rabanal, Ravignani, Santucho y Weidmann.

Sr. Presidente (Tesorieri). — En consideración en particular.

Sra. Villa Maciel. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.

Sra. Villa Maciel. — Para que haya la necesaria unidad y correlación en la sanción que habrá de dar la Honorable Cámara, propongo que el despacho se considere y se vote en particular como un solo capítulo.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se considerará y se votará en particular el proyecto de ley en un solo capítulo.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — La Cámara ha considerado ampliamente este proyecto de ley del Poder Ejecutivo que tiene por propósito instituir nuevas normas para el régimen universitario argentino, pero que en definitiva es la reiteración del actual estatuto normativo más nuevas cláusulas que vienen, en nuestro concepto, a acentuar el carácter impopular y antiestudiantil en las casas de estudio de la República.

El análisis del articulado del proyecto en particular servirá para que nuestro sector, por mi intermedio, señale los distintos puntos de vista de oposición a esta tentativa del Poder Ejecutivo, que bajo las apariencias de un régimen universitario progresista, viene a instituir un sistema que afianza el carácter negativo de los derechos estudiantiles y aniquila los principios de la reforma universitaria, destruyendo a la vez normas que hacen a la esencia de los derechos humanos y al régimen republicano y constitucional de la Nación.

Nuestra postura —y por eso mi sector ha producido un despacho concreto— tiene por objeto afianzar los principios de la reforma universitaria, episodio social de singular trascendencia en la vida del país y de indudable repercusión continental. Más aún; la reforma universitaria fué un reclamo de justicia, de progreso, de cultura y de superación, que no sólo abarca la vida de la universidad, sino que se constituyó en una magnífica forja para defender el afianzamiento de una sociedad mejor, más fraternal, más progresista, más justa y más libre.

Se trata de un movimiento continental, que nace bajo el amparo del doble título de «Pan y Libertad», que es en la hora presente todo un programa de redención social y política que nosotros subscribimos con profundo fervor republicano. A la vez, la reforma tiene un profundo contenido antiimperialista, es la condenación severa de la tiranía, de las opresiones y del despotismo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Fué una gran cruzada americana, fué un gran reclamo argentino en pro de la emancipación humana y de la plena vigencia del ideal democrático.

Luchó por la justicia social, combatiendo a los imperialismos y a los totalitarismos, cualquiera sea su denominación, y anuló toda tentativa de despotismo y de opresión del pensamiento libre.

Nosotros recordamos las palabras iniciales de aquellos hombres reunidos en la casa de Trejo: «Las nuevas generaciones de Córdoba consideran que el nuevo ciclo de civilización que empieza, cuya sede será América, exige un cambio total de los valores humanos y una orientación diferente de nuestras fuerzas espirituales, para estar de acuerdo con una democracia amplia, desprovista de todo dogma y de todo prejuicio.»

La reforma universitaria implica a la vez una insobornable vocación por la lucha, una profunda definición de heroísmo, de abnegación y de sacrificio.

Es la defensa de los valores humanos, es la vigencia efectiva de la cultura y la democracia; brega contra la regresión y el atraso y sostiene el imperio de la voluntad estudiantil como fuerza de gravitación ponderable en la vida de la universidad. Porque no concibe la reforma —no lo puede concebir—, ni una uni-

versidad progresista, ni lo concibe una universidad moderna que el estudiante —célula vital de la universidad— se convierta en un convidado de piedra o en un pedestal para ser instrumento de las ambiciones, del frenesí o de las dominaciones opresoras del poder. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

La reforma universitaria ha sido señalada por sus propios defensores, en documentos recientes, al cumplirse un nuevo aniversario, como un movimiento profundamente humanístico, vindicada de prejuicios, de dogmas, de trabas, y donde se define como defensor de la razón, de la libertad intelectual, de amor a la ciencia y al arte, del progreso de los pueblos, de su clarificación e ilustración. De tal manera el ideal reformista hace suyos los efectivos conceptos de independencia económica, progreso material, libertad individual y colectiva, democracia integral, perfeccionamiento científico, labor cultural y artística intensa, original y enaltecedora, amor a los valores humanos, confianza en los pueblos y en los hombres.

En este documento se hace la defensa del contenido moral y heroico de la reforma universitaria que tiene sobre todo una gran definición de fe y optimismo: de fe en la juventud de la patria, y de optimismo en el imperio de los ideales de la democracia.

Este proyecto del Poder Ejecutivo y su articulado tiene ese vicio esencial, de no creer en el pueblo estudiantil, de no creer en la masa estudiantil, de no tener fe en el imperio de la democracia, en la universidad libre, de la misma manera que no se cree en el municipio autónomo, de la misma manera que no se cree en las asociaciones libres.

Este estatuto tiene el vicio insanable de ser regresivo, impopular, antiestudiantil. Es contrario al libre pensamiento, importa el reinado de la opresión estudiantil. Es el estatuto corporativo en la vida universitaria, es la regulación de los centros del estudiantado y, sobre todo, es el sometimiento del hombre estudiante, del hombre que quiere pensar, que quiere soñar, que quiere aprender sin trabas y sin censuras al espíritu libre.

Defendemos la autonomía de la universidad; defendemos su organización democrática. La universidad no es, como pretenden los señores diputados de la mayoría y así han hecho su exaltación, un simple departamento administrativo sometido a la acción discrecional del Poder Ejecutivo.

En el debate que mencionó el señor diputado preopinante, el ex diputado del Mazo —a quien no puede sospechárselo de ninguna afinidad con las postulaciones del peronismo— sostuvo a la universidad como órgano constitutivo del espíritu de la Nación. En ese debate refutó categóricamente los argumentos del señor diputado en conceptos severos y precisos, que son justamente los que no ha leído.

Reclamamos la vigencia de una efectiva autonomía docente, el gobierno autónomo de la universidad; sostenemos una universidad representativa que no se reduce a decir si el representante ha de ser el mejor alumno. Con este proyecto no hay voluntad del estudiantado, muy por el contrario, hay regulación, hay consagración del sistema de la personería gremial, que es la aplicación del mismo principio regresivo y excluyente de las asociaciones profesionales. El mismo principio se aplica aquí y se sigue acentuadamente el plan contra las libertades públicas, y en plena hora de invocada concordia el Poder Ejecutivo acentúa su tono dominador y opresor de todas las actividades humanas y del espíritu creador de la Nación.

Propugnamos una universidad representativa cuyo gobierno asegure una democrática y auténtica participación estudiantil. Queremos que los estudiantes puedan reunirse, deliberar, discutir, y que no vivan acechados por la persecución. El caso del Centro de Ingeniería —bajo el lema «línea recta»— es una demostración de cómo se pretende destruir el principio de la libertad de agremiación, de la libertad estudiantil, olvidándose que esos jóvenes, que esos centros estudiantiles, no podrán ser domesticados. Podrán ser excluidos de la organización administrativa, podrán ser eliminados del andamiaje universitario oficialista, pero el sentimiento libre del Centro de Ingeniería —«línea recta»—, como los ideales reformistas de los universitarios de Paraná, de Santa Fe, de Rosario, de La Plata, Córdoba, Capital Federal y de todas las universidades, no lo podrán destruir ni lo podrán engrillar con ninguna clase de opresión.

Si volvemos al gobierno por el voto del pueblo, hemos de restaurar el imperio de los ideales redentores de la reforma en oposición al espíritu de la universidad peronista, en contra del imperio de la tiranía y en réplica a las fuerzas que anulan al sindicalismo libre. (*Aplausos.*)

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Perette. — Defendemos la autonomía intelectual de la universidad argentina. En el debate de 1947, decía el diputado doctor Nerio Rojas que es imposible tener autonomía de la universidad —y eso es conveniente que lo sepan los profesores peronistas— si los hombres que desempeñan funciones docentes carecen de independencia, carecen de autonomía.

No es concebible formar un país con organizaciones obreras y asociaciones monopolizadas, con organizaciones patronales dirigidas, con organizaciones estudiantiles convertidas y dominadas por «el centro único», al igual que el sindicato único, con las características de la institución corporativa que, paso a paso, sigue su acentuación en la República.

Respecto de este punto neurálgico, que ha sido soslayado por los señores diputados y que el señor diputado Díaz de Vivar no contestó al interrogante que le planteara, afirmo que en este debate podríamos repetir todo lo que hemos dicho sobre las asociaciones profesionales, porque es el mismo espejo, la misma aplicación, la misma norma, la misma finalidad, la misma conclusión: sindicatos, organizaciones, estudiantado, todo bajo una égida de dominación, olvidándose que ese centralismo, ese imperialismo político es la negación de la Constitución del 53 y del 49, que los señores diputados han invocado, y además es la negación de nuestro futuro, de nuestra paz interna y de nuestro deseo de concordia al servicio de la paz y de la dignidad de la Nación.

Este proyecto implica la «contrarreforma», olvidándose que aquel histórico movimiento estudiantil representó «la definición del hombre nuevo de América», como lo señalara con acierto Julio V. González.

Por este proyecto la universidad es y será un engranaje más de toda la organización peronista, para lo cual, además de mantener todos los vicios de la actual ley 13.031, se llega a suprimir el artículo 49 de esa ley, que prohibía la actividad electoral y política de la universidad, de manera que ello implicará una participación activa en esos menesteres.

Sr. Latella Frías. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Perette. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Latella Frías. — Señor presidente: estamos considerando un problema trascendental para la vida de la Nación y debemos reconocer a esta altura del debate que los señores diputados de la mayoría lo han encarado con sofismas contradictorios, y que esta nueva ley será recibida por la masa de la opinión pública del país y sobre todo por la masa estudiantil como una nueva fatalidad histórica y como otro cercenamiento de todas nuestras instituciones libres.

Se ha querido hacer de esta ley una causa. Nosotros decimos que es un efecto. La causa es otra; la causa es la falta de cumplimiento de los postulados de la Constitución del 53, aun en lo que fué reformada por la Constitución del 49; es el cercenamiento de todos los derechos esenciales en la vida de la Nación.

Es, además, esta ley, trasunto de la falta de respeto a la cultura y a la inteligencia, que se sufre en el país, con lo que se atenta contra los atributos esenciales de los pueblos civilizados.

Y en lo que a mi provincia respecta, un gran hombre en la vida intelectual de la Nación, memorable: «Córdoba es su universidad». Es Osvaldo Magnasco, dijo en cierta oportunidad verdad; Córdoba «era» su universidad, pero ya no

lo es. Ahora la Universidad de Córdoba no tiene resonancia en la vida de la provincia ni en la vida de la Nación más que por los escándalos que en ella se producen, porque desde 1943 se ha vivido un orden de cosas inestable; de agravios recíprocos, de intervenciones, de rencillas y luchas subalternas, donde afloran odios al parecer ancestrales y las irregularidades más condenables. Por eso vemos con dolor a las universidades sometidas al sistema totalitario y sumidas en el desprestigio. Y lo que pasa en aquella universidad ocurre análogamente en todas las universidades argentinas, como consecuencia del cercenamiento más cruento de los derechos esenciales del hombre, de los maestros y del estudiantado.

Hay un síntoma muy significativo de cómo va a ser recibida esta ley. Los que quisimos aquella universidad, los que pasamos por sus aulas, los que actuamos en la reforma universitaria y ejercimos después la tarea docente con modesta dedicación, sabemos ya cómo va a ser recibida.

Sr. Gómez. — Con aplauso.

Sr. Latella Frías. — Mientras la Honorable Cámara considera este proyecto, en efecto, podemos observar que es nulo o escaso el número de estudiantes o de pueblo que se ha interesado por este debate, ya que aquéllos ni han concurrido a este recinto, lo que demuestra la indiferencia por la consideración del estatuto que regirá la vida universitaria, o su expresa condenación, posiblemente por ser él una disminución de los atributos esenciales del espíritu y de la tradición libre y democrática universitaria desde la reforma de 1918, cuyo prestigio reivindicó yo para Córdoba.

¿Pero es que el gobierno necesita tanto de la propaganda como evangelio y como técnica y que ella se haga también en las universidades? Nosotros respetamos al profesor de esos altos institutos y no aceptamos que se los someta a la esclavitud en su pensamiento, a la difusión como autómatas de una llamada doctrina única y nacional, según lo exige el artículo 2º del proyecto. Respetamos asimismo la libertad de aprender de los estudiantes, la libertad de su espíritu, porque ellos son el alma de las universidades.

En cierta oportunidad, un gran escritor dijo una frase memorable sobre estos aspectos: confiad la educación de vuestros hijos a un esclavo y, en vez de uno, tendréis dos esclavos.

Eso es lo que no desea la Unión Cívica Radical cuando propicia la autonomía de la universidad libre de todo cuanto signifique la intromisión oficial en la vida universitaria y, sobre todo, en la vida del espíritu y la libertad del docente.

La Unión Cívica Radical desea una total autonomía para la universidad. Que no se diga que hay paz y tranquilidad universitaria, si

ella es en el sometimiento o en la resignación de su triste destino. La paz de Varsovia: eso no es lo que corresponde a la cultura, a la evolución, a la grandeza futura del país. Por eso decimos nuestro pensamiento y votaremos en contra.

Sr. Bustos Fierro. — Eso no es una interrupción...

Sra. Rodríguez (C. E.). — ¿Quién está en el uso de la palabra?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Nosotros hemos fijado nuestra postura con el anhelo vehemente de ser útiles en el estudio y consideración de los problemas públicos.

Quiero recordar la opinión de destacados hombres de estudio y participantes activos en la vida universitaria. Pero como el tiempo de que dispongo es muy precario he de solicitar que a esta altura de mi exposición se incluya una síntesis de las opiniones de Alejandro Korn, Ricardo Rojas, Julio V. González, Gabriel del Mazo y de la Federación Universitaria Argentina sobre esta materia.

Quiero recordar los conceptos de Korn cuando destaca que «la disciplina es necesaria, pero en el ambiente universitario no puede imponerse ni por una reglamentación pedantesca, ni mucho menos por la coerción física. No cabe sino una autoridad moral. El haberla querido suplir con el machete del gendarme ha sido un delito y el origen de las reacciones violentas. La universidad aspira a ser una entidad directriz merced a su alta autoridad moral y no puede ejercer otra en su propio recinto».

Es decir, dar al ámbito universitario la gran órbita, el gran predominio de los valores morales, el sentido del progreso, de la libertad y de una gran superación humana abierta a todas las inquietudes del espíritu y a todas las ideas de avance social.

No es posible someterla con el «machete del gendarme», ni puede cubrirse con la coacción moral, ni puede hacerse la universidad del progreso y del futuro estableciendo la obligación de que los estudiantes se inscriban en el Partido Peronista, ni exigiendo al maestro la ficha de afiliado, ni imponiendo el sindicato único estudiantil, ni anulando la libertad de enseñar y aprender, ni aboliendo la autonomía universitaria, ni destruyendo el régimen de la Constitución, porque anula los ideales substanciales de la cultura y de la democracia.

Hace pocos días, en la Facultad de Derecho de Santa Fe se reunieron los estudiantes re-

formistas para discutir y dar su «opinión sobre la ley universitaria»...

Sra. Brigada de Gómez. — Dirigidos por ustedes.

Sr. Perette. — Y ocurrió con esos estudiantes...

Sra. Brigada de Gómez. — Lo que debía ocurrir.

Sr. Perette. — ...que fueron recibidos con garrotazos y perseguidos como en las horas más sombrías del régimen, sin permitirles opinar sobre un tema esencial para el estudiantado.

Es un hecho sin precedentes en la hora de la concordia.

Sra. Brigada de Gómez. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con permiso de la Presidencia?

Sr. Perette. — Sí, señora diputada.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Brigada de Gómez. — Como el señor diputado es de otra provincia y no sabe lo que pasa en la ciudad de Santa Fe, le voy a explicar.

En primer lugar, no se trataba de estudiantes sino de un grupo de niños mal educados (*Risas*), guiados por altos dirigentes radicales, que han impartido a esos niños la mala educación que tienen. El permiso policial había sido denegado porque se sabía cuál era la finalidad de la reunión, porque el señor diputado, que ha pasado por las aulas universitarias, convendría conmigo en que debe tenerse corrección en todo momento.

Si la policía tuvo que abandonar el lugar porque fueron lastimados con martillos los agentes, ¿qué clase de estudiantes eran éstos?

Sr. Belnicoff. — Qué clase de agentes serían.

Sra. Brigada de Gómez. — Así terminan todos los actos dirigidos por los radicales, como terminó el de Santa Fe, llenando de alquitrán la casa del rector y pegándole al decano de la facultad.

Sr. Roche. — Eso es democracia y libertad.

Sra. Brigada de Gómez. — De manera que no venga el señor diputado a decir lo que no es exacto si no conoce la realidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Tesorieri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — La señora diputada por Santa Fe ha demostrado que no sabe nada de lo que pasa en su provincia.

Yo voy a pedir la agregación de los documentos y la información de cómo se produjeron los hechos.

A estos estudiantes argentinos nadie los dirige.

Sra. Brigada de Gómez. — ¡Los dirigen ustedes!

Sr. Perette. — Son estudiantes libres, que actúan con absoluta independencia. La verdad es que los estudiantes argentinos, en plena hora

de concordia, no pueden reunirse para emitir su opinión sobre el proyecto de reformas a la ley universitaria. Es un testimonio más de la crisis que vive el país, que atraviesa un momento de decadencia institucional y de plena crisis del derecho.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Este proyecto constituye un grave ataque a la autonomía de la universidad. Implica la consagración de un verdadero régimen de unicato y de dominación estatal, de sometimiento de los gremios estudiantiles, que quieren la libertad y que no han de pactar jamás con el despotismo ni han de comulgar con el sometimiento.

De acuerdo a este proyecto y al criterio que han sostenido los señores diputados de la mayoría, la universidad pasará a ser una simple dependencia del presidente de la República. Las facultades pasarán a ser lo que se ha llamado «burocracias inanimadas». Las universidades y las facultades serán entidades sin alma, sin emociones y sin pasiones. Y eso no es lo que quería la reforma estudiantil del 18. Los estudiantes luchan por la justicia social, por la independencia económica, contra el imperialismo y el totalitarismo y por el imperio fecundo y creador del trabajo y de la libertad.

La sanción del nuevo régimen universitario significará la anulación del espíritu creador y del sentido humanista de la cultura y la destrucción completa de la función autónoma del estudiantado.

Esta ley es la regresión, es la trayectoria de errores que desvirtúan todas las promesas del propio gobierno.

Sr. Otero. — El gobierno realiza.

Sr. Perette. — El primer enemigo de este proyecto es el presidente de la Nación, a través de sus propias palabras. Como lo recuerda una entidad estudiantil, el señor presidente dijo el 14 de noviembre de 1947: «Nosotros no deseamos una cultura oficial ni dirigida. No deseamos un molde uniforme al que se sujeten los universitarios. No queremos hombres adocenados y obsecuentes a una voz de mando. Queremos una universidad señora y señora, una universidad libre de tutelajes e interferencias.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Estas palabras pronunciadas por el presidente de la República —que aplaude la mayoría— en el año 1947, son desmentidas y negadas por todos los actos del Poder Ejecutivo. Es la eterna distancia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promete y lo que se consuma: la eterna distancia entre lo que se anuncia en

un plan y lo que se ejecuta en otro. Esto no es sólo un «molde uniforme». Este sistema universitario es un «chaleco» que aprisiona la vida estudiantil y es el abrazo del poder que asfixia y subyuga. Es la regresión, el sometimiento, y el plan —friamente ejecutado— hacia el corporativismo y el predominio absolutista en la vida del país.

Hemos querido señalar a rasgos generales cuál era nuestra discrepancia. No hemos podido realizar —por falta de tiempo— el análisis exhaustivo de este proyecto, que viola la Constitución en cuanto quebranta la autonomía universitaria, porque viola la libertad de enseñar y aprender y porque ha de convertir a las asociaciones estudiantiles y a la universidad en entes dependientes y dominados por el Poder Ejecutivo con fines aparceros y políticos al servicio del oficialismo.

Tengo en mi poder pruebas de que a los practicantes de Rosario en la Facultad de Medicina se les obliga a llevar la garantía política de un hombre peronista y a afiliarse al Partido Peronista, lo que se hace una condición insalvable para la posibilidad de estudiar. Tengo pruebas cabales de las graves anomalías cometidas en las universidades argentinas...

—Suenan la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para su exposición.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Ha vencido el término que el señor diputado por Entre Ríos disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Perette. — Concluyo en seguida, señor presidente.

Podría citar innumerables casos para ilustrar mi palabra. Ahí están los dignos profesores de Paraná expulsados por rendir homenaje a Sarmiento y repudiar a Juan Manuel de Rosas.

Sean escucharnos, señores diputados: no vi van ustedes de su propio eco. Somos suficientemente jóvenes y ya veremos desfilar a más de uno viendo el resultado de estas inmolationes, por más que sigan invocando al derecho y a la justicia.

Observen la similitud de lo que ocurre actualmente con el proceder de Benito Mussolini con los jueces. Hacen bien los jueces en decretar la libertad de los presos antifascistas, decía Mussolini, pero yo los mandaré fusilar. Acá también invocan «libertad y cultura» en la universidad argentina, pero sólo la vemos sometida y aprisionada. Nosotros no renegamos del pasado. No creemos ser dueños de todas las virtudes. Sabemos que la universidad autónoma y libre no morirá, pese a las persecuciones y a los eclipses transitorios. Podrán perseguirla, podrán atacarla, pero sus hombres seguirán luchando y, como en el canto de Ricardo Rojas a la libertad en la victoria del hombre, seguirán proclamando la

reforma universitaria y sus ideales de emancipación y de redención social.

Y así como han querido destruir e inmolar la libertad de la República, la universidad —como un nuevo pájaro fénix— resucitará de sus cenizas, para hacer honor a los ideales proclamados en la casa de Trejo y honrarán a todos los que dieron su vida en holocausto de la dignidad de la patria, el progreso de la especie humana y el derrumbe de todos los absolutismos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sr. Albrieu. — ¿Me permite la señora diputada una interrupción, con el permiso de la Presidencia?

Sra. Biondi. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — No pensaba intervenir en este debate porque ideas personales conocidas me inhiben, en cierta forma, para hacerlo.

Pertenezco a un bloque y soy disciplinado y leal al movimiento cuya conducción general penetro y alcanzo en todo su significado, lo que obliga mi ánimo para aceptar el criterio de la mayoría de mis compañeros de sector. Pero las palabras del señor diputado por Entre Ríos y otras que he escuchado me mueven también a decir mi verdad, mi verdad reformista.

El movimiento de la reforma nacido en 1918 como una protesta del estudiantado argentino, liberal y rebelde, fué aprovechado en aquella oportunidad por un gobierno radical para desalojar de la cátedra hombres que eran considerados magníficos y grandes figuras del pensamiento argentino, y colocar a hombres nuevos, que en el léxico actual de nuestros opositores serían para aquella época también «profesores flor de ceibo». Frustrado luego el movimiento reformista por la falta de comprensión o la falta de buena fe de los hombres radicales que se enseñorearon en la cátedra, en lugar de los que habían sacado, que pertenecían al régimen, esos profesores vivieron nuevamente anquilosados en las murallas de esas universidades y volvieron otra vez a aislarla cerrando sus puertas para el auténtico pueblo nacional. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

El movimiento de la reforma se frustró por la falta de actividad, de concepto y de inteligencia de los gobiernos radicales. No podíamos esperarla de los gobiernos conservadores, que estaban, con respecto a los reformistas, en las antípodas. Se aprovechó de la rebeldía y del pensamiento liberal de la juventud argentina. En todos los tiempos y para todas las generaciones, del 18 en adelante, nos utilizaron únicamente para las minúsculas peleas o polémicas de círculo dentro de los partidos llamados liberales. Así andaban los estudiantes en

huelga contra sus autoridades, apaleados por todos los gobiernos. (*Aplausos.*)

Gobernaban los institutos con los votos de esos mismos hombres entronizados en la cátedra por la reforma universitaria, en el gobierno de los que nosotros titulábamos los «carcamanes» de las universidades, gobernadas casi todas ellas con mentalidad conservadora, cualquiera fuese el partido político en que figurasen sus autoridades. La universidad era una cosa ajena al pueblo; el estudiante era una cosa ajena a la universidad. Había honrosas excepciones; siempre las hay. Creo que los señores diputados que hacen imputaciones a la actual universidad también reconocerán excepciones.

La verdad es que vivíamos en divorcio absoluto con el gobierno universitario. En la calle éramos apaleados algunas veces, mientras en otras ocasiones se fomentaban nuestras asambleas para hacerlas servir de fuerza de choque entre gobierno y autoridad universitaria, que no andaban bien.

Así se fué convirtiendo la reforma universitaria en una ensoñación más del romanticismo juvenil. Era algo así como la amada de Don Quijote, siempre querida, siempre perseguida, pero nunca alcanzada. El gobierno actual por lo menos ha tenido la inquietud de traer una ley como la cree mejor para su pueblo. ¿Qué ley han dado los gobiernos del partido que los señores diputados representan? ¿Cuáles han sido las facilidades para los estudiantes? ¿Cuál ha sido el aspecto reformista de la cultura sino las propias inquietudes personales de los interesados, jamás obtenidas en la universidad? (*Aplausos.*)

Alcanzar los ideales de nacionalidad, alcanzar los ideales de cultura, era una ecuación personal. El profesor era un señor que dictaba cuarenta minutos de cátedra y se aprestaba a aguardarnos en los exámenes para castigarnos con un aplazo si no concurríamos a sus clases. Hoy se ha conseguido, por lo menos, hacer de los estudiantes la categoría primera de la universidad. Para ellos son todas las facilidades y los cuidados; y el estudiantado ha respondido aumentando en un 100 % el número de concurrentes. (*Aplausos.*)

Aun cuando no se ha conseguido lo que era nuestro ideal en la fase reformista, por lo menos se ha conseguido que la universidad viva en consonancia con el pueblo. El pueblo quiere una doctrina y una dirección política; y la universidad está respondiendo a la doctrina y a la dirección política que el mismo pueblo ha formado.

En el camino de progreso que llevamos, tal vez algún día lleguemos al desiderátum de la democracia universitaria, como quieren ahora los señores diputados, pero que no supieron instaurar cuando estaban en el gobierno de la universidad de la Nación. (*Aplausos.*)

Con esta ley damos un paso adelante. No será el ideal o la meta de todas las inquietudes, pero hemos dado un paso útil y leal hacia adelante, porque hemos dado a la cultura lo que hacía falta: le hemos dado vida, al darle sangre y calor de pueblo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Biondi. — Señor presidente: el advenimiento de la mujer argentina a las representaciones populares de la Nación y su entronque definitivo con las realidades vitales de la República, ha traído como consecuencia inmediata el cambio fundamental de nuestra fisonomía social y política, inaugurando en esta patria nuestra —en esta magnífica patria nuestra— la posibilidad de ejercer con decoro, con inteligencia y honestidad los destinos más encumbrados como así también los de más humilde condición.

Y es en esta forma como entendemos las mujeres peronistas servir lealmente los intereses de la República, porque todas estamos identificadas en la hermandad de ideales comunes, en la incansable aspiración de no defraudar la esperanza que depositó en la fuerza de nuestro entusiasmo civil y partidario aquella mujer admirable y delicada, esa inolvidable ausente, esa muerta eternamente viva en la entraña de la nacionalidad: Eva Perón. (Aplausos.)

Porque todas las mujeres argentinas, señor presidente, tenemos con ella una deuda de gratitud; deuda de gratitud que tenemos el compromiso moral de reconocer siempre y que jamás saldaremos del todo, porque ella fué, como dijo el poeta anónimo de la oración insigne, «la mujer heroica que nos dió otro destino».

He creído necesario, señor presidente, señoras y señores diputados, antes de entrar a considerar algunos tópicos del asunto en debate, evocar la figura de Eva Perón porque ella ha sido, es y seguirá siendo para todas las mujeres peronistas que nos sentamos en este recinto, la animadora sin par de nuestras inquietudes civiles. Por todo ello, cuando se habla de la mujer y de las conquistas logradas en la vida social de la Nación, el nombre de Eva Perón es bandera que no se arriará jamás del mástil de nuestros corazones. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Yo creo, señor presidente, que le proyecto de ley que debate en estos momentos la Honorable Cámara acerca de la reforma de la ley universitaria, es de singular y capital importancia, puesto que atañe directamente al acervo cultural de la Nación. Las altas casas de estudios, transformadas ahora en auténticos establecimientos de enseñanza, puesto que por ellos pasan las generaciones argentinas sin distinguos de clases, representan para el país y para el exterior la garantía fundamental de sus expresiones democráticas.

Una ley universitaria de este tipo como la que estamos debatiendo conforma las aspiraciones del gobierno de la Nación y del pueblo,

señor presidente, por cuanto desarrolla dinámicamente los postulados de la doctrina nacional, promoviendo normas espirituales que estructuran mejor los anchos y luminosos caminos de la cultura grecorromana que signa la historia de los pueblos de América, la de nuestra República en todas sus manifestaciones.

La universidad argentina no quiere solamente instruir hombres, porque ello significaría limitar el alto quehacer de la inteligencia a una inoperante tarea, y los claustros se transformarían así en la negación del verbo trascendente de las cátedras. Deseamos, pues, más bien dicho, queremos, y lo estamos haciendo desde varios años, que la universidad argentina sea la formadora y educadora de hombres que respondan al estilo y a las normas de una conducta que signifique la concreción total de los valores que animan a este protagonista social y político que teje con paciencia o sin ella la urdimbre de la historia y de la cultura.

«La inteligencia y el espíritu —ha dicho el general Perón— son cosas demasiado grandes y demasiado serias para confiar su formación al acaso o al desarrollo rutinario de una enseñanza sin objetivo y sin doctrina.

«El objetivo de la enseñanza no se dirige a formar genios, porque éstos, nacen, no se hacen. Formar, en cambio, grandes hombres es posible y ése ha de ser el objetivo de todos los que han recibido de la Nación el honroso cargo de educar a los ciudadanos de la República.»

Y así es en efecto, señor presidente, la tarea de llevar a la universidad la medula de la doctrina nacional no es entremeterse en los fines específicos universitarios sino, por el contrario, adecuarlos al ritmo de un auténtico corazón argentino, porque la doctrina nacional inspirada por Perón es indivisible como la Nación misma.

Se ha dicho, se ha repetido muchas veces, que es menester que las instituciones del país contribuyan a la formación de una cultura popular, manifestación que ha sostenido el señor presidente de la República y que figura también entre los objetivos del segundo Plan Quinquenal.

Pero, juntamente con esta tarea que con todo acierto se viene realizando, debemos señalar esa otra cuyo común denominador es el espíritu de las culturas clásicas y modernas que deben alcanzar a los grandes sectores de la comunidad nacional, porque es nuestro deber señalar y definir este pensamiento: no solamente se debe hacer cultura popular, sino que también se debe hacer popular a la cultura.

Yo sé perfectamente que la tarea que le toca cumplir a la mujer argentina en este aspecto de la cuestión es tarea de extremada responsabilidad. Yo sé bien que las mujeres peronistas que nos sentamos en este recinto y que hemos

llegado a esta representación por la voluntad soberana del pueblo, en los comicios más libres y más legítimamente populares que registra la historia institucional de la República, estamos empeñadas en el patriótico afán de colaborar dentro de la medida de nuestras posibilidades, en pro del engrandecimiento de la patria.

Y nada mejor, para propender a ese engrandecimiento, que dedicarse con toda la fuerza de la sangre y el corazón a formar la conciencia de la juventud; y que en las fábricas, en los talleres, en las escuelas y en las universidades se respire un ambiente de verdadero aire argentino, porque no en vano el pueblo, a través de sus largos años de olvido de sus valores esenciales, marcha ahora victoriosamente hacia el encuentro de su destino histórico, con la conciencia de poseer en su contextura social y política su verdadera fisonomía nacional.

Este feliz reencuentro con la nacionalidad se ha operado no por un milagro providencial, sino porque el pueblo argentino halló en su conductor el feliz intérprete de sus inquietudes, de sus deseos más caros y, en suma, el símbolo, de la patria misma, irradiando felicidad y esperanza por los cuatro puntos cardinales de la República.

Señor presidente: no deseo terminar estas breves palabras sin hacer un llamado a la cordura y a la comprensión del sector minoritario de esta Cámara, para que comprenda de una vez por todas que la obra titánica que viene realizando el general Perón en bien de la comunidad es una obra sin paradigma en los anales históricos de nuestras realizaciones sociales, políticas y económicas, y cuya labor de recuperación y de dignificación ha trascendido las fronteras de nuestro territorio, colocando a la República, en todos los aspectos de su vida colectiva, a la vanguardia de las naciones más civilizadas del mundo. Y esta obra constructiva del pueblo argentino es, por sobre todas las cosas, la obra imperecedera de Perón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se va a votar en particular, como capítulo único, el proyecto de ley.

— Resulta afirmativa de 104 votos; votan 114 señores diputados.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Se va a votar si se publica en el Diario de Sesiones la inserción pedida por el señor diputado por la Capital.

— Resulta negativa de 88 votos; votan 116 señores diputados.

Sr. Ravignani. — Pido que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se va a rectificar la votación.

— Resulta negativa de 103 votos; votan 116 señores diputados.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se va a votar si se agrega al Diario de Sesiones la inserción propuesta por el señor diputado por Corrientes.

— Resulta afirmativa de 100 votos; votan 116 señores diputados.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se hará la inserción en la forma solicitada.

Se va a votar si se incorpora al Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado por Entre Ríos.

— Resulta negativa de 102 votos; votan 116 señores diputados.

2

INTEGRACION DE COMISIONES

Sr. Presidente (Tesorieri). — Por Secretaría se informará sobre la integración de algunas comisiones.

Sr. Secretario (González). — El señor presidente ha designado, para integrar la Comisión de Industrias y Comercio, al señor diputado Bidegain; para integrar la Comisión de Defensa Nacional, por renuncia del señor diputado Bidegain, al señor diputado Pablo López; y para integrar la Comisión de Justicia, por renuncia del señor diputado Pablo López, a la señora diputada Casuccio.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Tiene la palabra la señora delegada por Misiones.

Sra. Fernicola. — Hago moción de que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 9 y 30, al solo efecto de considerar la orden del día 202 que reglamenta la forma de practicar el sorteo de los señores diputados y delegados.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Se va a votar la moción de orden formulada por la señora delegada por Misiones.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 115 señores diputados.

Sr. Presidente (Tesorieri). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 40.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 2793.